



13  
EJ2

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS  
PROFESIONALES "ÁRAGON"

ÁREA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

El proceso de militarización de los  
Estados latinoamericanos y sus  
repercusiones en la posterior  
formación de regímenes  
democráticos poco consolidados:  
el caso de Argentina, hasta 1991

T E S I S

Que para obtener el Título de  
Licenciatura en Relaciones Internacionales

P R E S E N T A:

Martín Luqueño Gutiérrez

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

México D.F.

1993



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**EL PROCESO DE MILITARIZACION DE LOS  
ESTADOS LATINOAMERICANOS Y SUS REPERCUSIONES  
EN LA POSTERIOR FORMACION DE REGIMENES DEMOCRATICOS  
POCO CONSOLIDADOS: EL CASO DE ARGENTINA, HASTA 1991**

	Pág.
INTRODUCCION	1
Capítulo I. Antecedentes históricos	5
1.1. La independencia Nacional y la formación del Estado Argentino	5
1.1.1 El descubrimiento y la colonización española.	7
1.1.2 El Virreinato del Río de la Plata	9
1.1.3 La emancipación contra la colonia española.	10
1.1.4 El triunvirato	11
1.1.5 La herencia de José de San Martín	11
1.1.6 El centralismo	12
1.1.7 La elección de Bernardino Rivadavia	13
1.1.8 El período de Juan Manuel de Rosas	14
1.1.9 El período de Justo José de Urquiza	15
1.1.10 La Constitución de 1853	15
1.1.11 El triunfo de Bartolomé Mitre	16
1.1.12 La influencia de Domingo F. Sarmiento	17
1.1.13 La federalización de Buenos Aires	17
1.1.14 El personalismo de Hipólito Yrigoyen	20
1.1.15 Caída del Yrigoyenismo	22
1.1.16 El nacionalismo de José F. Uriburu y la ascensión de Agustín P. Justo	22
1.1.17 La profesionalización de las Fuerzas Armadas	23
1.1.18 Partidos políticos en Argentina	24
a) Unión Cívica Radical (UCR)	24
b) Partido Socialista de los Trabajadores	25
c) Partido Justicialista (Peronista)	26
d) Federación Demócrata Cristiana	27
e) Partidos minoritarios	28
1.2. Aspectos Economicos	29
1.2.1 La etapa colonial	30
1.2.2 La independencia argentina	32
1.2.3 Consolidación de Buenos Aires y el período de unificación nacional	37
1.2.4 El contexto internacional	38
1.2.5 Intervención del Estado en la economía	40
NOTAS	44

Capítulo II. Los regímenes militares en el desarrollo político de la Argentina	50
2.1 Influencia de Estados Unidos en la formación de regímenes militares en América Latina	50
2.1.1. Relaciones Históricas E.U.-América Latina	50
2.1.2. Militarización del Estado latinoamericano	62
2.2 El caso de Argentina	64
2.2.1 Origen de las Fuerzas Armadas Argentinas	65
2.2.2 La etapa post-colonial	67
2.2.3 Inicio de la profesionalización del ejército argentino a principios de siglo	69
2.2.4 El Golpe de Estado de 1943 y la corporativización del ejército argentino	71
2.3 Surgimiento y evolución del peronismo.	
Principales características hasta su caída en 1976	74
2.3.1 Surgimiento del peronismo	74
2.3.2 "Evita"	77
2.3.3 El proceso electoral de 1945	78
2.3.4 Primer mandato presidencial de Juan Domingo Perón	79
2.3.5 Reección de Perón	80
2.3.6 Proscripción del peronismo	82
2.3.7 El contexto post-peronista a partir de 1955	82
2.3.7.1 Eugenio Aramburu	83
2.3.7.2 Arturo Frondizi en la presidencia	85
2.3.7.3 El interregno de José M. Guido y la llegada de Arturo Illia	86
2.3.7.4 La breve llegada de Illia y su derrocamiento por las fuerzas armadas agrupadas en torno a Juan C. Onganía	87
2.3.7.5 El régimen de Onganía	88
2.3.7.6 La transición con Roberto M. Levingston.	89
2.3.7.7 Alejandro Lanuse y el llamado a elecciones	90
2.3.7.8 Héctor J. Cámpora como elemento de transición a la nueva llegada del peronismo	91
2.3.8 Tercera presidencia de Perón	93

2.3.9 Muerte de Perón y la ascensión de Ma. Estela Martínez como Presidenta de Argentina	94
2.3.10 La desintegración del peronismo	96
2.4. El régimen militar (1976-1983)	97
2.4.1 Marco político interno y el golpe de Estado de 1976	97
2.4.2 La lucha contra la subversión a partir de 1976	98
2.4.3 "El Proceso"	99
2.4.3.1 Grupos guerrilleros	99
a) Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)	100
b) Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)	100
c) Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)	101
d) Montoneros	101
2.4.4 La economía dentro del contexto del PRN	103
2.4.5 La sucesión del General Jorge Rafael Videla y el período del General Roberto Viola.	105
2.4.6 Actuación de la Multipartidaria	107
2.4.7 El derrocamiento del General Viola y la ascensión del General Leopoldo Galtieri	107
2.4.7.1 La cuestión de las Islas Malvinas	109
2.4.7.2 Posición norteamericana y latinoamericana frente al conflicto	111
2.4.8 La transición a un régimen civil	112
2.4.8.1 La autoamnistía	114
2.4.9 El proceso electoral	114
2.4.9.1 El radicalismo en el poder	116
NOTAS	128

### Capítulo III. El gobierno Radical del Presidente Raúl Alfonsín, 1983-1989.

3.1. El fenómeno político del alfonsinismo	129
3.1.1 Reestructuración de las Fuerzas Armadas	130
3.1.2 Las relaciones cívico-militares	131
3.1.2.1 La Comisión Sábato	132
3.1.2.2 El juicio a los militares	134
3.1.2.3 El "Caso Axtíz"	135
3.1.3 Las elecciones de noviembre de 1985 y los intentos de reconciliación	136

3.1.4 Origen de la Ley Punto Final	137
3.1.4.1 La visita Papal	139
3.1.4.2 El panorama político de 1987	140
3.1.5 El alzamiento militar de abril de 1987	140
3.1.6 El alzamiento de Monte Caseros	144
3.1.7 Marco político al inicio de la campana electoral	145
3.1.8 Villa Martelli	146
3.1.9 El caso de La Tablada	146
3.1.10 El principio del Fin	147
3.2 Política económica del alfonsinismo	151
3.2.1 Aplicación de medidas recesivas y sus consecuencias	155
3.2.1.1 El Plan Austral	156
3.2.1.2 Modificaciones al Plan Austral	158
3.2.2 Acuerdo con el FMI	159
3.2.3 Permanencia de la crisis económica y medidas para contrarrestarla	160
3.2.4 El "Plan Primavera"	162
3.2.4.1 Flexibilización de las medidas restrictivas del Plan	163
3.2.5 Desarticulación del Plan Primavera y adopción de nuevas políticas económicas	164
3.3 Política exterior argentina	167
3.3.1 El Canal de Beagle	173
3.3.2 Islas Malvinas	174
3.3.3 Ambito regional	174
3.3.3.1 Centroamérica	174
3.3.4 Ambito extracontinental	175
NOTAS	176
CAPITULO IV. Perspectivas del nuevo gobierno de Carlos Saúl Menem	194
4.1 Apreciación general	194
Conclusiones	202
Bibliografía	214

## I. INTRODUCCION

La actual situación socio-económica y política de la mayoría de los países de América Latina sigue caracterizándose por la vulnerabilidad de sus economías. Los programas de recesión que se han instrumentado para enfrentar la grave crisis económica de los países de la región, se mantiene como el factor que ha acelerado las expresiones de violencia contra la política económica.

El presente trabajo se centra en estudiar los diversos factores internos y externos que dieron paso a la progresiva militarización del Estado latinoamericano, tomando como ejemplo el caso de la República Argentina. Al respecto, la inestabilidad política y económica producto del enfrentamiento de los diversos grupos de presión, son tomados como elementos que favorecieron la instalación de regímenes militares autoritarios en la región y su alternancia con gobiernos civiles que intentaron poner en marcha el establecimiento de un sistema político representativo como la democracia.

Para ubicar el tema de estudio, en el primer capítulo se aborda el desarrollo político argentino, así como la formación de sus características económicas. Esta recopilación, incluye el estudio del establecimiento de los españoles y el carácter secundario que en principio representó para la Corona esta región del Cono Sur; así como la decadencia del imperio español a causa de las invasiones napoleónicas que profundizaron esta decadencia, traducida en la posterior emancipación de sus colonias en América.

Este proceso se sumó a la influencia de las intervenciones militares británicas en la región del Río de la Plata entre 1806 y 1810. Estas invasiones, se toman como punto de partida de la orientación europea de los sucesivos gobiernos en la Argentina y el fomento de la inmigración de nacionales europeos a ésta con propósitos poblacionales, así como la eliminación física de las tribus indígenas que no lograron recuperarse -como en el caso de Chile donde los pueblos lograron recuperar su demografía para conformar una clase mestiza amplia-.

Esta condición fraguó el carácter europeísta de la población argentina y su posterior actitud de superioridad frente a los demás países de la región. En este contexto, el desarrollo económico de la Argentina con base en la formación de una economía exportadora de materias primas, le valió ostentarse hasta principios del siglo XX como una de las naciones más prósperas del mundo. Sin embargo, esta economía dependiente de los mercados externos, marcó igualmente su vulnerabilidad a las fluctuaciones negativas en los precios de sus productos primarios.

La agudización de la crisis internacional en 1930, ya en la época contemporánea, rompe con la estructura de economía de exportación argentina. Ello repercutió en el cierre de los mercados europeos, mostrando una estructura económica argentina tradicional que marcó su estado de subindustrialización.

En el segundo capítulo se analiza la participación de Estados Unidos en el proceso de militarización del Estado latinoamericano. El carácter hegemónico norteamericano a partir de la segunda posguerra y la formación del esquema bipolar enmarcado en la guerra fría, significó la necesidad norteamericana de apoyar la homogeneización profesional de los ejércitos latinoamericanos. En el caso de Argentina se incluye la influencia alemana en la formación de los cuadros militares argentinos a principios de siglo.

La consolidación del proceso revolucionario en Cuba y su definición como socialista, aceleró la necesidad de Estados Unidos de evitar un nuevo caso cubano en la región. El desarrollo de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, como justificante de las acciones anticomunistas en la región, adquiere importancia definitiva en el accionar ideológico y doctrinario de las fuerzas armadas latinoamericanas, incluidas las filas castrenses argentinas, en defensa "de los valores democráticos".

Esta doctrina se convirtió en el justificante de las sucesivas intervenciones militares para derrocar gobiernos constitucionales, alegando su capacidad discrecional para tomar el poder en cuanto consideran que el gobierno en turno es incapaz de controlar situaciones dadas de inestabilidad política y social como condiciones para el surgimiento de la subversión.

En el caso de Argentina se estudia el surgimiento de las fuerzas armadas como institución, y por ende su transformación en un ente corporativo. En este sentido, la formación en el seno de las filas castrenses del movimiento nacionalista y populista encabezado por Juan Domingo Perón, muestra el carácter deliberativo que acompaña la historia general de Argentina. El peronismo como ideología representativa de las masas obreras, constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo sociopolítico y económico de la Argentina, cuya herencia aún se mantiene en la actualidad.

El presente trabajo, hace un resumen de los efectos que tuvo el peronismo en la transformación de la vida nacional hacia un estado participativo y, posterior a su caída, proscriptivo del peronismo, y el carácter nacional-populista generado por Perón. La mistificación del pueblo argentino hacia la figura de éste, se considera como un ejemplo de la vigencia del caudillismo en la Argentina y la necesidad de contar con líderes carismáticos con capacidad de convocatoria en el desarrollo político en ese país, facilitado en países con un sistema político poco consolidado como en el caso de Argentina.

El interregno entre la proscripción del peronismo durante 18 años después de su caída en 1955 y su regreso en 1973, aborda el carácter deliberativo que mantuvieron los sucesivos regímenes militares y civiles y su incapacidad por conformar un acuerdo de reconciliación nacional que lograra impulsar el establecimiento de la democracia representativa en Argentina.

El regreso de Perón del exilio al gobierno en 1973, marca la etapa definitiva en el agotamiento del Estado benefactor que privó durante 1945 y 1955. Las condiciones sustancialmente diferentes que prevalecían en la década de los cuarenta, significaron la incapacidad de Perón por conformar un Estado participativo, a pesar de sus esfuerzos en



ese sentido, en virtud de su disminuida autoridad y la emergencia de grupos que incluyeron la lucha terrorista, vinculados al peronismo, que no comulgaron con la nueva postura conciliatoria adoptada por el caudillo en 1973. La muerte de Perón en 1974, constituyó un aceleramiento de la disgregación de la ideología peronista y el paso a la desorganización generalizada de la organización política, económica y social.

El clima de ingobernabilidad argentina hacia 1976, preparó el camino de un regreso de los militares al poder político. A partir de ese año hasta 1983, se abre una de las etapas más oscuras en la historia contemporánea de la Argentina. El carácter autoritario y de represión institucionalizada puesta en marcha por el régimen militar para poner "orden" al caos prevaleciente en esta etapa en el país y la lucha sistemática en contra de los movimientos guerrilleros, significó la eliminación de marco jurídico interno y la represión que abarcó a la mayoría de los sectores de la sociedad argentina.

El estudio del período de 1976 a 1983, incluye además la política económica liberal impuesta por los militares. Asimismo, se analiza la actuación de las juntas militares que se traspasaron el poder y los elementos que gradualmente dieron paso a las fisuras dentro de los tres cuerpos del ejército. En ésta se incluyen el exterminio de la guerrilla que actuaba en el país y con ello un factor de unidad del instituto castrense y las diferencias en cuanto a la forma de gobierno en materia de política económica. La creciente deslegitimación del poder político de las fuerzas armadas y el enfrentamiento entre las tres fuerzas respecto a la forma de llevar a cabo una transición del poder a los civiles, fueron reforzadas ante la derrota militar argentina frente a Gran Bretaña por la posesión de las Islas Malvinas.

Al respecto, se analizan las consecuencias de dicha derrota que estuvo a manos de un país europeo que tradicionalmente ha tenido una gran influencia en el desarrollo económico e histórico de la Argentina. Este acontecimiento constituyó una lección amarga para el pueblo argentino en el sentido de que forma parte de Latinoamérica, si no en el aspecto poblacional por su formación netamente europea, si lo es en el aspecto geográfico. La posición condenatoria de Europa en el marco de la CE y de Estados Unidos de apoyar a su aliado en la OTAN, marca el replanteamiento e impulso de la política de cooperación argentina con sus vecinos latinoamericanos y que comenzaron a impulsar los regímenes civiles posteriores.

La decisión del alto mando militar argentino de ocupar las militarmente las Malvinas, se toma como un intento por distraer la atención del pueblo argentino de los graves problemas económicos en que estaba sumido el país. Invocando un revanchismo nacionalista, los militares obtuvieron en principio un apoyo entusiasta de la población. Sin embargo, el trauma psicológico que significó la derrota militar, así como la muerte de jóvenes argentinos, permitieron la consolidación y formación de grupos de presión contra el régimen militar, algunos de los cuales tendrían eco en las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Estos grupos, a la larga, se constituirían como otro elemento que influyó en el desplazamiento del régimen militar.

Al analizar el accionar coercitivo del régimen militar y su justificación en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, el trabajo desarrollado analiza los factores que posibilitaron la vuelta de un régimen civil en la Argentina a partir de 1983 después de siete años de padecer una de las dictaduras militares más represivas y regresivas de su historia. Se incluyó el estudio de los elementos políticos, económicos y sociales que dieron por resultado la primera derrota electoral del peronismo desde su nacimiento en 1946, en las elecciones generales celebradas en octubre de 1983, y el resurgimiento del Partido Radical como organización política de primera fuerza.

El último capítulo engloba el análisis de los principales retos y desafíos que ha enfrentado y enfrenta aún el incipiente proceso democrático en la Argentina bajo dos regímenes civiles consecutivos. Al mismo tiempo, se plantearon los principales problemas heredados de la dictadura que enfrentó el gobierno radical a lo largo de su gobierno, entre los que destacaron la crisis económica y las consecuencias de los alzamientos militares. Lo anterior, no desde el punto de vista de intentos de "Golpes de Estado al gobierno democrático" como se manejaron en su momento y sí como la expresión de los mandos medios de las fuerzas armadas en su oposición al enjuiciamiento de los militares que violaron los derechos humanos o se excedieron en sus funciones durante la llamada "guerra sucia" durante el régimen militar. Estas expresiones castrenses, se toman como el origen de la "Ley de Punto Final" y de "Obediencia Debida" sancionadas por el gobierno radical.

Asimismo, se hace un balance de los problemas que provocaron un desbordamiento de la crisis y la incapacidad del gobierno radical para hacerle frente y que trajo como consecuencia un adelanto en la sucesión presidencial de 1989 garada nuevamente por los peronistas con la figura de Carlos Saúl Menem. Por último, se analizan las perspectivas del actual régimen civil y su alejamiento de los lineamientos tradicionales de la doctrina peronista en la coyuntura actual y el intento del gobierno del Presidente Menem por iniciar del proceso de reconciliación nacional con el indulto presidencial a los militares acusados de violar los derechos humanos entre 1976-1983.

Con base en lo anterior, la inestabilidad que puede percibirse en el proceso de redemocratización en América Latina, el presente estudio tiende a considerar que si bien en la actualidad la mayoría de los países de la región mantienen gobiernos civiles, esta situación no puede considerarse como el establecimiento definitivo de la democracia en la región como ya se maneja en el actual discurso político latinoamericano. La permanencia de los graves problemas ya señalados que aún se tienen, y que se manifiestan en la formación de amplias capas de población en condiciones de extrema pobreza, se están contraponiendo a esta posición.

## CAPITULO I: ANTECEDENTES HISTORICOS

### 1.1. La independencia nacional y la formación del Estado argentino

La historia de América Latina y el Caribe registra un desarrollo y económico dependiente de los principales centros de poder mundial actuales y pasados. Este devenir histórico y aún contemporáneo, caracterizado por numerosas revoluciones que se gestan en las colonias para sacudirse el tutelaje europeo, ha influido en el desarrollo político de los países latinoamericanos en su lucha por establecer un sistema de gobierno representativo para sus respectivas naciones. Se inicia, asimismo, una historia que no puede disociarse de su problemática contemporánea.

A pesar del éxito de esas luchas independentistas, cuyo motor, en gran parte, fue la identificación del americano en contra del europeo, impuso en el corto plazo el reto de forjar y solidificar tanto en términos ideológicos como territoriales, la idea de nación como elemento de unificación.

Sin embargo, esta identificación no bastó para iniciar un proceso con esa orientación. La meta de lograr una unión permanente de países americanos como lo concibió Simón Bolívar,<sup>(1)</sup> estuvo condicionada a la ausencia de una experiencia política de los criollos y mestizos descendientes de los españoles que encabezaron las guerra de emancipación y que, al mismo tiempo, una vez concretada la independencia, carecían de una visión sólida sobre la forma o tipo de gobierno a establecer de acuerdo a las condiciones prevalecientes al momento de su emancipación.

Como resultado, estas luchas libertadoras se llevarían a cabo en forma desorganizada, las cuales no registran una fecha oficial de terminación ni produjeron un tratado de paz. Si bien los países americanos lograron sacudirse el tutelaje europeo y un gobierno regido por la corona, esta organización política no fue sustituida por otra. Al término del período de emancipación, América Latina se encontró dividida en países, separados a su vez por provincias regionales gobernadas por oligarcas municipales y regidas por caudillos militares locales.<sup>(2)</sup>

Para los libertadores la idea de establecer una monarquía se consideró algo inaceptable de acuerdo a las condiciones locales de la época, y si bien se deshechó la idea de establecer un sistema monárquico americano, igualmente la idea de promover otra forma de gobierno que estuviera influenciada por las ideas de los filósofos franceses o del constitucionalismo americano, encontraron la oposición de sectores que luchaban por la restauración europea. Los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad no tendrían sentido alguno en esta coyuntura, como consecuencia de la permanencia de la sociedad de estratos y dividida en castas sociales.

Las instituciones políticas de la colonia fueron destruidas, siendo sustituidos por la dominación informal de los grupos económicos de mayor peso, asociados con los militares

locales. En esta época, los grandes hacendados hicieron de la posesión de la tierra un efectivo control político local.

Con el paso del tiempo, esta desorganización política, generó nuevas revoluciones e intentos de revoluciones sociales en contra del establecimiento y permanencia de regímenes que se atribuyeron poderes dictatoriales, personales o institucionalizados. Regímenes y caudillismos<sup>(3)</sup> que han mantenido su influencia en América Latina.

En este sentido, la propia historia de España, como principal colonizador de tierras americanas, observa en su desarrollo político una tradición burocrática centralizada. En la Colonia, la administración burocrática mantenía bajo su control todos los órganos establecidos al efecto, con excepción del Cabildo<sup>(4)</sup>. Este sistema político propició la creación de gobiernos locales y de carácter aristocrático, ya que este órgano era incapaz de convertirse en base para la formación de un gobierno nacional.

La hacienda, por tanto, adoptó características semifundales donde el hacendado se convirtió en la autoridad máxima dentro de sus extensas posesiones. Estos mostraban un efectivo control económico y social, pero inexistente en términos legales. Por su parte, los sucesivos gobiernos independentistas ocupaban la mayor parte de su tiempo en buscar los medios para mantenerse en el poder. La debilidad de la autoridad política de largo alcance, fortalecía el dominio de los caudillos sobre sociedades divididas en estratos observadas en toda Latinoamérica.

En las últimas décadas, América Latina sigue padeciendo en lo interno de agudos conflictos sociales y de diferencias territoriales que mantienen su presencia<sup>(5)</sup>. Para la región, la aspiración de un gobierno democrático representativo sigue siendo una expectativa. Argentina, como parte de Latinoamérica, mantiene problemas económicos, políticos y sociales producto de su desarrollo histórico.

Argentina es una nación con un alto grado de alfabetización, raza mayoritariamente blanca producto de la inmigración europea<sup>(6)</sup> y la eliminación física de las tribus locales, promovida por los sucesivos gobiernos después de la emancipación española y un gran porcentaje la población entra en la categoría de clase media. El territorio de este país posee abundantes recursos naturales y tierras para la agricultura y la ganadería, parte integral de su economía. En contraste, en el aspecto político Argentina se ha caracterizado a lo largo de su historia por la inestabilidad, con un alto grado de participación de los militares en la conducción de la vida política, primero a través del cuadillaje y después como institución.

Esta inestabilidad ha sido el fruto de divisiones políticas o ideológicas que han tratado de gobernar a la Argentina. Décadas después de haber consolidado su independencia de una España decadente en 1810 y consolidada en 1816,<sup>(7)</sup> esta se vio sumergida por las disputas entre los denominados "federalistas", que pugnaban por la creación de una federación, y los "unitarios", que proponían el centralismo como forma de gobierno. Las diferencias entre las ciudades del interior y de la costa, fueron las

características principales en que se desarrolló la formación del Estado argentino. Este conflicto de intereses perduró durante siglos, por lo que los intentos por establecer gobiernos que tuvieran un carácter nacional se vieron truncados por la división territorial del país, en donde cada grupo de presión buscaba mantener y ampliar sus intereses.

### 1.1.1 El descubrimiento y la colonización española

El descubrimiento y establecimiento de los españoles en lo que hoy constituye el territorio argentino se llevó a cabo con la expedición del español Juan Díaz de Solís quien tocó costas sudamericanas en 1516, descubriendo el Mar Dulce, conocido después con el Río de la Plata; la de Fernando de Magallanes quien descubre la Patagonia y su estrecho, bautizado con su nombre y la realizada por Sebastian Cabot que en 1527 explora el Río Uruguay, descubriendo el Río Paraná, el Río Paraguay y el Río Pilcomayo. Además funda el puerto del Espíritu Santo, primer establecimiento español en el Río de la Plata<sup>(8)</sup>, el cual no obstante es destruido por tribus locales.

A este primer intento de establecer una base española que facilitara la conquista del interior, se sucedieron otros. El más importante fue la exploración de la región denominada el "Estuario" en 1536 por parte de Pedro de Mendoza, quien funda Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire, antecedente del actual Buenos Aires<sup>(9)</sup>. La falta de mano de obra y la presencia de tribus indígenas hostiles retardó su consolidación hasta 1537.

La mayoría de las expediciones de Mendoza las realizó sobre el Río Paraná y Paraguay para establecer Asunción (hoy Paraguay). Bajo esta nueva situación Buenos Aires fue abandonada, convirtiendo a Asunción en una base segura para los colonizadores españoles contra los ataques de los indios. Su fundación, posibilitó el establecimiento de varias ciudades las cuales forman parte de la Argentina actual. De esta época se registra el descubrimiento de las Islas Falkland o Malvinas en el Atlántico Sur, cerca del estrecho de Magallanes, por expediciones inglesas y españolas que exploraron las islas.

Al contrario del alto grado de civilización observada por los españoles en el territorio que ocupa actualmente México y la región andina, en la Argentina no existía el grado de sofisticación de la estructura social de otras civilizaciones como la Maya, Azteca o Inca. La mayoría de las tribus indígenas que poblaban el territorio argentino incluyendo la Patagonia, se caracterizaron por su economía de subsistencia y nomadismo.

Para España era necesario apresurar la colonización de nuevas tierras en el Nuevo Mundo ante el avance de los portugueses quienes con el descubrimiento y establecimiento en Brasil en 1500, comenzaron la exploración del interior más allá de la línea establecida en el Tratado de Tordesillas.<sup>(10)</sup> Esta rivalidad, generó una serie de fricciones entre ambos países, las cuales se mantuvieron durante varias décadas.

Con la fundación de 1680 por parte de los portugueses de la Colonia de Sacramento a través del Río de la Plata, se recrudecieron las disputas. La interpretación unilateral de los portugueses de dicho Tratado era frecuente. Los portugueses reclamaban la costa septentrional del Estuario del Río de la Plata y justificaron el establecimiento de un puesto militar de avanzada en la Colonia de Sacramento, muy cerca de la población de Santa Ma. del Buen Aire, desde donde podían controlar la presencia española en Buenos Aires. Estas acciones revelaban el conocimiento de la región por parte de los portugueses de la importancia del Estuario como entrada a las vastas llanuras del Plata.<sup>(11)</sup> A las varias ocupaciones por parte de tropas españolas de dicha colonia se sucedieron esfuerzos de paz que restauraban la posesión a los portugueses<sup>(12)</sup>.

Las oportunidades del área en esta época motivaron la importación de esclavos brasileños utilizados como mano de obra en pequeñas industrias. A ello se sumó la decadencia en la extracción de Plata en el Perú al tiempo que la eliminación de la carga anual hacia España quebró la estructura económica de los más importantes centros de comercio de la Nueva España, Panamá y Lima. El surgimiento y consolidación del Río de la Plata atrajo la atención española, creándose el Virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires en 1776<sup>(13)</sup>, con el objeto de establecer un control efectivo sobre la región.

Durante la colonización los centros administrativos más importantes fueron el Virreinato de la Nueva España (México) establecido en 1585 y el Virreinato del Perú establecido en 1542. En esta etapa, Argentina, por su lejanía geográfica tuvo un papel muy secundario. La Iglesia Católica se convirtió en un elemento de gran importancia en la formación de la sociedad colonial, responsable de la evangelización de los indios. Esta institución pronto se transformó en el mayor centro social promotor de la educación que agrupaba a todas las clases en la celebración de ritos religiosos.

Los conquistadores españoles encontraron en los indios una mano de obra calificada en las tareas que consideraban por debajo de su rango, pero la esclavitud estaba prohibida por la Corona y la Iglesia -aunque en la práctica esta disposición no era muy respetada-. Los lugares descubiertos por los españoles se hacían bajo el nombre del Rey y se establecían Cabildos y el régimen de la encomienda. Sin embargo, este régimen fue blanco de severas críticas por parte de la Iglesia, por el abuso que se daba contra los indios, siendo suprimido por la corona española en los inicios del siglo XVIII.

Con el desarrollo de la colonización se formaron y definieron nuevas clases sociales como los mestizos y criollos. Estas clases dominaron el desarrollo económico y social y convirtiéndose en responsables de la capacitación de los pueblos del interior. Durante el proceso de colonización el índice de mortalidad de los indios propició su impresionante disminución, ya fuera por eliminación física, enfermedades o por sus condiciones de vida.

La colonización del Río de la Plata a finales del siglo XVI, tiene características distintas. Su principal objetivo fue la fundación de un puerto que facilitara la provisión de

bienes a la ciudad de Asunción. En esta tarea los españoles se enfrentaron a una tierra inhóspita, carente de indios que formaran una importante mano de obra y escasos recursos naturales de fácil explotación.

La expedición del español Garay dio como resultado la fundación de la hoy Provincia argentina de Santa Fe, además de restablecer el Puerto de Buenos Aires con la ayuda de los mestizos, la clase social más importante después de los españoles. Sin embargo la falta de una suficiente mano de obra ante la ausencia de importantes comunidades indias en esa región, hicieron impráctico el establecimiento del régimen de la encomienda en el Río de la Plata.

Esta característica que imposibilitó el desarrollo de la manufactura, proyectó a la ganadería como la actividad económica más viable para la región. Este puede considerarse el punto de partida de una actividad que, con el paso del tiempo, se convirtió en la principal actividad económica generadora de riqueza, la cual mantiene vigente su importancia en la actividad económica de la Argentina actual.

Hasta la creación relativamente tardía del Virreinato, del Río de la Plata, Buenos Aires dependió del Virreinato de Lima. Otra consecuencia que acompañó su fundación, fue la aparición de un importante aparato militar, como consecuencia, en mayor medida por los continuos conflictos hispano-portugueses por la posesión de las tierras del Nuevo Mundo. España deseaba establecer su autoridad política en el Atlántico Sur<sup>(14)</sup>, en donde Buenos Aires pronto se convirtió en un importante centro de contrabando.

### 1.1.2 El Virreinato del Río de la Plata

El establecimiento formal del Virreinato del Río de la Plata se llevó a cabo en 1777, siendo el primer Virrey Juan José Vertiz y Calcedo. El nuevo Virreinato incluyó las regiones que actualmente forman Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. Dentro de su estructura política se incluyó la Audiencia, (instrumento administrativo que combinaba funciones ejecutivas, legislativas y judiciales) y el Consulado (tribunal que atendía todas las cuestiones relativas al comercio). A partir de 1794 el consulado adquirió mayores poderes para proteger y desarrollar el comercio, incrementar la producción agrícola con la introducción de nuevas técnicas, estimular el comercio e instrumentar la educación comercial y técnica, construir caminos, habilitar puertos, proponer planes de desarrollo y aún la iluminación y limpieza de las calles de Buenos Aires.<sup>(15)</sup>

Este período convirtió a Buenos Aires como el puerto más importante para el comercio en un área que incluyó a las minas del Alto Perú (hoy Bolivia). La importancia de este puerto permitió a los intereses mercantiles en Buenos Aires, el establecer contacto directo con los puertos españoles en el mundo.

De este período también se debe la formación de la mayoría de las características de la economía argentina. El desarrollo de las denominadas "estancias" (especie de ranchos de ganado vacuno que incorporaban para su desarrollo a "gauchos" y trabajadores

asalariados). Esta industria basada en las estancias cobró auge con la apertura del comercio, la cual hizo más intenso el desarrollo de la ganadería. Este desarrollo se ejemplifica con la aparición de "saladeros" (lugares donde se salaba la carne para su conservación), dirigidos a crear un mercado de exportación.

La crisis del orden colonial que se hizo evidente hacia 1806 dentro del marco de las guerras napoleónicas en Europa, se combinó en América por el obstáculo que significó el tutelaje español para el desarrollo económico y social de la región. La aparición de movimientos de liberación en Haití y los Estados Unidos, finalmente trajeron como consecuencia su propagación, permitiéndole la caída del papel colonial de España en el Nuevo Mundo.

### 1.1.3 La emancipación contra la colonia española

El movimiento de liberación en el Río de la Plata se inició en la etapa de los virreyes y está marcada por la transformación gradual de la sociedad colonial, como respuesta a los disturbios en Europa y sus repercusiones en las Américas. Este período registra los intentos británicos por impulsar la emancipación de América con el objeto de adquirir nuevos mercados. (16)

En 1806 y 1807 Inglaterra invadió Buenos Aires en dos ocasiones, las cuales tuvieron importantes consecuencias políticas y comerciales para el Río de la Plata. Estas intervenciones momentáneas, estimularon las tendencias de emancipación del tutelaje español entre la sociedad criolla de la Argentina, al tiempo que significaba una oportunidad y un reto para organizarse política y militarmente en forma autónoma. Ambas invasiones fueron rechazadas con éxito. Estas acciones estuvieron encabezadas por militares descendientes de europeos, formados en España, los cuales constituyeron el núcleo que sirvió de base para la organización de los grupos independentistas que enfrentaron con éxito a las fuerzas británicas.

La propaganda revolucionaria instaba a iniciar esfuerzos tendientes a organizar la lucha por la independencia bajo el protectorado británico o portugués. Estos esfuerzos encontraron oposición de los sectores liberales que pugnaban por la independencia de cualquier tutelaje. En 1809 los rebeldes criollos de Buenos Aires lograron romper la autoridad española sobre el virreinato, proclamando la independencia sobre España el 20 de mayo de 1810 (17). Esta acción, personificó las ideas liberales que se desarrollaban en Europa dando paso a la formación de un "Cabildo Abierto" representado por una junta provisional revolucionaria. Su principal objetivo se centró en asegurar la independencia del área, amenazada por la reconquista de Chile por parte de los españoles, así como la necesidad de establecer una coexistencia con las tendencias que propugnaban por la restauración de la autoridad europea en la región. (18)

Se inicia de esta forma un proceso de organización política caracterizada por los conflictos internos de aquellos que pugnaron desde la emancipación por la hegemonía de



Buenos Aires sobre las demás provincias y aquellos que deseaban mantener la autonomía provincial.

#### 1.1.4 El triunvirato

El conflicto generado por las divergencias en cuanto a las provincias del interior, traería como resultado la proclamación de la independencia de Paraguay y el Alto Perú (hoy Bolivia), como resultado de la desorganización y la falta de un proyecto político Nacional. La Junta Militar fue sustituida por el Primer triunvirato establecido en 1811.<sup>(19)</sup>

El triunvirato constituyó el primer intento político impulsor de una organización social, con la instrumentación de medidas de beneficio a la población. Sin embargo el triunvirato perdería legitimidad ante la ausencia de un poder de convocatoria y su incapacidad de apoyar las expediciones liberadoras para el norte de Buenos Aires.

El triunvirato fue sujeto a presiones de una Asamblea Revolucionaria al mando de José de San Martín y Carlos M. de Alvear. Nacidos en Argentina, ambos caudillos desarrollaron su carrera militar en España. La influencia de las ideas europeas de la época así como la invasión napoleónica en la Península ibérica, además de permitir su regreso a su tierra natal, influye de manera decisiva en su afán de liberar las tierras americanas de la influencia de las potencias europeas.

#### 1.1.5 Herencia de José de San Martín

En 1812 San Martín y Alvear provocaron la caída del Triunvirato en favor de uno nuevo, el cual convocó a un Congreso General de Representantes Provinciales a ser elegidos por medio del sufragio directo. Este Congreso se reunió en 1813, denominándose Asamblea Revolucionaria, la cual, además de proclamar la independencia, decretó la abolición del vasallaje hacia el Rey; la Iglesia debía cambiar su actitud en favor de la población y no del Rey, la remoción de todos los europeos de puestos gubernamentales, la emisión de una moneda nacional; libertad de comercio, la generación de un escudo de Armas de las Provincias Unidas en sustitución del de la corona, manutención de los esclavos y niños, supresión de las obligaciones impuestas a los indios, títulos de nobleza, derechos de sangre y la tortura a los prisioneros, así como la reorganización de la educación. Al mismo tiempo, la Asamblea Acordó la reorganización del poder ejecutivo en un hombre, siendo de esta forma Gervasio A. Posadas su primer dirigente.

Esta elección, sin embargo, no puso fin a los problemas internos. El conflicto de la Banda Oriental, dominada por los realistas, propició insurrecciones encabezadas por Gervasio Artigas en contra de Posadas en algunas provincias, propiciando la caída de éste en 1815. Fue sustituido por Alvear quien se vio imposibilitado por contener el avance de Artigas sobre Buenos Aires, así como el creciente descontento de la población. Alvear caería en el mismo año y junto con él la disolución de la Asamblea Revolucionaria.

De esta forma se vieron frustrados los primeros intentos por lograr una unión de Buenos Aires y las Provincias del interior. Con la disolución de la Asamblea Revolucionaria, en el Cabildo de Buenos Aires recayó la tarea de llamar a un congreso general que tratara de conciliar las posiciones encontradas de federalistas y unitarios. Este se reunió en 1816 en Tucumán, declarando la independencia formal frente al Reino de España, en la que se acuerda la creación de las Provincias Unidas de Sudamérica. Sin embargo, las tendencias monárquicas seguirían vigentes en amplio sectores de la población principalmente la clase terrateniente y comercial.

Este nuevo proceso estuvo igualmente caracterizado por una débil estabilidad. Bajo el gobierno de Pueyrredón surge la figura de José de San Martín como pilar en la liberación de las colonias españolas, así como baluarte en la defensa de Buenos Aires contra los realistas que aún dominaban Chile. San Martín aseguró la independencia de Chile en 1818, a lo cual Pueyrredón pretendió que éste regresara a Buenos Aires para reprimir a los movimientos disidentes que se escenificaban en la ciudad. La Negativa de San Martín provocaría la caída del proceso revolucionario iniciado en 1810.

#### 1.1.6 El centralismo

En esta etapa (1819) comenzó igualmente una disgregación de las provincias del interior, aunque Buenos Aires poco a poco comenzó a consolidar su hegemonía porteña. A ello contribuyó una significativa expansión de la ganadería, base de la prosperidad económica de la Argentina a partir de 1820.

Otro elemento causal del rompimiento de la estabilidad unitaria de las provincias fue la promulgación de la Constitución en 1819, de carácter centralista, la cual incorporaba el control político de Buenos Aires sobre las Provincias. Esta situación radicalizó las posiciones de los federalistas y los autonomistas provinciales, dando paso a un período de anarquía con la caída de Pueyrredón. Las tendencias opuestas en cuanto a la conformación de un proyecto nacional fue el resultado de las diferentes posiciones al respecto sostenidas en la época por los diferentes grupos.

Después de un año de guerras civiles se dio un nuevo intento de reorganización. Se instrumentaron una serie de medidas tendientes a lograr la unión entre Buenos Aires y las Provincias del interior. Al efecto, se creó una Junta de Representantes electos por voto universal reservado a los hombres, y la firma de un tratado de cooperación entre Buenos Aires y algunas Provincias del interior bajo los principios de cooperación, unidad y autonomía. El gobierno suprimió el Cabildo de Buenos Aires por considerarlo incompatible con la existencia de un congreso de representantes. Los privilegios de la Iglesia fueron suprimidos además de aplicarse medidas económicas y la fundación en 1821 de la Universidad de Buenos Aires.

Sin embargo, la ausencia de un proyecto nacional viable para las condiciones políticas de la época siguió ausente, lo cual mantenía la vigencia y poder de las posiciones

opuestas ya mencionadas. Estas posiciones emergieron durante el congreso constituyente reunido en Buenos Aires en 1824, el cual arrojó una nueva Constitución que incorporaba en sus preceptos la autonomía Provincial.

En esta etapa el conflicto sobre la Banda Oriental suscitado entre Argentina y Brasil (dominado por la monarquía), reclamantes de su posición, propició la guerra en la cual Brasil logró la anexión de dicha Banda en 1822. <sup>(20)</sup> Este hecho motivó momentáneamente, por primera ocasión, un sentimiento de unidad entre Buenos Aires y las Provincias con el objeto de recuperar la Banda Oriental. Se declaró la guerra al Brasil en 1825.

#### 1.1.7 La elección de Bernardino Rivadavia

Con la elección de Bernardino Rivadavia en 1826 como Primer Presidente de la Provincias Unidas de Sudamérica, éste propuso de nueva cuenta la federalización de Buenos Aires como capital de las Provincias Unidas, suscitando nuevos conflictos. Con la caída de Rivadavia es nombrada una Junta Provisional la cual inició negociaciones de Paz con el Brasil, dando como resultado la firma de un tratado de Paz en 1828 que posibilitó la independencia de la Banda Oriental creándose Uruguay. <sup>(21)</sup>

Durante este proceso de independencia la población sufrió los efectos de la guerra, así como la formación de hacendados que poco a poco cambiaron el estilo de vida de las poblaciones nómadas. La fundación de estancias conformaron el marco que utilizaría la mano de obra de dicha población conocida como "gauchos" <sup>(22)</sup> estableciendo una relación patrón-trabajadores. Sin embargo, a pesar de que se había declarado la autonomía de España en 1810 y la independencia política en 1816, la subordinada integración económica de la Argentina a la economía mundial se vio fortalecida en forma gradual en vez de debilitarse.

Las poblaciones que lucharon durante las guerras civiles pronto se convirtieron en símbolos que estaban en contra los intereses urbanos. Cada población, creó su propia banda de gauchos liderados por algún caudillo. Uno de ellos sería Juan Manuel Rosas (terrateniente de Buenos Aires), lo cual marcó el triunfo del federalismo dominado por éste y Juan Facundo Quiroga (la Rioja). Con la desaparición de Quiroga, Rosas se instala en el poder en 1835.

Rosas se convirtió en el primer caudillo que impuso al país una autoridad con apariencia de alcance nacional, dando pasos vacilantes para establecer una estrategia de desarrollo con base nacional. Estas intenciones, sin embargo, se vieron suprimidas posteriormente por su derrota militar a manos del Gobernador de Entre Ríos, el General Justo José de Urquiza.

### 1.1.8 El período de Juan Manuel de Rosas

Las victorias militares de Rosas que lideraba a una banda de gauchos en contra de las clases altas de Buenos Aires que lo consideraban como el triunfo de la barbarie sobre la civilización le ganaría adeptos. Este apoyo posibilitó su elección como gobernador de Buenos Aires en 1829, apoyado por terratenientes conservadores, comerciantes y elites religiosas cuyos objetivos eran la paz y la estabilidad, ley y orden.

Rosas heredó una provincia devastada por la Guerra y plagada de faccionalismos. Al tiempo, la producción agrícola y ganadera era afectada por una severa sequía, cuyo efecto negativo en la economía pronto emergió. Rosas fue capaz de forjar un compromiso nacional, reconociendo la autonomía provincial y estableciendo su 1831 las bases de una unidad nacional a través de un Pacto Federal acordado entre Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fé.

Este período se caracteriza por ser de restauración, el cual observó un fortalecimiento de las fuerzas armadas, protección de la Iglesia, establecimiento del financiamiento gubernamental, protección de los intereses agrarios y promoción de la industria ganadera. Como parte de la clase terrateniente, instrumentó medidas para dar una mayor seguridad a los poseedores de tierras, así como satisfactorios de sus necesidades. Apoyó la expansión de la tierra de cultivo en las Pampas enfrentando con éxito a las tribus hostiles.

Este éxito le valió el apoyo de las clases terratenientes que lo instalaron de nueva cuenta en el poder. Había dejado el gobierno en 1842, sucedido por dos dirigentes quienes no lograron llenar el vacío de poder dejado por Rosas.

En la ausencia de Rosas los conceptos de unidad nacional y expansión territorial perdieron legitimidad. El Congreso de Buenos Aires apuntaló a Rosas como Gobernador con poderes especiales para difundir el federalismo y con el mandato de mantenerse en el poder el tiempo que fuera necesario. Esta designación Rosas la condicionó a la aceptación popular, la cual se sancionó mediante un plebiscito. Este confirmó a Rosas en el Gobierno con poderes dictatoriales dando paso a un período de represión y asesinato de los opositores a su régimen. Con el objeto de mantenerse en el poder, creó un Congreso manipulable que lo confirmara como gobernador en cada término de su mandato y en donde las relaciones con las demás provincias se mantuvieron en un bajo nivel.

Los líderes opositores que huyeron a Montevideo y Chile; entre ellos Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento lograron con su influencia el derrocamiento de Rosas. Estos intentos se iniciaron desde 1838 con la alianza entre Francia y Montevideo, contra el Gobierno Rosista evidenciando las pretensiones francesas sobre el Río de la Plata. Esta alianza impuso un bloqueo a Buenos Aires que afectó la economía, pero que se tradujo en una mayor represión del régimen rosista. Entre 1842 y 1847 franceses y británicos bloquean el Puerto de Buenos Aires.<sup>(23)</sup>

A estos intentos se sumaron conspiraciones internas y alianzas de los gobernadores provinciales para deponer a Rosas. Esta presión surtió efecto posteriormente y es en la batalla de Caseros de 1852 en donde las fuerzas militares de Rosas son derrotadas provocando su caída y exilio en Gran Bretaña hasta su muerte en 1877.

### 1.1.9 El período de Justo José de Urquiza

Uno de los pilares de la caída de Rosas. Justo José de Urquiza, un líder militar local, se establece en el gobierno abriendo un nuevo período caracterizado por la coerción, la violencia y el asesinato de opositores. En 1852 Urquiza intentó revivir el Pacto Federal de 1831, lo cual encontró la oposición de Buenos Aires, surgiendo alzamientos en contra de Urquiza. Este apoyo la instalación como gobernador de Buenos Aires a Vicente López y Planes y Urquiza es designado como Presidente de las Provincias Unidas en 1852.

La agitada vida política de la región estuvo acompañada por la expansión de la economía basada en la ganadería. Esta expansión se vio limitada en el interior por las constantes guerras civiles que se desarrollaron en esta época. Superados los conflictos internos, se produjo una mejora de la economía, al tiempo que se observó una creciente militarización debido en gran parte a las necesidades que implicaba la guerra revolucionaria. Este crecimiento generó nuevas clases urbanas en las Provincias del interior y una sociedad relativamente igualitaria, en comparación con la etapa colonial.

De esta época datan los primeros establecimientos de inmigrantes europeos que poco a poco se convirtieron en parte importante en la conformación de una sociedad argentina mayoritariamente influenciada por el comportamiento y costumbres europeas. La caída de Rosas y su influencia en 1852, trajo varias consecuencias. Por un lado obligó a satisfacer exigencias que imponía el progreso institucional y por otro puso en crisis la hegemonía del Puerto de Buenos Aires que él construyó.

### 1.1.10 La Constitución de 1853

En 1853, delegados de las provincias iniciaron trabajos tendientes a redactar una nueva Constitución en la cual el principal problema seguía radicando en las posiciones de los liberales y conservadores. No obstante se lograron unificar criterios, dando como resultado la promulgación de una de las Constituciones más liberales y progresistas de la época. En esencia, la nueva Carta Magna estableció un gobierno representativo republicano y federal; la religión católica fue declarada como oficial; instituyó el libre comercio y el desarrollo de un mercado estable que facilitara el intercambio de productos manufacturados provenientes de Inglaterra por materias primas argentinas. De acuerdo a los lineamientos de la Constitución las elecciones se celebraron en noviembre de 1857, siendo electo Urquiza como Primer Presidente Constitucional de la República Argentina, por primera ocasión por medio del sufragio.

Esta nueva constitución se inspiró en un autoritarismo progresista, tendiente a imponer un Ejecutivo fuerte y sentando las bases para la unificación económica de la nueva nación. El Presidente Urquiza promovió el establecimiento de relaciones a través de diversos tratados con países americanos y europeos y al interior la provisión de subsidios a la educación, la concesión de un acuerdo con Chile para la construcción de un ferrocarril transandino y el establecimiento de un Banco Central. Además, en esta etapa se crearon los primeros programas oficiales promotores de la inmigración europea.

El mandato de Urquiza estuvo caracterizado por la lucha que entablaría contra las pretensiones hegemónicas y secesionistas de Buenos Aires, al tiempo que las Provincias iniciaban su proceso de reorganización de acuerdo a lo establecido por la Constitución. Sin embargo, la actitud independentista que mantuvo Buenos Aires propició su conformación como un Estado separado de la Unión.

Esta posición, generó conflictos entre Buenos Aires y las Provincias. Para neutralizar su hegemonía, Urquiza federalizó el Puerto de Buenos Aires dando paso a un período de intensas disputas, traducidas en guerras civiles por los intentos de incorporación. A pesar de la formal separación que prevalecía entre las provincias federales y Buenos Aires, fue firmado en 1854 un Acuerdo de Cooperación para la paz y comercio entre éstas.

La elección a Alsina como Gobernador de Buenos Aires en 1857, quien mantenía viejas rivalidades con Urquiza, motivan la invasión de Buenos Aires. Como resultado, se firmó un tratado en 1859 que promulgaba la incorporación de Buenos Aires dentro de la Unión, a condición de que se incorporasen enmiendas a la Constitución.

Este acuerdo no obstante, no pondría fin a la inestabilidad política. Una característica inherente del Gobierno de Urquiza fue su intervención en los asuntos provinciales, en tanto los derechos del pueblo incorporados en la Constitución estuvieron en peligro. Su sucesor, Santiago Derqui, continuó con esta política, además de enfrentar los disturbios que frecuentemente se observaban en la Provincia de Buenos Aires. En 1861 fuerzas opositoras de Mitre, gobernador de Buenos Aires, al mando de Urquiza son derrotadas por él primero, lo cual provocó una nueva crisis que pondría fin al Gobierno de Derqui y su exilio en Montevideo.

#### 1.1.11 El triunfo de Bartolomé Mitre

Como resultado de su victoria, Mitre accedió al gobierno de Buenos Aires además de tomar el control de la nación, en cuanto los representantes provinciales organizaban un nuevo proceso electoral. De esta forma, el Congreso decidió federalizar la ciudad de Buenos Aires como capital nacional,<sup>(24)</sup> eligiendo a Mitre como Presidente Constitucional. El nuevo gobierno adoptó una política de desarrollo de la infraestructura económica y social, fomento de la inmigración europea y el trato preferencial en el aspecto comercial con las naciones europeas.

El desarrollo de las guerras civiles en Uruguay continuaron escenificándose. Esta situación se constituyó como un elemento generador de conflictos entre las naciones del área que promovían esfuerzos para lograr su pacificación, ya que las constantes guerras civiles en Uruguay ponían en peligro la vida de ciudadanos de naciones vecinas (25s).

En esta época surgen figuras políticas de ideología liberal que cuestionaron la autoridad de los caudillos y el poder de la iglesia católica. Estos culpaban a dichas fuerzas del estado de atraso económico y social en que se encontraba la nación, y donde las nuevas tecnologías de producción no tenían cabida.

#### 1.1.12 La influencia de Domingo Faustino Sarmiento

Este fue el caso de Domingo Faustino Sarmiento, miembro de un grupo de intelectuales exiliados que conformaron un grupo político denominado Asociación de Mayo, que enarbolaba las ideas de organización de la sociedad y la creación de un gobierno de acuerdo a los ideales liberadores de la revolución emancipadora de Mayo de 1810. Este grupo estaba fuertemente influenciado por las ideas políticas francesas de ese siglo. Sarmiento ocupó la presidencia y durante su administración llevó a cabo medidas tendientes a mejorar el nivel cultural y económico de la población, fomentar la inmigración europea, con el fin de acabar con el estado de "barbarismo en que se había sumergido a la nación". El incremento de la población producto de la inmigración, dotó de una mano de obra que impulsó el desarrollo de la agricultura y la sustitución de las estancias en pequeñas industrias.

Sin embargo, la política de Sarmiento que puso fin a la preeminencia de Buenos Aires, le ganó opositores. Como consecuencia Mitre encabezó nuevos alzamientos contra el gobierno central en 1874. La derrota de Mitre pondría fin a esta situación, dando paso a una transición del poder. El sucesor de Sarmiento, Nicolás Avellaneda (1874), apoyado por su Partido de tendencia nacionalista, formó una alianza con el Partido Autonomista lo cual creó al Partido Nacional.

Avellaneda impulsó la política de Sarmiento y es en esta etapa donde se promueve la expansión territorial con la conquista de la Patagonia. La necesidad de poblar este vasto territorio motivó una política para favorecer la inmigración europea. Esta política de conciliación, completó el proceso de institucionalización que transformó la función presidencial, en arbitro de las disputas de las diferentes facciones y tendencias políticas de la época.

#### 1.1.13 La federalización de Buenos Aires

Buenos Aires, después de no pocos problemas y una guerra civil, es federalizada en forma definitiva por el Congreso en 1880 erigiéndose como la capital. Esta decisión pudo concretarse con el establecimiento de la autoridad nacional en la Provincia de Buenos

Aires. Además esta situación marcó el inicio de un proceso de consolidación nacional y el inicio de una nueva etapa política y económica para Argentina, en momentos en que la nación enfrentaba un grave endeudamiento externo.

Los principales cambios observados en esta etapa fueron el impresionante crecimiento de la población como consecuencia de la inmigración europea que posibilitó un crecimiento económico con la incorporación de mayores extensiones de tierras a la agricultura. En este sentido, la llegada de nuevas técnicas de Estados Unidos jugaron un importante papel en el desarrollo de las Pampas, como el mejoramiento de la técnica en la cría de ganado y el desarrollo de la industria de la carne con la llegada de la refrigeración para su mejor conservación y exportación. La construcción de ferrocarriles a partir de 1880 facilitó la transportación de productos a los mercados internos y externos, que se tradujo en una bonanza económica de 1882-1884 y 1902-1914.

En el aspecto social se registró un crecimiento de la población del litoral respecto a la del interior, el surgimiento de clases medias urbanas producto de la inmigración europea y la aparición de una clase media rural vinculada a la exportación agrícola. Estos cambios, sin embargo, no impidieron la consolidación de las clases altas tradicionales que siempre defendieron su predominio en el sector agroexportador. Aunado a esto, la distribución inequitativa de la riqueza constituyó un elemento generador de agitaciones laborales.

Si bien la federalización de Buenos Aires significó una etapa de relativa estabilidad, no se habían superado aún las viejas rivalidades que aquejaban a Argentina. Frecuentemente tropas federales debían enfrentar alzamientos que se desarrollaban en las provincias, en donde la vida política estaba dominada por grupos terratenientes. Estos basaban la prosperidad económica de la Argentina en su relación con las potencias europeas principalmente Inglaterra, así como la oposición de importantes sectores conservadores que no compartían el ideal de progreso económico y administrativo de los liberales.

Las clases conservadoras difundían sus intereses, y percibían el futuro de la nación como un proyecto nacional propio. Para ello crearon mecanismos de control político, instituyendo el fraude electoral e incluyendo prerrogativas constitucionales que permitían la intervención federal en los asuntos internos de las Provincias. Ello, generó un mecanismo paralelo de poder manipulador de la vida política de la nación. La inexistencia de una oposición organizada y fuerte, herencia de la ausencia de partidos de masas, se asociaba con la inexperiencia del pueblo argentino a autogobernarse y su incapacidad por enfrentar a estos grupos económicos mediante una participación política. Al mismo tiempo, el concepto de una Presidencia fuerte se fue erosionando como consecuencia de la inestabilidad política y del desdiseño de los terratenientes y comerciantes por lograr de nueva cuenta la centralización absoluta.

La crisis mundial de 1890 acabó momentáneamente con la prosperidad argentina y esta situación de desprestigio de los grupos pudientes posibilitó la formación del primer partido de masas: la Unión Cívica Radical. En efecto, a partir de la década de 1880, estuvo



acompañada por la formación de fuerzas políticas populares que representaban a las clases bajas, quienes se oponían al modelo conservador y de liberalismo auspiciado por los terratenientes y comerciantes.

La crisis económica de 1890 fue también un factor que impulsó la presencia política de estas fuerzas con el surgimiento de líderes políticos como Leandro N. Alem y Bernardo Yrigóyen. Esta incipiente oposición, en principio sólo se limitó a la denuncia de la corrupción del régimen como estrategia política. La Unión Cívica pronto se convirtió en un movimiento político importante apoyado por sectores militares y de trabajadores, así como de disidentes de la Iglesia católica. Alem encabezó la rebelión que pondría fin al gobierno de Miguel Juárez Celman.

El proceso electoral de 1892 no estuvo exento de disputas. Las fuerzas políticas conservadoras en un intento de reconciliación, postularon a Saenz Peña, denominado como el candidato de compromiso, el cual ganó algunos adeptos de las facciones moderadas de la Unión Cívica. La oposición de Alem a Peña le valió el arresto y el exilio. De esta forma surgieron por primera ocasión dos partidos de relativo alcance nacional, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Unión Cívica Nacional encabezada por Mitre.

En esta etapa la reorganización de los sectores conservadores y su influencia marcaron la marginalización del radicalismo de la vida política y sus aspiraciones de acceder al poder por la vía revolucionaria.

La administración de Peña no respondería a los intereses de los grupos conservadores, por lo que la presión a que se vio sometido provocó su renuncia en favor del Vicepresidente José E. Uriburu. En su breve administración Saenz Peña, que observa un agotamiento de sus posibilidades como representante de estos grupos, promovió una reforma electoral que abrió el paso de la vía del sufragio a la oposición radical.

El retorno de Alem del exilio inició una etapa de movilización apoyado por el surgimiento de un movimiento sindical y de grupos políticos simpatizantes de la UCR en contra de los conservadores difundiendo el sufragio universal masculino. Estas movilizaciones se extendieron a varias provincias del interior. Sin embargo, las presiones a que se vio expuesto condujeron a Alem al suicidio en 1896 dejando el liderazgo de la UCR en manos de Bernardo de Yrigóyen quien, a su vez, denegara en su sobrino Hipólito Yrigóyen el liderazgo de la UCR en Buenos Aires.

La estrategia de la UCR siguió centrándose en esta etapa en la denuncia del fraude electoral y la promoción de manifestaciones de descontento contra el Gobierno. En 1896 surge una nueva opción política con la fundación del Partido Socialista (PS) encabezado por Juan B. Justo abanderado de las clases bajas y su oposición al radicalismo y la clase conservadora, a quienes consideraba responsables de la negativa situación económica de los trabajadores.

En esta época, la UCR se afianzó como la fuerza política de mayor influencia. El líder Radical Hipólito Yrigóyen a pesar del fallido intento por acceder a la presidencia en

1898, promovió la continuación de su política de agitación sindical en esos años. Esto propició la instrumentación de una política laboral más estricta y de concesiones a los trabajadores por parte del gobierno, como forma de acabar con la violencia. A ello se sumó la presión exitosa del Partido Socialista para la modificación de las leyes laborales.

Saenz Peña de nueva cuenta ganó la elección como Presidente en 1910. Consciente del peligro que significaba la exclusión de la UCR de las decisiones gubernamentales, impulsa la ley que lleva su nombre, la cual concedía el sufragio universal masculino, el ascenso al poder por ese medio de los gobiernos radicales (que gobernarían a Argentina entre 1916-1930) y la reforma Universitaria de 1918. Estas medidas aunque fueron sumamente progresistas no constituyeron, en cambio, un elemento que presagiara una modificación de la actitud de enfrentamiento entre los intereses encontrados de conservadores y liberales.

A pesar de la adopción de estas medidas, la estructura del modelo económico agroexportador dependiente de capitales extranjeros (principalmente británicos) no fue modificado. La introducción de un proceso electoral por parte de Saenz Peña y su sucesor, posibilitó la presencia política de la UCR en las elecciones de 1912, en las que logró importantes espacios políticos en la capital y en las Provincias. Esta emergencia favorable permitió a la UCR ganar la presidencia en 1916 con Hipólito Yrigóyen.

#### 1.1.14 El personalismo de Hipólito Yrigóyen

La ascensión a la Presidencia de Yrigóyen inició un nuevo período en la Argentina bajo gobiernos radicales. Su elección fue apoyada por una coalición de partidos ideológicamente opuestos, pero unidos por las ideas de participación política y la búsqueda de medidas para lograr una redistribución equitativa de la riqueza. La UCR tendría su base de apoyo de la clase rural media, la clase media formada por los descendientes de inmigrantes, pequeños comerciantes y algunos sectores de trabajadores gubernamentales.

A partir de 1916, la tendencia política de la Argentina estuvo controlada por la relación mantenida por el gobierno de Yrigóyen con la élite conservadora del país. Yrigóyen introdujo una política altamente personalista que rodeó al Ejecutivo, la cual, junto con la alianza con los conservadores lo mantuvieron en el poder hasta 1930, a pesar de las agitaciones sociales que se escenificaron durante su mandato.

Al tomar la presidencia en 1916 Yrigóyen encontró una nación con una grave crisis económica, como consecuencia de la falta de inversión externa y comercio alterado por el estallido de la primera guerra mundial. A pesar de la oposición del Congreso, Yrigóyen mantuvo la neutralidad de la Argentina, nación que pronto se convirtió en un importante proveedor de materias primas y alimentos que Europa demandaba. Esta situación trajo consigo una nueva prosperidad económica, la cual se mantuvo hasta 1921, cuando los efectos de la posguerra golpearon el comercio mundial. La inflación se convirtió en uno de los principales problemas enfrentados por el gobierno de Yrigóyen, quien quedó

atrapado entre satisfacer las necesidades de los consumidores y los intereses de la élite exportadora.

Para enfrentar esta situación, Yrigóyen intentó adoptar una serie de medidas tendientes a mejorar el nivel de vida de los trabajadores, parte importante de apoyo a su administración. Asimismo, adoptó una reforma educativa para contrarrestar la influencia de la iglesia en las universidades. Sin embargo, el Congreso dominado por los conservadores se opuso a esa política de beneficios, generándose conflictos con las clases trabajadoras, que se manifestaban por medio de huelgas. Estas afectaron aún más la marcha de la economía argentina, y su profundización generó mayores conflictos entre Conservadores y Radicales dando paso a lo que se conoce como la Semana Trágica de enero de 1919.

Este hecho puso en peligro la administración Yrigoyenista, la cual durante los dos últimos años intentó rehacer su influencia buscando el apoyo de los grupos de presión incluyendo la Iglesia y los militares, adoptando medidas de beneficio a la población y al estudiantado. Al mismo tiempo, enfrentó una nueva crisis de mayores proporciones motivada por la caída de la demanda de los productos primarios de exportación.

La economía agroexportadora evidenció una vez más su fragilidad frente a fenómenos económicos externos cuestionando la efectividad de dicha estrategia de desarrollo hacia afuera. En este período, además se observa una mayor presencia de los intereses norteamericanos en la Argentina. Ese país, pronto se convirtió en el principal proveedor de bienes y financiamiento para apoyar la industrialización del país sudamericano.

Una nueva administración Radical se inauguró en 1922 con Marcelo de Alvear como Presidente. Su administración, se caracterizó por el apoyo a las medidas de paternalismo económico y social adoptada por su antecesor. Sin embargo, el surgimiento de fricciones dentro de la UCR, dieron paso a la creación de una fracción liderada por Vicente Gallo, denominada Antipersonalista Unión Cívica Radical.

A pesar de su edad, Yrigóyen mantuvo una vigencia política apoyada por los sectores populares. La UCR Yrigoyenista buscó el apoyo de la clase media, promoviendo la industrialización y la defensa de los recursos naturales del país. Para ello adoptó un nacionalismo económico y decretaría la nacionalización de los recursos petroleros del país. Como resultado Yrigóyen logró acceder una vez más a la presidencia en 1928.

Sin embargo la segunda administración de Yrigóyen observó el acrecentamiento de la corrupción y el abuso del poder. Su estrategia de abanderar el anticomunismo, le valió el apoyo de los grupos económicos más importantes y de los militares. La depresión mundial de 1929 rompió de nueva cuenta el frágil modelo de la economía dependiente de las exportaciones y la imposibilidad de continuar su política económica de tutelaje. Esta coyuntura externa negativa, propició un nuevo período de estancamiento económico que acabó con los intentos de establecer una democracia popular pluralista, dentro de una estructura caracterizada por el elitismo y el privilegio.

### 1.1.15 Caída del Yrigoyenismo

Yrigóyen enfrentó el descontento de la población que demandaba su renuncia, la cual se verificó en 1930. Su sucesor el Vicepresidente Enrique Martínez, a su vez, fue depuesto por los militares encabezados por el General José Uriburu, nacionalista de derecha, quien impuso el estado de sitio y la suspensión de la constitución liberal establecida en 1853. Este levantamiento militar, quebró por primera vez desde 1861 el endeble orden constitucional y puso término a una continuación de gobiernos radicales. Entrarían en la escena política los militares, quienes habían observado una profesionalización de sus cuadros iniciada a principios de siglo.

### 1.1.16 El nacionalismo de José F. Uriburu y la ascensión de Agustín P. Justo

Uriburu marca una etapa de ultranacionalismo de la vida política argentina y la sustitución de un régimen dominado por la burguesía para restablecer al conservadurismo e introducir la corporativización del Estado como los observados en Europa. No obstante, Uriburu debió enfrentar sectores militares que se oponían a su autoritarismo. Durante su estancia en el poder Uriburu incrementó el presupuesto militar en forma considerable.

La oposición de sectores militares aunado al empeoramiento de la salud de Uriburu, permitió el ascenso de su principal opositor dentro de las fuerzas armadas, el General Agustín P. Justo, quien representaba los intereses de los conservadores y la restauración del antiguo orden económico. Su ascensión a la presidencia estuvo marcada por el fraude electoral y la abstención del Radicalismo a participar en dicho proceso.

Justo asumió el poder en 1931 apoyado por una coalición de grupos conservadores quienes dominaron la escena política de 1931 a 1943. La Presidencia de Justo (1932-1938) estuvo marcada por la corrupción, el restablecimiento de la economía agroexportadora, el fraude electoral y la promoción en condiciones favorables de la inversión extranjera. Para enfrentar la crisis económica, adoptó medidas para proteger los intereses de los sectores comerciales.

En resumen, el derrocamiento a Yrigóyen por las fuerzas armadas estuvo guiado por la idea de los militares de aplicar a la sociedad argentina medidas de austeridad y control por medio del autoritarismo, donde los esfuerzos corporativos de Uriburu serían frustrados en 1930. El Presidente Justo y sus sucesores, abrieron paso a un período de tendencia conservadora que no fue en modo alguno democrático, por la manipulación de los procesos electorales, el fraude, la corrupción y la represión a los opositores. Este período se ha denominado la "década infame" de la Argentina.

La estrategia del radicalismo en esta etapa se caracteriza por su abstención a participar en procesos electorales. Dicha estrategia se combinó con el creciente escepticismo de los militares respecto a la capacidad de Justo para gobernar en esos

momentos de difícil situación económica. Sin embargo, a pesar de su estilo autoritario de gobierno, Justo logró reorientar la economía argentina con la diversificación de los mercados y la promoción del establecimiento de la política de sustitución de importaciones. Su aplicación, posibilitó una nueva etapa de desarrollo de la industria argentina, no directamente dependiente del sector exportador.

En 1938 Justo es sucedido por Roberto M. Ortiz, civil hijo de inmigrantes, quien vio truncado su mandato por denuncias de corrupción en su contra. Su sucesor el Vicepresidente Ramón Castillo, coincidió con importantes sucesos a nivel mundial que cambiaron el balance de poder mundial. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, motivó de nueva cuenta la declaración de neutralidad. Argentina mantuvo esta neutralidad hasta muy avanzado el nuevo conflicto mundial, a pesar de las presiones norteamericanas para que se uniera con los aliados.

La nueva guerra mundial puso de nueva cuenta en crisis al sistema conservador en donde, además, las fuerzas armadas surgen con una mayor presencia en la vida política Argentina. La década anterior como se ha señalado observó diversos factores como gobiernos represivos, intervenciones militares, depresión económica y la preeminencia de los sectores conservadores.

#### 1.1.17 La profesionalización de las Fuerzas Armadas

Esta situación cambió radicalmente con la emergencia de unas fuerzas armadas profesionalizadas que se convirtieron en un nacionalismo militar de oposición. En 1943 un grupo de oficiales al mando del General Arturo J. Rawson, depusieron al Presidente Castillo, quebrando los principales intereses económicos de los conservadores beneficiados por la política de Castillo.

El golpe de Estado militar en contra del gobierno conservador, fue encabezado por un grupo de jóvenes coroneles agrupados en una organización militar nacionalista denominada Grupo Obra de Unificación (GOU), dentro del cual se encontraba el entonces coronel Juan Domingo Perón.

Este Grupo tenía una fuerte influencia de las ideas militares de los italianos y alemanes y veían la necesidad de restaurar la función de organización militar. Este cambio, transfirió el poder de la clase conservadora terrateniente a la nueva burocracia militar. Esta fue la primera vez en la historia argentina que los militares se incrustaban definitivamente en todos los ámbitos de la vida política.

Rawson suspendió la Constitución y su proclamación como Presidente en junio de 1943. Asimismo, en el interior de las fuerzas armadas se inicia una lucha de poder. Muestra de ello es la renuncia forzada de Rawson sólo días después. Entre 1943 y 1944, tres ministros de guerra habían sido nombrados presidentes, siendo con el General Edelmiro Farrell quien designara a Juan Domingo Perón Sosa como su Ministro de Guerra y Secretario del Trabajo y Previsión Social.

### 1.1.18 Partidos Políticos en Argentina

El surgimiento de tendencias ideológicas en Argentina a finales del siglo XIX, fue en gran medida el resultado de la inmigración de europeos a ese país, quienes además de cumplir una tarea específica de poblamiento, trajeron consigo la experiencia de la organización, así como el reforzamiento de las ideas respecto al socialismo, el anarquismo, el sindicalismo y el comunismo. Estas nuevas ideologías, motivaron posteriormente las expresiones de descontento de la clase trabajadora mediante huelgas y actos de violencia.

El surgimiento de las organizaciones políticas de base popular, sería el resultado de la oposición de las clases bajas al tradicional conservadurismo de la clase agroexportadora. Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1940, el Partido Unión Cívica Radical, y en menor medida el Partido Socialista de los Trabajadores, constituyeron, junto con la influencia de los conservadores, las fuerzas políticas de más importancia en el país.

A lo largo de su presencia en la escena política argentina, estas fuerzas políticas - incluido el Partido Peronista a partir de 1946- se han caracterizado por sus continuas divisiones y enfrentamientos. El personalismo dentro de su estructura organizativa, ha jugado un papel de primer orden. Como ejemplo, en los años de proscripción del peronismo, el radicalismo surgiría como una alternativa política de los grupos conservadores, incluidos los militares. No obstante, el Radicalismo tampoco estuvo exento de divisionismos en sus filas, con la creación de diversas facciones antagónicas que a partir de 1972 -y acentuado con el Golpe de Estado militar de 1974- provocaría un ostracismo de su actividad política, evidenciando los personalismos y faccionalismos que han caracterizado la existencia de los partidos políticos argentinos.

En este sentido, la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, iniciaría la desarticulación gradual de un peronismo profundamente dividido, el cual se iniciaría desde el mismo retorno de Perón al poder en 1973. Después de la muerte del caudillo, el movimiento que él formó, se tornó incapaz de llenar el vacío simbólico y político creado por el dirigente. La constante permanencia de la influencia de las ideas peronistas en la vida política argentina, hizo incompatible a la clase obrera con cualquier régimen que no satisficiera en el corto plazo sus necesidades materiales y aspiraciones.

#### a) Unión Cívica Radical

Fundada en 1890 por Hipólito Yrigóyen y Leandro N. Alem, esta organización agrupó a disidentes católicos, oficiales militares y trabajadores. Desde sus orígenes abanderó un programa político en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de las clases bajas, la igualdad entre el capital y el trabajo; bajo un régimen federal y nacionalista.

Sin embargo, las diferentes percepciones políticas de sus líderes, dieron paso a la división del radicalismo en diversas tendencias, entre la que se cuenta la formación del

denominado Partido Intransigente. El radicalismo aceleró la formación de una corriente progresista en Argentina, fuertemente influenciada por el positivismo francés de esa época. Esta se profundizó a partir de 1916 y hasta 1930, donde la UCR se convirtió en la agrupación política más importante del país. Bajo el lema positivista de "civilización y progreso", la nueva clase media surgió como el principal apoyo en su tarea de modernización de la Argentina.

En 1922, ante el personalismo impuesto por el gobierno en turno en la conducción política del país, motivó una nueva división de los radicales. Surgió así el Partido Unión Cívica Radical Antipersonalista y la Unión Cívica Radical Personalista.

Estos divisionismos, se tradujeron en un desgaste político de las facciones radicales, profundizadas a partir de 1930 con el golpe militar de ese año. A partir de esta etapa, el radicalismo cayó en una inmovilidad producto del surgimiento de los militares como fuerza política (que trató de eliminar la influencia de los radicales) y del peronismo. Es hasta 1958 la UCRI logró recuperar espacio político con la elección de su candidato a la presidencia, Arturo Frondizi, aunque éste se vio presionado durante su gestión por las Fuerzas Armadas la cual, posteriormente, significó su remoción del cargo por parte de éstas en febrero de 1962. Cabe señalar que en 1965, Frondizi, después de la separación del ala izquierdista de la UCRI, fundó el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo, de carácter progresista, que postula la nacionalización de las industrias, la reforma agraria, una política exterior independiente y la reafirmación de la democratización de la cultura y el laicismo.

Los sucesivos regímenes que gobernaron la Argentina a partir de ese año, tuvieron como característica la intervención tutelar -en mayor o menor medida- del ejército. Es en las elecciones generales de 1983, cuando el radicalismo, después de una etapa de proscripción de los partidos políticos, logró recuperar un amplio espacio de acción en la política argentina con el triunfo de su candidato a la presidencia.

Actualmente, la UCR sigue manteniendo su carácter de segunda fuerza política del país -después de haber perdido las elecciones generales de mayo de 1989-. Sus lineamientos continúan girando alrededor de una ideología liberal defensora de la libre empresa y de la justa y equitativa distribución de la riqueza, fortalecimiento de la autonomía provincial como condición para crear un proceso dinámico de crecimiento conjunto. Respecto de la política exterior, apoya la cooperación entre las naciones, los esfuerzos de integración latinoamericana y su abstención a participar con bloques internacionales que generen compromisos para con éstos. En general, a la UCR se le considera un Partido de masas de ideología centroliberal de carácter socialdemócrata.

#### b) Partido Socialista de los Trabajadores

Fue fundado en 1896 con el nombre de Partido Socialista por Juan B. Justo, como una organización política representante del proletariado argentino. En esa etapa su actitud se centraba en la crítica a los radicales y conservadores, a los que consideraba como los

culpables de la situación social y económica de las clases bajas. En principio, estuvo formado por obreros anarquistas, marxistas, clase media progresista, entre otros sectores. Sus objetivos principales se dirigen a la lucha por los intereses legítimos de los trabajadores, nacionalización de los medios de producción, prohibición de trabajo a menores de edad, salario igual para hombres y mujeres, difusión de la ideología marxista en la clase obrera, etc.

Durante sus primeros años, la identificación de los obreros con las ideas socialistas fue un motor importante para la generación de las expresiones organizadas de protesta de éstos por medio de huelgas y paros. Esto permitió lograr mejores salarios y condiciones generales de trabajo más favorables.

Sin embargo, el extremismo político de algunas agrupaciones anarco-sindicalistas y marxistas pertenecientes al Partido Socialista que no comulgaron con el carácter conciliatorio de respeto al régimen democrático, motivó la división al interior de sus filas. De esta forma, la facción marxista se separó del Partido en 1918 para crear el Partido Comunista de Argentina, así como la facción anarco-sindicalista que se retiró para centrar su acción dentro de los sindicatos que abrazaban sus ideas.

A partir de ese momento, el Partido Socialista y Comunista fueron perdiendo representatividad. Esta situación favoreció posteriormente al Partido Peronista, al allegarse el apoyo de la clase obrera; base de apoyo del PS.

### c) Partido Justicialista

Creado oficialmente en 1947 con el nombre de Partido Justicialista, tuvo sus antecedentes en el Partido Laborista. Por medio de éste su fundador, Juan Domingo Perón, lo tomó como base para agrupar a disidentes radicales integrantes de la Junta Renovadora que incluía en sus filas a dirigentes sindicales de tendencia socialista y comunista y otras expresiones de izquierda que se negaron a incorporarse al frente Unión Centro Democrática -la cual se organizó para contrarrestar la candidatura de Perón en 1946-, Iglesia católica, además del apoyo que gozaba de amplios sectores del ejército. Después de su triunfo electoral de 1946 como candidato del Partido Único de la Revolución que agrupaba a las mencionadas fuerzas sociales y políticas, Perón lo rebautizó como Partido Peronista.

El término "justicialista" se deriva de lo que se denomina las "Tres banderas del justicialismo": soberanía política, independencia económica y justicia social. Esta organización política fue estructurada y organizada entonces en forma similar al de los partidos Nacional Socialista Alemán y Fascista italiano. La ideología peronista institucionalizada en el Partido Justicialista, se convirtió en un partido de masas populares urbanas y rurales, el cual tuvo su base de apoyo en la clase trabajadora agrupada en sindicatos de su filiación.



Con base en la justicia social como pilar de su movimiento, el peronismo tradicional postula la intervención del Estado en la economía sin modificar el régimen de propiedad privada de los medios de producción, con el compromiso de los empresarios de otorgar mejores salarios y prestaciones a los trabajadores. Por su parte, éste se compromete a otorgar servicios a los trabajadores en condiciones favorables, en lo que podría denominarse la formación de un Estado tutelar.

En 1962 el justicialismo, bajo el nombre de Partido Unión Popular adquirió nueva fuerza al ganar en elecciones nacionales y provinciales diversas diputaciones y gubernaturas. Sin embargo, estas elecciones de marzo de ese año fueron anuladas por los militares, además de la prohibición de cualquier agrupación política de tendencia peronista a participar en posteriores procesos electorales.

En 1973 las distintas corrientes peronistas se agruparon para crear el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), para participar en las elecciones generales de marzo de 1973, que preparó el camino para el retorno de Perón al poder, y en consecuencia del justicialismo después de 18 años de virtual proscripción.

Actualmente, el PJ mantiene una plataforma política que promueve la formación de un gobierno republicano y demócrata, que en caso de lograr el poder sus esfuerzos de dirigirán a la creación de un Estado agroexportador con el impulso de las empresas agrícolas medianas y pequeñas.

Asimismo propugna por el fortalecimiento de la figura presidencial, respaldado sin condiciones por las Fuerzas Armadas; la planificación de una economía dirigida a lograr el bien común y la justicia; una mayor participación de la mujer en la vida política nacional, nacionalismo económico moderado y en política exterior la no dependencia a las decisiones de los centros de poder mundial.

#### d) Federación Demócrata-Cristiana

Fue fundado en 1955 como resultado de los movimientos católicos observados en los países de América Latina. La base de su apoyo proviene de las provincias ganaderas y agrícolas del país, ante la mínima popularidad que mantiene sobre los centros urbanos y las provincias industriales.

Su política partidista se centra en el repudio a toda forma de liberalismo y totalitarismo; apoyando la moralización de la administración pública y privada, libertad política y jurídica estable así como la reforma económica que beneficie a las mayorías.

### e) Partidos minoritarios

Existen además otros partidos de escasa representatividad, cuya estrategia política se ha basado fundamentalmente en la formación de alianzas con los partidos mayoritarios - como el radical y justicialista- como forma para lograr una presencia en el Congreso. Entre éstos se cuentan la Unión de Centro Democrático de derecha, creado en 1980 como una respuesta a los movimientos populistas surgidos en esa etapa; Partido Intransigente de izquierda; Partido Obrero Comunista-Marxista Leninista; Partido Federal de derecha, entre otros.

## 1.2 Aspectos económicos

En las primeras décadas del siglo XX, la evolución de la economía argentina mantuvo características que no difieren sustancialmente del proceso económico observado en los primeros años posteriores a su independencia. A lo largo de su historia, la economía argentina basó su desarrollo económico en la explotación agrícola y ganadera.

Esta estructura económica, no obstante, en un momento determinado se volvió obsoleta ante los cambios internos y externos que se escenificaron a partir de la década de 1950. Argentina se ubicó en una posición económica de superioridad respecto de otros países latinoamericanos, pero igualmente mantuvo un carácter de economía subindustrializada.

El retroceso económico argentino, estuvo motivado por diversos factores. La inestabilidad política y el clima de enfrentamiento al interior del país entre las diversas facciones que luchaban por la toma del poder como forma de preservar y ampliar sus intereses, condujeron a la Argentina a la total desorganización de la estructura nacional. Las estrategias económicas de los diversos gobiernos civiles o militares, carecieron en repetidas ocasiones de continuidad en cuanto a la aplicación de las medidas que llevaran al país a la estabilidad económica.

El modelo de sustitución de importaciones adoptado por la mayoría de estos gobiernos, crearon una economía cerrada cuyo principal motor de desarrollo industrializador descansó en la expansión del gasto público.

Las crecientes obligaciones contraídas por un Estado benefactor y proteccionista, propiciaron la incompetitividad de la industria argentina. Los gobiernos que adoptaron la apertura económica, sólo ocasionaron la quiebra de la incompetente estructura industrial. Para la década de los setentas, era evidente que la economía argentina requería de una reformulación radical en su estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, ésta nunca llegó a plantearse.

El país requería una estrategia de desarrollo de largo plazo, en la que debía incluirse la integración gradual de la argentina a la economía internacional, una reformulación del papel del Estado en la economía y llevar a cabo una fuerte reducción del gasto público. Si bien en la actualidad Argentina ha observado importantes avances en su desarrollo tecnológico y nuclear, este debió sostenerse por medio de la expansión significativa del gasto público y del endeudamiento externo como formas de financiamiento.

### 1.2.1 La etapa colonial

Durante el período colonial y la etapa que abarca la primera mitad del siglo XIX, el territorio que ocupa actualmente la Argentina en términos generales registró un limitado desarrollo económico y un bajo nivel demográfico. Este papel secundario se explica, en gran medida, por su posición geográfica alejada de los grandes centros políticos y económicos establecidos en el Nuevo Mundo por los españoles. A lo anterior, se sumó la ausencia de mano de obra indígena suficiente.

El primer intento fallido de los españoles para establecerse en lo que hoy es Buenos Aires se da en 1536, por la existencia de tribus hostiles. El descubrimiento de yacimientos minerales, principalmente plata en lo que se llamó el Cerro del Potosí en la región que ocupa actualmente Paraguay, Argentina y Bolivia, cambió radicalmente la economía de esa región. Con la explotación efectiva de este yacimiento que los españoles bautizaran como la Villa Imperial del Potosí, España logró concretar sus objetivos económicos en la América del Sur, como lo había logrado en lo que hoy es Perú y México.

La creciente incapacidad económica de la corona española para afrontar los gastos que significaban las nuevas colonizaciones, propició el establecimiento de una política de "Capitulaciones" <sup>(26)</sup> y del régimen de la encomienda. <sup>(27)</sup>

Como en la mayor parte de las colonias americanas, la llegada de los españoles a territorio argentino propició la merma de la población indígena.

La corona española permitió la inmigración de extranjeros a América estableciéndose principalmente alemanes e italianos, además de la compra-venta de esclavos negros. Esta afluencia fue controlada por un régimen de licencias individuales para el comercio de esclavos negros, permitida hasta 1532 <sup>(28)</sup>. Esta inmigración, al tiempo que compensó la disminución de la población nativa, inició el proceso de europeización de los siguientes generaciones de la Argentina.

Al inicio de la colonización del territorio argentino, los españoles ocuparon un limitado espacio geográfico de éste. Con su establecimiento definitivo fundaron ciudades, pero con escaso contacto entre sí, por lo que cada región desarrolló actividades económicas diferenciadas. <sup>(29)</sup> Junto con el adoctrinamiento de los indios, los españoles introdujeron la siembra de trigo, la adaptación de la primitiva industria textil basada en el cultivo del algodón y la mano de obra indígena se utilizó para la construcción y otras actividades.

En contraste, en la región del litoral, los colonizadores debieron enfrentar la hostilidad de tribus indígenas nómadas, propiciando la importación de esclavos para satisfacer las necesidades de mano de obra. La agricultura observó un desarrollo limitado y la ganadería inicia su período de expansión al proveer de carne y cuero destinado a la exportación.

En efecto, durante este período la fundación y colonización de poblados en el Noroeste y el litoral fueron acompañados por una agricultura de consumo junto con la formación de la ganadería caballar y vacuna. Esta expansión gradual de la ganadería y las caballadas, se constituyeron como la base de riqueza argentina de los próximos siglos.

La explotación ganadera se llevó a cabo con la captura de ganado vacuno libre, aprovechándose además de la carne, derivados como el cuero, que pronto se convirtió en el principal producto de exportación. La creciente demanda de cuero por los mercados europeos, motivó la instalación de saladeros, completando con la cría de caballos y mulas la ganadería colonial.

La explotación de las minas del Potosí y su posición geográfica alentaron el comercio con la región del Río de la Plata, al aventajar en distancia y facilidad de transporte a las minas del Alto Perú. Así, al margen de las disposiciones establecidas por la corona que obligaban a la utilización de la ruta del Perú, el comercio se realizó por Buenos Aires o Asunción con destino al Brasil o Europa, así como la importación de otros productos.<sup>(30)</sup> Este tráfico otorgó a Buenos Aires su primer auge como centro de comercio a principios del siglo XVII, el cual permitió la vinculación del litoral con las regiones del Noroeste y centro pero permaneciendo grandes espacios geográficos despoblados.

La plata jugó un papel importante en el desarrollo del Noroeste y litoral argentinos durante la colonia. Esta se utilizó como moneda para el intercambio de productos. La ocupación efectiva del territorio argentino fue un proceso gradual, limitada por la inmigración europea y la importación de esclavos y la organización de las diversas gobernaciones virreinales que consolidaron el dominio colonial.

Este equilibrio económico se modificó en favor de Buenos Aires, que por su escasa población india, obligó a una mayor inmigración europea. El aumento de la población blanca y -en menor grado- mestiza en Buenos Aires, permitió un desarrollo más acelerado de la economía basada en la exportación de cueros y productos ganaderos. En el interior, la agricultura y la artesanía se constituyeron como la base de la economía.

Sin embargo, como parte del imperio español, el comercio argentino sufría las restricciones impuestas en ese sector por la corona, y limitada aún más por el carácter monopolista de la política comercial de la metrópoli.

Con la supremacía de la dinastía de los Borbones, estas restricciones comerciales fueron reducidas o eliminadas. El establecimiento del Virreinato del Río de la Plata en 1777, permitió la liberalización del comercio regional que propició el inicio de la exportación de carnes saladas argentinas a otras colonias españolas en América. A lo anterior se sumó la habilitación del puerto de Buenos Aires para la exportación de metales preciosos, propiciando una nueva expansión comercial y de la ganadería con la formación de estancias y la instalación de saladeros.

### 1.2.2 La independencia argentina

La ruptura del tutelaje colonial respecto de España, en 1810 y consolidado en 1816, además de marcar el inicio de un periodo de independencia política y comercial, estableció el reto e conformar una nación con intereses encontrados entre las regiones del Noroeste y litoral argentinos. Los objetivos iniciales de la política económica en este periodo de emancipación y consolidación de la soberanía, se encaminaron a desarrollar el potencial económico mediante la integración económica con otros países americanos y europeos.

Estos objetivos, no obstante, estuvieron obstaculizados por las pugnas y guerras internas que igualmente caracterizan este periodo y que imposibilitaron la concesión de dichos objetivos. Sin embargo, estos primeros intentos sentaron precedentes en materia de organización económica de la Argentina.

El inicio de la emancipación dio inicio a las diferencias entre Buenos Aires y las provincias respecto a la política a adoptar en materia de importaciones y exportaciones. La primera proponía la libre importación y las segundas la limitación a productos que se produjeran en el país. La posición contraria de Buenos Aires, no impidió la concreción del Pacto Federal en con la consecuente exclusión de Buenos Aires.<sup>(31)</sup>

En efecto, el desarrollo económico se vio limitado por las guerras internas y externas, y la limitada captación de recursos por parte de los gobiernos revolucionarios. Esta situación mantuvo vigente la infraestructura colonial en este periodo posterior a la independencia.

Las sucesivas autoridades adoptaron como estrategia económica la liberalización del comercio internacional como la vía para impulsar el desarrollo interno, adoptando acciones y medidas concretas al efecto. Esto permitió un mayor apoyo a las actividades ganaderas y la instalación de mayor número de saladeros que estimularon un desarrollo sostenido de estas actividades, pero en detrimento de otros sectores que no lograron desarrollarse al mismo ritmo. Actividades semiindustriales como la artesanía, debían enfrentar la competencia europea lo cual generaba conflictos internos entre las regiones del litoral y el interior.

En contraste, la ganadería bovina tuvo un mayor impulso, conformándose como la principal transformación económica del periodo posterior a la independencia. Esta actividad no estaría exenta de obstáculos en su desarrollo, padeciendo crisis provocadas por fenómenos naturales o humanos. No obstante, ello no impidió que esta actividad creciera considerablemente en las siguientes décadas. Esta se convirtió en la principal actividad industrial basada en los saladeros, que datan desde 1810, la cual gozó del apoyo oficial.

En esta época las incipientes organizaciones de los trabajadores se caracterizaban por ser corporaciones cerradas divididas por oficios, con un marcado carácter de monopolio en la oferta y la fijación de precios de los servicios prestados. Las autoridades conferían a

los maestros artesanos la subordinación de sus peones con la amenaza de cerrar sus establecimientos, a efecto de evitar la vagancia que era castigada. Esta relación se vio modificada por la libertad de los esclavos que llegan a territorio argentino, aunque se mantenía la esclavitud de los ya arraigados.<sup>(32)</sup>

La expansión de la cría de ganado propició un aumento de la demanda de mano de obra rural y calificada lo cual obstaculizó la expansión de las actividades agrícolas. Esta creciente dependencia económica de la actividad ganadera, trajo consecuencias negativas al desarrollo argentino en esa materia. Ejemplo de ello fue la guerra contra el Brasil y la desintegración de la República Unitaria en 1827. Esta situación desequilibró el auge económico argentino, desordenando las finanzas públicas, aunadas a una crisis ganadera por fenómenos naturales negativos.

Superada la crisis, Buenos Aires logró concertar tratados comerciales con otros países, siendo el más importante el firmado con Gran Bretaña en 1825. Esta política de intercambio comercial, se convirtió en el punto de partida de la política comercial multilateral de la Argentina.

Por lo que respecta a la posesión de la tierra, con la emancipación las autoridades de Buenos Aires, se eliminaron las restricciones a la inmigración europea. Esta se aceleró con las invasiones inglesas de 1806 y 1807, aunque la permanencia de tribus hostiles era un importante freno a la inmigración. Sin embargo esta expansión no modificó en forma significativa las fronteras impuestas en la colonia. Las regiones del noroeste continuaron siendo las regiones más desarrolladas, pero el predominio político y demográfico seguía recayendo en Buenos Aires.

La eliminación de los privilegios coloniales en materia de tierras, permitió el acceso a toda la población a la posesión de tierras públicas, aunque esta política se caracterizó por el favoritismo y las donaciones. Esta política no obstante, se convirtió en el instrumento económico más importante para afianzar la expansión territorial, además de adoptarse medidas, aunque infructuosas, contra la formación de latifundios.

Asimismo, dicha política se enfrentó a la inseguridad propiciada por los indios, generando una falta de mano de obra. Al mismo tiempo, las autoridades estaban imposibilitadas a garantizar la propiedad de la tierra, por lo que en adelante prevaleció la donación al estar presente un fin defensivo.

En 1822 la necesidad de una mayor recaudación para enfrentar los gastos gubernamentales, motivaron la introducción de una ley que derogaba la enajenación gratuita de la tierra pública. Por medio de esta ley, las autoridades de Buenos Aires instrumentaron la enfiteusis (especie de renta de la tierra) así como sucesivos decretos y disposiciones vincularon la tierra como ente fiscal, garante a la deuda pública.

En 1826 una ley definió la enfiteusis prohibiendo la enajenación de tierras públicas que forman parte de garantías de la deuda oficial.<sup>(33)</sup> Estas disposiciones afectaron a la gente que no regularizó la tenencia de la tierra obtenida a través de

donaciones, por lo que el Estado las incautó para ofrecerlas en enfiteusis. Sin embargo, la enfiteusis provocó la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, además de que la renta o canon garante de la deuda oficial generalmente no era cubierto.

Al respecto, la Asamblea de 1813 autorizó al Ejecutivo la enajenación de tierras públicas. Esta política se basó en la condición de que el Estado no debía retenerlas para su posesión, considerando su venta como un nuevo recurso de captación fiscal.

En este período, la incipiente nación argentina inició esfuerzos por organizar la hacienda pública con el establecimiento de impuestos, la contratación de préstamos con el exterior, la introducción de reformas fiscales y un régimen monetario y bancario. De esta época se sientan los antecedentes del primer banco argentino encargado de emitir moneda nacional.

Sin embargo, los avances observados en materia económica basada en la expansión de la ganadería contrastaron con la agitada vida política. A pesar de que esta expansión económica posibilitó la formación de una sociedad relativamente más igualitaria en comparación con la de la colonia, ésta también estuvo marcada por una creciente militarización debido en gran parte a las necesidades impuestas por las guerras revolucionarias.

La culminación de las guerras civiles fue el resultado de la victoria militar de los federalistas sobre los unitarios, representados por Juan Manuel Rosas (terrateniente de Buenos Aires). Este asumió el gobierno convirtiéndose el primer caudillo que ostentó una autoridad con relativo alcance nacional, y quien gobernó al país de 1835-1852, ya que durante sus mandatos los caudillos provinciales gozaron de autonomía.

Rosas adoptó una política de restauración en lo político y económico para transformar al país en una nación de raigambre europea, poblada y expansiva. Este mantuvo una política económica basada en el predominio de la actividad ganadera y terrateniente de Buenos Aires. En su primer mandato, Rosas estabilizó las finanzas públicas y la moneda, lo que permitió la recuperación de la economía ganadera. Además, logró la conquista de la Pampa propiciando una expansión de la tierra destinado al cultivo y para el pastoreo.

La ganadería vacuna se convirtió en la actividad que logró un mayor impulso, tanto para el abasto como para el consumo, pero descuidándose otras actividades. El ganado vacuno gradualmente fue desplazado por el ganado ovino en esta época, así como la cría de otras razas de mayor calidad. En contraste, la agricultura mantuvo un desarrollo limitado conformándose como de autoconsumo.

De esta forma los saladeros se convirtieron en la principal industria, incentivada oficialmente. En efecto, la política ganadera se orientó al abastecimiento de los saladeros y las fábricas de transformación de los derivados del ganado destinados a la exportación. Este avance no se observó en otras industrias tanto en Buenos Aires como el interior, las cuales mantuvieron un carácter artesanal.



Asimismo, en 1835 Rosas modificó la política comercial establecida en 1831, al permitir la importación de productos producidos en el país, principalmente de origen ganadero. Esta política permitió la liberalización del comercio entre Buenos Aires y las Provincias, además de fomentar la agricultura. Buenos Aires mantendría una ventaja por ser el puerto de entrada y salida, la cual no obstante se vio limitada por los bloqueos franceses. Estos bloqueos restringieron la actividad económica en todos sus campos, propiciando la modificación de las políticas aduaneras de las provincias en virtud del carácter confederado de la Argentina de entonces.<sup>(34)</sup>

La promulgación de la Constitución Nacional en 1853<sup>(35)</sup> surge como el instrumento que modifica la idea de nación, al tiempo que define el rumbo a seguir en materia económica. Bajo los lineamientos de la Carta Magna el país se organizó como Estado Federal capaz de contraer obligaciones internacionales, promover la inmigración etc. En el aspecto económico la Constitución adoptó como objetivo primordial la promoción del bienestar general de todos los nacionales por medio del estímulo del desarrollo en todos los campos. Asimismo se enunciaron las libertades individuales como nacionales argentinos, además de prohibirse la esclavitud, y la encomienda al Gobierno Federal de desarrollar un programa económico bajo la forma representativa, republicana y federal.

Además, delegó al Congreso la facultad de reglamentar un Banco Nacional en la Capital y sus sucursales en la provincia. Este tendría la facultad de emitir moneda nacional con valor fijo y el de las extranjeras, acuñación de moneda, reservándose al gobierno federal el ejercicio de la política monetaria. Esta incluyó el fomento de la inmigración con iguales derechos, especialmente la europea, y en materia de política económica internacional se incluyeron principios regidos por el afianzamiento sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras de conformidad con los intereses de la nación.

La formación del mercado mundial en este período bajo el liderazgo británico como consecuencia de la Revolución Industrial, junto con la nueva situación política en Argentina, propiciaron que la región cobrara relevancia para Europa. La región pampeana abarca una de la áreas más fértiles y productivas del mundo, por lo que la expansión de la demanda de alimentos y materias primas, combinada con el desarrollo tecnológico y de los transportes (ferrocarril y navegación) propició la apertura del mercado europeo a los productos primarios argentinos. Ello permitió, además, la efectiva vinculación de la región de las Pampas con el litoral. Esta coyuntura, pronto convirtió a la Argentina en uno de los principales países proveedores de alimentos y materias primas para los países europeos.

El amplio espacio despoblado fue cubierto con la promoción de la inmigración básicamente europea para la colonización agrícola. La lucha con los indios que se prolonga por siglos, concluyó con la victoria de las autoridades federales entre 1874-1889 y la colonización efectiva de la Patagonia marcó la conquista del territorio que ocupa actualmente Argentina. En Buenos Aires se eliminó el régimen de la enfiteusis, las donaciones y la restitución de tierras a los adversarios de regímenes anteriores.

En materia de transporte la utilización de carruajes y diligencias limitaban el desarrollo económico, por lo que la introducción del ferrocarril a mediados del siglo XIX motivó un desarrollo creciente al constituirse durante varias décadas en el medio de transporte que más contribuyó al desarrollo económico del país y a su verdadera unificación. Asimismo, se estimuló la ampliación de las líneas marítimas y fluviales y la construcción de puertos.

La expansión de la ganadería creció sustancialmente en forma sostenida en este período por la demanda creciente de productos ovinos por parte de Europa y de Estados Unidos. Esta demanda abrió paso a la modernización de los criaderos de ganado, impulsada con la incorporación de capitales europeos en la actividad. Para 1880 las lanas aportaban casi la mitad de las exportaciones totales del país, superando a otros derivados.

En contraste y a pesar de los estímulos oficiales a la agricultura y la industria, éstas no lograron un repunte sustancial. Esta situación generó conflictos entre el gobierno y los agricultores e industriales que demandaban mayores estímulos y apoyos. Por tanto la industria mantuvo su carácter artesanal, siendo los saladeros la única industria relativamente más desarrollada pero expuesta a fenómenos económicos negativos externos y condiciones naturales negativas al interior. La introducción de frigoríficos para conservar la carne permitió su expansión, aunque a la par se desarrollaron otras industrias primarias.

Las finanzas públicas mantuvieron después de tres décadas las innovaciones impuestos por Rosas. Al consolidarse la unión nacional, la aduana de Buenos Aires pasó al control del gobierno nacional. La guerra contra el Paraguay y las crecientes necesidades de inversión en servicios públicos alteraron el precario equilibrio de las finanzas públicas. Esto obligó al gobierno a recurrir a la emisión de moneda para financiar déficits y la firma de préstamos con el exterior. Estos últimos se destinaron a promover la creación de la infraestructura productiva y de servicios y en ocasiones para hacer frente a los gastos de guerra.

El período de 1852 a 1880 es en general de expansión y desarrollo de la economía y de las actividades productivas. Estas debieron enfrentar periodos de crisis económicas, en ocasiones provocadas por saturación del comercio mundial de lanas pero compensados con el aumento de la demanda de cuero.

La política comercial argentina se caracterizó por su liberalización al no implantarse restricciones al intercambio comercial. Esta política se completó con los tratados comerciales, así como acuerdos concertados con varios países europeos y americanos.

### 1.2.3 Consolidación de Buenos Aires y el período de unificación nacional

La consolidación de Buenos Aires al convertirse la capital de la República en 1880, pondría fin a siglos de luchas internas entre conquistadores y sus descendientes con los indios del país. Al mismo tiempo, este hecho dio inicio a una nueva etapa de crecimiento económico. Los sucesivos gobiernos mantuvieron un carácter netamente económico, al promover un crecimiento sostenido y rápido con la ocupación de toda la tierra apta y la atracción de inmigrantes europeos para poblarla. Esta inmigración provocó una crisis en 1890 tanto institucional como económica, ante la incapacidad del país para absorber a toda la masa inmigrante aunque esta situación logró superarse en pocos años.

La población en la Argentina en este período creció a un ritmo muy acelerado, pero en 1890 el apoyo oficial a la inmigración se restringió por la falta de recursos para promoverla. De esta forma, surgió la inmigración espontánea, y la inmigración golondrina (inmigrantes que llegaban y salían de su país de origen a la Argentina durante la época de cosecha).

La difusión del arrendamiento de tierras contribuyó a la radicación de inmigrantes deseosos de poseer tierra propia. Esta política, favoreció la fundación de nuevas colonias agrícolas y es esta inmigración la que repercutiría sensiblemente en la actividad económica del país y su poblamiento urbano y rural. Este crecimiento poblacional pronto generó una mayor demanda de servicios, formándose los grandes núcleos rurales y urbanos.

La infraestructura y los caminos continuaron limitados en su uso por la importancia de los ferrocarriles, siendo utilizados para trayectos de poca distancia. En lo relativo a los puertos en esta época se construyeron el Puerto Madero y Rosario, y en Buenos Aires se promovió la creación de la infraestructura de los servicios públicos por la expansión urbana.

En cuanto a la ganadería esta prosiguió su expansión y la agricultura logró desarrollarse a niveles importantes a partir de 1880 con la conquista total del territorio y el trazado de líneas definitivas. A esto se sumó el cambio favorable de la inmigración golondrina ante el arrendamiento de campos principalmente a italianos, fomentándose la producción cerealera. Esta producción pudo colocarse, de esta forma, en el mercado interno y externo a diferencia de otros países latinoamericanos que destinaban su producción al autoconsumo. Así la ganadería y ahora la agricultura surgieron como los puntales de la economía.

Asimismo, en este período se inició igualmente una política de apoyo a la industria manufacturera con la creación de numerosos establecimientos fabriles. En principio, las principales industrias estuvieron destinadas a la elaboración de alimentos y materias primas para el país. Los saladeros se transformaron en frigoríficos hacia 1882, aunque esta actividad se vio limitada por la competencia uruguaya y brasileña.

La política fiscal también aumentó, así como la demanda de servicios públicos y gastos del gobierno. En este período los servicios de electricidad, transportes y producción industrial estaban a cargo de la iniciativa privada. El presupuesto en gran parte era cubierto con recursos propios y el restante con empréstitos contratados principalmente con el exterior.

En esta etapa el Estado mantenía una presencia directa en la política económica caracterizada por la marcada dependencia del capital externo para su desarrollo. En la década de 1880 aparecieron los primeros sindicatos obreros, así como las primeras leyes en materia laboral que, con el crecimiento urbano, obligó a prestar más atención política a las cuestiones laborales y sociales.

En las crisis de las fluctuaciones económicas, la del período de 1885 a 1892 es la más seria. Después de esta crisis las autoridades argentinas apoyaron la expansión monetaria con un fuerte endeudamiento y por tanto un aumento en su servicio. Sin embargo, el aumento de la deuda combinada con una baja de los ingresos por concepto de exportaciones motivó la crisis de 1890 al suspenderse el servicio de ésta. La creciente corrupción bancaria y oficial aunada a una baja de precios de productos argentinos de exportación, provocaron esta recesión. Para enfrentarla, se adoptaron una serie de medidas correctivas al interior y el inicio de negociaciones para lograr acuerdos con los acreedores.

#### 1.2.4 El contexto internacional

La crisis de 1929 puso en evidencia la fragilidad del modelo económico agroexportador, ya que esta recesión puso fin a una etapa de auge económico. En vísperas de inicio de la Primera Guerra Mundial la inversión extranjera representaba el 50% del total del activo fijo del país ubicando a Argentina como un ejemplo clásico de estrategia de desarrollo hacia afuera, basada en la expansión de las exportaciones primarias y dependiente de capitales externos.

Asimismo, en este período se sentaron las bases económicas de la Argentina contemporánea. La estructura productiva si bien había puesto a la Argentina como uno de los países más prósperos, su carácter dependiente de la economía agroexportadora era sumamente vulnerable a las crisis económicas externas. Con base en esta prosperidad, Argentina si bien no podía considerarse un país subdesarrollado, si mantenía un carácter subindustrializado. El abastecimiento interno de manufactura se cubría básicamente con las importaciones, y la crisis de 1929 que propició la quiebra del sistema multilateral de comercio con la caída de los precios a nivel mundial, evidenciaron el carácter marcadamente dependiente de la economía argentina en un sector productivo y con un escaso nivel y capacidad de autoabastecimiento de productos manufacturados.

El punto de partida de la intervención estatal en la economía se da al estallar la primera guerra mundial. Esta intervención fue una respuesta defensiva ante el masivo retiro de los depósitos de oro por parte de bancos extranjeros y el temor de una contracción

de la base monetaria. Sin embargo, esta situación intervencionista aumentó posteriormente. Los primeros intentos hacia ese modelo se dieron al reglamentar el Estado ciertas actividades, como la limitación de la libre contratación de la vivienda, la fijación por ley de precios máximos a la carne, así como precios mínimos para el ganado. Dichos intentos aunque fallidos, sentaron precedentes para medidas posteriores.

La primera Guerra Mundial interrumpió el abastecimiento de productos manufacturados, lo cual permitió la expansión, aunque limitada, de las industrias locales que sucumbieron posteriormente ante la recuperación de las industrias europeas. Esto motivó una mayor protección aduanera a favor de la industria y la definición del Estado al establecer su presencia en el mercado del petróleo con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como empresa política, minera industrial y comercial. Esta intervención se acentuó con la recesión mundial de 1930 que afecta fuertemente al país.

El control de cambios definió la intervención del Estado en el mercado cambiario aunado a la creación de instrumentos para regular su intervención. El sistema bancario, al recuperarse de la crisis, se ejemplificó con el establecimiento del Banco Central que comienza a regular la intervención estatal sobre los bancos comerciales. La política económica logró romper su carácter pasivo, al definirsele objetivos propios. Al mismo tiempo fueron creados organismos y normas de regulación de fomento a la actividad industrial, la expansión de la infraestructura y la regulación del comercio exterior con preferencia a los países vecinos.

El estallido de la segunda guerra mundial aceleró la intervención estatal en el proceso económico para sortear obstáculos y continuar con el proceso de industrialización iniciado en 1930. En efecto, en esta década se comenzó a aplicar la estrategia económica basada en la sustitución de importaciones, la cual transformó la economía argentina durante los próximos años.

La inmigración en este período sufrió variaciones con crecimientos y decrecimientos motivadas por las dos guerras mundiales. Para 1930 la inmigración europea libre fue eliminada al pasar a regulación oficial y selectiva. La población aumentó considerablemente, siendo la urbanización la característica demográfica más relevante para estos momentos.

Esta concentración urbana motivó la intervención del Estado en los servicios públicos antes concesionados a particulares extranjeros. El Puerto Rosario al término de la concesión a particulares pasó a control estatal. Las empresas de electricidad de la capital federal obtienen nuevas concesiones lo que permitió su expansión a las provincias. El principal problema en esta expansión lo constituyó el transporte. El ferrocarril había dejado de ser rentable, por lo que el Estado le otorgó apoyo con objeto de tratar de conjugar la utilización del ferrocarril con la incorporación de nuevas formas de transporte -camiones de carga y de pasajeros-. El transporte marítimo de ultramar, tradicionalmente en manos privadas, también es causa de intervención al comprar el Estado barcos mercantes con los cuales inició la formación de una empresa estatal.

La ganadería vacuna logró expandirse ante la demanda de carnes enfriadas por parte de los frigoríficos de capital norteamericano. Sin embargo la crisis de 1922 creada por la caída de la demanda de carne, provocó la liquidación a bajo precio de la carne y en 1926 se cierra el mercado norteamericano al aplicarse un embargo sanitario y la limitación de compra de carne por parte del Reino Unido. Esto provocó la inexistencia de mercados para las carnes argentinas, las cuales se destinaron a un mercado interno en permanente crecimiento. Esta limitación provocó la intervención estatal en el mercado ganadero, al promover la concreción de tratados con los países europeos desde una posición de desventaja<sup>(36)</sup>. Por su parte, los lanares se recuperaron de su desplazamiento por parte de la ganadería vacuna, a causa del aumento de la demanda interna de la industria textil.

La agricultura también sufrió las consecuencias negativas generadas por la guerra mundial en 1940. La libertad de comercio de cereales fue limitada con la implantación del control de cambios en 1941. Asimismo, la política proteccionista de los mercados internacionales frenó la expansión del sector agrícola y la intervención estatal aunque defensiva, propició una profunda transformación de la estructura de producción agrícola.

Esta transformación productiva se desarrolló en medio de profundas crisis institucionales. El derrocamiento del Presidente Yrigóyen en 1930, evitó que el país sentara nuevas bases económicas al establecerse frecuentes cambios de criterios y medidas que perturbaban el desarrollo económico. La política de industrialización sólo estuvo centrada en la sustitución de importaciones pero sin impulsar el desarrollo de industrias de base, la producción de bienes de capital y el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. Como resultado, esta política limitó a la industria a los sectores primarios como principales fuentes de divisas.

Por su parte, el sector agropecuario quedó estancado en métodos productivos tradicionales sin suficiente atención a su desarrollo tecnológico. Así, la necesidad de precios remunerativos y estables a nivel mundial, surgieron como condicionantes básicos para pretender una expansión agropecuaria efectiva.

### 1.2.5 Intervención del Estado en la economía

En las últimas décadas el proceso económico argentino tendió a la desorganización y a periodos de crisis cada vez más profundas. El periodo de 1943 a 1989 en esta materia se caracteriza por la presencia del fenómeno de la inflación y de la hiperinflación. La historia económica argentina en algunas etapas del S-XIX padeció inflaciones, pero no de la magnitud de las que ha padecido en periodos recientes<sup>(37)</sup>.

A partir de la década de los 50's el modelo de crecimiento basado en la sustitución de importaciones comenzó a mostrar signos de agotamiento. A pesar de la adopción de medidas económicas que posibilitaron el desarrollo de la infraestructura productiva y social en diversas áreas, este progreso económico no estuvo exento de limitaciones. Este evidenció

su incapacidad de promover una estabilidad política sobre bases reales, ni de la adopción de una estrategia económica de largo plazo.

El enfrentamiento suscitado entre las nuevas fuerzas sociales resultantes del proceso de industrialización, así como por el proceso político iniciado con el peronismo, marcaron las limitaciones de dicha estrategia. Este fenómeno político, rompió el tradicional esquema ideológico nacional conservador impuesto por los grupos económicos de mayor peso y los militares, al marginarseles de toda posibilidad de legitimación dentro del orden constitucional.

En el período de 1943 a 1955 la intervención directa del Estado en la economía creó un gigantismo estatal y por ende un aumento desproporcionado en sus gastos corrientes (a partir de ese año se afianzó la ocupación efectiva del territorio argentino, donde los territorios o gobernaciones se transforman en Provincias, pasando de 14 a 22 con una consolidación de sus vínculos históricos). La imposibilidad de financiarse con recursos propios, obligó a recurrir a la emisión monetaria para atender las demandas de sus acreedores. Las obligaciones mensuales sociales de Estado generaron una urgencia de recursos que en gran medida se atendió con dicha emisión, propiciando crecientes déficits y consecuentemente una mayor inflación.

La relativa estabilidad económica que prevaleció hasta 1943 se rompió al incorporarse a la política económica objetivos sociales. Esta se manifestó en aumentos salariales masivos y la adopción de una legislación social favorable a la clase trabajadora, lo cual propició un paternalismo estatal que en términos reales deprimió la actividad productiva. A estas medidas se sumaron otras de carácter político, como la estatización de empresas y servicios públicos y la repatriación anticipada de las deudas externas colocadas a largo plazo y bajo interés. Esta política de beneficios y de nacionalizaciones duraría cinco años, la cual culmina en 1948 en una crisis de mayores proporciones al agotarse las reservas monetarias acumuladas en más de un siglo.

Con la caída del peronismo en 1955, la estructura económica tradicional de carácter agroexportador y de economía cerrada regresó a la escena. Las nuevas autoridades económicas adoptaron medidas de desnacionalizaciones, la devaluación de la moneda y la orientación de recursos al desarrollo agrícola y ganadero.

En un marco de inestabilidad política provocada por el enfrentamiento entre los diversos grupos políticos, incluidos los militares, a partir de ese período se agudizaron las contradicciones en cuanto al modelo económico a seguir. Entre 1955 y 1966, los diversos regímenes militares o civiles, aplicaron medidas económicas alternantes, dirigidas principalmente al apoyo del proceso de industrialización o del mantenimiento de la estructura agroexportadora. El apoyo a las medidas económicas, estuvo condicionado a las consecuencias que dichas medidas tendrían con relación a los intereses económicos de cada clase o grupo social.

En efecto, este largo período de inestabilidad política se trasladó al plano económico. La emergencia de fenómenos sociales y la aparición de alternativas políticas y

militares, acentuaron esta inestabilidad. La necesidad de aplicar medidas económicas recesivas, variaban en su aplicación a la situación coyuntural que había que resolver, en una u otra dirección, por el gobierno en turno. Esta alternancia en la aplicación de modelos económicos disímiles, evidenció la ausencia de conductas que tendieran a una reconciliación de los diversos grupos político-sociales, la cual posibilitara el establecimiento de una estrategia económica de largo plazo.

El mantenimiento de la estructura económica dependiente de las exportaciones primarias -productos agrícolas y ganaderos-, limitaron asimismo el proceso de industrialización. El marco internacional económico que a partir de la década de los setentas se hizo más profunda, golpeó en mayor medida a las economías dependientes de la exportación de productos primarios. En este sentido, Argentina como país subindustrializado, debió apoyar su proceso de industrialización por medio del endeudamiento externo y la emisión monetaria. La política de apertura a la inversión extranjera en sectores estratégicos, chocó en no pocas ocasiones con las tendencias nacionalistas que preveían en cualquier acuerdo con empresas trasnacionales, especialmente en materia petrolera, amenazas a la soberanía nacional.

La recuperación económica de Europa y la creación de la Comunidad Económica Europea, a la que se incorpora Gran Bretaña, significó para la Argentina la necesidad de contar con nuevos mercados. Gradualmente Estados Unidos sustituyó al país europeo como proveedor de capitales para apoyar la política argentina de industrialización, además de marcar la necesidad para la Argentina de crear mayores espacios de intercambio con los países vecinos y en general de América latina.

El clima de enfrentamiento al interior del país, se estableció entre grupos sociales que contaban con una significativa capacidad para bloquear la instrumentación de medidas económicas que tendieran a la estabilización. Este sería el caso de los sindicatos peronistas que generaron una gran capacidad para bloquear cualquier programa que previera la reducción drástica de los salarios o el fomento de la inversión privada empresas estatales. Sin embargo, estos grupos si bien mantenían esa capacidad obstruccionista, al mismo tiempo eran incapaces de imponer sus modelos propios de desarrollo.

A partir de 1966, los militares acentuaron su intervención en la orientación política y económica del país. El régimen militar instalado en el gobierno, adoptó una estrategia orientada a promover la industrialización del país. Sin embargo, para esta época la orientación económica basada en la sustitución de importaciones se vio agotado. Estos síntomas emergieron plenamente cuando el Estado asumió la responsabilidad de impulsar el crecimiento económico por medio de la expansión del gasto público.

Asimismo, la estructura de posesión de la tierra -propiedad privada y haciendas- siguió sin alterarse sustancialmente. La permanencia de grandes extensiones de tierra en manos de pequeños grupos terratenientes, paulatinamente detuvieron la producción agrícola y por ende su crecimiento. La crisis económica argentina estuvo marcada en la subexplotación de los recursos agrícolas y ganaderos, en contraste con el aumento de una población demandante.



El peronismo volvió al poder en 1973. Sin embargo, el marco económico era sustancialmente distinto. A diferencia de 1943, Argentina había pasado a ser un país deudor y altamente vulnerable respecto del exterior y la producción agrícola de exportación estaba estancada. Asimismo, el marco económico internacional mostraba una tendencia recesiva. Con la denominada crisis del petróleo, producto del aumento mundial de precios de los hidrocarburos, Argentina como país importador de petróleo, dicho aumento profundizó la crisis económica interna.

El período de 1970 a 1975, la economía volvió a una etapa populista. El crecimiento económico, no obstante, se basó en una gran expansión de los gastos del Estado, financiados con la contratación de una mayor deuda pública interna y externa. Esta estrategia se profundizó hacia 1973, lo cual se tradujo en aumento del déficit fiscal, amparados en su mayor parte en la emisión de moneda corriente. Su principal motor se centró en la absorción por parte del Estado de la masa de desempleados existentes en el país.

A pesar de las medidas económicas de corte nacionalista emprendidas por Perón en su corto tercer mandato (Ley de inversiones extranjeras, impuesto a la posesión de la tierra, nacionalización de las exportaciones de granos y carnes, promoción minera, ley de represión a la evasión fiscal, entre otras), éstas chocaron con la oposición de los grupos económicos conservadores. Los sectores afectados iniciaron una política de rebeldía a las medidas económicas propuestas por Perón. Como resultado, la recaudación de impuestos disminuyó significativamente, se creó un mercado negro y la consiguiente escasez de productos, el desafío al control de precios, etc. Este comportamiento adverso del empresariado nacional, no pocas veces asociado con empresas transnacionales, derivó en un descontrol inflacionario que propició la fuga de capitales y, en el ámbito externo, el cierre del mercado europeo a los productos argentinos y el endeudamiento externo heredado de los regímenes anteriores.

La muerte de Juan Domingo Perón conformó otro elemento en la disgregación del proceso de reconciliación intentado, sin éxito, por éste. El panorama económico tendió a empeorar a partir de 1974. El sabotaje a la política económica del peronismo continuó con mayor intensidad. A este marco se situó el enfrentamiento con la clase obrera, demandante en sus reivindicaciones salariales. La presión ejercida hacia el gobierno en materia económica por parte de los grupos económicos del país, así como del exterior, derivaron en la caída del peronismo y el establecimiento de un nuevo régimen militar en 1976.

<sup>1</sup> Los esfuerzos que los países americanos realizaron al efecto, y promovidas por Bolívar están registrados por las diferentes reuniones que se celebraron para concretar un Tratado de Unión de las Repúblicas Americanas. véase, Lastarria, José Victorino y otros; Unión y Confederación de los pueblos Hispanoamericanos. Unión de Universidades de América Latina.

<sup>2</sup> La causa de las mayor parte de las fricciones entre las naciones latinoamericanas radica en las imprecisas líneas limítrofes entre las numerosas gobernaciones, audiencias, capitanías y virreynatos a través de los cuales se administraban las colonias españolas. Kelly, Philip y Child, Jack; Geopolítica del Cono Sur y la Antártida. p-13

<sup>3</sup> El concepto de caudillismo contiene numerosos componentes y dimensiones que incluyen la "movilización" que consiste en el establecimiento de un vínculo entre el líder y sus seguidores. El caudillismo como sistema político se considera como patrimonial, carente de elementos de continuidad, sustentación política y organización social jerárquica. El caudillo actúa como "Presidente", "líder nacional", que trabaja en contra de las instituciones siendo incapaz de renunciar a su personalismo y patrimonialismo. The Praetorian Army and the Praetorian State. p-211

<sup>4</sup> Di Tella, Torcuato S.; Latin American Politics (A theoretical Framework). p-118

<sup>5</sup> Sobre las disputas limítrofes que aún subsisten en las relaciones intra latinoamericanas véase Atkins, G. Pope; América Latina en el sistema político internacional... op. cit. p-225 y ss

<sup>6</sup> *ibidem*

<sup>7</sup> La Junta Revolucionaria impuesta por el pueblo al Cabildo, lograba defender las ideas libertarias de Belgrano, Moreno y Saavedra. Aquella Junta a pesar del juramento prestado (en favor de Fernando VII) debe ser considerada como el primer gobierno nacional independiente de la Metrópoli (25 de mayo de 1810). El pueblo argentino mediante un plebiscito aprobó las bases de su naciente democracia, estableciendo la división de poderes, las responsabilidades de los funcionarios, la publicidad de las cuentas, la seguridad individual y la convocatoria de un Congreso que determinara la forma de gobierno que se le daría a la nación. El Congreso de Tucumán (1816), nombró Director Supremo de las Provincias Argentinas a Juan Pueyrredón, a quien "le tocó la suerte de salvar la revolución argentina arrancando al Congreso la declaratoria de Independencia" (9 de julio) la cual había de consumar José de San Martín. Fabela, Isidro Dr.; Las Doctrinas Monroe y Drago. UNAM, p-22

<sup>8</sup> El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, fue la culminación del sueño de aventuras europeas quienes sostenían la existencia de tierras distantes de gran riqueza y belleza. No obstante, estos descubrimientos también estarían asociados a la necesidad del

Viejo Continente por descubrir nuevas rutas de comercio hacia el Oriente, además del prestigio que representaba el descubrimiento y adjudicación de nuevas tierras en nombre de la Corona española. Esta posición generó controversias territoriales entre España y Portugal sobre las nuevas tierras descubiertas. Con la mediación del Papa Alejandro VI se intenta firmar un tratado entre ambos países. El Tratado Inter Caetera de 1493, otorgaba la garantía a España de poseer las tierras que se descubrieran en 870 kms. aproximadamente de las Islas de Cabo Verde. Sin embargo no es aceptado por los portugueses, y es mediante de la firma del Tratado de Tordesillas de 1494 firmado entre ambos países, por el cual se acordó recorrer la línea establecida en el anterior tratado alrededor de 2370 kms. al Oriente del Cabo Verde, en favor de Portugal. De esta forma, las tierras descubiertas por españoles y portugueses definirían la posesión respectiva de acuerdo a lo preestablecido en el tratado.

A County Study: Argentina. p-7

<sup>9</sup> Kelly, Philip y Child, Jack; Geopolítica del Cono Sur y la Antártida...*op. cit.* p-14

<sup>10</sup> Después del Tratado de Tordesillas en que ambos países acordaron la extensión de los territorios divididos, iniciaron numerosas expediciones para descubrir y ocupar territorios que no estaban adecuadamente reconocidos. La vastedad de la región, no presagiaban enfrentamientos, sin embargo en áreas como el territorio de Misiones y el Estuario del Río de la Plata -considerado la puerta de entrada a la Patagonia-, frecuentemente ambas potencias se enfrentaron militarmente durante la época colonial.*ibidem*

<sup>11</sup> *idem*

<sup>12</sup> Con la firma del Tratado en San Idelfonso de 1777, España y Portugal acordaron la Transferencia de Colonia de Sacramento y a España las misiones al Este del Río Uruguay, conservando Portugal Santa California, Guaira, Mato Grosso y las riberas de el Río Jujuy y Río Grande. Argentina: A county study...*op. cit.* p-12

<sup>13</sup> La necesidad de un mayor control de las regiones conquistadas -en las que se establecieron rutas comerciales- y ante la amenaza de los portugueses establecidos en Brasil, obligó en cierta forma a los españoles a crear centros administrativos como el Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, la formulación de políticas uniformes para toda esta región se vio obstaculizada por la lejanía de la población respecto del centro y la existencia de pueblos nómadas. Esta característica limitó la conciencia de lealtad a la corona que los españoles imprimían a los pueblos colonizados, lo cual se mantuvo aún después de la emancipación respecto a los intentos de los independentistas por crear una nación. Wiarda, Howard J. and Kline, Harvey F. Latin American politics and development... *op. cit.* p-127

<sup>14</sup> En este período el temor de España ante el avance de la influencia británica en el nuevo mundo siguió acentuándose. La eliminación de la influencia francesa en el nuevo continente se daría con la firma del Tratado de París, entre Francia e Inglaterra, en 1763 que puso fin a la "Guerra de Siete años" estaría asociada con el temor del avance de la

influencia portuguesa. El establecimiento de la Colonia do Sacramento aumentó el temor de una invasión inglesa a la Patagonia, teniendo en cuenta los dos anteriores intentos llevados a cabo por Francia e Inglaterra por colonizar las Islas Malvinas. Atkins, G. Pope; América Latina en el sistema político internacional...op. cit. p-231

15 Carranco y Trujillo, Raúl; Panorama Crítico de Nuestra América. p-59

16 Durante las guerras napoleónicas de 1804-1815 la neutralidad de España se vio alterada con el envío británico de naves hacia América en 1804. Esta situación impulsaría una alianza entre Francia y España para contener a los británicos. Sin embargo, la derrota y la destrucción de la Fuerza Naval de España en la Guerra de Trafalgar en 1805, dejaría el imperio colonial español desprotegido). Argentina a County Study... op. cit. p-16

17 La declaración de la independencia de Buenos Aires generó conflictos entre las diferentes posiciones políticas de los diversos grupos sociales. Este conflicto de intereses se daría entre los revolucionarios nacionalistas y realistas, criollos y peninsulares y unitarios, en su mayoría porteños centralistas que pugnaban por consolidar un gobierno central fuerte y los federalistas, autonomistas provinciales que sostenían la restauración de la confederación).

18 Desde fines del siglo XVIII y debido al involucramiento de España en las guerras napoleónicas, la metrópoli se vio imposibilitada de hacerse presente en América a raíz de los sucesos de Trafalgar. La invasión de España por los ejércitos napoleónicos y la deposición de Fernando VII significó el descalabro de la monarquía española y el fin de su imperio en América. Cotler, Julio; Clases, Estado y Nación en el Perú. p.51 y 52

19 Fabela, Isidro Dr.; Las doctrinas Monroe y Drago...op. cit. p-21-22

20 Al contrario de las ex-colonias españolas, el Brasil logró mantener una estabilidad en medio de nuevos Estados desunidos y fragmentados. Un miembro de la familia real portuguesa Braganza, en connivencia con los nacionalistas brasileños, tras renunciar a sus pretensiones al trono portugués, reinó en el Brasil como Pedro I entre 1822 y 1831. Fue sucedido por su hijo, Pedro II quien reinó hasta 1889. Fueron monarcas constitucionales efectivos que jugaron un papel de poder moderador respecto del partidismo, forzando a que éstos se alternaran en la administración. Atkins, G. Pope; Sudamérica en la década de 1920: el desarrollo de las relaciones internacionales en una nueva era. p-20

21 Uruguay nació como Estado independiente después de la Guerra entre Brasil y Argentina. Esta guerra ejemplificó las intenciones de liderazgo abanderadas por dichos países por controlar la región del Río de la Plata. En este hecho Gran Bretaña fue un actor fundamental en la mediación entre ambos países, en virtud de que sus intereses comerciales se veían afectados por esta disputa al llevarse a cabo dentro de sus rutas comerciales. *ibidem* p-21

22 El término gaucho se le adjudicó a los jinetes rurales que conformaron los ejércitos encabezados por los caudillos que lucharon por la emancipación del decadente dominio español. Soldados de Perón: Los Montoneros... *op. cit.* p-21

23 Estos bloqueos se extendieron de 1838 a 1840 al que posteriormente se unió Gran Bretaña entre 1845 y 1850. El sitio de Montevideo entre 1841 y 1851, condujo a la alianza de las facciones argentina y uruguaya de los bandos enfrentados y la alianza anglo-francesa apuntaba a apoyar a los uruguayos. Después de la retirada de los británicos y franceses en 1850, Brasil se unió a las facciones argentinas que buscaban derrocar a Rosas, instalado en el poder en Buenos Aires. Atkins, G. Pope; Sudamérica en la década de 1990...*op. cit.* p-22

24 Quadri Castillo, Mario; La Argentina descentralizada...*op. cit.* p-205

25 Las incursiones del Brasil a Uruguay por esta situación apoyadas por Argentina, motivaron una protesta formal del gobierno uruguayo. A ello se sumó la intención de Paraguay de invadir Uruguay por territorio argentino para asegurar la independencia de Uruguay. Sin embargo, la negativa de Argentina a esta petición motivó la declaración de guerra del Paraguay contra Brasil y Argentina. Después de varias negociaciones, Argentina, Brasil y Uruguay acordaron la unión de fuerzas para enfrentar al Paraguay por medio del Tratado de la Triple Alianza como se le conoce. La guerra se desarrollaría durante 5 años (1865-1870), la cual terminó con la muerte del Presidente paraguayo Solano López. Atkins G. Pope; América Latina en el sistema político... *op. cit.* p-225

26 Esta política otorgaba concesiones a los particulares, caracterizándose como una especie de contrato de concesión entre la corona y los conquistadores, mediante la cual la corona incentivaba la colonización de nuevas tierras por parte de ciudadanos españoles con el otorgamiento de estímulos materiales, títulos políticos, entre otros, a condición que dichas tierras fueran conquistadas y ocupadas bajo el dominio de la corona española. Ferrer, Aldo; *La economía argentina: las etapas de su crecimiento y problemas actuales.* p-28

27 Por medio de este régimen la corona estableció como requisito a los conquistadores el adoctrinamiento e instrucción de la religión católica a los aborígenes, además de su plena disposición a la corona por defender los territorios colonizados. En sentido estricto, el régimen de la encomienda significaba la entrega a los conquistadores de un determinado número de tributarios quienes así se veían obligados a prestarles servicios personales por el equivalente de lo que debían pagar de tributo a la Corona. De esta manera, el encomendero se encontraba en potestad legal para apropiarse de una renta a través del trabajo de los indígenas en la minería, agricultura, etc. a cambio de lo cual debía cuidar su evangelización, lo que en términos concretos significaba preservar el estado de sumisión de la población conquistada. Gibson, Charles; *España en América.* p-96-98

28 A partir de ese año y hasta 1589, fue creada la Casa de Contratación y el Consulado de Sevilla que serían los órganos encargados de administrar el comercio de esclavos. Con la

separación de los reinos de España y Portugal en 1640, este comercio se efectuó por medio de la política de "asientos", es decir, el establecimiento de lugares para la venta de esclavos cuyos mayores beneficiarios serían los portugueses mediante el pago de fuertes cantidades de dinero. Para un mayor estudio de los instrumentos de la corona española utilizados en su comercio con el nuevo mundo, véase Arcila Farías, Eduardo; Reformas Económicas del siglo XVIII en Nueva España: ideas económicas, comercio y régimen de comercio libre. Sepsetentas, 1974

<sup>29</sup> Esta lejanía geográfica de las nuevas ciudades respecto de los centros administrativos, se mantuvo aún después del establecimiento del Virreinato del Río de la Plata, siendo uno de sus principales problemas en la conformación de una nación después de la emancipación. Incluso la conquista y posterior colonización de las provincias de Buenos Aires provino de la expansión hacia el Oeste de los colonizadores españoles procedentes de Chile y Perú con la fundación de ciudades como Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba. Gibson, Charles; España en América. p-64

<sup>30</sup> El establecimiento formal del Virreinato del Río de la Plata, al que se le incorporó la Audiencia de Charcas y Quito y elevó la Audiencia de Chile al rango de Capitanía General- significó una mutilación del Virreinato del Perú. Una de las consecuencias de esta reorganización colonial administrativa, fue el rompimiento del monopolio comercial de Lima al permitirse que el comercio de Chile y especialmente el de Charcas se realizó por la vía atlántica. Cotler Julio; Clases, Estado y Nación en el Perú... op. cit. p-40

<sup>31</sup> Alemann, Roberto; Breve Historia de la Política Económica Argentina, 1500-1982. p-46

<sup>32</sup> Arcila Farías, Eduardo; Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España... op. cit. p-54 y ss

<sup>33</sup> Quadri Castillo, Mario; La Argentina descentralizada... op. cit. p-166

<sup>34</sup> Alemann, Roberto; Breve Historia de la Política Económica Argentina... op. cit. p-73 y ss

<sup>35</sup> Astolfi, José C.; Historia Argentina. p-349 y ss

<sup>36</sup> Quadri Castillo, Mario; La Argentina descentralizada... op. cit. p-71

<sup>37</sup> En la inflación alta hay casos limitados en la que Argentina esta a la cabeza entre 1975 y 1989, precedida por Chile, México, Perú, Nicaragua, Brasil, Uruguay y Bolivia. Algunos lograron superar los períodos de inflación alta y otros como Argentina (1989) y Bolivia (1985) cayeron en la hiperinflación, siguiendo el proceso Perú, Nicaragua y Brasil. Argentina, ha sido el país que ha experimentado todos los estadios de la inflación después de la estabilidad monetaria de fin del siglo XIX y principios del XX. De 1975 a mediados

de 1989 el gobierno argentino mantuvo una inflación alta, la cual se considera un fenómeno singular al presentarse en tiempos de paz (hasta 200% mensual) constituyéndose como un fenómeno novedoso. Alcmann, Roberto; Breve Historia de la política económica argentina...op. cit. p-230 y ss

## **CAPITULO II. LOS REGIMENES MILITARES EN EL DESARROLLO POLITICO DE LA ARGENTINA**

### **2.1 Influencia de Estados Unidos en la conformación de las dictaduras militares en América Latina**

#### **2.1.1 Relaciones históricas EU-AL.**

Históricamente, las relaciones entre América Latina y la región caribeña con Estados Unidos, han estado caracterizadas por la diferente perspectiva adoptada por este último para abordar los problemas de la región. La visión particular de la problemática latinoamericana por parte de Estados Unidos, en diversas ocasiones se basó en un tratamiento coyuntural de ésta y sólo cuando su seguridad nacional o sus intereses se ven amenazados.

Estas relaciones, generalmente han estado determinadas por las prioridades estratégicas norteamericanas y la evolución de la dinámica internacional. Las vinculaciones entre ambas partes en el ámbito político, económico y militar, varía en función de las modificaciones escenificadas en el plano internacional, así como coyunturas particulares tanto al interior de Estados Unidos como en los países latinoamericanos.

La región del Caribe y el conjunto de países de América Latina, tradicionalmente se considera parte importante en la conservación de la seguridad nacional estadounidense contra influencias extracontinentales. Esta posición exclusionista, forma parte de la estrategia política de largo alcance abanderada por los gobiernos norteamericanos. Dicha actitud se mantiene vigente, la cual se aplica en momentos de crisis para rectificar políticas que no responden a las exigencias internas.

Estados Unidos ha buscado mantener su supremacía en el Continente americano, así como asegurar la independencia de la región respecto de la influencia de otros Estados extracontinentales. Bajo esta perspectiva, ha promovido una relación con los países latinoamericanos basada en los principios de estabilidad política y cooperación económica fundamentalmente a nivel bilateral. Sin embargo, estos elementos deberán estar siempre presentes. La ausencia de cualquiera de ellos, representará para Estados Unidos la necesidad de iniciar acciones unilaterales para conservar esa supremacía y conservar sus intereses.

Estos principios han sido dirigidos en función de la seguridad militar y económica norteamericana. Desde la etapa independentista, este temor se manifestó para Estados Unidos en el sentido de que la inestabilidad política mostrada por los países de la región podía ser susceptible de intervenciones de potencias antagónicas extracontinentales. Con base en lo anterior, Estados Unidos ha utilizado diversas formas y métodos que van desde la intervención directa para imponer gobiernos, la implantación tácita de protectorados o la firma de acuerdos que subordinan la dirección política y económica de un país de la región a las decisiones de gobiernos norteamericanos.



La visión norteamericana, estriba en que la consolidación de la estabilidad política constituye un requisito previo el cual reduce la posibilidad de injerencias externas y, por tanto, necesario para su propia seguridad. En la actualidad esta visión unilateral permanece vigente. Si bien los métodos adoptados para su consecución han variado, es evidente que para los gobiernos norteamericanos el mantenimiento de su supremacía política y económica es un factor indispensable para contener cualquier amenaza externa a sus intereses. El comunismo ha desaparecido como una amenaza latente de corto plazo a su seguridad nacional, pero la continuación de conflictos internos tanto a nivel regional e internacional, representan para el gobierno norteamericano desafíos a su política exterior.

Los países latinoamericanos y Estados Unidos surgen después de haber escenificado revoluciones exitosas en contra de una potencia dominante. La visión norteamericana en su etapa independentista, se centró en ganar el apoyo de los países europeos en contra de los intentos de reconquista de la Gran Bretaña. El rechazo de las trece colonias americanas adoptar el régimen político de La Gran Bretaña, motivó un cambio hacia el sistema presidencialista, asentado en la Constitución de 1777.

La unificación política y económica del país, estribó en la necesidad de iniciar un proceso de recuperación económica y financiera. Por ello, la política exterior hacia la región latinoamericana y europea, se caracterizó por el aislacionismo y la neutralidad, sustentada en la "política de los dos hemisferios" (1).

Con base en esta política, Estados Unidos se abstuvo de intervenir en los asuntos europeos, con objeto de centrar su atención a los problemas internos y consolidar su expansión territorial. Su atención a las revoluciones observadas en países latinoamericanos y del Caribe se basó en una política de neutralidad. La consolidación como Estado independiente de la Gran Bretaña, motivó un cambio en esta política para asumir un papel que tendió al reconocimiento político de los Estados latinoamericanos(2).

El desarrollo económico diferenciado, gradualmente marcó el tipo de relación de Estados Unidos con los demás países del Continente americano. El reconocimiento de las nuevas naciones por parte de Estados Unidos inicia en 1822, pero sus contactos iniciales fueron lentos en su desarrollo. La inestabilidad política observada en la región, reforzó la idea norteamericana de consolidar políticamente a los países latinoamericanos como forma de terminar con los intentos de dominación de potencias extrarregionales. Dicha inestabilidad, era en gran medida producto del establecimiento de una sociedad desigual conformada durante el período colonial y la generación de conflictos territoriales y de intervención intralatinamericanos.

En este contexto, James Monroe definió la política exterior norteamericana hacia la región, la cual enmarcó en su contenido las características que habrían de regir las relaciones interamericanas. Por medio de estos lineamientos, ya conocidos formalmente como "Doctrina Monroe" (3) hacia 1850, Estados Unidos autoasumió "oficialmente" un

carácter de protector de la soberanía hemisférica y el principal actor político y económico con quien habría que pactar.

Los diferentes gobiernos postindependentistas en Estados Unidos, marcaron las características y la ideología a seguir. Fomentaron la religión, el nacionalismo, el proceso democrático y una ideología que los autosituara como la nación más importante a nivel mundial.

Su acelerado desarrollo industrial, consolidado con la victoria del norte del país - que basaba su desarrollo en la promoción de la industria- sobre el Sur -con una economía basada en el desarrollo de la agricultura-, perfiló su consolidación como potencia industrial. Las principales repercusiones de la guerra civil norteamericana, se centraron en la unificación política y económica del país, la transición de un sistema burgués agrario al industrial que sentó las bases para el desarrollo pleno del sistema capitalista. En este sentido, las condiciones para establecer dicho sistema de producción se vio favorecido con la ausencia de un sistema feudal como el que prevaleció en Europa y por la ideología de sus habitantes, la mayor parte proveniente de Europa. Por su parte, América Latina había pasado a ser proveedora de materias primas para Estados Unidos y Europa, dando paso a luchas internas y externas de intereses por la captación de inversiones.

En América Latina la ideas unionistas promovidas por Simón Bolívar que tuvieron auge en la década de 1820, poco a poco fueron limitadas en su aplicación. Las disputas territoriales y la inestabilidad política de las naciones americanas, obstaculizaron gradualmente y después en forma definitiva la unión efectiva de todos los pueblos de la región.

Esta situación marcó cierto precedente para que Estados Unidos pusiera en marcha su propio concepto de panamericanismo. La consolidación territorial norteamericana, permitió encauzar su política exterior con base en la dominación económica, vinculada con su surgimiento como potencia industrial para poder ejercer su hegemonía en América Latina. Sus objetivos económicos se reflejaron los intereses industriales norteamericanos, para explotar las oportunidades de comercio e inversión que ofrecía América Latina. En el aspecto político, se utilizó como medio para promover la estabilidad internacional a través de procedimientos para mantener la paz y agrupar a la región en una sola organización dirigida por Estados Unidos. La idea implícita era, al mismo tiempo, impedir cualquier influencia extracontinental en la región.

La política exterior norteamericana a finales del siglo XIX y primeros años del XX, se caracterizó por una confrontación entre la idea de panamericanismo que se basaba en la idea de equidad y cooperación y la aplicación de la Doctrina Monroe para justificar las intervenciones norteamericanas en el Caribe. Esta unilateralidad reemplazó al multilateralismo propuesto por el panamericanismo, la cual dominó hasta los años treinta de este siglo.

En la primera conferencia internacional de Estados americanos -celebrada en Washington del 20 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890- (4), todas las naciones

latinoamericanas estuvieron representadas, excepto República Dominicana. En esta conferencia básicamente se discutieron asuntos comerciales como la promoción de una unión aduanera, que pronto fue rechazada por los países latinoamericanos, así como la necesidad de establecer mecanismos de arbitraje para conciliar disputas territoriales interamericanas.

A pesar de sus limitados logros, esta primera conferencia sentó las bases para la creación de los primeros organismos multilaterales americanos. En esta etapa se promulga la Doctrina Calvo<sup>(5)</sup>, la cual contó con la oposición de Estados Unidos. El enfrentamiento de los países latinoamericanos con Estados Unidos comenzó a ser más palpable. Estos se oponían a la creciente dominación política de Estados Unidos en el área y trataban de evitarla en lo económico.

Las sucesivas conferencias de Estados americanos acrecentaron las diferencias respecto de Estados Unidos. Este, comenzó a profundizar su política intervencionista en los asuntos internos de los países de la región, justificándola en su reclamo de interferir el cualquier país de América Latina en supuesto auxilio de sus ciudadanos y sus propiedades con base en el Derecho Internacional<sup>(6)</sup>.

Asimismo, hizo valer los principios de la Doctrina Monroe, en los casos en que una nación americana era presionada por países europeos. Tal es el caso del bloqueo sobre Venezuela por parte de Francia, Gran Bretaña e Italia para presionar por el pago de deudas, pero la intervención de Estados Unidos como árbitro sometió la disputa a la Corte Internacional de la Haya. No obstante, la decisión de dicha Corte para que las naciones europeas recibieran un trato preferencial en el cobro de deudas públicas fomentó el uso de la fuerza para ese efecto. En este sentido, en 1904 naciones europeas amenazaron con el uso de la fuerza en contra de República Dominicana para el cobro de deudas pendientes. La respuesta norteamericana fue la promulgación del Corolario Roosevelt<sup>(7)</sup> como extensión de la Doctrina Monroe, por el cual amenazaba con ejercer un poder policéfalo internacional contra naciones extracontinentales que intervinieran en los países americanos. Con esta política conocida como del "Big Stick", se comenzó a gestar el concepto de seguridad nacional al interior de Estados Unidos.

El corolario Roosevelt sería invocado en las siguientes décadas para justificar diversas intervenciones en países de América Latina y el Caribe. Esta política intervencionista se mantuvo vigente en los sucesivos gobiernos norteamericanos. Los métodos empleados variaron en forma y método, incluyendo desde la ocupación militar hasta la imposición de tratados que delegaban a Estados Unidos derechos de intervención, así como el condicionamiento al reconocimiento de gobiernos. En términos generales, Estados Unidos trató de asegurar con esta política el control político y económico del hemisférico, mantener la estabilidad política de gobiernos pronorteamericanos, proteger a sus ciudadanos y propiedades, respaldar las inversiones de Estados Unidos y promover la "democracia representativa".

A pesar que no todas las administraciones siguieron los mismos métodos impuestos por una política exterior intervencionista, algunos gobiernos norteamericanos utilizaron distintos medios de dominación, cuyos objetivos reflejaban los intereses enmarcados en su seguridad nacional. Al mismo tiempo, la erradicación de la influencia europea directa surgió como un objetivo de primer orden, al considerar Estados Unidos a América Latina como su zona de influencia natural justificada por la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt. Su aplicación era discrecional por parte de Estados Unidos, en tanto considerara que sus intereses o su seguridad nacional se vieran amenazadas <sup>(8)</sup>.

A la intervención directa se sucedió una política exterior que perseguía los mismos objetivos de estabilidad, pero ahora con formas más sutiles y rebuscadas. En este punto se sumó la búsqueda del control económico por medio de la denominada "diplomacia del dólar". Dicha política se basó en una manipulación de la actividad económica en los países de la región por los consorcios norteamericanos. Esta era combinada con presiones de tipo militar para proteger los intereses comerciales, especialmente en la región del Caribe, de dichos consorcios. Como estrategia coercitiva, buscaba asegurar la estabilidad económica y política de la región, y al mismo tiempo, limitaba la participación de otros capitales externos en ésta, especialmente europeos.

La Primera Guerra Mundial constituyó la consolidación de Estados Unidos como el país dominante de la región. Hasta ese momento, aunque la penetración económica norteamericana en la región era considerable, el comercio de los países latinoamericanos, particularmente los del Cono Sur, se efectuaba en mayor medida con Inglaterra, tal era el caso de Argentina. El conflicto mundial eliminó este esquema. La recesión resultante de la posguerra en Europa reafirmó a Estados Unidos en su posición de supremacía política sobre los países del hemisferio y adquirió una presencia decisiva en los asuntos europeos. Al mismo tiempo, se ubicó como un importante actor en la conformación del esquema internacional de posguerra, al convertirse en acreedor de los países europeos e importante promotor de la paz mediante la denominada "Paz de Versalles" <sup>(9)</sup>.

A partir de 1930 con la presidencia de Franklin D. Roosevelt, la política exterior norteamericana hacia la región sufrió variantes significativas en su aplicación. En sus aspectos más importantes, Estados Unidos abandonó la intervención directa en los asuntos internos de los países latinoamericanos como instrumento de presión política <sup>(10)</sup>. Sin embargo, no se renunciaba totalmente al uso de la intervención. La actitud de los gobiernos norteamericanos giró a un impulso de la cooperación conjunta con los países de la región, pero manteniendo negociaciones bilaterales sobre asuntos que alentarán la intervención norteamericana, como el caso de las nacionalizaciones de empresas, principalmente petroleras, en algunos países hemisféricos.

El marco internacional de primera posguerra con la eliminación de la amenaza europea para el Continente, facilitó a Estados la aplicación de esta nueva política. De la coacción varió hacia la cooperación, de acuerdo a los objetivos de dominación y estabilidad

política perseguida por los gobiernos norteamericanos. La presión económica sustituyó en forma parcial a la intervención militar.

El surgimiento y desarrollo de regímenes fascistas en Europa y su creciente actividad en América Latina, reavivó la preocupación norteamericana por su seguridad. Para contrarrestar influencias extracontinentales, aceleró la cooperación intralatinamericana, impulsando el establecimiento y desarrollo de una estructura de defensa mutua.

La segunda guerra mundial además de romper el comercio latinoamericano con los países europeos, ubicó a Estados Unidos como el principal mercado para los productos de la región. La ayuda económica norteamericana antes de la segunda guerra mundial, significó una importante herramienta política de Estados Unidos hacia la región. Sus objetivos no variaron sustancialmente, manteniendo sus objetivos de supremacía política y económica y la necesidad de establecer las condiciones necesarias para sostener la frágil estabilidad de los países latinoamericanos. La ayuda económica de Estados Unidos hacia la región, era canalizada por medio de préstamos y concesiones a través de organismos establecidos al efecto, asistencia técnica y asesoría en materia militar.

En este sentido, con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, América Latina se ubicó como importante abastecedora de materias primas y de defensa de posiciones estratégicas. Esto significó una vinculación norteamericana a la región con la instrumentación de dichos programas de cooperación política, militar y económica.

El marco internacional surgido de la segunda posguerra ubicó a América Latina en un segundo plano en la atención norteamericana. La coyuntura bélica que había ubicado a América Latina como importante proveedora de materias primas y energéticos a los Aliados, así como en el aspecto geoestratégico, desapareció en gran medida con la finalización del conflicto mundial.

La formación del esquema de enfrentamiento representado por la denominada "Guerra Fría", producto del antagonismo de dos sistemas políticos e ideológicos dominantes -capitalismo y comunismo-, estableció el comportamiento internacional que dominó por cinco décadas. En los primeros años posteriores a segunda guerra, la reconstrucción de la economías europeas por medio del Plan Marshall, captó la atención de Estados Unidos. En América Latina si bien se continuó con programas de cooperación por parte de Estados Unidos, ésta estuvo ligada al desarrollo de la guerra fría. La amenaza comunista, en estos primeros años no significó un peligro mayor como en otras áreas expuestas, según la perspectiva norteamericana.

Al efecto, Estados Unidos estableció programas de cooperación a nivel mundial, con objeto de evitar una expansión de la ideología comunista. En Latinoamérica, bajo los auspicios de Estados Unidos, fueron creados organismos regionales de defensa y cooperación como la OEA y el TIAR<sup>(11)</sup>, que enfatizaban la necesidad de una mayor cooperación intralatinamericana y al mismo tiempo subrayaban el dominio político y económico norteamericano en el Continente. Este segundo plano en que se ubicó a

América Latina por parte de Estados Unidos, se modificó sustancialmente con el triunfo de la revolución cubana en 1959, y su posterior definición como socialista, la cual se consolidó en 1961.

La amenaza inicial que representó un régimen de tendencia comunista en el Continente y sus intentos de expansión hacia otros países del área, significó para Estados Unidos intensificar la cooperación y asistencia militar hacia los países latinoamericanos.

Los acuerdos de cooperación, fueron subordinados a las necesidades de seguridad norteamericana en la región y en forma más general al concepto divergente y aún contradictorio que mantienen los países del norte y el sur. De la desaparición gradual de la amenaza que constituyeron los intentos de reconquista de las colonias, se sustituyó con la amenaza ideológica que representó el régimen cubano. Esta actitud de preocupación traducida en la puesta en marcha de acciones para prevenir nuevos desafíos a su hegemonía continental, reforzó la imagen de política exterior coyuntural norteamericana hacia la región.

Bajo este nuevo contexto, Estados Unidos afianzó el mantenimiento y ampliación de los programas militares de cooperación. Este se convirtió en el principal abastecedor de armas para los países del Continente, justificando sus relaciones militares con los países de América Latina y el Caribe, en un marco de defensa común. En apariencia esta cooperación se mantenía bajo un carácter multilateral, aunque la mayoría los acuerdos de cooperación militar fueron concertados a nivel bilateral.

Los gobiernos norteamericanos posteriores a la segunda posguerra, se afanaron en eliminar al máximo la influencia militar europea en la región y a contener el avance del comunismo. La incapacidad de los países latinoamericanos para vigilar su territorio en el marco de la segunda gran guerra, obligó a Estados Unidos a iniciar negociaciones para el establecimiento de bases militares en el Continente mediante la denominada Ley de Préstamo y Arrendamiento pronunciada en marzo de 1941<sup>(12)</sup>.

En este sentido, el TIAR<sup>(13)</sup> fue expuesto por Estados Unidos como el instrumento más importante en que girarían las relaciones militares con el Continente americano. Sin embargo, las restricciones a nivel interno en los Estados Unidos modificaron estas relaciones. Hacia 1949, la denominada Ley de Defensa Mutua se convirtió en el principal órgano que en forma efectiva reguló las relaciones militares de los países de la región con Estados Unidos. Por medio de esta ley, Estados Unidos impulsó la homogeneización de las fuerzas armadas latinoamericanas por medio de su profesionalización y equipamiento.

La venta de armas y el envío de asesores militares se concretaron en acuerdos bilaterales favorables a los países de la región. Al tiempo Estados evitaba la presencia de asesores extracontinentales y la distracción mayores recursos para la instrumentación de programas antisubversivos con personal militar propio. Esta situación no obstante, fue alterada, como ya se mencionó, con el triunfo y consolidación de la revolución cubana.

Anterior a este período, Estados Unidos había surgido como la potencia mundial dominante de la segunda posguerra. El triunfo Aliado favoreció a Estados Unidos, ya que un aspecto importante para su consolidación como la potencia de primer orden se debió a que su territorio no sufrió la magnitud de la devastación tanto económica como territorial que se observó en los países europeos y Japón. La reconstrucción europea se constituyó como prioritaria para los gobiernos norteamericanos, siendo América Latina relegada a un segundo plano. Sin embargo, la recuperación gradual de las economías de Europa y el surgimiento del sistema bipolar, representada por el establecimiento de alianzas económicas y militares antagónicas que profundizaron el período de la denominada Guerra fría, poco a poco modificaron la estructura unipolar surgida de la segunda posguerra.

Bajo este nuevo contexto, Estados Unidos reconoció en forma plena a América Latina y especialmente al área del Caribe como su área de influencia natural y como parte fundamental de su seguridad nacional. Por ello, la consolidación de la revolución socialista cubana alteró el orden establecido en el Continente Americano. En este período las presiones norteamericanas sobre las Isla incluyeron una variada gama de acciones coercitivas tanto a nivel de gobiernos norteamericanos como regional instrumentando una política anticomunista. Estas presiones incluyeron una fallida invasión militar y el establecimiento de un bloqueo económico que aún permanece vigente.

La denominada "crisis de los misiles de 1962", enfrentó abiertamente a las dos ideologías antagónicas. Cuba logró consolidar su régimen comunista a pesar del deterioro en sus relaciones con la URSS como resultado de dicha crisis, lo cual le permitió abrirse espacios dentro de la esfera socialista liderada por la entonces Unión Soviética. La actitud hostil de los sucesivos gobiernos norteamericanos sobre Cuba, se centró en evitar un nuevo caso cubano en la región. Estos reforzaron su presencia en el Continente, proporcionando una amplia cooperación económica condicionada a las exigencias de las instituciones financieras mundiales establecidas en la segunda mitad de la década de los cuarenta, así como la ampliación de los programas de cooperación militar con los países latinoamericanos.

El objetivo principal fue enfrentar a la "subversión comunista" representada por Cuba<sup>(14)</sup> y sus intentos de influir en otros países de la región. En este sentido, esta política enmarcada en el contexto de la guerra fría, tendió a contrarrestar la influencia política cubana por medio del mantenimiento de la estabilidad política de la región. La cuestión cubana, por tanto, modificó el comportamiento de los gobiernos norteamericanos hacia la región al abandonar el concepto de seguridad hemisférica, sustituyéndolo por el de seguridad intercontinental. De esta forma, se aceptó que la amenaza comunista podría darse dentro de las naciones de América Latina y el Caribe,

El instrumento utilizado al efecto fue la proclamación por parte de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso (ALPRO) <sup>(15)</sup> a principios de los sesenta. Para mediados de esa década y superada la crisis de 1962, el caso de Cuba se asentó en un nivel estable aunque no exento de las presiones norteamericanas de todo tipo hacia esa Isla por el carácter marcadamente nacionalista y antinorteamericano del régimen castrista. A

excepción del caso de Guatemala con el derrocamiento de Jacobo Arbenz (1954) favorecido por Estados Unidos, no se percibía en el hemisferio una eventual toma del poder de los comunistas en algún país de la región en este período.

El caso cubano y el manifiesto descontento de los pueblos latinoamericanos, fueron factores que se tradujeron, como ya se mencionó, en un incremento de las asistencias económica y militar de Estados Unidos hacia la región. La ALPRO estuvo diseñada para enfrentar la subversión por medio de la promoción del desarrollo económico con base en la industrialización. Su aplicación, estuvo determinada a la existencia de la "práctica democrática".

Sin embargo, el fracaso de este instrumento estuvo ligada al carácter heterogéneo de los países de la región, la incapacidad de la política exterior norteamericana para efectuar con éxito cambios estructurales en éstos, con consecuencias políticas favorables al interior de Estados Unidos. Asimismo, este instrumento, concebido para atacar el subdesarrollo que presentaban los países de la región -desempleo, atraso tecnológico, coexistencia de latifundios y minifundios, etc.- se contrapuso a un estado de homogeneidad política, económica e industrial observada en los países centrales.

A partir de 1961, la política militar norteamericana hacia la región, se centró en la necesidad de fomentar en los ejércitos latinoamericanos la tarea de asumir una mayor responsabilidad en su papel sobre los programas de contrainsurgencia. Esta política se escudó además en la creación de un ejército profesional apolítico, aunque en la práctica esto no sucedió. Los militares asumieron un mayor papel en la conducción política. Sin embargo, estas relaciones no siempre mantuvieron un carácter cordial, llegando incluso al enfrentamiento. En el caso de Perú, Argentina y Brasil, las divergencias se centraron en la propia percepción a los problemas de seguridad y desarrollo sostenidos por los gobiernos de estos países.

A finales de la década de los sesenta, la desaparición de la "amenaza comunista" en América Latina y el fracaso de la ALPRO, Estados Unidos replantó su política exterior hacia la región. Los gobiernos norteamericanos en la década de los setenta, intentaron establecer una política basada en la cooperación. Sin embargo, estas intenciones tuvieron un contenido retórico, ya que las relaciones Estados Unidos-América Latina siguieron manteniéndose en un plano secundario y aún de enfrentamiento. Estas perspectivas de nuevo diálogo, se vieron cortadas con el derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, promovido por Estados Unidos, la cuestión del Medio Oriente y la guerra de Vietnam. A lo interno se sumaron los sensibles problemas políticos que tocaron la Casa Blanca -Caso Watergate- y que afectaron seriamente la credibilidad del sistema político norteamericano.

Por otro lado, las intenciones de democratización contempladas con la aplicación de la ALPRO, se contrapusieron a una serie de golpes militares observados en contra de gobiernos constitucionales en los países de la región. En principio los gobiernos norteamericanos se opusieron al establecimiento de dictaduras militares. Al efecto, los



gobiernos norteamericanos, en defensa de los "valores democráticos", adoptaron medidas como la supresión de los programas de cooperación. Esta posición varió posteriormente, al adoptar Estados Unidos una actitud de acomodo con dichos regímenes. Estos, incluso, recibieron apoyo de los gobiernos norteamericanos anteriores a 1974, no sólo reconociéndolos políticamente sino también dando una orientación favorable a sus intereses en la zona.

Esta posición norteamericana hacia los regímenes militares de corte autoritario y en no pocas ocasiones represivos que proliferaron en la región hasta 1985, garantizaban a Estados Unidos una cierta estabilidad. Asimismo, entre la estabilidad que representa un régimen militar y la incertidumbre que genera un cambio democrático no controlado, los gobiernos norteamericanos generalmente prefirieron la primera opción.<sup>(16)</sup>

A partir de 1976 la política exterior norteamericana varió en sus lineamientos. Se adoptó una política de respeto a los derechos humanos <sup>(17)</sup>, la moralización de la vida pública al interior y exterior de los Estados Unidos, la limitación de la carrera armamentista, el establecimiento de un nuevo orden económico internacional que favoreciera la cooperación entre los países industrializados y un diálogo de éstos con los países subdesarrollados.

En este período se intentó reconocer la importancia estratégica de los países de la región, una mayor apertura ideológica y, como punto más importante, la defensa de los derechos humanos. Esta comprendió a la misma Unión Soviética hasta los aliados incondicionales de Estados Unidos. No obstante, esta política de coexistencia pacífica no suprimió el interés norteamericano por mantener su supremacía política y económica en la región, en contra del creciente desafío que comenzaron a representar los movimientos nacionalistas en algunos países latinoamericanos. En este contexto se encuentra la cuestión del Canal de Panamá -problema que se resolvió, aunque no en su totalidad, con la firma de nuevos tratados en 1977-, el creciente conflicto centroamericano, en especial referencia a Nicaragua y los regímenes militares represivos en el Cono Sur.

Al respecto, los países del Cono Sur tradicionalmente han representado una limitada importancia estratégica para el conjunto de la política exterior norteamericana. Esta posición ha variado en los últimos años de acuerdo a la dinámica internacional, con el establecimiento de mayores programas de cooperación. La política norteamericana se ha centrado en los países de mayor desarrollo relativo para lo cual ha adoptado posturas de tratamiento preferencial. Esta cooperación fue generalmente continua, aún cuando la mayoría de estos países sudamericanos eran dirigidos por regímenes militares altamente represivos y regresivos.

La década de los ochenta representó para Estados Unidos el regreso a los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad nacional norteamericana. América Latina se convirtió en una región que requería de mayor atención debido a que la política exterior bajo el mandato demócrata de James Carter, desde la perspectiva republicana, había propiciado la disminución de la influencia norteamericana a nivel regional y mundial. De nueva cuenta, los objetivos prioritarios de la política exterior norteamericana se centraron en la

contención del avance comunista representado por el sandinismo, Cuba y la Unión Soviética y la normalización de las relaciones con aliados que se habían visto perjudicados con la política de derechos humanos de Carter.

Para ello, inició estrategias coercitivas que incluyeron la intervención militar directa -Granada en 1983- medidas de desestabilización de gobiernos latinoamericanos y la eliminación del control de armas. Sin embargo, en forma gradual la política exterior norteamericana mostró una gran ineffectividad en el logro de sus objetivos. Al conflicto centroamericano, la agudización de la crisis económica internacional y los problemas de la economía norteamericana, se sumó la crisis en Panamá. La ineffectividad de la estrategia política reaganiana para enfrentar estos problemas, en especial la crisis panameña, erosionaron la credibilidad de la política que pretendía el restablecimiento de la hegemonía sin obstáculos de Estados Unidos en el Continente.

Durante las administraciones republicanas de 1980 a 1988, la política exterior norteamericana hacia América Latina, sufrió cambios radicales. En particular, el gobierno norteamericano inició acciones para normalizar sus relaciones con las dictaduras sudamericanas, afectadas, de acuerdo a su punto de vista, por la política exterior del gobierno anterior. La política globalista de Reagan, intentó restaurar la decreciente hegemonía norteamericana no solo en América Latina y poner freno a la expansión comunista. Esta política aunque no definida, se centró en la contención por medio de la concreción de acuerdos bilaterales.

Al respecto, la estrategia norteamericana incluyó el reforzamiento de las dictaduras militares y la asistencia económica a las "potencias medias" como Argentina, Brasil y Venezuela. Sin embargo, dos hechos marcaron el rumbo de la política exterior norteamericana hacia la región. Por un lado, la agudización de la crisis financiera internacional hacia 1982 que golpeó con más fuerza a las débiles economías latinoamericanas, la derrota militar de Argentina por parte de Gran Bretaña por la posesión de las Islas Malvinas en 1982 y el conflicto centroamericano con el caso de Nicaragua y los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala.

El balance poco satisfactorio para América Latina heredado de la guerra de las Malvinas, reforzó la tesis de aquellos que sostienen la necesidad de reestructurar a la OEA y redefinir el concepto de seguridad continental en el marco del TIAR. Al mismo tiempo, para el pueblo argentino esta derrota militar se constituyó como una dolorosa experiencia en reconocimiento de su carácter de país latinoamericano sino poblacional por su ascendencia europea e ideología pro-europea, si lo es en el aspecto geográfico.

Por el contrario, para Estados Unidos que apoyo a su aliado europeo en este conflicto, se tradujo en el compromiso europeo en la defensa del Atlántico Sur, postura a la cual Estados Unidos había abogado en oportunidades anteriores (18). Para mediados de la década de los ochenta, la crisis económica y financiera internacional e interna en Estados Unidos y el conflicto centroamericano, representaron cuestiones fundamentales a resolver por el gobierno republicano.

El clima de profundización de la crisis estructural de los países del área, echó por tierra los modelos económicos impuestos por los regímenes militares o dictatoriales en que se sustentaban; la crisis permanente erosionó al mismo tiempo las bases de legitimación política, acrecentó las movilizaciones de tendencias nacionalistas y creó las condiciones para el proceso de "redemocratización" que se inicia en esos años. La revisión del sistema Interamericano ante la creciente politización de los problemas económicos, alimentó las expectativas para iniciar un proceso de integración sino política, si económica que se desarrolla en forma gradual.

Sin embargo, el cambiante escenario internacional con la desaparición ya formal del principal enemigo ideológico de Estados Unidos, ha representado el resurgimiento de Estados Unidos como potencia militar dominante ya que en el aspecto económico nuestra severos problemas que la han llevado a la recesión. A pesar de ello, Estados Unidos mantiene una presencia fundamental en la conformación del nuevo escenario internacional. Su política hacia América Latina sigue manteniendo vigentes sus intenciones de control hemisférico, acentuadas con la desaparición del bloque socialista. La actual administración, así como su antecesora, no han abandonado la intervención directa en caso de que su seguridad se vea amenazada.

La promoción de la democracia como objetivo político de Estados Unidos, encontró en el proceso de redemocratización en el Continente una esfera de aplicación. La crisis de los regímenes militares y el traspaso del poder político a civiles significó para los gobiernos norteamericanos modificar su estrategia, aunque éstas apuntaron más a formular respuestas a nivel bilateral más que a una política conjunta.

La denominada Iniciativa para las Américas del Presidente Bush,<sup>(19)</sup> intenta promover el desarrollo económico de los países de la región, pero mantiene cuestiones como la solución del problema de la deuda externa, a las condiciones internas de cada país y mediante el establecimiento de mecanismos de orden bilateral.

En lo que se refiere al proceso de redemocratización que observó el hemisferio en la mitad de la década de los ochenta, si bien en la actualidad los países latinoamericanos están gobernados por civiles, el establecimiento de regímenes democráticos efectivamente representativos aún se mantiene como un objetivo a corto plazo. La crisis de legitimidad de la mayoría de los regímenes militares fue cuestionada por un creciente nacionalismo latinoamericano, el cual rechazó la permanencia de éstos por medio de la represión y el autoritarismo.

En dicho proceso, factores internos y externos determinaron su desarrollo, a saber; la crisis de la deuda, el estancamiento económico, la ampliación de la brecha entre países subdesarrollados y desarrollados, el aumento de la pobreza extrema de grandes núcleos poblacionales en los países latinoamericanos y del Caribe, entre otros. En el aspecto político, este auge de democratización estuvo acompañada además del fracaso de los planes económicos de dichos regímenes y por la eliminación o control de los focos de subversión existentes en los países de la región.

### 2.1.2 Militarización del Estado latinoamericano

Como se ha mencionado, Estados Unidos en la segunda posguerra surge como la potencia militar y económica dominante. Su efectiva dominación política y económica tácita sobre los países de América Latina se vio favorecida por la inestabilidad política de éstos -además de conflictos territoriales intralatinamericanos que aun permanecen- para lo cual instrumentó mecanismos que mantuvieran a la región bajo las directrices de su política exterior. El establecimiento del TIAR en 1947, dio inicio al un gradual y constante proceso de militarización de los estados latinoamericanos. La creación de programas de ayuda militar para enfrentar la subversión, en supuesta defensa de los valores democráticos, gradualmente alentó el establecimiento de regímenes militares autoritarios.

Los diversos niveles de desarrollo económico en los países de la región tanto al interior como al exterior, han condicionado los procesos de integración regional. En este contexto, la influencia militar en la vida política se fue acentuando, constituyéndose como un elemento decisivo en la conducción política en varias décadas. En el contexto de la guerra fría, las fuerzas armadas latinoamericanas debían cumplir un papel de "aliados" en el caso de una eventual agresión extracontinental y para defender las delimitaciones territoriales. Para ello, Estados Unidos se ha asegurado puntos geoestratégicos en el Continente, como el Caribe, América Central -en especial Panamá- y el Atlántico Sur.

En la década de los cincuenta, Estados Unidos estableció e impulsó la instrumentación de los Programas de Ayuda Militar (PAM). Por medio de estos programas, los gobiernos norteamericanos sistematizaron la cooperación militar con las fuerzas armadas de la región, a fin de proveerlas de equipo y asesoría para el cumplimiento de sus funciones de contención del comunismo. Este, fue considerado como el principal "enemigo" de los gobiernos latinoamericanos (20).

En la década de los sesenta, consolidados los programas de cooperación militar norteamericana con algunos países de la región, se supuso que la modernización económica estaría acompañada por una profesionalización de las fuerzas armadas. Sin embargo, para esos años la mayoría de los países de América Latina eran gobernados por regímenes militares. La expansión de estos regímenes, era en gran medida una respuesta a lo que sus dirigentes consideraban un aumento de la amenaza comunista en la región, y por tanto de la seguridad nacional. Generalmente, se adujo la amenaza que en ese sentido representaba Cuba socialista para justificar esta posición. Pero es importante señalar que estos regímenes aducían que su instalación en el poder obedecía a lo anterior, cuando en la práctica intentaban sustituir el régimen establecido por uno propio.

Al respecto, la mayoría de los altos oficiales de las fuerzas armadas latinoamericanas, con especial referencia a los del Cono Sur, fueron entrenados en escuelas militares estadounidenses establecidas a lo largo del continente. Por el contexto de la guerra, la ideología imperante se basó en reforzar los conceptos de seguridad nacional. El argumento utilizado para legitimar la creciente militarización de los estados latinoamericanos relativo a la preparación de las fuerzas armadas ante un eventual "ataque

extracontinental", se vio rebasado por la inexistencia de una ataque de esa naturaleza por parte de países extracontinentales.

El alto grado de autonomía forjada a lo largo de muchos años y apoyada por Estados Unidos, generó en las filas castrenses un alto grado de autonomía y verticalidad y una significativa capacidad de intervención política. Sin embargo, en general los regímenes militares requieren en mayor o menor medida del apoyo de los civiles, para manejar una área en que han mostrado poca efectividad como es la política económica.

Por otra parte, para Estados Unidos su aprobación o reconocimiento a dictaduras claramente represivas que eliminan la práctica de los valores democráticos, o el establecimiento de regímenes civiles apoyados en las fuerzas armadas para su mantenimiento en el poder, dependerá en gran medida a la actitud de éstos hacia la estrategia política norteamericana en el contexto regional e internacional y a los intereses económicos y estratégicos que represente. En este sentido, el enfrentamiento que pudieron tener estos regímenes con algunos gobiernos estadounidenses, se centra en la interpretación de aquellos de que cualquier actitud contemplativa hacia gobiernos de corte populista o nacionalista, se interpretaba como una claudicación a los objetivos de contención de la subversión. La intensidad para "defender la democracia" por parte de Estados Unidos en un determinado conflicto, estará determinada de acuerdo a las circunstancias políticas o estratégicas que representan <sup>(21)</sup>.

La continuación del republicanismo en el poder a partir de 1988, significó un seguimiento de la política exterior seguida por las administraciones anteriores. La política exterior norteamericana mantuvo los objetivos de seguridad, aunque con un cambio de matiz al volverse más discreta -en principio- en su aplicación. Por ello, la intervención militar en Panamá en diciembre de 1989 y el establecimiento de un gobierno pronorteamericano en el país, tendrían como objetivo la rectificación radical de la política exterior norteamericana hacia la región.

Esta, fue blanco de severas críticas al interior de Estados Unidos sobre los pobres resultados que mostró, sobre un país de significativa importancia geoestratégica y económica como Panamá. En el mismo sentido, el despliegue militar con motivo de la invasión de Irak sobre Kuwait en defensa de intereses geoestratégicos y energéticos, refuerzan la posición en el sentido de que la actitud norteamericana frente a un conflicto, estará determinado por los intereses -de todo tipo- que estén en juego.

## 2.2 El caso de Argentina

Los países del Cono Sur pueden ser tomados como ejemplo de la militarización gradual que observaron los Estados latinoamericanos después de la segunda posguerra. La profesionalización de las fuerzas armadas de estos Estados marcó el inicio de su institucionalización, por lo que este nuevo militarismo se diferenció de su antecesor en la medida en que el poder recayó en las fuerzas armadas como institución.

Aún cuando el golpe de Estado en Brasil de 1964 se considera el inicio del establecimiento de regímenes represivos, éstos ya no se caracterizaron por ser autocracias en donde el poder lo ejercía un caudillo o un pequeño grupo del ejército. La tendencia de los militares, apuntó a la formación de estructuras políticas que justificaran su autoridad y la dirección política y económica a través de Gabinetes militares.

El fenómeno del militarismo, ha desarrollado una mayor presencia dentro aquellos estados que muestran una inestabilidad política y una tradición institucional no consolidada. Esta debilidad, ha hecho más difícil el control del poder civil sobre las fuerzas armadas que ejercen una autonomía política e institucional.

Anterior a la segunda posguerra, el establecimiento de regímenes militares, apoyados por civiles o en unión con éstos, se hizo más patente en aquellos Estados subdesarrollados cuya autoridad civil era cuestionable y débil. El período de 1930 a 1960, muestra que la intervención de los militares en la definición del proceso político se hizo presente en Estados cuyos regímenes mostraban una ineffectividad política. En esa década el militarismo tomó mayor fuerza, ejemplificado por los casos de Brasil, Argentina Perú y Chile.

Para este período, la región observó un cambio en la naturaleza de los gobiernos militares al volverse más doctrinarios e institucionalizados, respaldados por su idea de cambio político y económico. Esta nueva posición se hizo más patente con los cambios en el escenario internacional.

El establecimiento de un Estado socialista en la región latinoamericana representado por Cuba, impulsó la necesidad de combatir al comunismo en la región. Para ello, la contrainsurgencia se enmarcó bajo el punto de vista de que el cambio político y económico, es una condición indispensable para evitar revoluciones socializantes. Esta tarea por supuesto recae en las fuerzas armadas y los órganos policiales y parapoliciales, bajo el concepto de seguridad nacional que comenzó a englobar aspectos políticos, económicos y sociales.

En el caso de Argentina, el caudillismo ha jugado un papel preponderante en la historia política de este país y el cual registra una larga e histórica presencia. El caudillismo puede definirse como un sistema político patrimonial carente de elementos de continuidad y sustento político y cuadros de organización jerárquica. Este sistema continuó en alguna medida con el modelo de comportamiento legado por la corona española respecto a la relación patron-cliente que disminuyó la autoridad política del centro.<sup>(22)</sup>

Respecto al caudillismo, en Argentina el ejemplo más reciente lo constituye la figura de Juan Domingo Perón, quien después de su muerte se convirtió en el símbolo más representativo de una de las organizaciones políticas de mayor importancia en el espectro político de la Argentina, el Justicialismo.

Varios autores coinciden en la indefinición de lo que se bautizó como justicialismo. Este concepto -derivado de uno de los principales postulados del peronismo bajo el nombre de "justicia social", se señala que "trataba el máximo de beneficio para todas las partes del cuerpo social, siguiendo una vía que no era la del comunismo ni la del capitalismo -abanderada bajo el principio de la "tercera posición"- . ¿Cuál era la vía que realmente pretendía seguir? No lo explicaron nunca, y esa vaguedad lo mismo que la definición negativa que se daba, evoca ciertos recuerdos de otras doctrinas emparentadas con los diversos movimientos fascistas. Algunas veces parecía como si el peronismo se orientara a la creación de un Estado sindicalista, pero al final todo acababa, en el poder personalista, con indiscutibles inquietudes sociales y evidentes dosis de demagogia".<sup>(23)</sup>

Lo que es evidente, es que el mismo nacimiento del justicialismo como organización política con estructura propia, estuvo fuertemente influenciado por la observada en los partidos nacional socialista alemán y el fascista italiano.<sup>(24)</sup>

En la Argentina contemporánea la ausencia de líderes con capacidad de convocatoria se ha traducido en inestabilidad política. Durante las últimas décadas, el país sudamericano experimentó regímenes militares y civiles alternados. Del período de 1955 (año de la caída del peronismo) a 1973, Argentina escenificó la toma del poder de ocho presidentes -tres civiles y cinco militares-. En esta alternancia del poder, las crisis económicas que prevalecían en ese momento se constituyen como un común denominador.

Gradualmente, esta situación dio origen a democracias frágiles e influenciables -no sólo en Argentina-, de acuerdo a los intereses de los grupos de presión. Su incapacidad por lograr una solución a corto plazo de los problemas más apremiantes que desde la perspectiva de los militares alimenta la generación de movimientos subversivos, las destinó a ser sucedidas por regímenes militares cuya única diferencia era el grado de autoritarismo y represión utilizados en contra de los opositores.

### 2.2.1 Origen de las fuerzas armadas argentinas

El origen de las fuerzas armadas argentinas se remonta, como en la mayoría de los países latinoamericanos, al período anterior a la emancipación contra la corona española. Con los movimientos independentistas que marcaron el rompimiento de las colonias españolas al tutelaje español, en Argentina se crearon tres incipientes cuerpos militares. Estos se convertirían en la primera fuerza militar existente en el país.

Los "Blandengues", tuvieron sus orígenes poco antes del establecimiento del Virreinato del Río de la Plata. Bajo las órdenes del Virrey, desarrollaban funciones de

protección a las demarcaciones territoriales y de defensa de los españoles contra ataques de tribus hostiles. Estos apoyaron la expansión de las fronteras que favorecieron el establecimiento de nacionales españoles y la protección del comercio de los conquistadores. El segundo cuerpo militar conformado por las tropas coloniales, tenía como principal función el mantenimiento de la seguridad del Virreinato en contra de los intentos de invasiones externas, principalmente de la Gran Bretaña, y de defensa en contra de los intentos portugueses por establecerse en la región del Río de la Plata perteneciente a la ciudad de Buenos Aires.<sup>(25)</sup>

El tercer cuerpo, denominado la milicia militar, fue formado para contrarrestar la invasión británica a la ciudad de Buenos Aires en 1806. Esta ocupación, evidenció la incapacidad de la corona española por mantener la seguridad territorial del Virreinato. La expulsión de las tropas británicas estuvo a cargo de criollos, quienes junto con algunos españoles organizaron la resistencia y posterior expulsión de dichas tropas de la ciudad de Buenos Aires.

El segundo intento de la Gran Bretaña por ocupar Buenos Aires, encontraría el exitoso rechazo por parte de las milicias constituidas por los criollos residentes en Buenos Aires, lo que marcó el inicio del resquebrajamiento de la autoridad española sobre la región. Su incapacidad por controlar una insurrección emancipadora, tuvo como resultado la denominada "Revolución pacífica de mayo de 1810". Esta dio término al tutelaje español sobre Buenos Aires. El virrey fue obligado a renunciar siendo sustituido por una junta revolucionaria encabezada por criollos que declaró la independencia de facto de la ciudad de Buenos Aires.<sup>(26)</sup>

En 1816 el Congreso de Tucumán además de declarar oficialmente la independencia de Argentina respecto de la corona española, creó la Armada de las Provincias de Sudamérica. Esta se organizó con las fuerzas expedicionarias que enfrentaron a las milicias pro-españolas y que se mantuvieron en actividad hasta la derrota definitiva de éstas hacia 1820. En este periodo se consolidaron las independencias de otros países de la región como Chile y Perú.<sup>(27)</sup>

Los constantes conflictos territoriales de la Argentina con sus vecinos, en especial Brasil y Chile, mantuvo vigente la necesidad de contar con una fuerza armada capaz de preservar las fronteras establecidas y al país mismo. El principal conflicto entre Argentina y el imperio brasileño estuvo marcada con anterioridad por la intención de España y Portugal por controlar la Banda Oriental (Hoy Uruguay).<sup>(28)</sup>

La suspensión de las negociaciones entre Argentina y Brasil tendientes a crear un Estado independiente en dicha Banda, a causa de una invasión por parte de nacionalistas uruguayos desde territorio argentino, fue esgrimido por Brasil como una violación a la declaración de neutralidad hecha por Argentina. Bajo esta acusación, ambos países entraron en guerra en 1825.



Esta situación motivó la organización de una fuerza militar con ciudadanos de las entonces 9 provincias que conformaban el país, organizada por un estado mayor designado por las autoridades argentinas. La desventaja argentina respecto de Brasil en cuanto a organización y equipo militar fue evidente en el desarrollo del conflicto (29).

### 2.2.2 La etapa post-colonial

Los años posteriores a la independencia argentina se caracterizaron por el continuo estado de guerra civil. Estas enfrentaban a las tendencias unionistas y federalistas que propugnaban por el establecimiento de un Estado de acuerdo a sus intereses. El anarquismo que privó en este período, fue al mismo tiempo, resultado del surgimiento de numerosos caudillos en las provincias del país y Buenos Aires. Estos organizaron sus propias fuerzas armadas con gauchos, indios, entre otros, a quienes proveían de armas y tierra. Sus alianzas con otros caudillos regionales en contra de su principal enemigo, Buenos Aires, mantendría un carácter cuasi permanente hasta su federalización en 1880. Respecto de las fuerzas armadas agrupadas para luchar en contra de Brasil, no serían reorganizadas bajo un poder central sólo décadas después.

Paradójicamente, España había contribuido a la disminución de su poder sobre sus colonias al crear diversos centros de poder locales. Los terratenientes conformaron pequeños ejércitos armadas dentro de sus posesiones, beneficiando a dichos terratenientes dando origen al caudillaje como sistema político. Este adquirió funciones de defensa y expansión territorial donde el uso de la violencia constituyó un elemento de primer orden.

Este caudillaje derivó en la formación de dictaduras personales cuyo accionar se regía por la búsqueda del orden y progreso. Uno de los principales caudillos con estas características sería Juan Manuel Rosas (terratendiente de Buenos Aires). De tendencia federalista junto con Juan Facundo Quiroga (La Rioja), con la desaparición de éste Rosas se apuntala en el poder en 1829 al ser elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su elección estuvo marcada por el prestigio que logró atraerse con sus victorias militares al mando de su propio ejército conformado por gauchos -base de su poder-, que junto con las fuerzas armadas de la ciudad de Buenos Aires logró imponer las ideas federalistas.(30)

La principal base de apoyo a Rosas provenía de terratenientes, conservadores, comerciantes y élites religiosas que presionaban por la imposición de la estabilidad y el orden. Con este apoyo, Rosas logró establecer por primera vez una autoridad que en cierta forma tuvo un alcance nacional en el país, aunque los caudillos provinciales gozaron de autonomía.

Su primer período en el poder se caracterizó por los intentos de restauración económica y política del país. Ese mismo año (1829), Rosas es investido como líder militar por el poder legislativo bonaerense ya que, además de nombrarlo Gobernador, le otorgó poderes ilimitados por tres años, elevándolo al rango de General Brigadier con el título

honorífico de "Restaurador de Leyes". Esto significó un fortalecimiento de las fuerzas armadas, cuya principal tarea además de la protección territorial, sería apoyar la expansión de la tierra de cultivo en la amplia región de las Pampas enfrentando con éxito a las tribus indígenas. Este éxito le valió el apoyo de las clases terratenientes que lo instalaron de nueva cuenta en el poder ante la incapacidad de sus sucesores por mantener la unidad y estabilidad nacional y la expansión territorial lograda en su primer mandato. (31)

En efecto, la incapacidad de sus sucesores por continuar las ideas unionistas y expansionistas iniciadas por Rosas, motivó su reelección. Se le confirieron poderes dictatoriales, abriéndose paso a un período de represión y asesinato de opositores a su régimen. Con el objeto de mantenerse en el poder, creó un Congreso manipulable que lo confirmara como gobernador en cada término de su estancia en el poder.

En este sentido, la transformación económica de las haciendas hacia la mecanización que permitiera una mayor producción y capitalización, requería en gran medida de estabilidad política y la eliminación de la anarquía y el pillaje. Asimismo, este objetivo necesitaba de alianzas entre los intereses externos y locales representados por los terratenientes y comerciantes, cuyo mantenimiento se garantizaba con el uso de una fuerza armada extranjera.

Por otro lado, una de las principales contribuciones de Rosas se centró en haber logrado sentar los primeros pasos en el logro de la unificación nacional mediante el respeto a la autonomía provincial, pero a un gran costo social. Las tendencias autonomistas en las Provincias se mantuvo vigente por lo que las fuerzas armadas adquirieron un carácter provincial. En este sentido, Rosas conformó un ejército leal que cumplía funciones de protección personal a éste, así como de represión y espionaje sobre sus opositores.

La derrota militar que derrocó a Rosas del poder en 1852, estuvo a manos de un soldado surgido de sus filas, El General Justo José de Urquiza, Gobernador de la Provincia de Caseros. Años después de la derrota de Rosas, dos ejércitos coexistieron en el país con una estructura y organización propia y antagónicas entre sí: el conformado por las provincias y el ejército de Buenos Aires.(32)

La Constitución de 1853 creó el Ejército de la Confederación comandada por Urquiza. La derrota militar de ésta a manos del ejército de Buenos Aires en 1861, dirigido por el soldado y político Bartolomé Mitre lo convirtió en el primer presidente de la Argentina. La fuerza armada, en este periodo, finalmente fue conformada y consolidada en una institución unificada de carácter nacional. (33)

En un clima de inestabilidad política y social interna, Argentina, Brasil y Uruguay conformaron una alianza en contra de Paraguay. Las disputas territoriales de aquellos con Paraguay originaron la denominada "Guerra de la Triple Alianza" o "la guerra paraguaya" escenificada entre 1865 y 1870(34). En esta guerra los ejércitos de la Alianza, se enfrentaron con uno de los ejércitos mejor entrenados de la época como el paraguayo. El Presidente Mitre asumió el mando del ejército argentino. Estas fuerzas estuvieron

conformadas en su mayoría por voluntarios, miembros de la guardia nacional y de la milicia civil.

Los continuos conflictos que se presentaban tanto al interior como exterior del país, motivaron el inicio de esfuerzos por conformar una fuerza armada moderna y profesional. Programas de educación y entrenamiento militar fueron incorporados para impartirse a los aspirantes a cursar una carrera militar. El Estado Mayor fue modernizado e institucionalizado en la década de 1890 y para 1900 asesores militares de otros países, particularmente de Prusia, arribaron al país para apoyar la formación de los nuevos cuadros militares.

Anteriormente, entre 1868 y 1874 fueron establecidos el Colegio Militar y la Escuela Naval Militar, primeras instituciones militares en el país. Los primeros programas que abarcaban cinco años, conferían rangos a los aspirantes, para posteriormente ser incorporados en los distintos cuerpos militares como el de ingenieros, estado mayor, entre otros. Asimismo, la modernización del ejército incluyó la compra de las armas más avanzadas de la época.

Por su parte la Armada, cuya principal función se centraba en el transporte de tropas y armamentos y, en menor medida, a la protección de las costas, se vio beneficiada con la compra de navíos y equipo militar y la construcción de puertos. La necesidad de mantenimiento de estas naves motivó la instalación de una escuela naval para entrenar al personal en esa materia, siendo abierta en 1897 la Escuela Mecánica Naval.<sup>(35)</sup>

### 2.2.3 Inicio de la profesionalización del ejército a principios de siglo

El Gral. Julio Argentino Roca, en su segundo mandato (1898-1904), se convirtió en el principal promotor del desarrollo institucional y consolidación de las fuerzas armadas. Inició esfuerzos por lograr una mayor intervención de éstas en la vida política del país, enfatizando la combinación de disciplina militar y la supremacía de la autoridad civil sobre las fuerzas armadas. Estas fueron organizadas en cuerpos militares con estructura y organización propia subordinada a un mando central. Para ello se establecieron el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Marina con funciones definidas, sustituyéndose la Inspectoría General y Comando de Tropas por un Estado Mayor permanente.

El mandato de Roca constituye un ejemplo del uso del ejército como fuerza ilegal de represión a opositores políticos, además de utilizarlo para eliminar la autoridad de los gobernadores provinciales. Otro caso más reciente lo es el Presidente Hipólito Yrigóyen, 1916, quien en forma gradual intentó transformar al ejército profesional en una fuerza política personalizada para controlar los procesos políticos provinciales.

Las crecientes fricciones con Chile hacia 1900, a consecuencia del reclamo de posesión de éste sobre el Estrecho de Magallanes y la costa atlántica, reforzaron las ideas

sobre la necesidad de acelerar la profesionalización y modernización de las fuerza armadas del país. En esta época se inicia la influencia militar alemana.

En 1899 un grupo de asesores militares alemanes arribaron al país, establecieron la Escuela Superior de Guerra la cual transformaron en Escuela del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. De aquí surgirían los primeros tenientes y capitanes quienes previamente habían aprobado su carrera en el Colegio Militar. Asimismo, los programas incluían viajes a Alemania para reforzar su entrenamiento.

De esta forma, la influencia militar alemana jugó un papel decisivo en el establecimiento de una estructura y organización militar argentina basado en el esquema militar alemán. Esta similitud se profundizó a partir de 1907. Asimismo, Alemania se convirtió en el principal proveedor de armas, por lo que las relaciones de Argentina con otros países europeos y Estados Unidos en esta materia se mantuvo en un bajo nivel. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la pérdida de prestigio militar alemán por su derrota, las relaciones al respecto entre ambos países decayeron significativamente aunque éstas se mantuvieron vigentes hasta 1940.

La década de 1930 marca el inicio de una nueva fase en el desarrollo de las fuerzas armadas argentinas. Los intentos fallidos por establecer un ejército profesional y apolítico, estuvieron caracterizados por el crecimiento de éste tanto en personal como en gastos y por la activa participación de militares en la vida política de la nación. El clima de inestabilidad política y social del país, se traducía en agitación y descontento de las clases trabajadoras del país por medio de huelgas y paros.

Para enfrentar esta agitación, en no pocas ocasiones en forma violenta, el gobierno empleó la represión para disolver manifestaciones y concentraciones antigubernamentales. Esta tarea estaba a cargo de la policía nacional y grupos paramilitares, que al verse superados por la situación, indujeron el surgimiento de un nuevo grupo de choque, las fuerzas armadas.

El régimen radicalista de esa época, representada por Hipólito Yrigóyen, enfrentó el período de segunda posguerra que terminó con un período de prosperidad argentina por el incremento de las exportaciones de productos primarios de una Europa en guerra. Al interior del país, el declive económico se presentó en los dos períodos de posguerra. La presencia económica norteamericana se incrementó sustancialmente a partir de 1923 para apoyar la industrialización del país, por lo que la inestabilidad política se convirtió en un freno a los intereses de las élites argentinas quienes otorgan su apoyo a los actores políticos capaces de mantener y ampliar sus privilegios.

La depresión mundial de 1930 rompe con el esquema económico basado en la exportación de productos primarios. Esta desarticulación derivó, al interior del país, en la caída del radicalismo, y la entrada de los militares al poder político. La participación política acentuada de los militares, se convirtió en una característica del proceso político argentino como resultado de la intensa participación en esa área de oficiales, especialmente del ejército.

El derrocamiento de Hipólito Yrigóyen en 1930 por parte de las fuerzas armadas, se constituyó como el primer gobierno militar en la Argentina. Desde ese momento, los militares indujeron una mayor presencia en la conducción política y económica del país, apoyados por grupos cuyos intereses se mantenían a salvo con la presencia de los militares en el poder. <sup>(36)</sup> Generalmente, los militares intervenían en política en casos que consideraban de "emergencia" -agitación social incontrolable por autoridades civiles, huelgas, aparición de movimientos subversivos de tendencia izquierdista, entre otros-.

Su intervención, además, se consideraba de transición en tanto lograban la pacificación, por cualquier medio, del país para delegar el mando del país a civiles afines a sus ideas de disciplina y orden. La permanencia en el poder, pronto se sujetó al apoyo de los militares que gradualmente adquirieron la capacidad de imponer o deponer gobiernos en alianza con los grupos y organizaciones políticas y sociales.

Sin embargo, las fuerzas armadas como los demás grupos políticos, no estaba exenta de divisiones internas. Las diferencias estuvieron generalmente marcadas por aspectos ideológicos. Por una parte, el ejército era partidario de las ideas neofascistas emergentes en Europa y la Armada sostenía la necesidad de establecer una democracia representativa -abanderada por los radicales-. Además pugnaban por el logro de un ejército profesional y apolítico subordinado al poder civil.

Esta división se mantuvo durante las décadas posteriores. Como grupo de presión política, las diferencias estuvieron marcadas por la lucha por lograr mayor influencia y poder. A partir de 1945, estas divisiones se acentuaron con el surgimiento y evolución de las ideas del coronel Perón y el sistema político y económico que debía imponerse.

### 2.2.3 El Golpe de Estado de 1943 y la corporativización del ejército argentino

El golpe de Estado de 1943 en Argentina llevado a cabo por un sector del ejército denominado Grupo Obra de Unificación (GOU), se relaciona con la tradición de caudillaje que mantiene una vigencia en ese país. Es decir, por medio de este Grupo, el coronel Juan Domingo Perón como uno de los líderes del GOU, posteriormente designado como Ministro de Guerra, utilizó esta posición para aumentar su poder e influencia y para persuadir a los militares apolíticos para adherirse a dicho Grupo. Al mismo tiempo y apoyado por el ejército, creó un movimiento laboral por medio de alianzas con líderes obreros, controlado por medio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Para 1945, con Perón en la Presidencia, el ejército se transformó en una institución sustituyéndose a la clase terrateniente por la nueva burocracia de corte militar. Esta absorbió más del 50% de los gastos gubernamentales, proporción sin precedentes en la Argentina. Parte del éxito de este Grupo, se debió al grado de cohesión y unidad ideológica y política logrado por éste, así como por sus intentos de convertir al ejército en un cuerpo institucional con capacidad de autogobierno.

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Argentina mantuvo una posición de neutralidad hasta muy avanzado el conflicto. Por este motivo, Argentina se convirtió en el único país latinoamericano que no recibió ayuda militar norteamericana. Asimismo, la guerra en Europa significó el corte en el suministro de equipo y armamento. De esta forma, Argentina aceleró el desarrollo de su industria militar a fin de contrarrestar la dependencia en esa materia. Al efecto, se estableció, la Dirección de Fabricaciones Militares controlada por las fuerzas armadas.<sup>(37)</sup>

La derrota de las potencias del Eje y las presiones norteamericanas y al interior del país rompieron con la neutralidad Argentina. La declaración de guerra de ésta contra Alemania y Japón, quebró el esquema de cooperación militar que el país sudamericano mantuvo con Europa, especialmente con Alemania. Con la terminación del conflicto, las relaciones entre Estados Unidos y Argentina se tornaron más favorables. Para 1947 dichas relaciones se normalizaron con la deportación de nazis que se encontraban en territorio argentino y con el cumplimiento de las provisiones anotadas en el Acta de Chapultepec previamente firmada por Argentina. Asimismo, el país sudamericano se unió a las naciones firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) promovido por Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos en 1948.<sup>(38)</sup>

En este período de posguerra, Argentina adoptó una política que se denominó la "Tercera Posición", en un intento por desligarse del enfrentamiento capitalismo vs. comunismo. Esta política se mantendría en los años posteriores, llegando incluso al enfrentamiento con Estados Unidos por las intenciones de hegemonía argentina sobre el Cono Sur y el área atlántica.

Por otro lado, hacia 1955 el aparato militar argentino comenzó a descender en número. La caída del peronismo, significó la apertura a reorganizaciones internas. Cinco cuerpos de la armada fueron creados asignados a igual número de regiones militares, los cuales remplazaron a dos comandos del ejército.

El triunfo de la revolución cubana y su posterior definición como socialista, abrió el período en el que los Estados latinoamericanos aceleraron su militarización. En Argentina bajo el régimen militar las alianzas con Estados Unidos en materia de cooperación militar se mantuvieron. El intento del Presidente Frondizi por adoptar una posición neutral frente al caso cubano, chocó con el carácter anticomunista que desarrollaron las fuerzas armadas.<sup>(39)</sup>

La creciente politización de las fuerzas armadas, contribuyó a la generación de facciones. Entre 1962 y 1966, cuatro presidentes civiles fueron removidos de su cargo por los militares. Estas facciones estaban representadas por un sector conservador denominada "azules", y los "colorados" sector rígido de los militares. Estas facciones coincidían en la restauración del poder civil, pero no en la forma de llevarla a cabo y una tercera facción de línea dura, los "golpistas", favorecían el mantenimiento de los militares en el poder por tiempo indefinido.

El esquema de Guerra Fría y el carácter anticomunista de las fuerzas armadas favoreció la gestación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada en Estados Unidos.<sup>(10)</sup> Hacia 1960, las fuerzas armadas argentinas asociaron dicha doctrina con el desarrollo económico. En 1966 es derrocado el General Onganía por los militares. La junta militar que asumió el gobierno del país, enunció el Acta de la Revolución Argentina, la cual incluyó una reorganización estructural de las fuerzas armadas, bajo los lineamientos de la naciente Doctrina de Seguridad Nacional.

Los aspectos institucionales del Acta de Reorganización Nacional, incluyeron la creación del Sistema Nacional de Planes de Seguridad y Acción conformada por el Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Desarrollo. Estas instituciones creadas por el ejército, se convirtieron en el gobierno en sí al recaer en ellos la revisión de las políticas y estrategias propuestas por el régimen en aspectos de planificación y estructura económica y militar del país.

La influencia norteamericana en aspectos de seguridad nacional bajo la visión de contención de movimientos izquierdistas, influyó de manera decisiva en la concepción castrense de ser el actor indicado para mantener el orden interno. La doctrina de seguridad nacional incluyó medidas para promover el desarrollo económico como método de contención a los movimientos contrainsurgentes. Esta asociación a los lineamientos de seguridad nacional, motivó un incremento en la responsabilidad de los militares por mantener dicha seguridad mediante el apoyo al desarrollo económico. Para 1969, las fuerzas armadas como institución politizada e ideologizada ante el marco de creciente violencia motivada con el surgimiento de movimientos guerrilleros en el país, la DSN se asoció directamente para eliminar la subversión izquierdista.

El golpe militar de 1976, abre el período de mayor represión institucional en la historia argentina. La instrumentación del Proceso de Reorganización Nacional incluyó como objetivo principal, dentro del marco de la seguridad nacional, la eliminación de los movimientos guerrilleros manifestados al interior del país. Este fue el justificante para la inclusión de las fuerzas armadas dentro de esta tarea que llevó al país durante ocho años a un estado de excepción.

## 2.3 Establecimiento y evolución del peronismo hasta su caída en 1976

### 2.3.1 Surgimiento del peronismo

En 1939 estalla un nuevo conflicto bélico. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ubicó a Argentina como uno de los principales proveedores de alimentos y materias primas para Europa, principalmente Gran Bretaña. Su política de neutralidad, propició que para 1944, ésta pasara a ser dependiente de las exportaciones de carne argentina.

El incremento sustancial de las exportaciones primarias de la Argentina trajo consigo una nueva prosperidad económica, al grado de desafiar las presiones norteamericanas para que el país sudamericano dejara a un lado su política de neutralidad<sup>(41)</sup>. Esta posición estaba fortalecida por los niveles mínimos en que se encontraba el intercambio comercial con Estados Unidos en contraposición de una economía de complementación existente con otros países europeos, además de la Gran Bretaña.

En este marco se desarrolla uno de los movimientos nacionalistas que transformaron sustancialmente el marco político tradicional de la Argentina. Este surge dentro de las filas del ejército, siendo uno de sus principales promotores el entonces Coronel Juan Domingo Perón.

En lo que se ha denominado la doctrina peronista, como movimiento político se caracterizó por agrupar a grandes masas de obreros como base de poder, para representarlos políticamente. En su desenvolvimiento, no obstante, adoleció de fallas al ser incapaz en promover un proyecto político nacional que agrupara a todos los actores de incidencia en la vida nacional. A pesar de la influencia de Perón en la conformación de la política nacional durante sus mandatos de 1946 a 1955, continuaron vigentes los antagonismos y concepciones del modelo de desarrollo divergentes. Dichos antagonismos paulatinamente llevaron a la Argentina a la desorganización política y la creación de un Estado supeditado a los intereses encontrados de las facciones divergentes. Para esta época, el escenario político contó con un nuevo actor, el ejército como institución de alcance político nacional.

Al interior del país, la inestabilidad política permaneció vigente, la cual no varió con la denominada "Revolución de junio de 1943" derivada del Golpe de Estado de esa fecha. El derrocamiento del Presidente Ramón Castillo por el grupo de oficiales agrupados en el Grupo Obra de Unificación (GOU), transfirió el poder que mantenía la clase conservadora a la nueva burocracia militar. Las disposiciones del nuevo régimen con tintes de nacionalismo económico, chocaron con la influencia de las ideas facistas que prevalecen dentro del GOU.



Perón, descendiente de una familia rural de clase media de la Provincia de Buenos Aires, fue educado en colegios militares. Inició su carrera militar en 1915 y en 1930 se convierte en instructor de la Escuela Superior de Guerra. En 1936 es designado agregado militar en Chile y en 1939 es trasladado a Italia como observador militar.

Su estancia en Europa le permitió adquirir una mayor profesionalización de su carrera militar. Asimismo, profesó su admiración e influencia por los nuevos Estados corporativos instalados en Italia y España. A su regreso a la Argentina se convirtió en uno de los forjadores del GOU, grupo que estuvo beneficiado en su desarrollo con la emergencia de nuevos oficiales desligados de los partidos políticos y las organizaciones laborales controladas por la clase conservadora. Estos oficiales representaron a una generación que apoyaba un nacionalismo riguroso, contrario a la supeditación argentina a los intereses externos.

El nuevo régimen militar resolvió la implantación del estado de sitio, la disolución del Congreso Nacional, de los partidos políticos, de sindicatos de tendencia izquierdista, el encarcelamiento, asesinato y persecución de líderes gremiales y políticos de cualquier ideología política en oposición al nuevo régimen, así como la intervención de las Universidades y las Provincias. En materia económica adoptó una política de promoción de la industrialización basada en un nacionalismo económico (estatización de empresas) la soberanía política (ratificación de su política de neutralidad en el conflicto mundial) y al interior la promoción de la justicia social.

La economía agroexportadora anterior a la Segunda Guerra Mundial fue sustituida por una política nacionalista de corte popular, pero creada y dirigida por el gobierno militar. En esta estrategia la neutralidad jugó un papel de primer orden, la cual se tradujo en una captación sin precedentes de divisas provenientes de las exportaciones. Sin embargo, estas medidas no contaban con un apoyo sustancial, a excepción del de las propias fuerzas armadas. Esto, en momentos en que la clase obrera se sumergía en una lucha aunque no abierta, en pro de la satisfacción de sus crecientes necesidades.

El significado político de la nueva ascensión al poder de los militares, se alzó como la culminación de un proceso de desintegración de las organizaciones políticas tradicionales, dando paso a la desaparición de caudillos como factor inherente para la toma del poder de los militares. Esta, transformó al ejército en una alternativa política al incorporarse plenamente en la vida nacional en todos sus ámbitos.

No obstante, el nuevo régimen militar no estuvo exento de divisiones y luchas internas por la toma del poder. La sucesión presidencial controlada por los militares, se constituyó como el elemento de mayor peso para la designación o destitución de Presidentes militares o civiles. La permanencia de éstos en esa posición, dependió en adelante de su voluntad de gobernar bajo la supeditación de sus decisiones a la aprobación previa de la institución castrense.

En ese sentido, la negativa del Presidente Rawson para someterse a la autoridad de las tres armas, derivó en su destitución dos días después de haber asumido la presidencia. Fue sustituido por el General Pedro P. Ramírez quien continuó la política de represión de movimientos disidentes y de nacionalismo económico. El deterioro de su salud lo obligó a dejar en principio y después en forma definitiva la presidencia, asumiéndola el General Edelmiro Farrell quien designa a Juan Domingo Perón como Vicepresidente, manteniendo sus otros cargos.

Al interior del ejército, se inicia asimismo una lucha entre dos facciones antagónicas. Aquella que proponía una política de neutralismo y nacionalismo y la que proclamaba a la democracia y a la libertad como camino a seguir. Este carácter dualista del gobierno militar, generó paulatinamente antagonismos y enfrentamientos cada vez más fuertes.

Desde su cargo de Ministro de Guerra y Secretario del trabajo y Previsión Social, Perón controló al mismo tiempo a la oficialidad y, en materia laboral, adoptó una política de beneficios a la clase trabajadora. Esta, se asentó en la evolución satisfactoria de la economía derivada de la coyuntura de guerra prevaleciente en Europa. De esta forma, Perón fue el único hombre capaz de encauzar la concesión de las demandas de los trabajadores como base de poder político. Al frente del Ministerio del Trabajo, desarrolló a partir de la década de los cuarenta una base de poder independiente apoyado por el ejército y sustentada en las clases bajas, hasta ese momento divididas y políticamente mal organizadas. Creó un movimiento nacional controlado y apoyado por el Estado, pero considerado por la clase obrera como propio. Al efecto, fueron creadas la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación General Económica (CGE).

Esta política nacional con tintes populistas y retórica socialista por su contenido de beneficio social, encontró en su desarrollo al proletariado como su más amplia base política. Sin embargo, Perón adoptó una política mixta hacia la clase trabajadora. La creación de la CGT, se conforma como una institución que agrupa a grandes masas de trabajadores bajo la nueva orientación sindical que representa el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Al mismo tiempo Perón, apoyado por la estructura del Estado, utilizó la violencia, la coerción, persecución y encarcelamiento contra líderes sindicales, universitarios y la nueva clase industrial que se desarrolla en esta etapa. Esta actitud hostil fue motivada por la negativa de éstos a adherirse al movimiento peronista y que abanderaban una ideología distinta a la impuesta por Perón. Este, dividió sindicatos y creó alternos de filiación peronista para atraer a los trabajadores bajo el espejismo de la concesión casi irrestricta de sus demandas. La formación de una estructura legal de leyes sociales, propiciaron profundas modificaciones en las condiciones de trabajo, así como la formación de líderes para la actividad gremial.

Este movimiento pronto se caracterizó por su carácter nacional y populista con una explotación de la figura de Perón quien construye un gobierno autoritario -

personalizado en su figura- y retóricamente antiimperialista. Su política, cobra vigencia plena al asumir la presidencia en febrero de 1946.

En principio la nueva clase industrial aceptó la concesión de las demandas, favorecidos inicialmente por la política de créditos baratos adoptada por el Estado. A los crecientes beneficios otorgados a la clase trabajadora, en el ámbito rural Perón adopta el denominado Estatuto del Peón, primero en su género en la defensa de las clases bajas campesinas, la cual provoca la reacción de oposición de la poderosa Sociedad Rural Argentina y otras asociaciones rurales (<sup>42</sup>)

Por su parte, el Presidente Farrell decide levantar el estado de sitio e inicia una política de nacionalizaciones, fomentada posteriormente por Perón que lesionaron los intereses externos. La presión de la clase terrateniente conservadora que mantenía su poder económico, se aunó al descontento dentro de algunos sectores de las fuerzas armadas, motivadas por la creciente popularidad de Perón. En lo externo, se sumó la presión norteamericana que definía al régimen militar argentino de fascista. Esta situación derivó en la destitución de Perón como Vicepresidente y su detención por los militares. Previamente, Perón había alertado a las masa trabajadoras de la infiltración de fuerzas internas y externas que buscaban su destitución, como una forma de romper las "conquistas" logradas por el proletariado.

Su caída provocó un período de anarquismo, donde las fuerzas que lo derrocaron, incluido el ejército, no lograron conformar un consenso en la política a seguir, representados por Farrell, que conciliara sus variados intereses. En este contexto, la clase obrera inició acciones para presionar a los patrones para cubrir las disposiciones tomadas por Perón, relativas a aumentos de salarios y aguinaldo -instituido ese año de 1945-, ante la negativa de los primeros a satisfacerlas.

La presión se tradujo en importantes movilizaciones y huelgas que paralizaron la producción nacional. Al mismo tiempo, exigían la excarcelación de Perón, producto del apoyo que logró conformar dentro de la clase obrera en su gestión al frente del Ministerio del Trabajo. Su liberación se concedió días después, y el gobierno militar del Presidente Farrell, desarticulado políticamente, se vio obligado a convocar a elecciones, las cuales se llevaron a cabo el 23 de febrero de 1946.

### 2.3.2 "Evita"

Un actor importante dentro de esta organización de las movilizaciones obreras lo constituye Eva Duarte, mejor conocida como "Evita", quien posteriormente se convirtió en la segunda esposa de Perón. Eva Duarte, fue un elemento de capital importancia en la conformación del Estado populista y paternalista impulsado por Perón. Esta se convirtió en el símbolo de las aspiraciones revolucionarias de las clases bajas argentinas, principalmente las mujeres. Contrajo matrimonio con Perón al asumir éste la presidencia.

La expresión de los obreros mediante huelgas generales de protesta, a las que se identifica comunmente como "las jornadas de Octubre"<sup>(44)</sup> por el mes en que se escenificaron, en sí no fueron el resultado de la convocatoria de organizaciones políticas. Estas podría decirse, se sucedieron en una forma relativamente independiente, como consecuencia de la nueva coyuntura política, identificada con la figura de un líder como Perón, asesorado por Eva Duarte, quien poseía un carisma y autoridad superior al del propio Perón. Este, gradualmente se convirtió en árbitro y juez de las desiciones políticas en pro de las clases bajas, en detrimento de la clase conservadora del país, apoyada por Estados Unidos.

### 2.3.3 El proceso electoral de 1945

La actividad preelectoral estuvo marcada por los mutuos ataques de las facciones y grupos políticos antagónicos que lucharon por lograr un triunfo electoral que legitimara, al menos en método, su estancia en el poder. En la elección se enfrentaron la fórmula conservadora representada por los antiperonistas Tamborini-Mosca para presidente y vicepresidente, respectivamente. Esta fórmula estuvo apoyada por la Unión Democrática, la cual agrupaba a las más variadas tendencias políticos divergentes ideológicamente.<sup>(45)</sup>

A esta fuerza política se incorporaron los sectores conservadores del radicalismo dominados por la facción antipersonalista -donde Tamborini fue uno de sus principales forjadores, partidos de izquierda, la clase terrateniente y la burguesía industrial, sectores religiosos agrupados en Acción Católica que enarbolaban su política en contra de cualquier nacionalismo excesivo o autoritarismo, y sectores de profesionistas.

Contaron asimismo, con el apoyo abierto otorgado por Estados Unidos que calificaba a Perón como representante latinoamericano del nazismo. En este sentido, el gobierno norteamericano publicó el denominado "libro Azul", en el cual se acusaba a Perón de haber sido agente a sueldo de la Alemania nazi. Como respuesta, Perón publicó su "Libro Blanco y azul", por medio del cual incorporaba pruebas del espionaje norteamericano en Argentina durante la guerra.<sup>(46)</sup>

En contraparte, la fórmula Perón-Quijano fue nominada como loas aspirantes a la presidencia y vicepresidencia. Estos contaron con el apoyo del recién creado Partido Laborista, independientes, y la facción de los radicales agrupados en la Junta Renovadora, conformada por dirigentes sindicales de filiación socialista y comunista, así como otras expresiones de izquierda que se opusieron a su incorporación a la Unión Democrática.

El proceso electoral controlado por el ejército, dio a Perón el triunfo y la Presidencia que inaugura en junio de 1946. Asimismo, sus colaboradores ganaron la mayoría de las gubernaturas del país, así como la mayoría de las diputaciones en el Congreso Nacional.

### 2.3.4 Primer mandato presidencial de Perón

Durante su mandato, Perón acentuó la política de nacionalizaciones iniciada con Farrell -en la que se incluye la de los Ferrocarriles y teléfonos-, y de protección a las clases trabajadoras. Su esposa, Eva Duarte, desarrolló su actividad dentro del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Instrumentó una política de protección a los desposeídos, creando paulatinamente un Estado paternalista. Su influencia fue decisiva en la creación del movimiento de las Mujeres Peronistas, promoviendo de esta forma el involucramiento de la mujer en la política argentina.

El excesivo personalismo del poder representado por Perón, abrió paso a crecientes diferencias con los partidos que los apoyaron. Como resultado, durante su primer año de gobierno, Perón disuelve los partidos políticos, además del sometimiento y persecución de líderes contrarios a su política de nacionalismo extremo. Asimismo inició un proceso de industrialización, el cual se apoyó en la prosperidad económica resultante de la segunda guerra mundial. Como forma de institucionalización, es creado el Partido Unico de la Revolución, antecedente del Partido Peronista.<sup>(47)</sup>

Perón creó un gigantismo estatal, convirtiéndose en el regulador único de toda situación. El gobierno encabezado por él, gobernó por encima de la sociedad y las instituciones políticas nacionales con apoyo de las fuerzas armadas, la burocracia y la policía. A pesar de esta influencia, fue incapaz de convocar a un acuerdo general en el que estuvieran representadas todas las fuerzas políticas, en el cual se debatieran los grandes problemas que aquejaban a la nación.

Perón suprimió todo pensamiento independiente dentro de su movimiento, en su búsqueda de la obediencia irrestricta, contra una democratización efectiva del movimiento obrero representado por los sindicatos de filiación peronista. En su movimiento, estuvo presente una ideología inorgánica de tendencia totalitaria. La ausencia de elecciones internas para elegir candidatos estuvo combinado con el obrerismo y el populismo impulsado por Perón.

Como resultado, este movimiento fue incapaz de instrumentar un programa que desarrollara la ideología de la clase obrera, la cual institucionalizara el movimiento iniciado por éste y ganar el apoyo de la nueva clase industrial a la que hostigó. Asimismo, la nueva clase media nacional y la clase trabajadora, no crearon partidos que los representaran políticamente. En este sentido, el peronismo tendió a considerar las actividades de los partidos políticos de oposición, sindicatos y organizaciones profesionales como ilegales, bloqueando su accionar desde la esfera del gobierno.

La política de nacionalizaciones mencionada, sin embargo, no tocó la estructura comercial, agrícola y financiera, prevaleciente antes de la segunda guerra mundial. A pesar del franco enfrentamiento de la Argentina rural con la Argentina industrial, la primera mantuvo su influencia en el proceso económico argentino. Aunado a lo anterior, la

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

disolución de los partidos políticos populares, fueron factores que transformaron la "democracia revolucionaria" que abanderó Perón, en una dictadura burocrática.

Su política de beneficios sociales, nacionalizaciones e impulso de la industrialización por medio de la política de sustitución de importaciones, significó a Argentina una creciente descapitalización, resultado de su dependencia de las importaciones de bienes de capital. La transferencia de capital a la industria, provocó enfrentamientos entre la el gobierno y la clase conservadora.

El estallido de la guerra de Corea, evidenció la fragilidad del modelo económico aún bajo Perón. Dicha guerra trajo una recuperación económica momentánea, con el aumento de las exportaciones hacia Estados Unidos, la cual termina con su culminación. Asimismo, el escenario mundial observa nuevos cambios, caracterizados por el inicio de la guerra fría. Argentina mantuvo una política exterior de no alineamiento, la cual se denominó como la tercera posición.<sup>(48)</sup>

### 2.3.5 Reelección de Perón

La reelección de Perón en 1951, observa cambios en la política interna. Perón continuó con su política populista para mantener a la clase obrera lejos de la influencia de la clase conservadora. Sin embargo, esta política pronto entró en una fase de estancamiento. La prosperidad derivada de la segunda guerra gradualmente se vio restringida. La recuperación económica de Europa y la caída de los precios de exportación de los productos argentinos, provocaron crecientes déficits al Estado que terminaron con la etapa de prosperidad nunca antes vista en Argentina.

Antes de asumir por segunda ocasión la presidencia en junio de 1952, Perón debió enfrentar alzamientos militares en su contra. Implantó el estado de sitio, el cual se mantuvo hasta su caída en 1955. Un mes después de haber asumido la presidencia, "Evita" muere de cáncer y con ella una fase de radical importancia del peronismo<sup>(49)</sup>.

La clase conservadora apoyada por el exterior, comenzó a reorganizarse paulatinamente. Apoyados en la estructura de posesión territorial que no fue modificada radicalmente, la clase conservadora comenzó a recuperarse políticamente. Lo anterior, en un país donde la posesión de la tierra era la norma de prestigio social y de poder, y donde la modernización de la industria pesada no tenía cabida.

A pesar de su influencia, Perón no instrumentó una política de industrialización que se basara en la explotación, a toda su capacidad, de las grandes extensiones de tierra cultivable en manos de los terratenientes. Por ello, el fracaso de la política económica de Perón, estuvo marcada por la dependencia del Estado a las divisas acumuladas provenientes de las exportaciones de materias primas y alimentos. El éxito de esta estrategia, implicaba la nacionalización de dichas posesiones, para incorporarlas al Estado como sector estratégico de su desarrollo, la cual nunca llegó a realizarse.

Además de su enfrentamiento con los sectores conservadores, en este período se gesta uno nuevo con la Iglesia católica. Diversos sectores eclesiásticos conformaron el Partido Demócrata Cristiano, que mantenían vínculos con la clase conservadora del país. Estos se oponían a los objetivos políticos, económicos y sociales impuestos por el peronismo.

Los sectores adversos a Perón, intentaron eliminar la influencia de éste en las organizaciones sindicales. Perón enfrentó estos intentos, incluyendo en sus discursos advertencias a la clase obrera argentina sobre la infiltración de sectores religiosos en la actividad sindical. Este enfrentamiento creció gradualmente, al grado de que Perón ordenara la expulsión del país de clérigos acusados de conspiración subversiva. Los partidos políticos y los sectores conservadores, vieron en ello su oportunidad de aliarse con los sectores eclesiásticos adversos a Perón.

Los mutuos ataques que se prolongaron, obligaron a Perón a instrumentar medidas antireligiosas, entre las cuales se incluye el proyecto de ley para legalizar el divorcio, separación iglesia-Estado, la supresión de la educación religiosa en las escuelas, así como de subsidios estatales a colegios patrocinados por la iglesia, eliminación de días festivos por motivos religiosos, entre otros.

A este clima de agitación política, se sumó el anuncio por el Estado, de un contrato de explotación petrolera con una compañía norteamericana. Este nuevo elemento fue utilizado por los adversarios políticos de Perón al que acusan de poner en riesgo la soberanía nacional. A este último elemento, se incluyó la propuesta de iniciativa de la CGT, la cual proponía la sanción del proyecto de ley para la separación de la Iglesia y el Estado.

Como resultado, Perón debió enfrentar en junio de 1955 un alzamiento que cobró decenas de vidas de ambos bandos, promovido por la marina, para derrocarlo. Este intento, aunque fallido, -que no escapó a las represalias de Perón contra los alzados y los bienes de la Iglesia- se convirtió en el antecedente de su caída dos meses después.<sup>(50)</sup> El marco político prevaleciente mostraba a un Perón crecientemente aislado. Su excesivo personalismo, había eliminado la conformación de un proyecto ideológico alimentado por la clase obrera y el naciente sector industrial.

En julio de 1955 Perón intentó poner en marcha un diálogo con la oposición. Al efecto, renunció a su cargo de "Jefe de la Revolución" y el día 15 a la presidencia del Partido Peronista. Sin embargo, la tregua propuesta por Perón no fue aceptada por la oposición. Las campañas en contra de Perón organizadas por la clase conservadora, apoyada por Estados Unidos, logró allegarse a una parte del ejército.

En septiembre de 1955, se inició el movimiento promovido por la clase conservadora y el ejército, que puso fin a diez años de régimen peronista. Perón renunció a la presidencia abandonando el país para dirigirse a Paraguay, República Dominicana y

finalmente España, desde donde asumió la resistencia peronista, sustituyendolo en el poder el General Lonardi.

### 2.3.6 Proscripción del peronismo

El frente que derrocó a Perón, agrupó a diversos sectores como la iglesia, partidos no peronistas y representantes institucionales o ideológicos de la clase media y del sector rural y urbano. A pesar de la diversidad ideológica de dichos grupos, éstos pudieron mantener su cohesión en pro de la destitución de Perón y su influencia. En su estrategia, adoptaron la bandera de la "democracia" en contraste al carácter de gobierno autoritario atribuido al régimen peronista.

Esta insurrección cívico militar, al mismo tiempo que inició un nuevo período en la vida política argentina, abrió paso a un nuevo proceso gradual de inestabilidad política. La desintegración observada en los diferentes regimenes que gobernaron a la Argentina, sólo se diferenciaron por la violencia acrecentada que utilizaron para mantenerse en el poder. En forma definitiva, surgieron fuerzas políticas con capacidad de obstruir los proyectos políticos de sus adversarios pero incapaces, al mismo tiempo, de imponer los propios.

Por principio el modelo político establecido por Perón, basado en el contacto directo del dirigente con las masas, fue eliminado. Este modelo convirtió a Perón en el único depositario, de hecho, de la representación popular. En forma gradual, esta personalización del poder erosionó la legitimidad de las instituciones políticas establecidas y la desactivación de los canales partidarios de expresión política.

Por otro lado, en diez años de gobierno Perón creó una nueva legislación obrera e industrial, un importante aparato estatal de empresas. Favoreció el inicio de la investigación atómica y abrió los cauces de expresión política de las mayoría de la población representada por la clase obrera y campesina.

### 2.3.7 El contexto post-peronista a partir de 1955

A partir de 1955 se da un cambio de papeles. La junta militar que encabezó al gobierno inició la persecución sistemática de todo vestigio peronista en pro de su completa proscripción. Previamente el sucesor de Perón, el General Lonardi, que representaba ideas democrático-liberales, intentó poner en marcha un plan de reconciliación nacional, que de alguna forma conciliara los intereses de los sectores liberales y conservadores. Sin embargo este plan careció de viabilidad, dada la gran influencia de los segundos dentro de las filas del ejército.

Los militares plantearon a Lonardi diversas propuestas, entre las que se incluyeron la destitución de los militares de corte nacionalista, la creación de una junta militar que compartiera el poder con el Ejecutivo, la intervención de la CGT y la disolución del Partido



Peronista.<sup>(51)</sup> La negativa de Lonardi a dichas peticiones que calificó de extremistas, derivaron en su destitución por el ejército sólo dos meses después de haber asumido el cargo de presidente de la nación.

### 2.3.7.1 Pedro E. Aramburu

Lonardi fue sustituido en el cargo por el General Pedro E. Aramburu, nuevo Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Su designación representó la restauración de la estructura económica agroexportadora, la depuración en las filas del ejército y la proscripción total del peronismo. Junto con el Almirante Rojas, uno de los principales impulsores del alzamiento que derrocó a Perón, la actividad gremial afiliada al peronismo fue suprimida, -en muchos casos se instrumentó una política que intentó sin éxito reincorporar a los sectores peronistas al nuevo esquema político-, dirigentes perseguidos, encarcelados y en muchos casos asesinados. La CGT y la CGE fueron inmediatamente intervenidas por los militares y la administración peronista sujeta a denuncias y acusaciones de todo tipo.

En principio, este nuevo régimen militar intentó restablecer la legitimidad de las instituciones políticas y la reincorporación de los partidos no peronistas a la actividad política. Sin embargo, este objetivo se frustró repetidamente. El objetivo inicial de reincorporar a los sindicatos peronistas al aparato estatal fue obstaculizado por los propios sindicatos que seguían fieles a la doctrina peronista. El frente que asumió el gobierno, liderado por los militares, suponían que la denuncia del régimen "totalitario" representado por Perón, era la llave de paso a una reincorporación de ex-peronistas a la esfera de los partidos y sindicatos de filiación conservadora.

Esta estrategia pronto evidenció su inviabilidad. Al parecer, la tendencia declinante mostrada por la economía como resultado de la recuperación de las economías europeas, mantuvo la esperanza del retorno de su líder exiliado, evocando la época de prosperidad que sólo Perón podía ofrecer. El peronismo logró conservar su vigencia, convirtiéndose en un importante movimiento opositor. En este sentido, fue capaz de bloquear la estrategia política y económica de los subsiguientes regímenes militares y civiles mediante la presentación de exigencias económicas y el apoyo a candidatos opositores al gobierno.

La proscripción legal del peronismo, propició que casi la tercera parte de los nacionales argentinos quedarán inhabilitados políticamente. La actividad sindical peronista, gradualmente se convirtió en la expresión más organizada del sector obrero. Su proscripción, generó la emergencia de una especie de disociación entre la sociedad y el desenvolvimiento de la actividad política, así como un sistema político donde solo tenían cabida los bloques sociales que conformaron el frente antiperonista. Dicho bloque poco a poco entró en conflictos cada vez más agudos al no compartir los mismos intereses y aspiraciones.

El general Aramburu, después de la etapa de persecución y fusilamientos de peronistas, adoptó una posición moderada que buscara una reconciliación nacional. Esa posición, evidenció la incapacidad del régimen de instaurar un sistema sindical representativo ajeno al establecido por el peronismo. En contraparte, el Almirante Rojas mantuvo su posición radical de proscribir en su totalidad al peronismo y quien más representaba los intereses de la clase conservadora.

No obstante, estos fallidos intentos incorporaron importantes modificaciones en las relaciones laborales. Se eliminó en cierta forma la supeditación irrestricta del movimiento obrero a la doctrina peronista y su ideología basada en la tutela del Estado. Al mismo tiempo, esta situación creó las condiciones favorables para la conformación de un movimiento sindical de filiación peronista con rasgos distintos, que logró una cierta independencia respecto de Perón además de lograr el desarrollo de una estrategia política propia.

Este replanteamiento originó desafíos a la autoridad de Perón por parte de líderes sindicales. Si bien el peronismo ni Perón desaparecieron en su totalidad de la escena política, las relaciones de éste con la clase obrera se modificaron sustancialmente. El cambio del vínculo entre éste y la clase obrera propició este cambio, puesto que Perón había dejado de ser el conducto directo en la satisfacción de sus demandas, basadas en la restauración de las condiciones laborales que rigieron antes de 1955. En este sentido, Perón se convirtió en el símbolo de la recuperación de la etapa de prosperidad económica, la cual suponían era posible lograr con su regreso al poder.

Este proceso, generó un peronismo menos subordinado a la autoridad del líder exiliado, lo cual reflejó la nueva orientación política de la clase obrera. Sus líderes gremiales obtuvieron una mayor influencia, observada principalmente al permitirse su participación en procesos electorales, por medio del sufragio. Este, pronto se convirtió en una importante arma de negociación que pudo compararse con sus paros y huelgas. Como resultado, los líderes peronistas incorporaron en su estrategia la negociación con otras fuerzas políticas, incluidos los militares.

En este contexto, Aramburu inició una estrategia política tendiente a legitimar la estancia de los militares en el poder por la vía electoral. En enero de 1957 abandonó el mando de la Junta Militar y entabló negociaciones con el radicalismo de la facción liderada por Ricardo Balbín. Al respecto, el Partido Radical se encontraba dividido en dos facciones, la dirigida por Balbín -radicalismo del pueblo- que mantenía su posición proscriptiva del peronismo y la liderada por Arturo Frondizi, radicalismo intransigente que apoyaba la legalización gradual del peronismo

En esta etapa, el Partido Radical era la única fuerza política organizada. Las diferencias que motivaron su división se centraban en las posiciones adoptadas por aquellos que proponían una conciliación de intereses de la clase obrera y la clase media urbana, además de adoptar una política nacionalista moderada para limitar la participación del capital externo en la economía. Aunque no cuestionó el modelo económico peronista en su

totalidad, su crítica se dirigía al estado de estancamiento del sector agrario visto en esa etapa. Otros grupos, cuestionaban la ineffectividad de la estrategia económica peronista para desarrollar la infraestructura productiva y de servicios argentina, con un aumento desproporcionado de los gastos gubernamentales.

De esta forma, el régimen militar anunció el proceso electoral a celebrarse el 23 de febrero de 1958. El radicalismo del Pueblo proclamó a Ricardo Balbín como candidato presidencial, apoyado por la clase conservadora agraria y comercial, y los grupos antiperonistas. Por su parte, el radicalismo intransigente postuló a Arturo Frondizi, quien logra el apoyo de Perón a su candidatura. Este apoyo marcado por su posición en pro de una gradual legalización de la actividad de los grupos peronistas, implicó una alianza implícita con la clase obrera. Sin embargo, este acuerdo careció del apoyo del ejército, elemento esencial para concretar con éxito sus objetivos políticos y económicos.

### 2.3.7.2 Arturo Frondizi en la presidencia

El 23 de febrero de 1958, Arturo Frondizi gana las elecciones y con ello su ascensión a la presidencia. Sin embargo, su administración estuvo caracterizada por la presión impuesta a su gobierno por los militares, baluarte del apoyo de la clase conservadora que mantuvo su poder económico. En el ámbito externo, la recuperación económica de los países europeos y los primeros pasos que dieron origen a la Comunidad Económica Europea, marcaron el cuadro en que se desarrolló el régimen frondizista.

La presión a que se vio sometido Frondizi al interior del país, propició un cambio en su programa económico-social. Se alejó del que abanderó para acceder a la presidencia - que dio término al apoyo del peronismo, parte importante en su triunfo electoral-, así como de otros sectores sociales.

Durante su mandato, en materia económica prevaleció el modelo de desarrollo tradicional agroexportador. La política económica no afectó la estructura de la posesión de la tierra, la cual siguió siendo el principal obstáculo para el desarrollo del sector agrícola para aumentar su productividad. De esta forma, el endeudamiento externo surgió como la estrategia para impulsar el desarrollo industrial del país ante el fracaso de la política de atracción de capital externo. Lo anterior, en un marco de agitación laboral y de descontento en los cuadros del ejército por su limitado presupuesto.

En 1959 triunfa la revolución cubana. Frondizi alentó un acercamiento con países comunistas que generó fricciones con Estados Unidos y el ejército, por lo que su negativa a romper relaciones con Cuba decidió finalmente su destino político. El ejército aisló al gobierno y su combinación con la publicación de contratos negociados con compañías petroleras por el gobierno, la legitimación de las universidades privadas sobre todo católicas y el triunfo electoral peronista en Buenos Aires -después invalidado-, propiciaron el movimiento militar que derrocó a Frondizi en febrero de 1962.

### 2.3.7.3 El interregno de José Guido y la llegada de Arturo Illia

La participación del ejército en la vida política estaba plenamente definida. A partir de 1955, la institución castrense modificó sus normas de intervención en el ejercicio del poder al cuestionar las políticas de los gobiernos establecidos o amenazar con su deposición e imponer, en su defecto, sus propias preferencias. En ese momento, el comunismo y el peronismo fueron considerados por los militares como las manifestaciones antidemocráticas a las que había que combatir, posición justificada en la defensa de la "democracia".

Fronzizi fue sustituido por el Presidente del Senado en forma interina. José M. Guido, Ministro de la Suprema Corte (fronzizista), surgió como el continuador de gobierno de Fronzizi. Este nuevo régimen se vio imposibilitado para adoptar una estrategia política y económica a largo plazo, consecuencia de los antagonismos existentes entre la clase conservadora y el peronismo.

El ejército como elemento político, siguió dividido en dos facciones, la de los "azules" que propugnaban por la reincorporación gradual controlada por el Estado del peronismo y la de los "colorados" que mantenían su posición proscriptiva del movimiento peronista.<sup>(52)</sup> El aumento de estas diferencias generó enfrentamientos, incluso armados, entre ambas facciones. Estas se suscitaban básicamente por las diferencias en cuanto al tipo de presiones que debían ejercerse sobre las autoridades civiles, o con relación a las que debían instrumentarse contra el peronismo y su partido. La victoria de los "azules" en 1963, abrió paso a una modificación sustancial de la estrategia político militar de las fuerzas armadas, encabezados por el General Onganía. Este, surgió como hombre incuestionable dentro de las filas castrenses.

La práctica de la intervención tutelar del ejército fue abandonada a partir de ese año hasta 1966. En esta etapa, el ejército se reagrupó en torno a Onganía, lo cual facilitó la formulación de la Doctrina de Seguridad Nacional.<sup>(53)</sup> Con base en esta doctrina, los militares autoasumieron una responsabilidad para interpretar discrecionalmente los intereses de la nación.

Su ideología se basó en la necesidad de imponer un gobierno "fuerte" que sustituyera al modelo peronista desarrollado a partir de 1955. Desde su óptica, consideraron al peronismo como el causante de la fragmentación en las filas castrenses, limitaba el desarrollo económico, calificando al modelo como viable sólo en el corto plazo; y que la agitación social observada en el país podría generar movimientos o acciones subversivas.

Por otra parte, el nuevo proceso electoral controlado por el ejército, excluyó de nueva cuenta al peronismo. El radicalismo del Pueblo, apoyado por la facción del ejército de los "colorados", llegó al poder representados por Arturo Illia. El radicalismo tomó el poder en momentos en que se encontraba profundamente dividido.

Cuatro facciones distintas se habían formado dentro del partido Radical. La denominada "balbinista" apoyada por grupos agrarios, pequeños productores, el sector unionista (de tendencia antipersonalista) apoyada por los sectores más conservadores de la clase media y alta, ligada al sistema agroexportador; la encabezada por Raúl Alfonsín ("alfonsinista") considerada la facción de izquierda del radicalismo (antiperonista y sector más joven) y la "Sabattinista", conformada por los sectores nacionalistas agrarios del partido de donde surge Illia.<sup>(54)</sup>

#### 2.3.7.4 La breve llegada de Illia y su derrocamiento por las fuerzas armadas agrupadas en Torno a Juan C. Onganía.

El nacionalismo agrario -ligado al sistema económico tradicional- vio limitado su accionar político representado por Illia. Este asume la presidencia con un reducido apoyo popular y cuya ascensión al poder solo fue posible con la proscripción del peronismo, al cual enfrentó, además del frondizismo. Este enfrentamiento de fuerzas políticas antagónicas, obstaculizó de nueva cuenta la puesta en marcha de un programa económico conjunto, situación que aisló a su gobierno. Los problemas nacionales seguían vigentes, profundizados por el agravamiento de la inestabilidad política y social.

El 29 de junio de 1966, Illia es derrocado por el ejército. El radicalismo igualmente cayó en una total desarticulación, manteniendo únicamente su carácter de segunda fuerza política después de los militares ante la proscripción en que se encontraba el peronismo. En esos momentos, para el Partido Radical esta condición era lo único a que podía aspirar y, más aún, debía intentar mantener.

La remoción de Illia fue el resultado de la visión del ejército, en el sentido de que el escaso apoyo social a las opciones gubernamentales impuestas, demostraba la ausencia de candidatos con suficiente capacidad política para iniciar un proceso de reorganización de la vida política nacional. Para el ejército anterior a la presencia de Onganía, la remoción e imposición de presidentes radicales, principalmente, surgía de la necesidad de evitar la victoria electoral del peronismo por la incapacidad mostrada por los radicales para triunfar en comicios con participación de peronistas. En los años posteriores al exilio de Perón, estos asumieron un carácter más independiente en términos de conducta política con relación a éste.

Los intentos de Illia por lograr un acuerdo nacional, estuvieron restringidos por la exclusión del peronismo que abarcaba a una gran cantidad de trabajadores. Su vinculación con los pequeños sectores rurales, le significó adoptar una política defensiva y de protección a los pequeños y medianos productores del campo, un nacionalismo en materia petrolera y en la defensa de las libertades públicas. Asimismo, dichas medidas enfrentaron el poder de la clase terrateniente que no es afectada en su estructura económica.

A partir de ese momento, el ejército y el desarrollo de movimientos subversivos se conformaron como los principales actores de la escena política argentina. El movimiento sindical peronista por su parte, estructuró una estrategia defensiva y opositorista de gran efectividad, de cierta independencia respecto del caudillo exiliado. En principio los militares adoptaron una actitud de tutelaje de los regímenes semidemocráticos auspiciados por ellos mismos, para posteriormente ampliar su margen de intervención en las decisiones gubernamentales eludiendo a las prácticas e instituciones democráticas. Las diversas tendencias políticas y el movimiento sindical generaron una capacidad de desestabilización de los modelos de desarrollo de los regímenes en turno, pero al mismo tiempo no lograron superar su incapacidad para imponer el propio.

### 2.3.7.5 El régimen de Juan C. Onganía

Una vez lograda la unidad militar y en forma implícita la social, cuya conducta viró en cierta forma a la aprobación de la actitud de los militares encabezados por Onganía, éste dirigió a las fuerzas armadas a una separación de las responsabilidades gubernamentales, pero continuaron suprimidas las actividades políticas y las instituciones parlamentarias. De esta forma, preparó el camino para que un líder indiscutido al interior de las fuerzas armadas, como lo era él en esos momentos, pasara a ser un gobernante de tinte autocrático, en un sistema político donde el gobierno fuera el único actor político.

Para Onganía su programa central se basó en la necesidad de renovar la política argentina, calificando a los problemas de la nación fundamentalmente como de índole política. Consideró la actividad partidaria y sindical como obstáculos permanentes al desarrollo económico (<sup>55</sup>). Esto lo realizó en un marco donde los partidos políticos fueron disueltos y la actividad sindical restringida y presionada. Esta política si bien no estaba destinada a erradicar el sindicalismo, fue dirigida a presionar a los líderes sindicales a aceptar la política oficial. Favoreció la creación de sindicatos representantes de cada empresa y el pluralismo en su manejo político. Con esta estrategia, Onganía aseguró la inoperancia de los mecanismos que Perón utilizó con su influencia para desestabilizar gobiernos militares o civiles. Asimismo, todo pensamiento político independiente fue suprimido por medio del aparato del Estado.

En este periodo de 1966-1969, gradualmente surgieron divisiones al interior de las fuerzas armadas. El carácter autocrático del gobierno de Onganía relegó al ejército de las decisiones políticas controladas por aquél. Esta situación le privó al ejército de su manifiesta capacidad de oposición a los regímenes constitucionales y de su capacidad de intervenir en las tareas gubernamentales, así como eliminar su contacto con figuras políticas civiles.

El carácter intransigente de Onganía, progresivamente lo aisló del apoyo de las fuerzas armadas, ante la negativa de éstas a aplicar una mayor represión a las manifestaciones populares y las acciones terroristas que comenzaron a emerger en este período, a pesar las presiones de Onganía. Su gobierno autocrático generó estas explosiones

de descontento social, hecho que evidenció el aislamiento del gobierno respecto de la sociedad.

Las manifestaciones violentas de descontento social, tuvieron su origen en las provincia, principalmente en la ciudad de Córdoba en mayo de 1969 (mejor conocido como el "cordóbazos"), hasta extenderse a otras ciudades del país. Estas expresiones fueron el resultado del repudio de las sociedad argentina al régimen autocrático de Onganía y a su política económica liberal. Otros elementos que socavaron la legitimidad del régimen de Onganía, fueron los asesinatos del influyente líder sindical Augusto Vandor<sup>(56)</sup> y del ex-Presidente Gral. Pedro E. Aramburu, realizados por el grupo guerrillero "Montoneros".<sup>(57)</sup>

Onganía pretendió endurecer aún más su régimen. Sin embargo, las explosiones populares de violencia orillaron al país a un nuevo período de desorganización política. En junio de 1969 la crisis institucional se hizo evidente con la renuncia de todo el Gabinete.

El teniente General Alejandro Lanusse, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, se convirtió en el promotor de la organización del levantamiento que derroca a Onganía un año más tarde. La posición intransigente de Onganía de restablecer el sistema partidario, el marco de violencia social, la aparición de movimientos guerrilleros que habían cobrado ya sus primeras víctimas, corrupción del régimen militar y la oposición a Onganía en las filas del ejército, prepararon su salida del poder en junio de 1970 el cual mantuvo en su totalidad en cuatro años de gobierno.

### 2.3.7.6 La transición con Roberto M. Levingston

Tanto la caída de Onganía como la de su efímero sucesor el Gral. Roberto M. Levingston, llevó a la Argentina a una agudización de la crisis social y el sistema político autocrático impuesto por las fuerzas armadas en la imposición de Presidentes desde 1966. El Gral. Levingston en el momento del derrocamiento de Onganía, se desempeñaba como agregado militar de la Argentina en Estados Unidos. Esta condición fue considerada por la Junta de Comandantes que asumió el control de la nación, como un elemento favorable ya que Levingston, con su ausencia del país, no mantenía enemigos potenciales.

Sin embargo, Levingston desde el momento de asumir la Presidencia evidenció su intención de gobernar en forma autónoma, ignorando a la Junta Militar que lo instaló en el poder. Inició una estrategia relativamente continuista a la política de su antecesor, considerando el mantenimiento de la supresión de los partidos políticos como una decisión irreversible hecha por el anterior gobierno. Deshechó la opción de iniciar negociaciones con el peronismo y con el propio Perón, así como la de apertura política con el establecimiento de un proceso electoral.

A pesar de su nacionalismo y anticapitalismo retórico, aunado a la agudización de sus enfrentamientos con los altos mandos de las fuerzas armadas, su régimen careció del apoyo popular. Esta actitud, generó al interior de las filas castrenses la necesidad de

sustituir al Presidente Levingston para salvar al ejército del manifiesto repudio y descontento de la población. Dicha percepción, se justificó con la continuación de las expresiones de violencia en el país. Su salida del poder se derivó al intentar destituir al General Lanusse de su cargo de Comandante en Jefe. Este se reunió con los altos mandos de las fuerzas armadas, decidiendo la remoción de Levingston en marzo de 1971.

El nuevo fracaso de los militares por imponer su modelo de desarrollo con estabilidad, mostró a unas fuerzas armadas crecientemente desprestigiadas. Estos debían aceptar su fracaso, y la necesidad de establecer una política de apertura donde todas las fuerzas sociales presentaran sus demandas y alternativas políticas. La caída de Levingston significó para los militares la urgente necesidad de iniciar un proceso de democratización que relegara el poder a un gobierno surgido de una elección popular.

El marco político era sustancialmente diferente. Los intentos del gobierno militar por establecer las condiciones de su salida del poder, chocaron con la idea de los grupos opositores de establecer un proceso gradual tendiente a la democratización sin condicionantes. Además, el desprestigio de las fuerzas armadas por el fracaso de concretar con éxito su "Revolución Argentina" iniciada en 1966, la emergencia de nuevos actores, incluidos los que incorporaban en su estrategia política actos terroristas, provocaron que sus políticas perdieran mayor credibilidad. Las fuerzas políticas y sociales, iniciaron estrategias diferentes pero orientadas a un mismo objetivo: ganar el mayor espacio político posible para influir en el futuro gobierno constitucional.

#### 2.3.7.7 Alejandro Lanusse y el llamado a elecciones

Lanusse asumió la presidencia, convencido de que la opción política ofrecida por los militares había fracasado. Por ello, su objetivo fundamental se centró en preservar al ejército del desprestigio y la indignación de los sectores de la población que amenazaba con desbordarse y por la continuación y recrudecimiento de la actividad terrorista en el país. Con el objeto de evitar una explosión social que no pudieran controlar, la Junta Militar anunció la convocación a elecciones sin la proscripción inicial de ninguna fuerza política. Este proceso debía estar marcado por la necesidad de evitar un triunfo peronista, pero sin la exclusión inicial de éstos.

El gobierno militar de Lanusse intentó introducir mecanismos para obtener garantías de las fuerzas políticas civiles que habrían preservado su ventaja a los militares. Su intención era lograr una salida honrosa de la escena política, condicionando el proceso a un Gran Acuerdo Nacional controlado por el ejército que estuviera conformado por todos los actores políticos. Sin embargo, los grupos políticos rechazaron cualquier intento de institucionalización de la participación castrense en el proceso electoral.

El denominado Gran Acuerdo Nacional (GAN),<sup>(58)</sup> consistía en pactar con Perón con el objeto de que éste apoyara públicamente la postulación del candidato oficial, el General Lanusse. A cambio, el gobierno militar reivindicó a Perón y su movimiento. Este acuerdo se concretó en marzo de 1971, el cual perduró hasta junio de 1972.



Para Lanusse esta era la prioridad de su gobierno, a pesar de la crisis económica y la creciente actividad guerrillera.<sup>(59)</sup> Sin embargo, Perón posteriormente vio en este acuerdo que su autoridad podría verse disminuida al interior de su propio movimiento. Así, en junio de 1972 cortó súbitamente las negociaciones con el General Lanusse.

Bajo esta situación, para neutralizar una posible candidatura de Perón el gobierno estableció reformas a la ley electoral, incorporando la doble vuelta para la elección del Presidente en caso de no obtener más del 50% de los votos y la imposición de la cláusula de residencia, la cual se haría efectiva en caso de que Perón no regresara al país en una fecha determinada. Esto no ocurrió en una primera instancia, por lo que de esta forma Perón y Lanusse quedaron imposibilitados para competir electoralmente por la presidencia. En realidad, el régimen militar había perdido la iniciativa política, el cual fue enterrado con la victoria de Cámpora en las elecciones.

Las elecciones fueron programadas para el 11 de marzo de 1973 para elegir autoridades constitucionales y abrir paso a la legalización de los partidos políticos.

La decisión de Perón de no aceptar de nueva cuenta la candidatura, se explica en gran medida por su convencimiento de la inminente proscripción por parte del gobierno a cualquier candidato peronista, ya que Cámpora no tenía una sólida base política. Finalmente, el gobierno militar encabezado por Lanusse no vetó al candidato peronista. Por otro lado, si bien el peronismo mantenía la misma conformación de clases, su conducta política y económica observaba modificaciones sustantivas. En el periodo de 1966 a 1973, el "izquierdismo revolucionario" del peronismo se vio dinamizado por la incorporación en sus filas de la clase media de base universitaria. El 11 de marzo, las elecciones dieron el triunfo a Héctor J. Cámpora como Presidente y como Vicepresidente a Vicente Solano Lima.

Cámpora fue declarado Presidente electo a pesar de haber obtenido 49% de la votación, con el objeto de evitar una mayor humillación a las fuerzas armadas en una segunda vuelta. En suma los peronistas y los radicales captaron el 70% de los votos, en tanto que los candidatos considerados afines a los militares, en conjunto recibieron solo el 18% de los sufragios.<sup>(60)</sup>

### 2.3.7.8 Héctor J. Cámpora como elemento de transición a la nueva llegada del peronismo

El breve gobierno de Cámpora, en realidad preparó el regreso de Perón a la Argentina y al poder después de 18 años de exilio. En mayo de 1973, Cámpora asumió la presidencia. Las primeras medidas que adoptó, se orientaron a disolver la estructura represiva de los anteriores regímenes militares y la libertad a los presos políticos. En este sentido, la liberación de activistas vinculados a los grupos guerrilleros vieron en excarcelación su reincorporación a los grupos terroristas, los cuales se desarrollan con mayor énfasis en esa década.

Las relaciones entre Cámpora y Perón se vieron enturbiadas desde el inicio del mandato del primero. Estas diferencias fueron alimentadas por las divisiones y fragmentaciones que enfrentaba el justicialismo. Al interior de las filas peronistas, habían surgido nuevos grupos que propugnaban por una independización del tutelaje de Cámpora respecto de Perón. Sin embargo, Cámpora no poseía una base política y una casi nula capacidad para llevar a cabo por sí solo un proceso de pacificación y reconciliación nacional.

Por otro lado, el justicialismo retomó el poder en un marco político y económico radicalmente distinto al de 1943. En 1971, la Argentina enfrentaba serias dificultades económicas, inflación alta, déficits fiscales, reservas económicas limitadas y una creciente deuda externa. La sociedad enfrentaba igualmente una ola de atentados terroristas sin precedentes en la historia del país. La estructura económica conservadora dominada por los terratenientes se mantenía sin variaciones importantes.

En el aspecto político, el radicalismo promovió un acercamiento con Perón a través de su líder Ricardo Balbín. Este acuerdo se concretó, asegurando con ello el fracaso de cualquier intento de los militares por llevar a cabo una transición controlada del poder. Si bien ambas tendencias políticas mantenían visiones divergentes en cuanto a la solución de la problemática argentina, coincidían en un objetivo común resumido en la necesidad de evitar en el futuro un involucramiento directo en las decisiones gubernamentales por parte de las fuerzas armadas.

En este marco de agitación social violenta y de crisis económica Perón regresaba no solo al país en junio de 1973 sino también al poder. El trágico enfrentamiento armado suscitado con motivo del recibimiento de Perón <sup>(61)</sup>, generó fundados temores en el sentido de que en el país iba a enfrentar un gobierno dual, el legal representado por Cámpora y el real personificado por Perón.

En medio de la turbulencia social y política provocada por la emergencia de dos tendencias antagónicas, derivaron en la renuncia de Cámpora y todo su gabinete en julio de ese año. Por ley, el Diputado Raúl Lastiri asumió el gobierno, para convocar a elecciones fijadas para el 23 de septiembre de 1973. El peronista Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), designó a Perón como su candidato y éste a su esposa María Estela Martínez como compañera de fórmula para la Vicepresidencia. Dichas candidaturas fueron apoyadas por la naciente Frente de Izquierda Popular (FIP), organización política que sustituyó a la izquierda argentina tradicional.

La decisión de Perón de designar a su esposa para la Vicepresidencia, fue en gran medida consecuencia de las profundas divisiones observadas en el peronismo. Su decisión se orientó a intentar conciliar los intereses encontrados de los cuadros dirigentes de dicho movimiento. Al mismo tiempo, Perón neutralizaba posibles diferencias que podían generarse por dicha candidatura.

Las elecciones se llevaron a cabo, siendo electos por mayoría Perón y su esposa. A la edad de 78 años, el 12 de octubre de 1973, Perón juró como Presidente de la Argentina por tercera ocasión.

### 2.3.8 La tercer presidencia de Perón

A pesar de las profundas diferencias que imperaban al interior del partido peronista, Perón mantenía su vigencia de arbitro para conciliar divergencias. Perón encontró a una Argentina más compleja y desarrollada, pero con una mayor vulnerabilidad respecto del interior y del exterior en términos económicos. Estados Unidos había pasado a ser el principal soporte económico en sustitución de la Gran Bretaña, dominando la promoción del desarrollo industrial por medio de significativas inversiones en esa materia.

Perón adoptó una estrategia distinta a la de 1943. En los meses que gobernó a la Argentina antes de su muerte, trató de convertir al Congreso en un auténtico centro de negociación entre las diversas fuerzas políticas. Esta posición revirtió su idea original de negar toda legitimidad a cualquier actividad o ideología contraria al peronismo. Además, favoreció la participación política, incluidas las movilizaciones independientes de la clase obrera del país y otorgó plena vigencia a los principios de la doctrina justicialista.

No obstante permanecieron grupos peronistas que preferían la reinstalación del componente autoritario característico de los primeros años del peronismo. Este enfrentamiento pronto cobró intensidad con la desaparición del movimiento unificador constituido para desplazar a los militares del poder.

Perón encontró, paradójicamente, fuera de su partido a sus principales fuentes de apoyo. Asimismo, Perón redefinió el papel de las fuerzas armadas en un intento por desarticular su esquema de intervención política otorgándoles una autonomía institucional y, al mismo tiempo, intentó sin éxito subordinar al ejército a la autoridad del Estado cuyo control estaba en manos del propio Perón.

Pero el escenario político de crisis económica comenzó a ver sus efectos negativos sobre el intento de reinstitucionalización promovido por Perón. La estrategia demandante de los sindicatos siguió vigente, ante la incapacidad de Perón por satisfacer sus demandas en un corto plazo. El proceso de reconciliación nacional que intentó poner en marcha, fue frustrado por el surgimiento de tendencias opuestas a su gobierno al interior del partido peronista.

En efecto, el tercer gobierno de Perón, estuvo caracterizado por la violencia social reflejada en la intensa actividad guerrillera escenificada en el país. Buenos Aires pronto se convirtió en una de las principales ciudades que enfrentó una actividad terrorista plena y efectiva. Del mismo modo, las actividades antiterroristas puestas en marcha por el gobierno, crearon en la Argentina un clima de inseguridad tal que pronto comenzó a cuestionar la legitimidad del gobierno peronista y su propia existencia.

Otro elemento que impidió a Perón contar con tiempo suficiente para concretar con éxito su programa de reinstitucionalización de la política argentina, fue su avanzada edad y el gradual deterioro de su salud. Los crecientes enfrentamientos de las facciones rivales al interior del movimiento peronista, socavaron cualquier intento de reconciliación.

El mayor enfrentamiento de Perón se llevó a cabo con la denominada juventud peronista (conformada por ésta, la juventud comunista y la facción radical alfonsinista). Estas facciones abanderaron la lucha armada como el medio para consolidar un "socialismo revolucionario", en oposición a la nueva estrategia de Perón de intentar crear un sistema político representativo de partidos políticos. Cada grupo procuraba consolidar sus intereses, aún si ello significara el eliminar a adversarios de cualquier forma.

Las violentas luchas entre los movimientos guerrilleros con fuerzas paragubernamentales en la búsqueda del franco exterminio mutuo, poco a poco minaron la viabilidad del gobierno de Perón y al incipiente proceso democrático. La idea original de que el regreso de Perón a la Argentina pondría fin a las décadas de inestabilidad política y al clima de inseguridad prevalecientes en el país por su cercanía a los grupos guerrilleros como "Montoneros", pronto perdió su validez. (62)

La estrategia de las organizaciones políticas y sociales opuestas a Perón, retiradas voluntariamente de la escena política, se basó en la espera de la desaparición del caudillo. Su autoridad fue crecientemente cuestionada, debiendo aceptar abiertos desafíos a su autoridad, principalmente de las citadas juventudes peronistas.

### 2.3.9 Muerte de Perón y la ascensión de Ma. Estela Martínez como Presidenta de Argentina

Finalmente, el primero de julio de 1974 Perón muere a la edad de 74 años, y junto con él se aceleró la desintegración irreversible del Frente Nacional. Su muerte aumentó aún más la gradual desarticulación del peronismo, movimiento que quedó en manos de su esposa Isabel que asumió la Presidencia. Los grupos guerrilleros pasaron a la clandestinidad con un aumento en sus actividades terroristas, señalando que con la muerte de Perón la situación política exigía cambios radicales. Estos se opusieron al pacto social fomentado por Perón, considerando al gobierno de la Presidenta como antiperonista y no representativo. Desde ese momento, la lucha armada se erigió como su estrategia de lucha contra lo que consideraban la "ofensiva del imperialismo gubernamental" representado por la viuda de Perón.

Por otro lado, su secretario particular y Ministro de Bienestar Social, José López Rega (63), si bien mantenía un poder considerable al lado de Perón, con la muerte de éste su influencia creció considerablemente. A este se le consideró durante un año, posterior a la desaparición de Perón, como el hombre que más influyó en la formulación de la política nacional.

A pesar de algunas medidas económicas positivas de nacionalizaciones dictadas por la Presidenta, éstas se vieron ensombrecidas por el boicot económico promovido por los empresarios nacionales a la política económica, la espiral inflacionaria, la presión del movimiento obrero por aumentos salariales, pugnas entre los órganos constitucionales con el Ejecutivo, entre otros.

En esta etapa, López Rega intentó eliminar de las filas a los líderes sindicales, en un marco de inflación galopante que trató de contener y por otra parte conformar a las fuerzas armadas como la base de un régimen político que eliminara las instituciones políticas y las libertades individuales. No obstante, las movilizaciones populares neutralizaron los intentos de Rega quien debió abandonar el país.

La negativa del ejército a apoyar a Rega, se explica en gran parte por la indisponibilidad de los altos mandos castrenses en apoyar un gobierno en franca decadencia. Se evidenció igualmente el antiperonismo que privaba en las filas castrenses y dio forma a la idea de éstos de promover una opción alternativa al régimen populista establecido, así como la conformación de una nueva sociedad. En efecto, para los militares el caos y desgobierno que comenzaba a visualizarse fue el resultado de una ineficacia política por parte del gobierno, criticando igualmente a la sociedad argentina como un todo. Este populismo considerado como el generador del caos social, desde su perspectiva, alentaba la subversión.

Los militares recuperaron su movilización con la sanción por el Congreso de la Ley de Seguridad, que relegó en los militares la tarea de reprimir los movimientos guerrilleros que actuaban en el país.<sup>(64)</sup> Este hecho devolvió a las fuerzas armadas y a los sectores conservadores su iniciativa política en un marco de violencia cotidiana.

La multiplicación de los problemas sociales fue la manifestación más importante del derrumbe que enfrentaba el gobierno de la viuda de Perón. Las negociaciones con la clase trabajadora se suspendieron. Los líderes sindicales demandaban aumentos en períodos más cortos negados por la Presidenta. La autoridad de ésta estaba profundamente cuestionada, como resultado de la caída abrupta de Rega. Los empresarios desafiaron abiertamente las medidas antiinflacionarias adoptadas por el gobierno, interrumpieron las inversiones y promovieron paros de alcance nacional que quitaron cualquier vestigio de autoridad al Ejecutivo.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas emplearon crecientes medidas para presionar al gobierno. Se resistieron a aceptar el nombramiento del General Laplane como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, surgiendo la figura del General Videla como hombre que gozaba la confianza de las tres fuerzas castrenses.

Gradualmente el gobierno de la Presidenta se dirigió a la ingobernabilidad. En un intento por estabilizar su gobierno, la Presidenta anunció la convocación a elecciones, las cuales no obstante, nunca se realizaron. Para esos momentos, el Ejecutivo había perdido gran parte del apoyo original al inicio del tercer gobierno peronista y sus enemigos

tradicionales, incluyendo ahora al ejército que recobró su fuerza y capacidad de intervención.

### 2.3.10 La desintegración del peronismo

El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón es desalojada del cargo por las fuerzas armadas. Este hecho culminó otra etapa histórica de la Argentina bajo el peronismo y comenzó un nuevo período bajo un régimen militar -más autoritario y regresivo- que gobernó hasta 1983.

En el desarrollo de los tres gobiernos peronistas, y la alternancia con gobiernos civiles y militares que lo acompañaron, su debilidad manifiesta estuvo marcada por su incapacidad de englobar en un proceso nacional a todas fuerzas políticas del país. Su alejamiento de importantes sectores sociales demuestran que un Estado no puede actuar por sí solo en la transformación de un país con las características de la Argentina, que tradicionalmente ha padecido una inestabilidad e instituciones políticas poco consolidadas y una economía supeditada a las variaciones económicas internacionales.

## 2.4 El régimen militar (1976-1983)

### 2.4.1 Marco político interno y el golpe de Estado de 1976

El Golpe de Estado en Argentina llevado a cabo por los militares en 1976, continuó con la alternancia de poder entre civiles y militares. Las crisis económicas conformaron un común denominador, al convertirse en factor de primer orden en el desbordamiento de los acontecimientos sociales y políticos en uno u otro sentido.

La inestabilidad generalizada al interior del país, originó al mismo tiempo un sistema político incapaz de adoptar características de una democracia representativa. Estos regímenes fueron marcadamente influenciados por los intereses de grupos de presión que buscaban mantener y ampliar intereses.

La llegada al poder de Perón en 1973 significó, además de la esperanza del pueblo argentino a revivir la época de prosperidad y estabilidad con el caudillo al frente del gobierno, un cambio en la actitud de Perón en el sentido de instrumentar acciones que eliminaban la actitud proscriptiva hacia los oponentes. Sin embargo, los intentos de éste por establecer un sistema político partidista, convertir al Parlamento en un foro de negociaciones y de redefinición del papel continuamente intervencionista en la política de las fuerzas armadas, chocó con las posiciones de las distintas facciones integrantes del justicialismo que mantenían un componente autoritario en su accionar político y la oposición misma de la mayoría de los oficiales.

El derrocamiento de Isabel Martínez de Perón en 1976 por los militares, fue la culminación de un lento proceso de desintegración observado dentro de un justicialismo profundamente dividido, el cual se inicia desde el mismo retorno de Perón al poder. Después de la muerte del caudillo, el movimiento que él formó, se tornó incapaz de llenar el vacío simbólico y político creado por el dirigente. La constante permanencia de la influencia de las ideas peronistas en la vida política argentina, ha hecho incompatible a la clase obrera con cualquier régimen que no pueda satisfacer en el corto plazo sus necesidades materiales y aspiraciones.

La gestión de María Estela Martínez, en materia económica enfrentó las consecuencias derivadas de la instrumentación de políticas económicas de austeridad. El agravamiento de la crisis económica y la incapacidad del gobierno por controlar los procesos políticos, económicos y sociales, enfrentaron a trabajadores, empresarios y gobierno. Este enfrentamiento eliminó los canales de negociación, donde el gobierno quedó sin una base política y un mínimo de poder decisorio. Para 1975, <sup>(65)</sup> los movimientos guerrilleros que adoptaron la actividad terrorista como fórmula de presión política, cobraron amplia notoriedad y auge en el país.

La imagen de caos y desgobierno enfrentado por la viuda de Perón, fue alimentada tanto por los militares como por los empresarios liberales. La economía quedó descontrolada, ya que las medidas impuestas por el gobierno para contrarrestar el proceso inflacionario carecieron de efectividad. Ambos grupos enfatizaban la incapacidad del

gobierno por controlar la situación económica del país, así como la actividad guerrillera en la Argentina. Desde su óptica, las fuerzas armadas consideraban que el sistema político argentino basado en el populismo constituía el principal promotor de la inestabilidad política y social representada por los movimientos guerrilleros y las huelgas auspiciadas por los sindicatos peronistas.

La negativa del instituto castrense por apoyar a un gobierno en decadencia, reflejó el antiperonismo que privaba en la mayoría de los oficiales del ejército y de sus aliados sociales para investirse como la única institución organizada de alcance nacional capaz de restablecer el orden y la disciplina. Animados en esta visión de único actor capaz de reorganizar política, económica y socialmente al país, las fuerzas armadas, en primera instancia, intentaron legitimar su ejercicio gubernamental. Esta se asentó en consideraciones de tipo ideológico, al considerarse como un estamento superior con capacidad de control sobre las instituciones del Estado, por medio de la imposición del orden y la disciplina, adjetivos plenamente identificados con los oficiales.

En su propia visión, las fuerzas armadas son el único órgano capaz de guiar a una nación en la consecución de sus objetivos de desarrollo al considerar a los civiles como incapaces y faltos de autoridad y fuerza para concretar con éxito dichos objetivos. En este sentido, las fuerzas armadas se identifican, por el adoctrinamiento a que son sometidos los militares, como únicos sujetos de credibilidad, honradez, patriotismo y de integridad moral y cristiana.<sup>(66)</sup>

Es en este contexto en el que se enmarca la ideología adoptada por los militares que tomaron el poder en 1976 y que prevaleció hasta su salida del gobierno en 1983. Esta ideología, estuvo basada en las ideas promovidas en lo que se denomina la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)<sup>(67)</sup>, entendida como el principal motor teórico de los militares para presentarse como la institución que salvaguarda la soberanía nacional en contra de los movimientos subversivos, calificados como enemigos no sólo de éstos, sino del Estado mismo. Ya desde finales de la década de 1950, con el triunfo de la revolución cubana en particular, comenzó a tomar forma la doctrina militar de la seguridad nacional.<sup>(68)</sup>

Con el golpe de Estado de 1976, las fuerzas armadas y los sectores liberales argentinos definieron las amenazas que prevalecían sobre la sociedad argentina. Estas fueron la búsqueda de métodos para eliminar cualquier tipo de subversión; la proscripción del peronismo como promotor del Estado populista y paternalista; y la reestructuración de la atrasada industria nacional, base de la economía urbana.

#### 2.4.2 La lucha contra la subversión a partir de 1976

El gobierno militar instauró de facto una sociedad en guerra contra los movimientos subversivos, confiriéndole a las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad la tarea de salvaguardar el destino nacional amenazado por dichos movimientos. Se justificó de este modo, la detención y el castigo de sectores o personas que desafiaran la autoridad



militar. Al efecto, los poderes constitucionales del gobierno fueron reemplazados por los tres cuerpos militares quienes se dividieron el control del país. El ejercicio del poder supremo del Estado recayó en lo que se denominó la Junta de Comandantes, para no delegarlo en un sólo hombre, como en el caso de Chile con el general Pinochet.<sup>(69)</sup>

En efecto, la Junta militar encabezada por el General Jorge Videla, Comandante del Ejército, enfrentó en primer término el desafío que representaba la guerrilla a la seguridad nacional argentina. Este desafío, condujo a los militares a establecer mecanismos de coerción generalizada, lo cual significó una militarización de la vida social y política justificada en el marco de la DSN. A partir de 1976, los militares se dedicaron a restablecer el orden e imponer un cambio radical en las relaciones económicas nacionales, para lo cual conformó un sistema represivo y de terrorismo de Estado que alcanzó a amplios y diversos sectores de la sociedad argentina.<sup>(70)</sup>

#### 2.4.3 "El Proceso"

Embarcados en este proceso de "legitimación", la Junta Militar promulgó el 24 de marzo de 1976, el Acta, el Estatuto y los Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional (mejor conocida como Proceso de Reorganización Nacional, (PRN).<sup>(71)</sup> A ésta se les dotó de base jurídica y legal, con una jerarquía superior a la Constitución de 1853. Con la disolución del Congreso Nacional el PRN, por tanto, estableció los objetivos políticos, sociales y económicos, así como las estrategias generales perseguidas por la Junta Militar. Durante el régimen castrense, la Junta gobernó por medio de Decretos Ley y Actas Institucionales las cuales tendrían repercusión en todos los ámbitos de la sociedad argentina.

El PRN se alzó como el principal justificante de las acciones represivas que el Estado militar aplicó a los más variados sectores de la población. Al ser un objetivo fundamental el eliminar a la guerrilla y a aquellos grupos con capacidad de convocatoria, los militares practicaron políticas represivas en contra de sindicatos, medios masivos de comunicación, la proscripción de los partidos políticos, así como ataques en contra de universidades y en general de la educación y la cultura. Esta represión, incluyó el asesinato, la desaparición de personas y el exilio a miles de argentinos.

##### 2.4.3.1 Grupos guerrilleros

Al asumir de nueva cuenta el poder, entre los principales objetivos del régimen militar, además del reordenamiento económico, era la lucha contra los grupos guerrilleros que habían cobrado una intensa actividad como un desafío a la autoridad de los militares. Habiendo cobrado notoriedad pública a principios de la década de los setenta, su origen sería la respuesta a la progresiva inestabilidad política a partir de 1955, año de la caída y proscripción del peronismo. Es a partir de 1966 bajo el régimen autoritario del General Onganía, que estos grupos comenzaron a organizarse teniendo como base la lucha armada.

Otros factores además de la inestabilidad política que impulsaron la formación de éstos grupos, fueron el empeoramiento de la situación económica de la población, la represión hacia los grupos opositores a partir de 1955 y acentuada en 1966-1970, combinada con el desprestigio de los líderes sindicales que preferían la negociación pero sin obtener resultados positivos de importancia. La compulsiva situación político-social a finales de la década de 1970 que dio término al régimen de Onganía, también dio paso a la radicalización de los movimientos guerrilleros que habían cobrado notoriedad pública y una intensa actividad a partir de esa década hasta su eliminación física hacia 1981.

#### a) Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), es uno de los primeros grupos guerrilleros que aparecieron en la escena política argentina. Sus orígenes datan de la década de 1960 con una tendencia pro-guerrillera primero bajo la influencia del trotskismo y después del guevarismo durante los primeros años de la década de los setenta. Sus acciones armadas iniciaron en 1969 siendo considerada el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Sus actividades se dirigieron al secuestro y asesinato de personas afiliadas al gobierno en turno, cobro de rescates, etc. Para 1975 se calcularon en 7000 sus miembros activos la mayoría proveniente de la clase media de ideología marxista y sus impresionantes recursos económicos y militares eran obtenidos por medio de pagos que debían hacer las empresas para que no fueran secuestrados sus directivos. Tanto el ERP como los demás grupos guerrilleros que surgen en esta etapa, formados en su mayoría por jóvenes, evidenciaron el descontento de éstos al sistema político vigente en sus diferentes formas. En 1970 el ERP logró ocupar una parte del territorio de la Provincia de Tucumán, donde centraron su actividad en el reclutamiento de tropas y recabar contribuciones de la población.

#### b) Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)

Las FAP fueron creadas en 1968 como un grupo cuyo principal objetivo era la instrumentación de la guerra de guerrillas. Sus integrantes eran peronistas experimentados y católicos radicales, los cuales posteriormente constituirían un importante antecedente para la radicalización de los Montoneros. Sus acciones no lograron atraerse un apoyo popular importante, lo que sumado a los descabros de la policía a su estructura propició una disminución de su actividad, además de las divisiones en sus filas y del encarcelamiento de sus principales líderes.

### c) Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)

Las FAR surgen en 1968, y su principal objetivo era convertirse en el representante del foquismo guevarista colombiano que actuara en Argentina. Sin embargo, la muerte del Che Guevara limitó este objetivo, debiendo centrar su acción en la guerrilla urbana paralelamente a su peronización consolidada en 1971. No obstante, su accionar fue severamente dañado por las bajas y encarcelamiento de activistas y dirigentes. Su eliminación total sólo pudo ser evitada por la ayuda otorgada por las FAP.

### d) Montoneros

Sin duda uno de los principales grupos guerrilleros que tuvieron mayor impacto en la vida política argentina en general y especialmente en la evolución del peronismo fueron Los Montoneros, al grado de constituir uno de los principales grupos de este tipo que han existido en América Latina. Este término, fue adoptado en honor a los jinetes rurales y gauchos que conformaron los ejércitos de los héroes de la independencia y utilizado por las clases conservadoras para referirse a las clases bajas.

Sus primeros antecedentes lo constituyen el movimiento Tacuara de orientación católica antiizquierdista, inspirado en el falangismo español. Su objetivo era lograr la formación de un Estado nacional de corte sindicalista que remplazara al régimen liberal y los partidos políticos.

Su orientación radical anticomunista gradualmente dio paso a divisiones internas que se acentuaron con la proscripción del peronismo. Los jóvenes que se identificaban con éste, conformaron el Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara -de tendencia izquierdista identificada con el peronismo- hacia 1962, como resultado de la retórica nacionalista de los gobiernos posteriores a 1955.

Durante el proceso de conformación como grupo guerrillero organizado, los Montoneros debieron enfrentar posiciones contrarias de sus miembros -católicos de derecha y radicales de izquierda-: la de aquellos que abogaban por el cambio por conducto de la negociación y los que apoyaban la lucha armada como medio para forzar el cambio a un Estado nacionalista.

Los promontoneros abogaban por la segunda opción, lo cual representaba la evolución interna tanto del nacionalismo y del catolicismo como factores que dieron paso a la radicalización de la postura de éstos y ejemplificada con la formación de los mencionados grupos guerrilleros. El período de 1968-1970 se caracteriza por la organización de los Montoneros como grupo armado con una incipiente estructura y organización interna.

Las primeras acciones se centraron en la obtención de recursos económicos y militares, estímulo del apoyo popular y su adhesión, evitando los enfrentamientos directos,

uso limitado de la violencia ofensiva y la selección de objetivos y atentados contra intereses de las clases opulentas y de extranjeros.

En principio estas acciones no lograron atraerse un apoyo popular de importante. Sin embargo, el secuestro y asesinato del Ex-presidente Aramburu por los Montoneros, constituyó la acción más espectacular que señaló la existencia de éstos como grupo guerrillero organizado. Al mismo tiempo, iniciaron esfuerzos para agrupar a las demás organizaciones guerrilleras que los convirtiera en el pilar de esa nueva organización.

Algunas de éstas acciones fracasaron, pero la participación política con el retorno de Perón y la preparación de elecciones fue un punto importante para fortalecer esa unidad. Las acciones de los Montoneros se dirigían más que a acciones armadas a repartir propaganda política y a tratar de demostrar la debilidad del gobierno a sus acciones (toma de poblados, asaltos, secuestros, etc.). Las negociaciones estarían obstaculizadas por las divergencias en cuanto a la ideología y objetivos a seguir, ya fuera por medio de la lucha armada o acciones múltiples (esta última adoptada por los Montoneros).

Como resultado, estas organizaciones acordaron al socialismo como objetivo y la lucha frontal contra el imperialismo representado por Estados Unidos. Sin embargo, este acuerdo fue insuficiente para generar una verdadera unidad faltando acuerdos sobre concepciones políticas que sólo se alcanzaron hasta 1972 entre los Montoneros y los "Descamisados". Este grupo peronista (de menor importancia) fundado en 1968 por posteriores líderes Montoneros fue relacionado con el Ejército Nacional Revolucionario (ENR) grupo guerrillero que no logró conformar una estructura definida, a pesar de su posición nacionalista y revolucionaria. Estos acuerdos, incluyeron a las FAR en 1973 y un pequeño grupo de la FAP en 1974.

Durante el período de 1970 a 1973, los Montoneros tuvieron una intensa actividad guerrillera, pero al mismo tiempo sufrieron importantes bajas de líderes y militantes. Con el regreso de Perón al poder en 1973, su identificación con el peronismo en tanto representara la formación de un gobierno popular chocó con la nueva postura conciliatoria de Perón para formar un Estado participativo y la radical situación económica y política a la que prevalecía en 1945 que impidió la adopción de la política estatal paternalista de ese año.

El rompimiento de Perón con los sectores de izquierda agrupados en torno a los Montoneros, propició la vuelta a la clandestinidad y al reinicio de la violencia político-social. Acentuada con la muerte de Perón, la presidencia de su viuda Ma. Estela Martínez, las acciones terroristas y antiterroristas fueron la característica que dominaron este período y radicalizadas con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al peronismo y dio paso a un nuevo régimen militar concentrado en la eliminación de los grupos guerrilleros.

Para 1981, los golpes dados a la estructura guerrillera de los Montoneros por parte de las fuerzas militares, policiales y parapoliciales gradualmente limitaron su estrategia ofensiva. La desertión y detención de militantes que podían denunciar a compañeros por medio de la tortura, poco a poco obligó a sus líderes a buscar apoyo internacional para su

supervivencia. Para ese año, los Montoneros fueron eliminados, no sin antes haber escenificado uno de los más cruentos enfrentamientos que costó la vida a miles de argentinos.

#### 2.4.4. La economía dentro del contexto del PRN

Paralelamente a la lucha contra la subversión, el PRN en su aspecto económico fue considerada como otra de las principales preocupaciones de la Junta. A efecto de controlar la economía, se adoptaron medidas de austeridad y la instrumentación de acciones que favorecieran el establecimiento de una economía de mercado abierta a la competencia extranjera, el control de la inflación, la no intervención del Estado en la economía y el saneamiento del presupuesto nacional. Se reformó el sistema financiero argentino, como medida principal para enfrentar el proceso inflacionario y la descapitalización gradual del país, aunque estas medidas expresamente no afectaban intereses de las clases sociales que constituían la base política de los militares. Fue incluida además la eliminación de las barreras comerciales y las restricciones monetarias fueron liberadas con objeto de atraer capitales <sup>(72)</sup>.

En principio, este plan se vio beneficiado por precios favorables en el mercado internacional de los productos primarios argentinos. Los resultados del plan económico impuesto por los militares a través de funcionarios civiles, no obstante, gradualmente mostró su incapacidad por lograr una recuperación sustancial de la economía argentina.

Basada en la obtención de créditos por parte de los países exportadores de petróleo, la crisis petrolera que comenzó a profundizarse a finales de la década de los setenta dio término a la acumulación de tales excedentes por parte de dichos países afectando la marcha de sus respectivos planes de desarrollo <sup>(73)</sup>. Las importaciones se mantuvieron a un ritmo superior al crecimiento de las exportaciones, incrementando el déficit en la balanza y el pago de intereses de una deuda externa creciente utilizada en la modernización de la infraestructura productiva argentina.

En un intento por rescatar su plan económico antiinflacionario, los militares establecieron en 1978 un sistema que incluyó un esquema preanunciado de devaluaciones, ajustes prefijados del dólar a un ritmo inferior a la inflación y a la tasa de interés. Este plan mejor conocido como "La tablita" <sup>(74)</sup>, fue aplicado con objeto de generar una moneda sobrevaluada capaz de estimular las importaciones a precios bajos y, en teoría, inducir una convergencia entre los precios nacionales e internacionales.

Sin embargo, este plan generó un círculo de realimentación entre la tasa de interés, el valor del dólar y la inflación. Este fenómeno combinado con un aumento sinprecedentes de la deuda externa entre 1978 y 1981, alimentada con la estatización de deudas de empresas privadas, debilitó la capacidad de un Estado que se había convertido en subsidiario de diversos sectores económicos, la cual se descargó sobre la sociedad argentina. Esta creciente debilidad del Estado para enfrentar dicha política, acentuó la

incertidumbre económica que se reflejó en una contracción del ahorro interno, la dolarización de la economía y la extraordinaria fuga de capitales.<sup>(75)</sup>

En la década de los setenta Argentina inició una política de endeudamiento externo para impulsar la industrialización del país. Esta política, como se mencionó, estuvo sostenida por los créditos excedentes otorgados por los países exportadores de petróleo. Estos "petrodólares", se destinaron a modernizar la infraestructura industrial Argentina que fuera capaz de enfrentar las políticas proteccionistas adoptadas por la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón. Este proceso industrializador, se vio frenado con la crisis de la deuda de 1982.<sup>(76)</sup>

El agotamiento de la capacidad de los países exportadores de petróleo para acumular excedentes como resultado de dicha crisis, los países altamente endeudados como Argentina debieron enfrentar el pago de su deuda externa con una disminución del apoyo externo en el flujo de capitales. Dichos pagos se realizaron con aportes de los organismos mundiales de crédito, postergaciones en el pago de intereses, así como el inicio de negociaciones de reestructuración de dichas deudas. A los pobres resultados surgidos de la aplicación del programa de devaluaciones preanunciadas, se sumaron los efectos negativos de éste para la industria local que se vio rebasada por la competencia extranjera y el mantenimiento de altos índices de inflación.

Al interior de la Argentina, la aplicación de medidas económicas restrictivas y de apertura total de la economía, contó con la oposición de la mayoría de los sectores de la población. Esta oposición era alimentada con la política económica establecida por los organismos financieros internacionales.

La implantación de medidas coercitivas por parte del Estado dirigido por Videla para neutralizar estas demandas, permitió la continuación en la aplicación de las políticas económicas monetaristas. Esta oposición de los sectores sociales -sindicatos peronistas proscritos, movimientos guerrilleros- en contra del régimen militar, irónicamente constituyó un elemento importante para desplegar un alto grado de unidad para contrarrestar esa oposición y una estabilidad observada en los primeros años del gobierno castrense.

En efecto, la política proscriptiva de los movimientos organizados que mostraban oposición al régimen militar vio sus resultados en los primeros tres años. El gobierno bajo el mando de Videla, marcó el más prolongado periodo de ausencia de protestas gremiales en la Argentina desde 1943.

No obstante, esta unidad comenzó a tener fisuras hacia 1978. Al triunfo del ejército sobre los movimientos guerrilleros que logra desarticular, se interpuso la ineficacia de la política económica. Esta comenzó a evidenciarse en ese año con la quiebra de importantes bancos del país. Para contrarrestar esta situación, el gobierno debió intervenir en otros bancos para evitar situaciones similares<sup>(77)</sup>. La industria local enfrentó mayores dificultades para su mantenimiento, a consecuencia de su mínima capacidad de

competencia frente a empresas trasnacionales que controlaron la mayor parte del mercado argentino.

Este colapso de la industria argentina, representó para los bancos locales el absorber pérdidas que los imposibilitaron para continuar operando. La fuga de capitales continuó ascendiendo, por lo que esta descapitalización de enfrentó con un mayor endeudamiento externo.

La unidad mostrada por la régimen comenzó a tambalearse en los últimos meses de 1980, cuando el Comandante en Jefe de la Marina hizo públicas las discrepancias existentes entre los integrantes de la Junta respecto a la efectividad de la política económica. Estas diferencias, estuvieron enfocadas no a los objetivos de estabilidad sino a las estrategias adoptadas para su consecución. Esta crisis económica, complicó aún más los esfuerzos del régimen militar por encontrar al sucesor de Videla, cuya gestión culminaría en marzo de 1981.

#### 2.4.5 La sucesión del General Jorge R. Videla y el periodo del Gral Roberto Viola

La sucesión de Videla constituyó un reto para la Junta, no sólo en el aspecto de continuidad y unidad que descaban imprimir. A esto se sumó el intento por mantener la estrategia económica impuesta en el gobierno de aquél y la certeza de que su sucesor no alteraría en forma sustancial el "Proceso" iniciado en 1976. Finalmente, en octubre de 1980 la Junta Militar designó como sucesor de Videla al General Roberto Viola.

Antiguo condiscipulo del primero, Viola fue considerado como la opción moderadora de las diferencias de la Junta y como la persona indicada para dar continuidad institucional al gobierno militar. La decisión de designar a Viola como sucesor de Videla, sin embargo, no contó con el apoyo de la Marina.

La oposición de la Armada a la designación de Viola, afirmó la vigencia de conflictos anteriores existentes al interior de las fuerzas integrantes de la Junta. El principal cuestionamiento de la Armada se refirió a su oposición a que una persona desempeñara en forma simultánea -como era el caso de Videla- los cargos de Presidente de la República Comandante en Jefe y, en esa calidad, Miembro de la Junta Militar. A pesar de dicha oposición y después de intensas negociaciones, Videla logró mantener dichos puestos e incluso ser elegido nuevamente para mantenerse en esa posición a partir de 1978.

La elección de Viola profundizó el conflicto suscitado entre las fuerzas integrantes de la Junta, y puso en peligro la estabilidad del régimen militar. Esta diferencias se tradujeron en crisis políticas, evidenciada con la división del régimen en lo que era el gobierno propiamente dicho y el surgimiento de un frente interno de las fuerzas armadas. Esta división, enfrentó a los militares que mantenían cargos gubernamentales y a los oficiales de la Marina y la Aeronáutica.

En marzo de 1981, Viola asumió la presidencia del país manteniendo los lineamientos impuestos en el "Proceso", aunque las diferencias con Videla fueron de orden táctico y de estilo de gobierno. Viola consideraba en su estrategia un mayor comportamiento político en contraste con Videla que prefirió administrar que negociar. Estos cambios de actitud y estilo de gobierno, propiciaron presiones por parte de sectores que deseaban la continuación de la política económica impuesta con Videla.

El nuevo gobierno respetaba los lineamientos del PRN, pero se reservó dicho apoyo a la estrategia económica que se debía adoptar para contrarrestar el agravamiento de la crisis económica. El cambio de autoridades económicas ordenado por Viola marcó modificaciones en la política económica. Se decretó una mayor liberalización de precios, eliminación de las barreras aduaneras, la apertura al capital extranjero y una liberalización del sistema bancario. Asimismo, continuó los esfuerzos del gobierno anterior respecto a la no intervención del Estado en la economía y la reducción al mínimo del presupuesto nacional (78).

Por otra parte, esta misma política incluyó la congelación de los salarios como parte fundamental del nuevo plan económico, así como la sobrevaluación del peso argentino a principios de 1981. Sin embargo, la ineffectividad que siguió mostrando ésta -el peso argentino se devaluó 10% en los primeros meses de ese año-, propició un cambio de estrategia económica.

El estilo de gobierno de Viola intentaba promover la negociación política como fórmula de negociación. Al efecto instrumentó un plan de integración nacional, cuyo objetivo principal se centró en inducir una normalización gradual de la vida política del país, la restauración de algunos derechos civiles y, en suma, promover el diálogo entre el gobierno y la oposición.

Esta posición, sin embargo, no fue apoyada por los demás integrantes de la Junta. Incluso, una de las principales causas del fracaso de su intención de promover una redefinición en la relación con la sociedad argentina -incluidas las organizaciones políticas mayoritarias- por medio de la modificación de la orientación económica, lo constituyó las mencionadas divisiones del régimen.

Si bien éstos no se oponían a la intención de Viola de iniciar una apertura política, discrepaban en lo relativo al establecimiento de un calendario electoral que se intentaba hacer efectivo en 1984. La intención de Viola, se basaba en allegarse una base política proveniente del pueblo argentino. Señalaba que el próximo Presidente que gobernara al país, debía contar con verdadero apoyo popular.

Esta posición recrudeció las divisiones al interior de la Junta, que mantenía su intención de designar al próximo Presidente de la República. Gradualmente, el poder político de Viola se fue reduciendo, como reflejo del reducido apoyo que había sustentado su ascensión a la presidencia.



#### 2.4.6 Actuación de la Multipartidaria

Alentados por esta división, los partidos políticos iniciaron acciones para presionar por una redemocratización del país y la aplicación de una política económica de corte nacionalista. Como resultado, la oposición política conformó en julio de 1981 la denominada Multipartidaria, conformada por los cinco principales partidos políticos argentinos: el Justicialista, Unión Cívica Radical, Movimiento de Integración y Desarrollo, Democracia Cristiana y Partido Intransigente. Esta coalición de partidos exigía la instrumentación de acciones por parte del gobierno para establecer un proceso redemocratizador del país. <sup>(79)</sup>

La intención de Viola de tolerar la acción política de la Multipartidaria, como estrategia para allegarse su apoyo para alcanzar la presidencia en 1984, lo enfrentó aún más con la posición radicalista de Galtieri que buscaba mantener la superioridad de las fuerzas armadas en la toma de decisiones y que veían en la Multipartidaria una amenaza a dicha preminencia. No obstante, el nacimiento de la coalición partidaria, acrecentó el aislamiento de Viola respecto a los demás oficiales integrantes del frente interno que mantenían una posición de total rechazo a la negociación con los actores políticos de oposición.

Sin duda, las fuerzas armadas mantenían su capacidad de disolución de los partidos políticos. Si embargo, la instrumentación de esta política represiva significaba para Galtieri una retención del poder de Viola, ya que éste mantenía un significativo control de gran parte del aparato represivo del Estado. La división de los oficiales de línea dura encabezados por Galtieri respecto a la amenaza que podría significar el aumento en las acciones de la Multipartidaria, las cuales mostrarán una pérdida de autoridad de las fuerzas armadas, propició el aumento de la presión de los oficiales sobre Viola.

#### 2.4.7 El derrocamiento de Viola y la ascensión del Gral. Leopoldo Galtieri

El gobierno de éste finalmente se vio truncado nueve meses después, cuando el Comandante del Ejército, General Leopoldo Galtieri, encabezó una asonada que puso término a su gestión. Este alzamiento militar,<sup>(80)</sup> evidenció el mantenimiento de las profundas diferencias sostenidas por los tres cuerpos del ejército argentino, iniciadas con discrepancias que se hicieron públicas, seguidas por divisiones internas.

Este hecho, por otro lado, mostró las diferencias mantenidas por los cuerpos militares integrantes de la Junta, respecto a iniciar el proceso de transición del poder a los civiles y sus intenciones de mantenerse en el poder indefinidamente hasta alcanzar los objetivos enunciados en el PRN. La destitución de Viola, <sup>(81)</sup> por otro lado, tuvo efectos sobre las normas establecidas en el PRN, al mantener una sola persona los tres cargos antes citados.

De esta forma, Galtieri asumió la presidencia en medio de unas fuerzas armadas divididas. Al efecto, el nuevo presidente reestructuró la comandancia de la Armada, lo cual posibilitó una estrecha relación entre el Ejército representado por Galtieri y la Armada que incluyó desde ese momento el control directo del gobierno. Los motivos de éste para tomar el poder fueron de orden ideológico, que favorecía la implantación de un modelo de desarrollo al estilo neo-clásico apoyado por un estado represivo con un gobierno personalizado. Al efecto, mantuvo su cargo de Comandante en Jefe para centralizar el poder ejecutivo. (82)

El primer reto para Galtieri, constituyó el restablecer la autoridad de las fuerzas armadas. Su estilo personalista de gobierno, no obstante, ensanchó las divisiones existentes en la oficialidad militar. Este reemplazo en la presidencia de la nación, representó asimismo el retorno de las políticas económicas neoliberales que no consideran las posibles reacciones de los actores civiles que pudieran generar dichas políticas. Esta percepción, produjo un distanciamiento de los partidos políticos mayoritarios, dirigencias sindicales y sociedad en general respecto a la autoridad castrense.

Otra fuente de tensión, además de la significativa impopularidad de los planes económicos impuestos por el régimen militar, lo constituyó la creciente división observada por los integrantes de la Junta. Por ello, Galtieri inició acciones para replantear los objetivos enumerados en el Proceso, con objeto de restablecer el sentido a dichos objetivos que justificaran la intervención militar en el proceso político de la Argentina.

En contradicción al mantenimiento de la política económica restrictiva y monetarista, Galtieri adoptó un estilo de gobierno dual. Es decir, inició acciones para mantener la centralización del poder Ejecutivo, y al mismo tiempo instrumentó acciones tendientes a promover una transición política. Su intención fue crear un movimiento político integrado por civiles y militares que en forma gradual ganara espacio y acción política. Por medio de esta base, intentaba legitimar su retorno al poder en 1984, sin que esto necesariamente debiera contemplar la organización de un proceso electoral.

Esta posición, resulta en mayor medida de la particular percepción de los militares respecto al ejercicio del poder, al cual consideran como un atributo de orden natural y excluyente de otros actores políticos independientemente de la reacción generada por dichos actores a las políticas gubernamentales.

En su estrategia política, Galtieri buscaba restar fuerza política a la Multipartidaria a fin de evitar riesgos que pudieran repetir una derrota electoral a los militares como sucedió en 1973. Por ello, favoreció la instalación de gobernadores civiles en las provincias del país y para popularizar aún más su gestión, sostuvo reuniones secretas con líderes peronistas en un esfuerzo por lograr un acuerdo político.

En reciprocidad, su gobierno ofrecía eliminar restricciones existentes sobre los sindicatos, la incorporación de peronistas en su gobierno a fin de mantenerse en poder más

allá de 1984. Sin embargo, su anuncio de restablecer el sistema político de partidos para iniciar un proceso de redemocratización fue tomado con cautela por éstos.

Por otro lado, el conocimiento de las reuniones de Galtieri con los peronistas molestó a las fuerzas armadas, quienes exigieron a éste mantener informadas de las acciones del Ejecutivo. Su intención era mantener y, en el mejor de los casos, replantear la estrategia política por parte de los militares quienes se oponían la mantenimiento de la estrategia económica.

El gobierno de Galtieri, en contradicción a sus intenciones de popularizar su gobierno, incluyó en su programa económico el congelamiento de salarios de los trabajadores del sector público y un plan de privatizaciones que incluían empresas militares. Este plan constituía una pesada carga para la clase trabajadora ya que no incluía soluciones sustanciales a una industria semiparalizada y endeudada y preveía un enfrentamiento con los industriales militares. (83)

La intención de Galtieri por prepararse un camino que lo llevara de nueva cuenta a la presidencia, se vio obstaculizado con la aplicación de un plan económico claramente antipopular y una disminución de su poder político frente a los demás cuerpos militares como resultado de la ineficacia de la política económica. Reconocido el fracaso de la política económica incluida en el PRN que afectó en forma sustancial la credibilidad y autoridad de las fuerzas armadas, Galtieri en un intento por realignarse el apoyo, se embarcó en la aventura militar que constituyó la invasión de las islas Malvinas por el ejército argentino, con sus desastrosos resultados.

Como ejemplo de la crisis económica, Argentina la deuda externa bajo el régimen militar pasó de alrededor de 6 mil millones de dólares a 30 mil millones. Los intereses de esta deuda, había sido contratados a corto plazo, por lo que existían presiones para cumplir con el pago de éstos que representaban más del un tercio del PIB y superaban el total de los recursos provenientes de las exportaciones. Las reservas internacionales observaron una caída sustancial pasando de 10 mil mdd a principios de 1980 a 8 mil mdd en octubre de ese año y para febrero de 1981 pasaron a 4300 mdd. (84)

#### 2.4.7.1 La cuestión de las Islas Malvinas

En los primeros meses de 1982, el escenario político y económico en la Argentina se caracterizaba por su desorganización. El enfrentamiento entre el régimen y los partidos integrantes de la Multipartidaria reflejaba el profundo distanciamiento, demostrado por las abiertas acciones que desafiaban la autoridad del régimen militar. La débil defensa de la estrategia económica y de su política de acercamiento con los peronistas por parte de Galtieri, se tradujeron en una pérdida sustancial de su propia autoridad y agravaron las divisiones existentes en las fuerzas armadas.

Este contexto amenazaba la permanencia de Galtieri en el poder y la existencia misma de la Junta Militar. En un último intento por mantener la cohesión y la unidad del

régimen militar, Galtieri utilizó la opción militar invadiendo las Islas Malvinas en abril de 1982 para reclamar la soberanía de éstas. Esta acción es apoyada y exigida por la Armada para mantener ese apoyo al Ejecutivo y destrabar la cuestión de la soberanía argentina sobre dichas Islas, reclamadas por la Gran Bretaña.

Esta acción, produjo un acercamiento entre las organizaciones militares y civiles en torno al nacionalismo argentino. Esta coyuntura, relegó a un segundo plano la discusión de los graves problemas que enfrentaba la nación -retorno a la constitucionalidad, crisis económica, responsabilidad de las fuerzas armadas en la violación de derechos humanos y de libertades fundamentales, desaparición de personas, entre otros-. Asimismo, el tema de un retorno a la democracia se consideró como atentatorio a la unidad nacional en virtud de la situación de emergencia nacional.

No obstante, esta unidad suscitada por la invasión y la respuesta armada de los británicos, no fue respaldada por la totalidad de los sectores de la población. Esta adhesión que se manipuló por conducto de los medios masivos de comunicación, ocultó las posiciones divergentes que mantuvieron algunos sectores de la población y dirigencias partidarias.

Por otro lado, el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, momentáneamente puso fin a más de un siglo de colonialismo inglés en esta parte del continente americano. Como se comprobó dos meses después, la derrota de uno de los dos países marcó el derrumbe de uno de los dos gobiernos, de acuerdo con el resultado final del conflicto.

Los esfuerzos diplomáticos por lograr una solución al problema surgido entre Argentina y Gran Bretaña, se vieron rebasados por el inicio de una guerra de corta duración entre ambos países. Las fallidas gestiones de Estados Unidos por evitar un conflicto de mayores dimensiones, dieron paso a la acción armada.

La cuestionable neutralidad norteamericana en el conflicto al asumir una actitud de apoyo logístico a uno de sus más importantes aliados europeos, obligó a la Argentina a buscar el apoyo de otros países, el cual incluyó el de los países latinoamericanos, con algunas excepciones. Estados Unidos declaró un boicot contra la nación argentina, sumándose al acuerdo proclamado por la Comunidad Económica.<sup>(85)</sup>

El desenlace final del conflicto, favorable en el terreno militar para la Gran Bretaña <sup>(86)</sup> cuando el 15 de junio de 1982 nuevamente es sustituida la bandera argentina por la británica en la capital de las Islas, Port Stanley, que durante 74 días tuvo el nombre de Puerto Argentino. La derrota militar argentina tuvo efectos a nivel interno e internacional que no pueden dejarse a un lado.

#### 2.4.7.2 Posición norteamericana y latinoamericana frente al conflicto

La actitud norteamericana de apoyar a su aliado europeo reafirmó la nulidad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), impulsado por Estados Unidos para la defensa mutua de los países latinoamericanos en caso de amenaza extracontinental (87). En el mismo sentido, la OEA se vio incapacitada para actuar en defensa de un país continental, lo cual demostró la existencia de un país como Estados Unidos que mantiene intereses y percepciones de la problemática latinoamericana sustancialmente distinta.

En el caso de Argentina, cabía señalar que el apoyo moral a las reclamaciones de soberanía otorgado por los países latinoamericanos, ilustró el grado de aislamiento en que se encontraba el régimen militar. En este sentido, la permanente actitud argentina en su diplomacia hacia la región de ser considerados como europeos, después del citado conflicto debió ser modificada.

No obstante, este hecho igualmente constituyó una lección para América Latina, la cual debe replantear sus relaciones con Estados Unidos ya que evidentemente, en lo que respecta a los pactos de seguridad establecidos con Estados Unidos, sólo han servido de justificante a la política de intervención que Estados Unidos ha practicado en el Continente a lo largo de su historia.

En el ámbito interno, el régimen militar había tomado la decisión de invadir las Islas sin considerar importantes actitudes y percepciones tácticas. Esta acción no tomó en cuenta, al parecer, de las reacciones políticas, militares y diplomáticas tanto de la Gran Bretaña como de Estados Unidos. La intención de desviar la atención de la población de los graves problemas nacionales y de autoridad quedó enterrada con el desarrollo inicial de la guerra.

Al parecer, la junta militar nunca contempló una reacción militar directa de la Gran Bretaña ante la invasión para recuperar un archipiélago ubicado a más de 13 mil kilómetros de ese país, considerando que su actitud no rebasaría el reclamo de soberanía a través de los foros internacionales. El envío británico de un gran número de efectivos especiales y equipo militar moderno, contrastó con las fuerzas argentinas conformadas por jóvenes, en su mayoría conscriptos que carecían de experiencia y entrenamiento adecuado para las condiciones climáticas y geoestratégicas en que se desarrolló la guerra.

Este hecho, demostró que los militares argentinos nunca pensaron entablar un lucha armada directa con las tropas británicas, lo que eliminó su intención de incluir la invasión y retención de las Islas Malvinas en el marco del PRN. Esto es, aniquilados los movimientos guerrilleros en el país, el régimen militar reafirmaría con esta acción su difícil misión de restaurar la seguridad y soberanía nacional. Sólo al principio de la ocupación, los partidos políticos y el sector laboral, con sus excepciones, apoyaron la decisión considerándola una reivindicación histórica del pueblo argentino.

Sin embargo el 15 de junio, ante la inminente derrota de las tropas argentinas, el mando militar de la Argentina procedió a solicitar un alto al fuego.<sup>(88)</sup> El acta de alto al fuego como se maneja en los círculos militares de nación sudamericana, en contraste con el concepto de rendición utilizado por los británicos, puso el punto final a una guerra "no declarada".

Desde ese momento se abrió paso a una intensa campaña de negociaciones y gestiones diplomáticas de la Argentina en reclamo de la soberanía de las Malvinas. Estas negociaciones que se prolongaron hasta octubre de 1989, dieron como resultado la promulgación de un cese oficial de hostilidades entre ambos países. No obstante, las negociaciones sobre la soberanía de las Islas continúan.

#### 2.4.8 La transición a un régimen civil

La derrota militar argentina, aceleró el proceso de descomposición de la Junta Militar. La posición de los partidos políticos y sectores sociales que apoyaron la acción militar, quedaron en una posición embarazosa con el resultado final de la contienda. Para ese momento, los organismos defensores de los derechos humanos y los dirigentes políticos que no se adhirió a la medida, gozaron de legitimidad para capitalizar en su favor la crisis política.

La Multipartidaria, por su parte, retomó sus exigencias de vuelta a la constitucionalidad del país, levantamiento del Estado de sitio, información sobre los "desaparecidos"<sup>(89)</sup> durante la guerra subversiva, restauración de las libertades sindicales, etc. Este proceso de transición de acuerdo con la Multipartidaria debía ser dirigida por los propios militares, así como la instrumentación de medidas que dieran solución a los problemas nacionales derivados de su gestión, a fin de evitar la herencia de dichos problemas al nuevo gobierno constitucional.

Al interior de las fuerzas armadas, el resultado negativo de la guerra eliminó la principal base de unidad de la Junta: la unidad de las fuerzas armadas. La Marina y la Aeronáutica se oponían a la continuación del poder en manos de los militares, en contraste con la posición del Ejército que proponía a un militar para continuar en el poder. Estas diferencias marcaron la ruptura total de la Junta, incapaz de reorganizarse.

De esta forma, el punto básico incorporado en el PRN que establece que la designación del Presidente debía ser una decisión unánime y conjunta de las tres fuerzas, desarticuló al mismo Proceso. El ejército como depositario del poder ejecutivo y principal responsable de la derrota militar, asumió la conducción política de la nación.

Como resultado, el General retirado Cristino Nicolaidis, designó al General Reynaldo Bignone (r), de tendencia moderada, como nuevo Presidente de la República. Los contactos que mantuvieron las tres fuerzas, sólo lograron establecer un acuerdo para iniciar la transición del poder a los civiles en el corto plazo. Finalmente, el comando del Ejército

acordó entregar el poder a un gobierno civil mediante elecciones, la instalación de una comisión de deslinde responsabilidades surgidas de la actuación antisubversiva, continuar con las investigaciones sobre la responsabilidad de las tres fuerzas armadas en la guerra de las Malvinas, no incluir excepciones en los procesos seguidos por actos ilícitos de funcionarios públicos e intentar una recomposición de las fuerzas castrenses.

Los puntos más sensibles de estos acuerdos lo constituyó la responsabilidad de cada rama de las fuerzas armadas en su actuación en la guerra del Atlántico Sur. Evidentemente, la Aeronáutica, que había tenido una actuación decorosa en el desarrollo del conflicto, junto con la Marina, no estaban dispuestas a compartir responsabilidades a un mismo nivel. Asimismo, al interior del ejército surgió un movimiento encabezado por los generales de menor antigüedad, los cuales reclamaban la terminación de cuestiones relativas a la violación de derechos humanos antes de la ascensión de un gobierno civil, así como la recuperación del prestigio de los militares con la aplicación de medidas rígidas.

Estas posiciones divergentes fueron manifestaciones de la incapacidad de los militares por conseguir acuerdos con las fuerzas políticas, tendientes a buscar apoyo de candidatos militares o afines a ellos en la contienda electoral. Recompuesta la Junta mediante el denominado "esquema de poder"<sup>(9)</sup> que se concreta hacia septiembre de 1982, ésta acuerda el traspaso del poder a los civiles en los inicios de 1984.

Acordado lo anterior, el gobierno militar inició acciones de concertación con las fuerzas civiles. Entre los principales puntos que debía resolver el gobierno, se incluyó la investigación respecto a la Guerra de las Malvinas, la cuestión limítrofe con Chile, las consecuencias de la lucha antiguerrillera, cuestiones económicas y el régimen electoral.

La intención de los militares por mantener una presencia en la conformación del próximo gobierno, propició el rechazo de las organizaciones políticas y la sociedad en general. La reacción militar a este rechazo, incluyó la amenaza a las consecuencias de la alteración del orden. Sin embargo, la debilidad y el desprestigio de los militares, incapaces de reorganizarse, significó que éstos no podrían lograr acuerdos con las organizaciones políticas nacionales que garantizaran la situación futura e inmunidad jurídica a cambio de la instrumentación de un cronograma electoral.

Este enfrentamiento, generó un clima social de incertidumbre. Por un lado, los militares sostenían su compromiso con la transición del poder, pero al mismo tiempo exigían garantías a las nuevas autoridades para que no incurrieran en acusaciones en su participación en la guerra subversiva y de su actuación en la Guerra de las Malvinas. En este sentido, el tema central para los militares lo constituía la proliferación de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos tanto a nivel interno como internacional imputables al régimen militar, sin visualizarse un acuerdo con las fuerzas políticas civiles.

#### 2.4.8.1 La autoamnistía

En este contexto, la Junta Militar dio a conocer en abril de 1983 el denominado "Documento Final". Este documento resumió la actuación de las fuerzas armadas en su participación en la llamada "guerra sucia" conceptualizada por el régimen como "la agresión terrorista". Por medio de la "Ley de Pacificación Nacional", que incluyó la "Ley de Amnistía" y la "Ley para la Defensa de la Democracia", los militares intentaban salvaguardar el futuro jurídico del personal que participó en la denominada guerra sucia en el período comprendido entre mayo de 1973 a junio de 1982. (91)

Los oficiales de las distintas armas se respaldaron en la declaración de los altos mandos militares, en el sentido de que oficiales y suboficiales sólo actuaron por órdenes superiores. De esta forma, los excesos que pudieron presentarse, sólo debían ser juzgados por tribunales militares. Al respecto, las autoridades militares señalaron que su actuación fue el resultado de la decisión del gobierno de la Presidente Ma. Estela Martínez de Perón, quien descargó en las fuerzas armadas la tarea de supresión del terrorismo y la insurgencia armada. (92)

Los documentos citados resumían su posición respecto a la violación de derechos humanos. Estos, más que una respuesta a las exigencias sociales, tendió a considerarse, por los militares, como una solución que tranquilizara al frente interno militar. La sanción de estas leyes, sin embargo, sólo generó un mayor aislamiento del régimen militar y profundizó su incapacidad por ejercer el control interno del Estado. El rechazo a dichas leyes, generó ahora no sólo el rechazo de la sociedad argentina, sino también de funcionarios del régimen.

Conscientes de esta debilidad, el régimen militar acuerda con las organizaciones políticas la entrega del poder a los civiles mediante elecciones. Estas fueron fijadas para el 30 de octubre de 1983 y la sucesión presidencial al 30 de enero de 1984. Esta última fecha fue adelantada al 10 de diciembre como resultado de la victoria de los radicales y ante la autodisolución, cinco días antes de la segunda fecha, de la Junta Militar.

#### 2.4.9 El proceso electoral

El anuncio de elecciones por parte de la junta militar, generó nuevas expectativas y esperanzas de solución de la severa problemática en que se encontraba el país. El entusiasmo de la población contrastaba con una severa crisis económica e institucional del régimen militar incapaz de cubrir su propia retirada. El gobierno castrense había admitido la que el país se encontraba en moratoria, las importaciones se habían suspendido, se decretó la congelación de cuentas en dólares y la inflación seguía una marcha ascendente.

El aparato productivo estaba semiparalizado y la explosiva situación social colocaron al país ante una de las crisis más profundas de su historia. Los partidos políticos se encontraban desorganizados y divididos, los líderes sindicales no contaban con una base



popular para intentar afrontar con éxito la situación y una total falta de cohesión en las fuerzas armadas para afrontar un proyecto distinto al de la institucionalización militar.

En este contexto, la campaña electoral en la Argentina alcanzó niveles de participación de la sociedad sin precedentes. La sanción de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos en 1982, legalizó nuevamente la actividad partidista.

Por primera vez, el peronismo enfrentó unas elecciones sin la presencia de su principal dirigente. El peronismo, una de las principales fuerzas electorales del país, mantenía las profundas divisiones internas agudizadas con el golpe de Estado de 1976. Desde la muerte de Perón, serían dirigidos por su Viuda Ma. Estela Martínez que se encontraba exiliada en España y continuaba siendo, nominalmente, la presidenta del PJ.

El PJ encontró a su ala política y sindical profundamente dividida. Los intereses partidarios se mantenían vigentes por lo que el desplazamiento de la izquierda peronista por el ala sindical profundizó las diferencias y alejó el apoyo de éstos a los candidatos propuestos para contender en las elecciones, incorporándose al radicalismo. Por otro lado, habían surgido dos centrales sindicales que reclamaban la representación peronista: la CGT-Brasil y la CGT Azopardo, que en las elecciones actuaron como facciones antagónicas. Otro factor que contribuyó al no sorpresivo fracaso electoral del peronismo, fue la imagen gangsteril que proyectaron en las clases medias sus principales dirigentes sindicales.

Como candidato a la Presidencia por el Partido Peronista fue designado Italo Lúder.<sup>(93)</sup> De imagen democrática y rígida, su nominación sin embargo no contaba con una base real de apoyo dentro de las filas peronistas por lo que su eventual elección estuvo influenciada por líderes sindicales como Lorenzo Miguel -que virtualmente mantenía el poder del PJ-. Asimismo, Lúder no logró impulsar su candidatura debido a que como Presidente Provisional en 1975, debió implantar el estado de sitio y la autorización de delegar en los militares la lucha antigüerrillera que posteriormente estos aplicaron en forma sistemática.

Por su parte, el segundo partido político más importante del país, la Unión Cívica Radical, nominó a Raúl Alfonsín. Líder de la izquierda del partido, una de las facciones más pequeñas del radicalismo "Renovación y Cambio",<sup>(94)</sup> se granjeó el apoyo de diversas facciones del interior del país, lo cual posibilitó su elección como candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), en las elecciones de 1983. En corto tiempo logró desplazar a la dirigencia tradicional de la UCR encabezada por Ricardo Balbín, candidato a la presidencia de la República en diversas ocasiones.

Alfonsín incluyó en su discurso político su intención de convertir al radicalismo en una fuerza política de primer orden capaz de resurgir como una alternativa política para el país. Esta propuesta de sacar al radicalismo de la convergencia que se había mantenido con el PJ y de promoción del establecimiento de la democracia, le permitió allegarse el apoyo no sólo al interior de su partido. Importantes sectores tradicionalmente peronistas otorgaron su apoyo a Alfonsín.

Poco antes de las elecciones, el país se encontraba enfrentado entre ambas alternativas. Los demás partidos centraron su estrategia en concretar alianzas con dichos partidos a fin de lograr una representatividad. Las anteriores alianzas como en 1973-76 entre peronistas y radicales y su actuación unida en la Multipartidaria quedaron superadas.

El 24 de octubre de 1983 se realizaron los comicios generales en el país. El resultado de la elección presidencial favoreció al candidato de UCR, Raúl Alfonsín que captó 53% de los votos contra 39% <sup>95</sup>de su principal adversario, el candidato peronista Italo Lúder. Sin embargo, el peronismo logró una mayoría en el Senado, lo cual reafirmó la extrema polarización en que se encontraba el electorado.

Al interior del país, la derrota de los peronistas sólo fue el reflejo de las aspiraciones del pueblo argentino por buscar nuevas alternativas políticas. Las experiencias autoritarias anteriores, así como la actuación política del peronismo que derivó en el golpe de estado de 1976 limitaron el espacio electoral de ambas fuerzas, profundizadas por divisiones internas.

#### 2.4.9.1 El radicalismo en el poder

La ascensión de los radicales al poder ejecutivo, más que constituir un compromiso y un convencimiento de la sociedad argentina de que el nuevo gobierno sería capaz de solucionar los problemas nacionales en el corto plazo, significó el rechazo del pueblo argentino a retomar la alternativa ofrecida por el peronismo, en virtud de su actuación política entre 1974 y 1976 y de su imagen de desorganización y de faccionalismo en la etapa preelectoral. Al mismo tiempo, con unas fuerzas armadas sin cohesión y divididas, el pueblo argentino votó por la alternativa ofrecida por los radicales, delegándole la colosal tarea de reconstruir política, económica y socialmente al país.

Esta reconstrucción se intentó concretar dentro del marco de la legalidad y la constitucionalidad, aunque la consolidación de la democracia en Argentina, al igual que en otros países de la región, siguió y continúa siendo una expectativa. La vuelta al poder de un régimen civil en la Argentina en diciembre de 1983, se constituyó como un nuevo punto de partida en el intento por establecer en forma permanente un régimen político que agrupara a todos los sectores políticos y sociales para enfrentar la aguda problemática heredada del régimen militar.

<sup>1</sup> En este período la Guerra contra Inglaterra en 1812 distrajo aún más su atención de los asuntos latinoamericanos. Este conflicto surgió como el factor de unidad nacional al exaltar el nacionalismo del pueblo norteamericano, y dio paso al inicio de su consolidación política y económica. Por otro lado, el reconocimiento de los nuevos Estados en la región le habría significado igualmente obstáculos en sus negociaciones con España para la compra de la Florida. Adams Willi, Paul; Los Estados Unidos de América. p-58-60

<sup>2</sup> La política de reconocimiento a los procesos revolucionarios observados en América Latina por parte de la administración de James Monroe, se asentó como una señal a los países europeos, de su decisión de asumir una mayor presencia en los asuntos de la región. Esta posición, respondió a los intentos de reconquista de algunos países europeos. España, Rusia, Austria, Prusia, Francia e Inglaterra, centraron su objetivo en la recuperación de sus colonias en América, para lo cual conformaron la denominada "Santa Alianza". Fabela, isidro Dr.; La Doctrina Monroe y Drago. p-8-11

<sup>3</sup> *idem*

<sup>4</sup> Levin, Aida Luisa; La OEA y la ONU: relaciones en el campo de la paz y la seguridad. p-28-31

<sup>5</sup> Esta doctrina expresada por el jurista argentino Carlos Calvo (1824-1893), fundada en la igualdad de los Estados, proscribe las intervenciones de un Estado en los asuntos de otro con pretexto de daños reales o supuestos causados a los ciudadanos del primero, reclamándose indemnización por medio de la interposición diplomática. El extranjero no tiene porqué recurrir a la protección diplomática de su gobierno, pues no puede pretender mayores derechos que los nacionales y debe debiendo recurrir a los medios que proporciona la jurisdicción local. Sepúlveda, César; Terminología usual de las Relaciones Internacionales; Derecho internacional Público. p-36

<sup>6</sup> En los últimos años del siglo XIX, la política exterior norteamericana observó cambios. Del aislacionismo tradicional pasó a un internacionalismo que dio paso a una activa participación en los asuntos mundiales, producto de su transición política y económica que lo ubicaron en un status de gran potencia. Esta nueva situación, aleccionó el interés por América Latina dando término a su retracción, pero dando paso a políticas coercitivas hacia los países de la región. Como ejemplo, la Guerra de Estados Unidos contra España en 1898, derivó en la anexión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos, estableció un protectorado sobre Cuba y afianzó su idea de construir un canal transistmico en la región centroamericana. Smith, Gaddis; El legado de la Doctrina Monroe. The New York Time Magazine en Contextos (ya desaparecida), no. 39, noviembre de 1984.

<sup>7</sup> A este corolario lo antecedía el denominado Corolario Olney, Secretario de Estado del Presidente Polk en 1895 quien señaló, amparado en la Doctrina Monroe, que Estados

Unidos es "prácticamente soberano sobre este continente y su mandato es ley respecto a los asuntos que su interposición determina". *ibidem* p-2-3

<sup>8</sup> En diversas ocasiones, las intervenciones militares o el derrocamiento de gobiernos se justificó por la amenaza que significaban a su seguridad nacional o sus intereses. En este caso se encuentra la invasión a Dominicana, Haití, Cuba, Nicaragua, Honduras y Panamá durante los años siguientes. Atkins, G. Pope.; América Latina en el sistema político internacional. p-107 y ss

<sup>9</sup> La configuración del contexto internacional de primera posguerra se reflejó en la voluntad de los países por evitar una nueva conflagración de esa magnitud para lo cual crearon la denominada Sociedad de Naciones, donde Estados Unidos tuvo una activa participación. Seara Vazquez, Modesto; Tratado General de la Organización Internacional. p-26-30

<sup>10</sup> La no intervención fue instrumentada con el abandono de los protectorados norteamericanos en el área del Caribe, establecidos en Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua y Panamá. Atkins, G. Pope; América Latina en el sistema político internacional...*op. cit.* p-113

<sup>11</sup> Levin, Aida Luisa; La OEA y la ONU: Relaciones en el campo de la paz...*op. cit.* p-28-31

<sup>12</sup> Mediante la ley de Préstamo y Arriendo de 1941, Estados Unidos amplió su asistencia militar a nivel mundial en la que se incluyó a los Estados latinoamericanos. Por medio de esta ley se eliminaron gradualmente hasta su desaparición, años después, las restricciones a la venta de armas de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. Cabe señalar que esta ley excluyó a Argentina ya que continuamente este país se opuso a los planes de defensa hemisférica y promoción del panamericanismo propuestos por Estados Unidos y a la política exterior norteamericana en general. Igualmente Panamá fue excluida por la existencia de convenios bilaterales en esa materia. Maira, Luis; Los experimentos autoritarios en el Cono Sur y la política exterior de Estados Unidos. CIDE, p-1-3

<sup>13</sup> Para un estudio de las diferencias en la percepción del concepto de seguridad entre Estados Unidos y América Latina, véase Varas, Augusto; Cooperación para la paz en el hemisferio Occidental. En Opciones para el logro de una seguridad común en Sudamérica, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. p-105-134

<sup>14</sup> La vigencia de la Guerra Fría tuvo efectos casi inmediatos en América Latina. El establecimiento de un sistema de defensa común en el continente representado por el TIAR, vincularía formalmente a los países latinoamericanos con los intereses de la política exterior norteamericana, al establecerse unos meses después de la proclamación de la denominada Doctrina Trumamm. Este acuerdo, antecedió a las demás alianzas militares que

logró concretar Estados Unidos en otras regiones del Mundo como la OTAN, CENTO o ANZUS. Igualmente, la crisis de los misiles de 1962, introdujo plenamente a América Latina en el contexto de la guerra fría y dio impulso a los esfuerzos norteamericanos por evitar un nuevo foco de "intervención comunista" en la región con la ampliación de sus programas de cooperación militar con las fuerzas armadas latinoamericanas a fin de que éstas estuvieran en condiciones de enfrentar a la subversión. Todo ello en nombre de la "democratización" del continente. Maira, Luis; *Los experimentos autoritarios en el Cono Sur y la Política de Estados Unidos...* op. cit. p-2

15 Atkins, G. Pope; *América Latina en el sistema político internacional*. p-117-119

16 Con anterioridad a 1945, Estados Unidos se convirtió en la potencia dominante en el mundo occidental y asumió como principal preocupación la estabilidad y seguridad de su sistema de alianzas. A medida que el poder norteamericano se expandía en todo el mundo, Washington contrajo intereses directos en muchas zonas, en la que cualquier intento de promover una democracia auténtica podía ser desestabilizante. Por tanto, las autoridades norteamericanas aprendieron a actuar con gran cautela y discriminación en la prosecución de ese objetivo y entendieron el significado del término democracia de modo tal de abarcar con el una extraordinaria variedad de regímenes represivos pero amigables. O'Donnell Guillermo y otros; *Transiciones desde un Gobierno autoritario*. Tomo 3...op. cit. p-68-69

17 Tulchin, Joseph S.; *The impact of U.S. Human Rights Policy: Argentina*. En *Latin American, the United States and the Interamerican system*. p-207 y ss

18 Para un estudio del Atlántico Sur en la década de los noventa véase Mariano C. Bartolomé; *Conflictos en el Atlántico Sur en la década del 90*. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

19 Para un análisis regional sobre dicha Iniciativa véase *Capítulos 28 del Sistema Económico Latinoamericano*. SELA, 1990.

20 Bajo las disposiciones de la denominada Ley de Seguridad Mutua, los Estados latinoamericanos lograron adquirir armas y equipo. Algunos Estados se verían favorecidos bajo la firma de convenios bilaterales denominados "Pactos de Asistencia de defensa Mutua". Por medio de dicha Ley, Estados Unidos estableció dos tipos de misiones militares: 1) Grupos Asesores de Asistencia Militar tendiente a regular transferencias de armas bajo los convenios de asistencia de defensa mutua y 2) Misiones de Servicio de Entrenamiento para apoyar la capacitación militar de las fuerzas armadas latinoamericanas. Calvert, Peter; *Desmilitarización en América Latina*. Third World Quarterly en Contextos (ya desaparecida), año, 3 no. 50, abril de 1985. p-12-14

21 Al respecto resalta el caso español que bajo el régimen fascista de Francisco Franco fue sometido a presiones y al aislamiento internacional con la activa participación de Estados Unidos. Sin embargo, el estallido de la Guerra de Corea modificó la posición

norteamericana. De una posición promotora del aislacionismo, giró al acercamiento a fin de iniciar negociaciones para el establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio español. Como resultado, Estados Unidos realizó exitosos esfuerzos diplomáticos para eliminar el aislamiento del régimen franquista lo que se tradujo en la readmisión de España en la ONU. Maira, Luis; Los experimentos autoritarios en el Cono Sur y la política de Estados Unidos...*op. cit.* p-6-7

22 Perlmutter, Amos and Plave Bennett, Valerie; The Political Influence of the Military. p-211

23 Seara Vazquez, Modesto. "La sociedad democrática. Primera Parte". UNAM, 1978.

24 p. 24-25

25 Argentina: A county study. p-278 y ss

26 Halperin Donghi, Tulio; Revolución y Guerra: Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. p-68

27 Carranca Trujillo, Raúl; Panorama crítico de Nuestra América... *op. cit.* p-76

28 Atkins, G. Pope; Sudamérica en la década de 1990...*op. cit.* p-23

29 Con la mediación británica el conflicto armado fue resuelto en 1828, acordando ambos países la creación de Uruguay como Estado independiente, y éstos se comprometían a garantizar conjuntamente dicha independencia por un término de cinco años. Para Gran Bretaña, la creación de Uruguay evitó el control de Argentina sobre el Río de la Plata. *idem*

30 Astolfi, José C.; Historia Argentina...*op. cit.* p-349

31 Argentina: A county Study. *op. cit.* p-283

32 Campobassi, José S.; Sarmiento y Mitre, hombres de Mayo y Caseros. p-45

33 *ibidem* p-56

34 La actitud poco conciliadora de Francisco Solano López para dirimir disputas territoriales e intentos de invasión sobre Uruguay motivaron la firma del primer acuerdo de defensa mutua en el continente americano. Este fue firmado por los mencionados países y de acuerdo a sus términos, éstos unieron fuerzas para derrocar a Solano López. Esto se logró cinco años después, aunque este conflicto significó grandes pérdidas materiales y

humanas para ambos bandos. Kelly, Philip y Child, Jack; Gropolitica del Cono Sur y la Antártida. p-17

35 Argentina: A county Study...op. cit. p-286

36 A pesar de la recesión mundial de 1930, las fuerzas armadas argentinas crecieron a un ritmo gradual en personal y estructura organizativa. De 1930 a 1943, el personal militar creció de 50,000 efectivos a 100,000 en el momento del golpe militar llevado a cabo por el Grupo Obra de Unificación (GOU), entre los que se encontraba el entonces Coronel Juan Domingo Perón. Asimismo, para 1945 el ejército absorbía más del 50% de los gastos gubernamentales. La estructura militar creció en proporción de 5 divisiones en 1920 a nueve en 1945 además de la creación de la Fuerza Aérea Argentina ese mismo año con estructura y organización autónoma. Asimismo, debido a la guerra no era posible adquirir armas en el extranjero. Por ello, esta situación sería un importante elemento para la creación de una fábrica denominada Fabricaciones Militares, en 1941, destinada a la producción propia de armas. Stausberg Hildegard; ¿Saldrán los argentinos del círculo vicioso?...op. cit. p-49

37 *idem*

38 Levin Aída, Luisa; La OEA y la ONU... op. cit. p-51

39 Durante la crisis de los misiles de 1962 Argentina contribuyó al bloqueo contra Cuba con el envío de naves militares a la Florida. Ramos Jorge, Abelardo; La era del peronismo...op. cit. p-208

40 Sarkesian, Sam C.; Presidential Leadership and National Security...op. cit. p-41

41 La negativa argentina a romper relaciones diplomáticas con el eje generaron conflictos en sus relaciones con Estados Unidos. En noviembre de 1943, éste inició un bloqueo económico contra Argentina, aplicó una cesación de créditos y congeló divisas argentinas depositadas en bancos norteamericanos. Esta presión obligó a la Argentina a romper relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. Sin embargo, este hecho no mejoraría la relación bilateral, ante la negativa de Estados Unidos de reconocer al Gobierno de Edelmiro Farrell, que sustituyó al General Ramírez en la presidencia, por "razones de salud". Lo anterior, debido a que la política interior y exterior del país sudamericano, a pesar de dicha ruptura no varió considerablemente. Ramos, Jorge Abelardo; La era del peronismo, 1943-1982. p-55

42 Este estatuto promulgado en noviembre de 1944 otorgó a los campesinos un instrumento económico y social sin precedente. Su promulgación motivó la reacción adversa de los grupos terratenientes del país, incluida la poderosa Sociedad Rural Argentina. Esta decisión, enfrentó directamente a Perón con dichas sociedades. Como ejemplo del poder político mantenido por la Sociedad Rural, cabe señalar que ésta controló durante el período

anterior a Perón el Ministerio de Agricultura. De 14 ministros que estuvieron al frente, 12 pertenecían a esta Sociedad, que naturalmente decidían la política agraria del país en perjuicio de los pequeños ganaderos. *ibidem* p-56

43 La Constitución argentina establece que el Presidente de la República debe estar casado por la iglesia católica.

44 Estas se refieren a las marchas de protesta de obreros, "los descamisados", y huelgas generales promovidas por Eva Duarte pidiendo la excarcelación de Perón y el respeto a los derechos laborales impulsados por éste. Ramos, Jorge Abelardo; *La era del peronismo...* op. cit. p-40

45 *ibidem* p-86 y ss

46 La política de Estados Unidos, a partir de las administraciones de Herbert Hoover y de Franklin D. Roosevelt, continuaron orientada a la no intervención, excepto en este caso con Argentina al final de la segunda guerra mundial. Estados Unidos se opuso abiertamente a la candidatura de Perón a la presidencia, para lo cual publicó el "libro azul" dos semanas antes de las elecciones en Argentina, en el cual describía las políticas profascistas de Perón y lo acusaba de prácticas totalitarias. Atkins, G. Pope; *América Latina en el sistema político internacional*. p-125

47 Después de conseguir la victoria electoral, los tres partidos agrupados en torno a Perón dentro del Partido Único de la Revolución, serían fundidos por la decisión unilateral de Perón que lo rebautizó como Partido Peronista. Seara Vazquez, Modesto; *La sociedad democrática (primera parte)*. UNAM, p-158

48 *A Country Study: Argentina...* op. cit. p-259

49 "Evita, cariñoso diminutivo con el que las clases desposeídas le llamaban llegó a calar muy hondo en el pueblo argentino. Sus llamamientos en pro de la justicia social, y ciertos actos, más espectaculares que efectivos, en el campo de lo que podría llamarse caridad desde el Estado, le crearon una aureola de santidad, que desarrolló un auténtico culto por ella. La desaparición de la carismática esposa del presidente dio lugar a grandes manifestaciones de duelo y de escenas de auténtico histerismo: El subsecretario de Guerra, Gral. Juan Esteban Vaca cayó muerto ante el catafalco. La ciudad de La Plata cambió su nombre por el de Eva Perón. El Congreso decretó el 26 de julio como día de duelo nacional permanente". Seara Vazquez. M.; *La sociedad democrática...* op. cit. p- 160

50 La insurrección de la Marina tradicionalmente antiperonista fracasó, pero posteriormente a ésta se unieron los sectores religiosos y conservadores y fuerzas militares opuestos a Perón, y en septiembre de 1955 éste fue derrocado por la "Revolución Libertadora". Stausberg, Hildegard; *¿Saldrán los argentinos del círculo vicioso?* Frankfurter Allgemeine en Contextos (ya desaparecida), no. 24, marzo de 1984. p-50



51 Ramos, Jorge Abelardo; La era del peronismo, 1943-1989...*op. cit.* p-176

52 A Country Study: Argentina. p-242

53 Medina, Manuel; La Doctrina de la Seguridad Nacional...*op. cit.* p-14-15

54 Ramos, Jorge Abelardo; La era del peronismo...*op. cit.* p-209

55 En julio de 1966, Onganía da a conocer su plan de gobierno conocido como el Anexo III del Acta Revolucionaria y el documento Políticas del Gobierno Nacional. En síntesis, este plan suprimió toda actividad política, tendió a renovar radicalmente la administración pública, la represión de movimientos disidentes, la defensa de la propiedad privada y la promoción de la libre empresa. Igualmente se evitó la "infiltración marxista" y el avance del comunismo -época en que se da el triunfo de la revolución cubana y su viraje a la doctrina marxista-leninista-. O'Donnell, Guillermo; Transiciones desde un gobierno autoritario... *op. cit.* p-58 y ss

56 En esta etapa el movimiento sindical agrupado alrededor de la CGT, liderada por Augusto Vandor quien había logrado incorporar a peronistas y no peronistas en dicha confederación en una estrategia común, comenzó a observar divisiones. En los inicios de la CGT, Vandor pretendió aprovechar su poder sindical al campo político dirigido por los peronistas. Perón en su momento debió enfrentar esa situación. Los errores de Vandor serían de orden político y no sindical. Ortíz, Ximena; El triunfo peronista, signo del rechazo a la política dependiente. *Proceso*, no 574, noviembre de 1987, p-42

57 Estas acciones aceleraron la descomposición de la "Revolución Argentina" abanderada por Onganía. Richard Gillespie en su libro *Montoneros: los soldados de Perón*, describe, basado en documentos de esa organización, la forma en que fue asesinado Aramburu. p-119 y ss

58 La imposición de salvaguardas y estrategias para controlar el proceso electoral no se tradujeron en apoyo de las fuerzas políticas. Asimismo, la falta de un acuerdo de la junta de comandantes, ésta emitió una declaración en la que señalaba que las fuerzas armadas se opondrían a cualquier amnistía indiscriminada de elementos subversivos y anticipaba su pretensión de compartir las responsabilidades de gobierno O'Donnell, Guillermo y otros; *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Tomo 3. p-190

59 En la actividad de los grupos terroristas como Montoneros formado por peronistas radicales de izquierda, el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de orientación marxista-leninista, que mantenía en sus filas a 7000 personas aproximadamente, logró ocupar a mediados de 1970 parte del Territorio de la provincia de Tucumán a la que llamaron "Territorio Liberado". Mediante tributos que debían pagar

empresas para evitar el secuestro de sus directivos pudieron disponer de recursos casi ilimitados. Para sentenciar a los guerrilleros, el gobierno, por su parte, creó en 1971 el Tribunal Antiterrorista, la Corte Federal de lo Penal. *ibidem* p-194

60 Guillespie, Richard; Soldados de Perón: los Montoneros...*op. cit.* p-163

61 El avión que trajo de regreso al caudillo después de 18 años de exilio, junto con su esposa María Estela Martínez mejor conocida como "Isabel", inicialmente debía aterrizar en el Aeropuerto de Ezeiza donde una multitud lo esperaba. Sin embargo, un enfrentamiento armado entre miembros de diversos grupos antagónicos, con un saldo trágico, propiciaron que el avión fuera desviado al Aeródromo de Morón. *ibidem* p-191

62 La intensa actividad terrorista de los grupos guerrilleros condujeron a la Argentina a un clima de terror. Durante este período los asesinatos políticos y los atentados fueron considerables, los cuales iban dirigidos contra líderes sindicales, personalidades políticas y militares. En contraparte, la represión policial contra los grupos guerrilleros cobró numerosas víctimas. Este clima se prolongaría durante años, siendo sofocada en los años posteriores al nuevo ascenso de una dictadura militar más represiva y regresiva bajo la célebre doctrina de seguridad nacional. El grupo Montoneros pasó a la clandestinidad en agosto de 1974, un mes después de la muerte de Perón. Soldados de Perón...*op. cit.* p-189

63 A López Rega, secretario privado de Perón y Ministro de Bienestar Social con Perón y después con Isabel Perón, se le atribuye la creación del grupo antiterrorista "Tres A" (Alianza Argentina Anticomunista), conformado por ex-oficiales de la Policía Federal leales a éste, al que se le responsabilizó del secuestro y asesinato de líderes sindicales, políticos y supuestos terroristas de izquierda. Seara Vazquez, Modesto; La sociedad democrática...*op. cit.* p- 164

64 Gabetta, Carlos; Los militares argentinos en busca de una normalización...*op. cit.* p-10

65 El gobierno de Ma. Estela Martínez decretó el estado de sitio a fines de 1974. Al producirse el Golpe de Estado de 1976, ya existían en el país cerca de 8 mil presos políticos, entre ellos una gran cantidad de peronistas contestatarios y de dirigentes sindicales y estudiantiles. La represión de ejército en la Provincia de Tucumán fue autorizada por decreto, mientras se multiplicaban los grupos parapoliciales y paramilitares. Gabetta, Carlos; Los militares argentinos en búsqueda de una normalización. *Le Monde Diplomatique en Español*, abril de 1981.

66 León Manriquez, José Luis; El proceso de Reorganización Nacional y los derechos humanos en Argentina. *IMRED*, noviembre de 1988.

67 Esta doctrina formulada por Estados Unidos fue instrumentada para contener los movimientos "desestabilizadores" que podrían surgir eventualmente ante la inestabilidad política de la región animadas por el contexto de guerra fría. En este sentido, los objetivos

de Seguridad Nacional derivan de una interpretación de los intereses nacionales, establecimiento y mantenimiento de condiciones de paz interna, estabilidad y vitalidad económica, ininterrumpido acceso a mercados y materias primas, así como de un estable instrumento de defensa mutuo, prevención de la expansión comunista y resolución de conflictos en términos favorables para la nación. Seguridad nacional, es una combinación de políticas externas que son designadas para mantener los objetivos de seguridad nacional (sic) dentro del contexto de estrategia nacional. Sarkesian, Sam C.; Presidential Leadership and National Security: Style institutions and politics. p-41

68 Roger, Williams D.; Estados Unidos y América Latina. Foreign Affairs en Contextos (ya desaparecida), no. 50, abril de 1985, p-20-29

69 Lopez, George A. and Stohl, Michael; Liberalization and Redemocratization in Latin America, p-210-212

70 Manuel Medina, catedrático madrileño señala que la primera y esencial función de cualquier sistema político es la de garantizar la seguridad de la comunidad a la que representa. Sin embargo, apunta que cuando se habla de la doctrina de la seguridad nacional, "parece que se está hablando de algo diferente. A saber en una nueva concepción legitimamente del poder político...Max Weber hablaba de tres clases de legitimidad: carismática, tradicional y racional-legal" siendo la más aceptada la última en las últimas décadas del siglo XX..."Incluso los regímenes dictatoriales buscan legitimarse a través de elecciones amañadas en las que pueden obtenerse resultados sensacionales que se aproximan al 100% del electorado". El concepto dictadura ha sido sustituido por concepciones como Presidente vitalicio, Presidente provisional, etc. "La doctrina de seguridad nacional se presenta hoy, por tanto, como uno de esos eufemismos dirigidos a justificar la privación de las libertades de un pueblo y la suspensión del mecanismo de garantías constitucionales...Va dirigida hacia el interior, hacia los grupos de oposición que podrían desestabilizar a la sociedad establecida...La doctrina de la seguridad nacional, se convierte, así, en una auténtica doctrina de la inseguridad nacional...En realidad, la doctrina de la seguridad nacional es sólo otra manifestación más del "anticomunismo", entendido por tal un movimiento de opinión y doctrina que justifica la eliminación de sus oponentes por el sencillo procedimiento de calificarlos como comunistas". Medina, Manuel; La Doctrina de la Seguridad Nacional. Diálogo Iberoamericano. año I, no. 1, Madrid, 1981, p-14-15

71 León Manriquez, Jose Luis; El Proceso de Reorganización Nacional y los derechos humanos en Argentina op. cit. p-13-14

72 Arce, Horacio; La política de liberalización comercial en Argentina: su impacto en la integración latinoamericana. Ponencia presentada en el Seminario sobre Integración, recopilado en el libro La Integración latinoamericana en la década de los 80<sup>os</sup>. Instituto para la Integración Latinoamericana, Banco Interamericano de Desarrollo, septiembre de 1982, p-371-428

73 A finales de la década de los sesenta y principios de la de 1970, antes de la crisis del petróleo, el financiamiento fue de nueva cuenta accesible y permitió a la región latinoamericana la aplicación de estrategias de expansión más agresivas. Entre 1968 y 1972, el volumen de las importaciones creció en 9.2% anual y las exportaciones de 7.7%. Entre 1967 y 1973, la deuda latinoamericana de mediano y largo plazo se incrementó de 15 mil mdd a 37 mil mdd. Este período fue de crecimiento a través del endeudamiento externo. Un nuevo impulso al endeudamiento fue el incremento de los precios del petróleo de 1973 a 1974 y la consiguiente necesidad de financiar importaciones a un costo mayor por medio del crédito externo. La existencia de excedentes de "petrodólares", mediatizó una drástica disminución del ingreso mundial. Entre 1973 y 1978 la deuda se triplicó (de 37 mil mdd a 113 mil mdd), lo cual permitió el ajuste de muchos países que continuaron su crecimiento y financiación de la política de sustitución de importaciones petroleras y de expansión de su capacidad exportadora. Sin embargo, la crisis de los precios del petróleo a causa de la guerra Irán-Irák, los países industrializados se internaron en una fuerte recesión que condujo al estancamiento del comercio internacional a principios de la década de los ochenta que debilitó los precios de exportación de materias primas y redujo las ventas de exportación. Cabe señalar que la política de otorgamiento de créditos a los países del Tercer Mundo en general, no contempló en muchas ocasiones su incapacidad para hacer frente al aumento en su servicio. Fishlow, Albert; La crisis de la deuda externa: ¿Es posible su solución a través de la integración económica?. La integración latinoamericana en la década de los ochenta... *op. cit.* p-95

74 Arce, Horacio; La política de liberalización comercial en Argentina: su impacto en la integración... *op. cit.* p-372-375

75 Cavarozzi, Marcelo y Landi, Oscar; Argentina, crisis y postración. Ensayo publicado en El Nacional el 11 de abril de 1991, p-11-17

76 Dornbusch, Rudiger; EL problema de las deudas en los ochenta. Third World Quarterly en Contextos (ya desaparecida), año 3, no. 60, noviembre de 1985, p-12-22

77 Gabetta, Carlos; Los militares argentinos en búsqueda de una normalización... *op. cit.* p-10

78 Sanz, Bruno; Indicios de un nuevo rumbo político en Argentina. Diálogo iberoamericano, Madrid, año I, no. 1, 1981, p-20-23 y \_\_, Las Nuevas medidas, p-50

79 Monteverde, Mario; La oposición Argentina confía en la reanudación de la actividad política. *idem* p-23

80 Pion-Berlin, David; Military Breakdown and Redemocratization in Argentina. En Liberalization and redemocratization in Latin America, *op. cit.* p-209

- 81 Uno de los rasgos que caracteriza la coyuntura anterior al derrocamiento del General Viola es la vigencia de un conflicto interno de las fuerzas armadas que comienza a gestarse muy tempranamente. Durante los primeros tramos del llamado Proceso de Reorganización Nacional ese conflicto se manifiesta en los cuestionamientos de la Armada a que en una persona recaigan tres cargos (Presidente de la República, Comandante en Jefe del Ejército y en esa calidad miembro de la Junta Militar en el caso del Gral. Videla). Fontana, Andrés; De la crisis de las Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición política en Argentina. p-33-35
- 82 Pion-Berlin, David; Military Breakdown and redemocratization in Argentina, en Liberalization and redemocratization in Latin America. *op. cit.* p-218
- 83 Galbraith; Las dictaduras no tienen mejores fórmulas para la economía. Diálogo Iberoamericano, Madrid, año I no. 1, p-51
- 84 International Businessweek; La nueva esperanza argentina. En Contextos (ya desaparecida), no. 24 marzo de 1984. p-54-61
- 85 A pesar de los aspectos negativos de la Guerra de las Malvinas, este conflicto sirvió para estimular la cooperación entre Argentina y el Grupo Andino y otros países de la región, a efecto de limitar las consecuencias derivadas de las sanciones de la CEE hacia Argentina. El proceso de Integración de América Latina en 1982. BID, p-134-137
- 86 Las Malvinas: desenlace del conflicto, una dolorosa lección para toda Latinoamérica. Prisma latinoamericano, año 9 no. 119, julio 1982
- 87 Argentina como miembro del TIAR invocó la aplicación del artículo 3 inciso f, que establece que cualquier agresión extracontinental se considera como una agresión a todos los Estados americanos miembros. LLanes, Oscar B.; Derecho Internacional Público: instrumento das Relações Internacionais. p-3-17
- 88 Las Malvinas; desenlace del conflicto, una dolorosa lección para toda Latinoamérica. Prisma latinoamericano *op. cit.* p-9
- 89 Azcarate, Justino D.; Desaparecidos, el problema principal. Diálogo Iberoamericano, *op. cit.* p-24
- 90 Mediante este esquema los comandantes en jefe de las tres Fuerzas acordaron establecer su coparticipación en la responsabilidad gubernamental y el ejercicio del poder directo, la cual ratificó la decisión de transferir el poder a las autoridades civiles durante los primeros meses de 1984. Fontana, Andrés...*op. cit.* p-47

91 *idem*

92 Gabetta, Carlos; Los militares argentinos en búsqueda de una normalización *op. cit.* p-10

93 Bilbao, Luis; Tras de las elecciones se irán los militares y se instalará la incertidumbre. Proceso, no. 364, 24 de octubre 1983. p-46

94 *ibidem* p-47

95 Cavarozzi, Marcelo y Landi, Oscar; Argentina: crisis y postración... *op. cit.* p-12

## CAPITULO III. EL GOBIERNO RADICAL DEL PRESIDENTE RAUL ALFONSIN (1983-1989)

### 3.1 El fenómeno político del Alfonsinismo

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín <sup>(1)</sup> tomó posesión como Presidente de la República Argentina. El contexto en que se produjo la transición hacia un régimen civil representado por Alfonsín, se enmarcó en la herencia dejada por un régimen militar que cayó por su propio peso.

Varios factores se conjugaron para el retiro de los militares en el poder: la derrota militar frente a Gran Bretaña por la posesión de las Islas Malvinas en el ámbito externo y en el interno caracterizado por un grave endeudamiento externo y la crisis económica generada por ésta, un debilitamiento sustancial de la organización del Estado, economía descontrolada y desorganizada, además de la profunda división existente dentro del Partido Justicialista.

Las elecciones verificadas el 30 de octubre de 1983, dieron el triunfo al candidato del radicalismo, lo que subrayó el estado de desorganización del peronismo y el desprestigio de los militares. Sin embargo, el ascenso del candidato de la UCR a la presidencia, no significaba un compromiso o una convicción del electorado argentino de que Alfonsín pudiera solucionar los graves problemas que enfrentaba Argentina. Si bien la UCR que mantuvo una organización política con estructura democrática interna, una característica de ésta es su liderazgo tradicional y formal actualmente no atrae la atención de los argentinos. Estos votaron "más por el hombre que por el partido o la política" <sup>(2)</sup>.

La base del radicalismo lo constituye la clase media argentina. Esta se ha convertido en un aliado no comprometido con la estructura y el accionar político e ideológico del radicalismo. Esta misma clase, recibió con beneplácito el golpe militar de 1976 y las subsiguientes acciones represivas contra movimientos guerrilleros que actuaban en el país. Esta inestabilidad, se mantuvo al trasladar su apoyo al nuevo gobierno civil representado por Alfonsín que captó un apoyo sin precedentes de la población para un político civil <sup>(3)</sup>.

El triunfo de Alfonsín y los radicales en las elecciones no sería absoluto. El peronismo, pese a sus divisiones internas e intereses encontrados de sus cuadros dirigentes y sindicales, logró una mayoría en el Senado y una presencia en algunas gubernaturas provinciales. El peronismo, ahora como partido de oposición, constituyó una preocupación política al nuevo gobierno radical <sup>(4)</sup>.

A pesar de la fuerza política que representó obtener una mayoría en el nuevo esquema de poder en la Argentina, la tarea de reconstrucción democrática, reordenación económica y de concertación política con una sociedad altamente polarizada por el pasado

reciente no constituyó una garantía de permanencia en el poder de los radicales. La influencia del peronismo de los años cincuenta, según vigente en tanto cualquier gobierno dependía su estancia en el poder a la satisfacción de las necesidades materiales y aspiraciones inmediatas de los diversos sectores de la población.

Sin duda, los principales desafíos al nuevo régimen democrático como se le bautizó lo constituyeron el caos económico y el papel de las fuerzas armadas en el nuevo contexto político argentino. El radicalismo enfrentó a una sociedad "militarizada" -empresas estatales, bancos, medios de comunicación social y la nacionalización de gran parte de la economía (uno de los principales resultados del peronismo) estaban dirigidos por militares-, que debió acostumbrarse una vez más a vivir dentro del marco del derecho y la constitucionalidad.

La base política de Alfonsín se centró en el restablecimiento del "imperio" de la ley y la promoción de acuerdos que englobaran a los diversos sectores sociales -empresarios, trabajadores y Estado- para solucionar bajo la norma de la concertación la problemática argentina. Este estilo de gobierno, -no muy exitoso por cierto para los políticos radicales- contrastó con el carácter personalista que ha predominado y sigue predominado en gran medida en la UCR y los demás políticos argentinos (5).

Acorde con sus postulados expuestos en su campaña electoral relativos a la reconstrucción de la democracia en Argentina, Alfonsín inicio acciones para depurar y reorganizar a las fuerzas armadas. Sus acciones se encaminaron a reducir el gasto militar, enjuiciamiento a los acusados de violaciones a los derechos humanos, la abolición de la Ley de Pacificación Nacional sancionada por los militares -que eliminaba cualquier sanción en caso de existencia de lesiones a la naturaleza del orden jurídico-, así como de la Ley de Amnistía, desmilitarización de los órganos de seguridad estatales y la transferencia del mando a civiles encargados del Ministerio del Interior y las industrias castrenses al Ministerio de Defensa (6). Asimismo, también ordenó el enjuiciamiento de líderes arrestados pertenecientes a las organizaciones guerrilleras "Montoneros" conformado por radicales nacionalistas y del Ejército Revolucionario del Pueblo de tendencia marxista (7).

### 3.1.1 Reestructuración de las Fuerzas Armadas

El gobierno de Alfonsín, procedió a la depuración y reorganización del instituto armado disponiendo el pase a retiro de oficiales de alto rango y la subordinación de los militares a la autoridad de un Ministerio de Defensa encargado a un civil. Se realizaron reformas al Código Militar, que permitieran el deslinde de responsabilidades de los militares implicados en abusos durante la denominada "guerra sucia" (8).

A pesar del desprestigio de los militares, estos mantenían una significativa cuota de poder. Por ello, las acciones de Alfonsín que dieron paso a una reforma militar, fue bien recibida por los militares. Para éstos, la reorganización de la estructura militar argentina, cuyos mandos pasaron a manos de civiles, fue interpretado por lo militares como una



reprofesionalización del instituto armado y su alejamiento temporal de su accionar político. Se establecieron bases para crear un nuevo esquema en las relaciones cívico militares, las cuales fortalecieran la supremacía del poder civil sobre el militar.

Al efecto, Alfonsín por medio del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto se convirtió en el órgano de trabajo de éste, asignándosele las cuestiones de planificación militar. Así, la Ley de Defensa Nacional sancionada antes del ascenso de Alfonsín al poder, incluyó la creación de un Consejo Nacional de Defensa Nacional conformado por el Presidente en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas -asesorado por el Estado Mayor Conjunto integrado por las tres alas militares-, el Gabinete de gobierno y el Secretario General de la Presidencia. Estas acciones modificaron en forma sustancial las ideas sobre planificación y defensa nacional desechando las normas y prácticas incluidas en la Doctrina de Seguridad Nacional<sup>(9)</sup>, así como sobre cuestiones de personal y servicio militar obligatorio.

Asimismo, al Ministerio de Defensa se le atribuyeron facultades para disponer y ordenar retiros de oficiales de alta jerarquía, ascensos, aplicación de medidas correctivas, así como una reducción en los vínculos de las fuerzas armadas con el exterior. Durante los primeros meses de su gobierno, Alfonsín a través del Ministerio de Defensa, dispuso el retiro de varios oficiales de alto rango de las tres fuerzas armadas. El retiro masivo de oficiales -especialmente de los que formaron parte del capítulo de las Malvinas- y la promoción de otros, provocó no obstante la respuesta de desaprobación de los militares, aunque dichas medidas finalmente fueron aceptadas por las instituciones castrenses.

Respecto a la reducción del gasto militar, el gobierno radical adoptó medidas para reducir en forma sustancial los gastos militares. A efecto, se dispuso la reducción del personal militar, de equipamiento y de los programas de construcción de armamentos y de investigación militar. La política militar del gobierno radical respecto a la fabricación de armamentos, se orientó a una promoción de las exportaciones de armas, aunque dicha política no incluyó programas de mejoramiento de la calidad de armas de fabricación nacional.

Las reformas estructurales a la organización militar argentina, el control civil sobre el militar, reducciones al gasto militar y a su autonomía para establecer sus vínculos con el exterior, como se mencionó, fueron aceptadas por los militares en pro de una reprofesionalización. Sin embargo, esta marcha poco a poco fue obstaculizada al abordarse el tema de la violación de los derechos humanos durante el anterior régimen militar.

### 3.1.2 Las relaciones cívico-militares

Un punto crítico en las relaciones cívico-militares, lo constituyó la aceptación de responsabilidades por parte de los militares por violaciones a los derechos humanos durante el régimen castrense que gobernó durante 1976 y 1983, apuntadas por un gobierno constitucional. De acuerdo a la política de Alfonsín expuesta en su campaña electoral, el Congreso Nacional derogó la Ley de Amnistía y reformó el Código de Justicia Militar<sup>(10)</sup>.

El retiro de los militares, no fue una medida suficiente adoptada por el gobierno radical. La presión de los sectores de la sociedad argentina que demandaban un enjuiciamiento a todos aquellos que tuvieran responsabilidades, reafirmó la idea que el presidente Alfonsín tenía que constituirse como el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, no solo de hecho sino de derecho.

Este tema gradualmente redefinió el carácter de las relaciones entre civiles y militares que el nuevo gobierno deseaba establecer. La reforma al Código de Justicia Militar, tuvo como objetivo primordial delegar a los tribunales militares el juzgamiento de los oficiales implicados en abusos y violaciones masivas de los derechos humanos.

Contando con una mayoría radical en la Cámara, a principios de 1984 se aprobó la reforma al Código de Justicia Militar propuesto por el Ejecutivo. Por medio de esta se dispuso que todo el personal militar y de seguridad implicado en violaciones a los derechos humanos, sería juzgado por el Congreso Supremo de las Fuerzas Armadas -formada por 20 oficiales- a través de procesos sumarios realizados en tiempos de paz <sup>(11)</sup>.

De esta forma, Alfonsín pretendió iniciar el enjuiciamiento a cientos de oficiales por medio de investigaciones que limitarían el clamor popular y dieran tiempo al establecimiento de bases para promover posteriores acusaciones. En forma evidente, Alfonsín trató de evitar un ataque abierto contra las fuerzas armadas, que podían generar situaciones políticas muy riesgosas que su nuevo gobierno no podía controlar.

Sin embargo, en septiembre de 1984, fecha en que los tribunales militares debían dar a conocer el nombre de los implicados, presentaron objeciones aludiendo que los oficiales sujetos a investigación habían actuado en defensa de la soberanía de la nación contra la infiltración marxista<sup>(12)</sup>. Esta actitud forzó a Alfonsín a promover reformas que otorgaran facultades a los tribunales civiles para investigar crímenes cometidos por militares contra la población civil. Así, el gobierno inició procesos contra los oficiales de alto rango que formaron parte de las Juntas Militares de 1976 a 1983. Dichos oficiales, serían juzgados bajo los cargos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas a los detenidos.

Otro conflicto suscitado por esta cuestión, lo constituyó el alcance que debían tener dichos procesos. El ejecutivo sostenía que los enjuiciamientos debían recaer en los oficiales de más alto rango y la los integrantes de las tres Juntas militares. En contraposición, los partidarios de los derechos humanos sostenían que todo oficial implicado debía ser sujeto de investigación.

### 3.1.2.1 La Comisión Sábato

Alfonsín designó a una Comisión presidida por el escritor Ernesto Sábato. A dicha comisión se le delegó la investigación del paradero de miles de argentinos "desaparecidos" durante la pasada dictadura militar. Esta situación, generó inevitablemente un esquema de

confrontación gobierno-militares. Las fuerzas armadas aceptaban la reforma estructural de la institución castrense, pero rechazaban cualquier acto que pusiera en tela de juicio su comportamiento político-militar, en lo referente a la represión institucionalizada.

Desde su perspectiva, los militares reclamaban el reconocimiento de la victoria sobre los movimientos guerrilleros que actuaron en el país bajo el régimen militar. La actitud del gobierno radical, fue interpretado como una amenaza a la institucionalidad y autonomía del ejército. La presión de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, reclamaban el procesamiento de alrededor de 896 oficiales a quienes se les podía comprobar su culpabilidad.

La magnitud del problema de los abusos cometidos durante la guerra sucia representó un serio reto a la política gubernamental cuyas acciones al respecto se caracterizaban por su excesiva cautela. Esta puede atribuirse a la pérdida del respaldo de la sociedad argentina ante la incapacidad de las medidas del gobierno por reordenar en forma efectiva la economía nacional. Asimismo, la continuación del arresto de oficiales y los pases a retiro, ahondaron el malestar al interior de las fuerzas armadas. Voces de descontento de oficiales sobre esta situación, enfrentaron en forma inevitable al gobierno con la fuerza armada.

Las pugnas al interior del Ministerio de Defensa completaron el cuadro de enfrentamiento. La lentitud de los tribunales militares en el seguimiento de los procesos, significó para el gobierno un serio problema. En la primera mitad de 1984, el gobierno se veía imposibilitado para continuar con el juzgamiento de los integrantes de las tres Juntas Militares -tribunales civiles seguían el proceso de cientos de oficiales-<sup>(13)</sup> y se comprobaban casos de desapariciones de miles de argentinos. Al marco de enfrentamiento fuerzas armadas-gobierno -el cual se vio incapaz de aplicar las sanciones exigidas por las organizaciones de derechos humanos contra los militares-, se sumó el reinicio de actividades subversivas contra miembros de organizaciones de derechos humanos en relación a este tema.

El gobierno enfrentaba de esta forma un serio problema de autoridad institucional. Por un lado, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas constituía uno de los principales actores para el seguimiento y ejecución de sentencias contra militares implicados en la guerra sucia. Lo anterior, formaba parte de la imposibilidad de tribunales civiles para castigar directamente a militares acusados de violación de derechos humanos<sup>(14)</sup> sin correr el riesgo de provocar una reacción violenta de las fuerzas armadas que amenazarán el endeble proceso constitucional. La impunidad de los asesinatos y desapariciones, planteó por otro lado la legitimación de los métodos planificados de represión practicados por el régimen militar.

Durante la segunda mitad de 1984, Alfonsín intentó reorientar las relaciones gobierno-fuerzas armadas. El retiro del apoyo a la política gubernamental en relación al tema de las violaciones a los derechos humanos por parte de las organizaciones defensoras de éstos, permitió a las filas castrenses reagruparse para iniciar una contraofensiva contra la política gubernamental respecto de los enjuiciamientos. El simple hecho de continuar el

proceso contra los integrantes de las tres juntas militares, era interpretado por la oficialidad como un tema de confrontación directa difícil de superar.

Las constantes críticas de la sociedad argentina al Consejo Supremo como causal de la actitud asumida por éste en cuanto a negarse a manejar los procesos contra oficiales implicados en la represión, motivó un mayor enfrentamiento con el gobierno. Desde su punto de vista, las críticas de la opinión pública contra el tribunal militar era interpretado como una campaña de desprestigio organizada por el gobierno que atentaba directamente contra la autonomía e institucionalidad de las fuerzas armadas. Esta actitud, además de marcar un hito en la confrontación de ambos actores, mostró a una fuerzas armadas recuperando su iniciativa enfrentando en forma más orgánica al poder constitucional hacia su política militar.

Además, esta actitud era una reacción de los militares a las críticas de que era objeto el Consejo Supremo por parte de las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y la sociedad en general. Al mismo tiempo, éstos respondían a la política gubernamental de iniciar juicios en contra de los integrantes de las tres juntas militares que precedieron al gobierno de Alfonsín.

En este contexto, las precarias relaciones entre el gobierno radical y el estamento militar se tensaron en los primeros meses de 1985 con la decisión gubernamental de continuar con su política de retiro de oficiales de alto rango. Esta acción, tuvo su origen en el rechazo de algunos cuadros militares por aceptar mayores recortes en el presupuesto de defensa resuelto por el gobierno.

### 3.1.2.2 El juicio a los militares

En abril de 1985 se iniciaron los juicios contra los nueve integrantes de la tres juntas militares. Entre ellos figuraron los ex-presidentes Videla, Viola y Galtieri, bajo los cargos de violación de derechos humanos. En este marco se insertan los resultados presentados en septiembre de 1984 por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas -Comisión Sábato-. De acuerdo con este informe, apoyado en numerosos testimonios, ubicó la cifra de 9 mil desaparecidos, muchos de los cuales fueron sometidos a torturas cuando estaban detenidos antes de ser asesinados.<sup>(15)</sup>

Se señaló la existencia de centros ilegales de detención y la incineración de archivos. Los resultados del informe, tensaron aún más las relaciones entre el gobierno radical y el estamento militar.<sup>(16)</sup>

Gradualmente, el tema de la violación de derechos humanos generó divergencias dentro del radicalismo<sup>(17)</sup>. Imposibilitado para continuar con la marcha de los proyectos de reestructuración de las fuerzas armadas, el gobierno alfonsínista tendió a adoptar una postura que evitara un mayor enfrentamiento directo con las filas castrenses. Esta política de bajo perfil, favoreció aún más la recuperación de su iniciativa como actor político

nacional. Asimismo, su posición se centró en defender en forma más organizada su carácter autónomo y su institucionalidad.

### 3.1.2.3 El "Caso Aztiz"

En este contexto, se presentó el denominado "Caso Astiz". Alfredo Aztiz, Teniente de Navío, fue promovido a Capitán de Fragata lo que provocó la reacción inmediata de la sociedad argentina. Sobre Aztiz pesaban las acusaciones de secuestro y asesinato de una joven sueca y dos monjas francesas (18).

En principio, su caso fue ventilado por tribunales civiles que provocó la reacción de los militares que exigían competencia de la justicia castrense sobre dicho caso. Las fuerzas armadas consideraban la actuación de Astiz como dentro de la normalidad, por la particular situación de la Argentina durante los años de la represión de los movimientos subversivos, en contraposición de la sociedad argentina y los gobiernos de Suecia y Francia que lo consideraban como un asesino sujeto a investigación.

Este caso planteó una dura prueba a la institucionalidad del Estado y sus esfuerzos por subordinar a las fuerzas armadas a la autoridad civil. Por un lado, la absolución de Astiz representaba la exculpación de hecho de muchos otros oficiales implicados en la represión y, por otro, su sentencia implicaba el crear un clima de malestar e inseguridad dentro de las filas castrenses. Finalmente, el 5 de marzo de 1985, Astiz fue absuelto por el tribunal militar de los cargos de asesinato y desaparición de personas. Esta absolución ratificó la complejidad de las relaciones Estado-fuerzas armadas en relación al tema de la violación de derechos humanos. Desde el punto de vista político, la absolución representó un duro golpe a los intentos de subordinar a la autoridad del Ejecutivo a una de las instituciones armadas que desarrollaron una autonomía superior a la de otras fuerzas armadas en América Latina (19).

Aunado a lo anterior, la gravedad de la crisis económica del país se convirtió en otro elemento que condicionó la relación del gobierno con todos los sectores de la población. Las medidas correctivas puestas en marcha por el gobierno radical para enfrentar el intenso proceso inflacionario y la tendencia recesiva de la economía nacional, no impidieron un empeoramiento de la crisis económica.

Para el gobierno radical, el tema económico constituía una de las principales preocupaciones junto con el tema de los derechos humanos. En junio de 1985, Alfonsín anunció un drástico plan económico de austeridad. Por los lineamientos incluidos en lo que se denominó el Plan Austral, -el cual incluyó la congelación de precios y salarios, la creación de una nueva moneda, entre otras medidas, constituyó la iniciativa política más radical en materia económica impuesta por el gobierno desde su ascensión al poder.

### 3.1.3 Las elecciones de noviembre de 1985 y los intentos de reconciliación

El gobierno radical necesitaba de acciones que, si bien no ampliaran su espacio político, mantuvieran el respaldo de la población. La celebración de elecciones locales en noviembre de 1985 <sup>(20)</sup> para elegir gobernadores y la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, significaron un apoyo al gobierno de Alfonsín <sup>(21)</sup>. El partido Radical se impuso en diversas provincias gobernadas por peronistas, aunque éstos mantuvieron su posición en la provincia de Buenos Aires y la misma capital. El peronismo mantuvo, en general, su presencia en el espectro político nacional. Al mismo tiempo, otros partidos minoritarios lograron ampliar su representación política.

El respaldo electoral al gobierno radical, estuvo condicionado no obstante a los resultados de la política económica representados por el Plan Austral. El discurso del gobierno en materia económica, siempre hizo referencia a la desastrosa herencia dejada por los militares en esa área. Con el Plan Austral, el gobierno radical dejó a un lado esa posición para enfrentar con medidas propias la corrección de la economía nacional. Es decir, a pesar de que aún no se daban resultados positivos con la implantación de dicho plan cuatro meses antes de las elecciones, sus primeros resultados demostraban una cierta viabilidad aunque evidentemente tenían un carácter coyuntural. Por ello, electorado argentino siguió dando su respaldo al oficialismo, pero este respaldo estaría condicionado al éxito a mediano y largo plazo de la política económica.

Con base en el apoyo mostrado por el electorado a los radicales, el gobierno de Alfonsín, consciente de la difícil situación política y económica que enfrentaba el país, adoptó una actitud abiertamente conciliadora. Acorde con esa actitud mediadora entre la sociedad argentina y los militares, Alfonsín dirigió sus esfuerzos para concertar acuerdos que sumaran la participación de las restantes fuerzas políticas y sociales como fórmula para abordar la diversa problemática argentina.

Alfonsín defendía su política económica recesiva, definió las pautas de comportamiento en materia internacional tendientes a superar el aislamiento que caracterizó al régimen militar precedente, y en el plano interno, la anotada promoción de pactos y alianzas con las organizaciones políticas y laborales para defender el proceso democrático.

En enero de 1986 Alfonsín anunció la creación del Consejo para la consolidación de la Democracia, conformado por personalidades políticas, de la ciencia y la cultura y representantes de otros partidos políticos. Esta política de promoción del "pluralismo" incorporó al gobierno radical a algunos peronistas. Las funciones de dicho Consejo, se centraron en asesorar al gobierno en la conformación de un plan político que debía aprobar el Ejecutivo, para posteriormente ser sometido a la aprobación de los partidos políticos. Este esfuerzo, no obstante, sería abandonado en septiembre de 1988.

La permanencia de la crisis económica que tendió a agravarse, enfrentó al gobierno con las centrales obreras -entre ellas la politizada Confederación General de Trabajadores (CGT) de tendencia peronista- que continuaron sus exigencias de reivindicaciones salariales por medio de la promoción de paros y huelgas. Esta presión, contrastó con la disminuida capacidad opositora de los peronistas quienes para ese momento no constituían una opción política viable en virtud de sus divisiones internas.

Durante la mayor parte de 1986, el gobierno de Alfonsín debió centrar su atención en la deteriorada economía argentina. La política de austeridad severa impuesta por el gobierno, siguió afectando el ingreso tanto de la población como de los militares. En efecto, el malestar dentro de las filas castrenses era evidente, en virtud de los bajos salarios que percibían, junto con una drástica disminución del presupuesto de defensa, y el seguimiento de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

A este respecto, las relaciones gobierno-militares, se vio alterada de nueva cuenta con el fallido atentado en contra de Alfonsín el 19 de mayo de 1986 (22). Esta acción, puso de manifiesto el descontento y la recuperación de la capacidad de acción de militares descontentos a la política incluida en el plan de Reforma Militar (23).

La renuncia del Ministro de Defensa Germán López, fue el resultado de las presiones que el Congreso le achacó para aclarar un caso de secuestro (24). En su lugar fue designado el civil Horacio Jaunarena, considerado el primer político que mantuvo negociaciones con los militares. En este caso también se implicó al entonces Ministro de Interior Antonio Troccoli quien debió afrontar una interpelación congressional sobre este caso.

### 3.1.4 Origen de la Ley de Punto Final

En el tercer aniversario del gobierno alfonsinista dos temas siguieron siendo los aspectos más difíciles de su gestión: la crisis económica y la continuación de los juicios a militares. El impacto favorable en la opinión pública nacional e internacional que tuvieron los juicios y posteriores sentencias contra militares de alto rango, significó un respaldo a la administración de Alfonsín, aunque las organizaciones defensoras derechos humanos seguían exigiendo la condena de la totalidad de los oficiales implicados.

El reconocimiento al valor de la justicia por parte del gobierno, que podría decirse en este caso un poco obligada por la particular situación de enfrentamiento con las fuerzas armadas, decidieron al gobierno a adoptar una de las decisiones más difíciles de su gestión. El 5 de diciembre de 1986, Alfonsín anunció la remisión al Congreso Nacional de un proyecto de ley tendiente a suprimir la acción penal contra militares de menor rango acusados de violaciones y excesos en la represión cometidos durante el anterior régimen (25).

Esta ley bautizada como ley de "Punto Final" <sup>(26)</sup> aprobada en forma acelerada por Congreso el día 26 de ese mes, estableció la terminación de la acción penal contra militares, fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias por delitos cometidos en el marco de la represión establecida por el anterior régimen para combatir la subversión. A partir de la fecha de la promulgación de esta ley, se otorgó un plazo de 60 días para presentar a tribunales militares y civiles, denuncias sobre "hechos que aún no hubieren llegado al conocimiento de la justicia". Sobre este último punto, para casos de delitos contemplados en la ley que aún no había tomado en cuenta la justicia, se otorgó un plazo de treinta días para presentar pruebas ante el Consejo Supremo al término del cual se extinguiría automáticamente la acción penal solicitada.

La aprobación de la Ley generó la airada oposición, antes y después de su aprobación, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y del justicialismo. Además, de producirse enfrentamientos entre los diversas tendencias políticas del país, incluso de diputados radicalistas <sup>(27)</sup>. Al mismo tiempo, en el país se acentuaban los atentados terroristas contra personalidades políticas, activistas de defensa de los derechos humanos y miembros de la oposición.

Las justificaciones sobre la necesidad de promulgar dicha ley esgrimidas por el gobierno se centraron en la necesidad de poner fin a la incertidumbre de numerosos oficiales respecto de su situación jurídica. Al respecto, resalta la redacción de los justificandos en el sentido de que la ley en cuestión resumía los objetivos del gobierno de Alfonsín de restablecer el imperio de la ley "impidiendo la impunidad de los grandes responsables de esos delitos y de quienes se hubieren excedido en el cumplimiento de las ordenes recibidas". A su vez, la clandestinidad con que se impartieron y cumplieron tales ordenes torna difícil la tarea de esclarecimiento de la verdad que compete a la Justicia.

Más adelante se señala que, en un marco de represión institucionalizada por el Estado militar anterior, "el hecho de que los delitos fueran ordenados desde los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas, generó la apariencia de una responsabilidad generalizada respecto de todo su personal"... "cuando una situación tal se produce en un contexto como el señalado... se torna razonable establecer un régimen tendiente a resguardar de modo especial la garantía de la pronta terminación de los procesos con beneficio, asimismo, para la consolidación de la paz social y la reconciliación nacional". Por su parte y en el mismo tono, el Jefe del Estado Mayor, General Ríos Ereñú, señalaba que la Ley de Punto Final <sup>(28)</sup> contemplaba etapas sucesivas como medidas complementarias para alcanzar plenamente la reconciliación nacional.

En este sentido, en los primeros meses de 1987, el gobierno radical dentro de su estrategia de pacificación nacional, señaló su intención de condenar a las cúpulas militares para otorgar una eventual amnistía al personal militar de rango menor al de coronel que cumplieron ordenes. De acuerdo con lo expresado por Ereñú y por el propio Mandatario, las etapas sucesivas contemplaban la inclusión del concepto de obediencia debida. Es decir, se evitaba confundir responsabilidades de aquellos que se vieron obligados a cumplir



ordenes de superiores, sin condiciones de rechazarlas a causa de la jerarquía reinante en las instituciones militares y policiales.

La confusión que generó dicho concepto en la sociedad argentina, no obstante tranquilizó temporalmente el malestar existente al interior de las fuerzas armadas en espera de más decisiones de ese tipo. Respecto a la Ley de Punto Final, resalta el punto que se refiere a la manifiesta incapacidad del gobierno por delimitar las responsabilidades del personal militar en su participación en la violación de derechos humanos. Esta incapacidad, sumada al descontento de los militares por el seguimiento de los juicios contra oficiales y a la imposibilidad de acelerar la política de reestructuración de las fuerzas armadas y reinserción al modelo democrático, definió una nueva estrategia gubernamental para acelerar la finalización de un tema que junto con el económico, comenzaba a amenazar la permanencia misma en el poder de los radicales.

#### 3.1.4.1 La visita papal

Cabe señalar que en este marco de agitación social y política, ejemplificado con el resurgimiento de atentados terroristas, el Papa Juan Pablo II visitó la Argentina. La visita del Papa estuvo precedida por manifestaciones de rechazo a su visita por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Esta fue la segunda visita a la Argentina. La primera la realizó el 10 de junio de 1982, cuatro días antes de la rendición de las tropas argentinas frente a las tropas británicas por la posesión de las Islas Malvinas. En esa ocasión, la visita estuvo presionada por el hecho de que durante el conflicto el Papa visitó la Gran Bretaña. Tal vez la intención fue eliminar una posible imagen de parcialidad a favor de los británicos del máximo líder de la iglesia católica.

Un rasgo importante de esta visita, y pese a que se preveía una referencia importante del jefe de la iglesia católica acerca de los secuestrados y desaparecidos, en sólo una ocasión durante su estancia en Argentina se refirió a ese tema. Además se negó a representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, recibiendo a un mínimo de obispos que denunciaron los hechos represivos durante la dictadura, influenciado por la jerarquía católica argentina. Cabe destacar que la Iglesia mantiene un poder significativo dentro del país al que algunos comparan con el que poseen las Fuerzas Armadas.

La visita, evidentemente tuvo un trasfondo político más que pastoral. Los discursos del Papa instaban a evitar más desaparecidos y el desarraigo de la violencia y el enfrentamiento, en un país donde existían y existen los desaparecidos y secuestrados. Incluso, el Papa al tiempo que llamaba a la reconciliación de los argentinos era espectador de enfrentamientos entre la policía y manifestantes que se oponían a su visita. La estancia de éste en el país, atemperó el clima de tensión social imperante en el país que aumentaba paulatinamente y amenazaba por desbordarse en virtud de la crítica situación económica del país.

Su estancia, fue calificada como un respaldo a la iglesia católica argentina en su lucha contra la sanción de la ley que permitiera el establecimiento del divorcio. Además, su presencia justificó la actuación de la iglesia argentina durante la guerra subversiva, la cual con excepciones, denunció la violencia en contra de la población durante el régimen militar y que además se consideró partícipe de los actos de violencia en contra de activistas de izquierda detenidos por los aparatos de seguridad instaurados durante la dictadura.

#### 3.1.4.2 El panorama político de 1987

Para el gobierno radical, la necesidad de eliminar un foco generador de sustanciales diferencias con la sociedad argentina era particularmente importante. 1987 era un año electoral, por lo que urgían medidas para mantener la popularidad del oficialismo. Sin embargo, el resultado de las medidas tanto económicas para atacar la grave crisis como las referentes a las fuerzas armadas, en particular la iniciativa de obediencia debida, significaron una derrota electoral para el radicalismo en las elecciones de septiembre de ese año <sup>(29)</sup>. Este resultado, eliminó la imagen de apoyo que se había cernido alrededor del radicalismo, en particular a las manifestaciones populares de apoyo al proceso democrático ante la sublevación de sectores medios del ejército escenificadas en abril de 1987, sólo días después de la visita del jerarca católico.

#### 3.1.5 El alzamiento militar de abril de 1987

En este contexto político y económico, la Escuela de Infantería de Campo de Mayo dirigidos por el Teniente-Coronel Aldo Rico en la base Campo de Mayo, a 20 kms. al norte de Buenos Aires se sublevaron horas el día 16 después del escenificado en la base militar de Córdoba ese mismo día. El alzamiento fue la respuesta a la decisión de la Cámara Federal de Córdoba de dar de baja y declarar en rebeldía judicial al Mayor Ernesto Barreiro <sup>(30)</sup> quien se resistía a la orden de arresto dictada en su contra bajo los cargos de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar.

Barreiro se refugió en una la base militar del XIV Regimiento de Infantería Aérot transportada de la ciudad de Córdoba -la misma base donde se planeó un fallido atentado contra Alfonsín el 19 de mayo-, y para deponer su actitud, exigía la amnistía a los militares procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos; la sustitución en el cargo del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Héctor Ríos Ereñú; nombramiento de un nuevo jefe "aceptado por las bases"; y que los medios de difusión "cesen la campaña contra las Fuerzas Armadas" <sup>(31)</sup>.

El conflicto suscitado en la ciudad de Córdoba fue solucionado al acatar dicho regimiento las ordenes de los mandos superiores, después de conocerse la noticia de la fuga de Barreiro. De esta forma, el centro de la crisis se dirigió a la base de Campo de Mayo <sup>(32)</sup>.

Los amotinados sostenían las mismas condiciones hechas por Barreiro para deponer su actitud. Señalaban la incompetencia de Ríos Ereñú para terminar con las humillaciones hechas en contra de las Fuerzas Armadas y la incapacidad de dar una solución política a un problema que ese carácter debe tener la lucha contra la subversión (33).

Los acontecimientos señalados, generaron una respuesta tanto de la sociedad como de los partidos políticos y organizaciones laborales y empresarial del país en favor de la democracia y el repudio al surgimiento de nuevas intenciones para alterar el proceso constitucional. La movilización política de todos los sectores políticos y sociales desembocó en una concentración masiva en el centro de Buenos Aires pocas veces vista, en apoyo al proceso democrático.

Por su parte, el Presidente Alfonsín señaló que no negociaría con los militares insubordinados ya que la democracia no era cuestión a negociar. Alfonsín, calificó el alzamiento como un intento por alterar el orden democrático establecido, conceptos vertidos en su discurso pronunciado el día 16 ante el Congreso Nacional. En su alocución, en forma reiterada señaló que no haría ninguna concesión a los sublevados que por medio de presiones pretenden "imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hallan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos...

No podemos en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esa naturaleza; nos lo impide la ética, nos lo impide nuestra conciencia democrática, las normas constitucionales, así como las que rigen a las Fuerzas Armadas basadas en la disciplina. También nos lo impide la historia, de la que los argentinos hemos extraído una clara enseñanza. Ceder ante un planteamiento semejante sólo significaría poner en juego el destino de la nación. Entonces no hay nada que negociar aquí. La democracia de los argentinos no se negocia.<sup>34</sup>

El país se mantenía expectante de la situación. Por su parte el Presidente Alfonsín contemplaba opciones para controlar la situación y lograr la rendición de los amotinados. Sin embargo, con el transcurso del tiempo era evidente la negativa de algunos oficiales a reprimir a los amotinados en Campo de Mayo, calculados en 200 oficiales. Finalmente, y dada la situación que amenazaba prolongarse, el Presidente Alfonsín y las organizaciones políticas de oposición convocaron al pueblo y a todas las organizaciones políticas y sociales del país a una concentración para apoyar la gobierno democrático.

Después de suscribir el Acta de Compromiso Democrático (35) por las fuerzas políticas y sociales del país, ante la amenaza al orden constitucional y el desborde del control de la población planteado por la sublevación en campo de Mayo, el Presidente Alfonsín anunció a la muchedumbre, concentrada frente al palacio de gobierno, su decisión de ir personalmente a pactar la rendición de los sublevados. Después de refrendar su

compromiso con la democracia y la justicia, Alfonsín pidió a la población que lo esperaran con la soluciones al problema.

En efecto, después de hablar con los amotinados, Alfonsín regresó a la casa de gobierno. Posteriormente se dirigió desde el balcón principal al pueblo reunido frente a la casa de gobierno y después de desear felices pascuas a los argentinos, anunció que los amotinados habían cesado su actitud que en forma evidente no calificó de rendición. Asimismo, señaló que entre los amotinados, -y no rebeldes ya que la rebeldía implica mayores sanciones a las contempladas por amotinamiento- se encontraban héroes de la guerra de las Malvinas que habían tomado una posición equivocada, reiterando que su intención no era la de provocar un golpe de Estado -Alfonsín había señalado lo contrario-. Al mismo tiempo dijo que había girado ordenes a los mandos superiores del ejército para que evitarán la represión contra los amotinados (36).

Esta aparente victoria de la "Democracia" representada por el radicalismo pronto fue desvirtuada. El 20 de abril, un día después de haberse controlado la situación, el Jefe del Estado mayor, Gral Ríos Ereñú pedía su pase a retiro, seguido por el de 14 generales (37), siendo reemplazado en el cargo por el General José Segundo Caridi.

Estas decisiones junto con la aprobación de la iniciativa de obediencia debida que limitó aún más el número de oficiales que debían ser procesados por delitos cometidos en la guerra contra la subversión, evidenció la contradicción de las declaraciones de Alfonsín, en el sentido de que había logrado la rendición de los oficiales dirigidos por Rico sin haber hecho ninguna concesión. En el mismo sentido, los cambios de generales fueron otro sintoma del pacto establecido entre los amotinados y Alfonsín, ya que Aldo Rico había señalado durante el amotinamiento que la acción también era parte de la disconformidad existente contra el "generalato" (38) argentino.

Esta posición del Ejecutivo, generó un clima de disconformidad, tanto en las organizaciones defensoras de derechos humanos como en las filas castrenses. La sanción de la Ley de Punto Final surgió como un generador de esta situación. Al establecer un plazo límite de 60 días, los tribunales civiles aceleraron los juicios y a citar judicialmente a cientos de militares, de los cuales un número significativo se negó a declarar. Asimismo, destaca la ambigua política de Alfonsín sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos. Por un lado, en el discurso oficial se prometía a los militares soluciones políticas a este problema y por otro, el ofrecimiento a la sociedad el seguimiento de los juicios contra militares.

En efecto, la política de Alfonsín al apelar a la justicia para procesar a los militares integrantes de las tres juntas, además de otros oficiales, estuvo presionada por la necesidad de reintegrar a las fuerzas armadas al sistema constitucional. Esta tarea, fue obstaculizada por la infranqueable posición de los militares, quienes a pesar de sus fracturas internas, mantuvieron una posición unificada respecto a su labor de haber erradicado la subversión.

Esta doble política, aunada al efecto indeseado de los alzamientos de militares inconformes con el seguimiento de juicios contra sus pares, y a una política de reestructuración militar incapaz de continuar en tanto no se resolvieran forma clara y realista el problema del alcance de los enjuiciamientos, redujeron gradualmente la credibilidad de los objetivos de la iniciativa gubernamental.

La rebelión de "semana santa" de abril de 1987, como se le bautizó, encontró a una sociedad y unos partidos políticos dispuestos a defender el proceso constitucional. Como respuesta, los militares obtuvieron del gobierno la denominada ley de obediencia debida, por la cual se eliminó el proceso contra cientos de militares, algunos ya condenados. Este principio se desarrolló jurídicamente, para que el delito cometido por el subalterno fuera imputado al superior que dictó la orden. Posteriormente, El 11 de mayo de 1986, la iniciativa denominada "Obediencia debida" (39) fue aprobada por el Congreso Nacional, aunque ésta no tuvo aplicación sino que se invocó según los casos particulares que se fueran presentando (40).

La imagen política de Alfonsín fue afectada seriamente. Después de los acontecimientos suscitados por dicha rebelión mostraron a un Ejecutivo retórico incapaz de hacer cumplir su palabra empeñada en no ceder a las exigencias de los militares. Este desprestigio arrastró en su totalidad al gobierno radical en general y profundizó el escepticismo en lo que se decía y en lo que se hacía, -a lo que se incorporó la ineficacia de la política económica- que inició un proceso de deslegitimación que fue creciendo paulatinamente (41).

Urgido de medidas que le permitieran recobrar su espacio de negociación, el Presidente Alfonsín decidió acelerar su proyecto, anunciado en mayo de 1986, de trasladar la Capital Federal (42). Asimismo, poco antes de la sublevación de semana santa, Alfonsín impulsaba proyectos que agruparan a la principales fuerzas de oposición del país, el justicialismo y la CGT. (43)

Los intentos del gobierno radical por concretar un acuerdo entre las principales organizaciones laborales y políticas continuaron. En noviembre de 1987 un nuevo pacto político y económico fue suscrito entre el gobierno, la CGT y la oposición peronista denominada Pacto de Garantías. Este acuerdo, tiene su origen en un marco postelectoral donde el peronismo había recobrado la mayoría electoral y la CGT continuaba con la promoción de sus reclamos salariales mediante huelgas y paros.

La prioridad del gobierno en el corto plazo ya no era buscar soluciones definitivas al problema económico, sino instrumentar modificaciones coyunturales que el permitieran mantener la gobernabilidad del país. Por ello, los planes económicos impuestos, junto con sus continuas modificaciones, se conformaron como medidas coyunturales para ganarse el apoyo y poder continuar con su política, independientemente de los primeros resultados, sean exitosos o no. La permanencia en el poder, permite la continua corrección de las políticas económicas, lo cual significa un respiro de tiempo.

Por otra parte, la verticalidad de las fuerzas armadas ejemplificadas en su posición uniforme contra los juicios promovidos por el gobierno fue palpable. Asimismo, la posición del gobierno radical frente a las fuerzas armadas mostró a un Ejecutivo altamente presionado por la situación política y económica del país. La recomposición militar quedó plenamente confirmada por diversos factores. El enfrentamiento entre el gobierno y los militares derivó en el ascenso a Capitán de Fragata de Alfredo Aztiz<sup>(44)</sup> y la restitución del grado de militar al teniente coronel Aldo Rico, quien liderara el alzamiento militar de abril de 1987<sup>(45)</sup>.

### 3.1.6 El alzamiento de Monte Caseros

Sobre Rico pesaban los cargos de abandono de destino, usurpación de mando y desobediencia. A partir de la decisión del juez de instrucción militar de modificar la situación de arresto preventivo riguroso para trasladarlo a un establecimiento militar específico, Rico acusó al Jefe del Estado Mayor, Gral. José Dante Caridi, de ilegitimidad del mando. Rico divulgaría junto con el ex-mayor Ernesto Barreiro<sup>(46)</sup>, otro participante en la rebelión de Semana Santa, un documento en el que sostenían que éstos no se someterían a la justicia militar sin recibir plenas garantías por parte del gobierno. Esta actitud, añadía, podría generar un enfrentamiento dentro del ejército que podía poner en peligro al gobierno nacional. Su actitud la justificó por las supuestas presiones del alto mando del Ejército por forzar su retiro y por irregularidades en su proceso.

La reacción oficial del Estado Mayor del Ejército fue rechazar el contenido de dicho documento y la firme intención de cumplir las ordenes de traslado. Este nuevo intento de Rico por desconocer a las autoridades militares del gobierno radical, originaron un nuevo clima de inestabilidad para el gobierno alfonsinista y un enfrentamiento de serias dimensiones entre miembros del ejército y grupos insubordinados que apoyaban a Rico. En este sentido, el ejército ordenó la movilización de efectivos a Campo de Mayo a fin de neutralizar cualquier apoyo a Rico. La respuesta de éste a la cooptación de apoyo en las zonas militares aledañas a la capital, fue la fuga hacia la guarnición de Monte Caseros.

Por su parte, el Presidente Alfonsín ordenó a las tres armas sofocar la nueva rebelión. El jefe del Estado Mayor tomó el mando para sofocar la asonada, lo cual presagiaba un enfrentamiento de graves consecuencias. Sin embargo, Rico, desde su posición en Monte Caseros, ante el avance de las tropas leales al gobierno, buscó una solución negociada al problema. Finalmente, el 19 de enero Rico deponía de nueva cuenta las armas.

Superada la rebelión, Alfonsín señaló que el país estaba en orden y felicitó a las fuerzas armadas por su acción en defensa del proceso constitucional. Si embargo, durante esos momentos de crisis prevalecieron las dudas sobre la obediencia de las fuerzas armadas a las ordenes del Ejecutivo o la capacidad de los miembros de las fuerzas armadas para sofocar la asonada.

En contraste con el alzamiento de abril de 1987, el gobierno no instó al pueblo argentino a salir a las calles a defender el incipiente proceso democrático argentino. La situación económica y sociopolítica del país, no garantizaban en ninguna forma una adhesión masiva a llamados de esa índole. La crisis económica y la apariencia de que se implícitamente se había pactado con los militares, eran factores que no podía explotar el gobierno para su beneficio político como lo había hecho un año antes.

Aldo Rico junto con algunos de sus seguidores, fueron puestos bajo arresto militar bajo condiciones de extrema vigilancia. En principio se propuso aplicar la pena capital a los sublevados, lo cual fue rechazado por las filas castrenses que se pronunciaron por rigurosas sentencias tanto de la justicia civil como de la militar.

Como resultado de esta crisis, el gobierno dispuso el retiro y disponibilidad, respectivamente, de más oficiales. El clima de inestabilidad generalizada era cada vez más agudo, al grado de que el propio Presidente denunciara planes atentatorios contra su vida y la de militares leales a su gobierno de algunas unidades militares. Asimismo, resultó a la nación el clima de escepticismo que prevalecía en la población ante la negativa del gobierno de modificar la política económica y la postura demandante de reivindicaciones salariales de las organizaciones obreras y de la CGT.

### 3.1.7 Marco político al inicio de la campaña electoral

En este clima de disconformidad, en julio de 1988 los partidos políticos comenzaron a organizar sus campañas electorales con miras a las elecciones generales programadas para mayo de 1989. El justicialismo, por medio de elecciones internas fin de evitar críticas sobre imposiciones de candidatos desde la dirigencia, postuló al Carlos Saúl Menem, entonces Gobernador de la Provincia de La Rioja, como candidato presidencial del Partido Peronista. Esta elección estuvo precedida por enfrentamientos con su principal opositor, Antonio Cafiero, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Presidente del Justicialismo. Como era de esperarse, la estrategia del candidato peronista se centró en una promoción del nacionalismo, la crítica a los fracasos en la política económica del gobierno radical y la promesa de reducción de impuestos y aumento del nivel de vida de los trabajadores.

A las demandas de aumentos salariales se sumó el de las fuerzas armadas. El descontento dentro del ejército por el bajo nivel de los salarios de los militares significó un nuevo reto al gobierno radical. El resquebrajamiento de la política económica enmarcada en el Plan Austral y sus diferentes modificaciones, obligó al gobierno a lanzar una nueva estrategia económica dentro del llamado Plan Primavera (<sup>17</sup>). En éste se incluyeron medidas coyunturales para atacar el problema inflacionario y el creciente déficit comercial del país, como la devaluación de la moneda, aumentos en servicios públicos, congelación de precios, etc.

A la oposición de la CGT y diversos sectores de la clase media, se sumó la exigencia de las fuerzas armadas por aumentos a sus percepciones salariales. Esta exigencia, era particularmente importante, debido a que, con motivo de los alzamientos militares de abril de 1987 y enero de 1988, el gobierno se había comprometido a mejorar el presupuesto de defensa y los salarios de los militares.

A esta inquietud, se sumó el hecho de que la justicia civil citara judicialmente en octubre de 1988 a varios militares de alto rango que no fueron beneficiados con la amnistía otorgada por la Ley de Punto Final y de Obediencia debida. Entre los militares más importantes citados se encontraban el ex-presidente y ex-jefe del Ejército, Gral. Leopoldo Galtieri y el ex-general Cristino Nicolaidis, acusados de homicidio y secuestro de personas.

### 3.1.8 Villa Martelli

La irritación dentro de las filas castrenses a la continuación de citaciones judiciales a militares, fue aceptada como un hecho por el gobierno. A pesar de que a nivel gubernamental se señalaba que la situación estaba bajo control, en diciembre de ese mismo año, una nueva asonada militar perpetrada por un grupo de efectivos del escuadrón Albatros, se escenificó en el país. En el depósito de municiones de Villa Martelli, cercana la capital, el coronel Mohammed Ali Seineldín, nacionalista de derecha, encabezó la nueva asonada militar.

El levantamiento se inició el primero de diciembre de 1988 culminando después de cuatro días de negociaciones. Los amotinados depusieron las armas ante el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Jose Dante Caridi.

La movilización de tropas leales al gobierno fue nuevamente significativa, las cuales lograron controlar la situación. Las demandas de los insubordinados no diferían de las exigidas por los líderes de los anteriores alzamientos: aumento a los salarios de los militares, suspensión de los juicios a los militares por medio de una amplia amnistía y el reconocimiento a las fuerzas armadas por haber suprimido la amenaza de la subversión.

Pese a que no se reconocieron públicamente la concesión de exigencias de los sublevados, el gobierno concedió al ejército un aumento salarial del 20% y una bonificación especial de 1,500 australes (95 dólares), lo cual superó el tope salarial establecido en el denominado Plan Primavera. Asimismo, el día 21 de ese mes el Presidente Alfonsín sustituyó al Gral. Caridi por el Gral. Francisco Grassino al frente del Estado Mayor (48).

### 3.1.9 El caso de La Tablada

A principios de 1989, el gobierno mediante las fuerzas armadas logró repeler un nuevo alzamiento en la Base de La Tablada, sede del Tercer Cuerpo de Infantería, ubicada



a 25 kms. de la capital. Esta fue encabezada por militares izquierdistas agrupados en el movimiento "Todos por la Patria". En esta ocasión, superada la crisis, la oposición política denunció la participación del gobierno en la promoción de los alzamientos a fin de deslegitimar su acción política (49).

Cabe destacar que los alzamientos fueron manejados como golpes de Estado por parte del gobierno, lo cual le retribuyó el apoyo de la población; si no a la gestión gubernamental en materia económica, si como representante de un nuevo inicio de la constitucionalidad del país. La realidad, es que el desprestigio de los militares hacia inviable una nueva toma del poder político en forma directa. Por ello, su estrategia se centró en presionar al gobierno para que se le asignara un presupuesto, nivel salarial acorde a su rango y el respeto a su institucionalidad -amenazada por el seguimiento de los juicios a militares-, a cambio de su inmovilidad política.

Sin embargo, al interior de las fuerzas armadas el levantamiento militar de la Tablada, llevado a cabo por extremistas de izquierda agrupados en el MTP (50), generó un profundo malestar en contra de las autoridades civiles y militares. El estamento militar, mostró junto con las autoridades civiles, incapacidad para prevenir situaciones de este tipo.

Este levantamiento era particularmente importante. Los propios militares se autoalertaron sobre la generación de movimientos de izquierda dentro del propio ejército dominado por los nacionalistas de derecha.

La exaltación del Presidente Alfonsín de las fuerzas armadas por el efectivo control logrado sobre los rebeldes en defensa de la nación, significó el resurgimiento de la idea de combate a la subversión en diversos sectores del ejército. Como consecuencia del alzamiento, fueron dictadas en marzo sentencias de prisión preventiva a 20 personas que participaron en la rebelión. La mayoría de los detenidos pertenecientes al MTP, debieron enfrentar juicios acusados de intentar alterar el orden constitucional. Para ellos se solicitó la pena de reclusión perpetua o por tiempo indeterminado (51).

En el ámbito político, las consecuencias fueron mucho más significativas. Esta rebelión alertó a los sectores políticos y sociales del país sobre la posibilidad del resurgimiento de la violencia en el país, en momentos en que el gobierno alfonsinista se dirigía al derrumbe. El proceso electoral, captó la atención de los argentinos quienes por primera vez, en varias décadas, elegirían en forma directa y consecutiva a su próximo Presidente.

### 3.1.10 El principio del fin

El debate preelectoral con motivo de la celebración de elecciones generales en mayo de 1989, comenzó a captar la atención del pueblo argentino. Igualmente, los diferentes candidatos presidenciales Carlos Menem del justicialismo y Eduardo Angeloz candidato del oficialismo, comenzaron a definir sus estrategias proselitistas.

Como era de esperarse, el candidato del justicialismo, centró su campaña en la crítica al resurgimiento de la violencia y la severa crisis económica<sup>(52)</sup>. En efecto, el país gradualmente comenzó a mostrar los efectos de las políticas económicas del radicalismo. La liquidez de la nación mostraba signos de agotamiento y el flujo de capitales externos fue suspendido por la banca internacional ante el incumplimiento en el pago de intereses por parte del gobierno.

La legislación electoral argentina señala que el candidato triunfador debe contar con una mayoría absoluta. De no ser así, el Congreso adquiere la facultad de designar al Presidente de la República. Por ello, los principales partidos, el radicalismo y el justicialismo, promovieron la concertación de alianzas con los partidos minoritarios, ya que la ley electoral argentina ni la Constitución contemplan la celebración de una segunda vuelta.

El panorama político para el candidato oficial, Eduardo Angeloz, no fue nada promisorio. El simple hecho de ser el candidato del partido que 5 años atrás había tomado el mando con un amplio apoyo popular y que no había respondido a las expectativas de mejora del nivel de vida, le restaron posibilidades de triunfo. Lo anterior, a pesar de sus intentos de desligarse del fracaso de la administración de Alfonsín mediante críticas a éste. El panorama económico era mucho más grave y el tema de los militares no había sido resuelto<sup>(53)</sup>.

A la incapacidad de Alfonsín y de su partido de erigirse como una fuerza política consolidada en Argentina en una coyuntura de descrédito total de los militares como opción política junto con el justicialismo, se sumó la intransigencia de los demás sectores -principalmente empresariales y laborales- a renunciar a la exigencia de sacrificios en la captación de ganancias y de reivindicaciones salariales, respectivamente.

Asimismo, la estructura terrateniente permaneció intacta. Este grupo, junto con las empresas trasnacionales y nacionales que se aprovecharon de la crisis, ubicaron en el exterior sumas equivalentes a la tercera parte de la deuda externa total de Argentina.

Las elecciones generales celebradas el 14 de mayo de 1989, sólo mostraron lo inevitable para el radicalismo. En medio de la peor crisis económica agudizada por la desconfianza de los inversionistas extranjeros y nacionales, una desorganización total en la estructura de recaudación fiscal donde imperaba la evasión, una escalada hiperinflacionaria y de alzas sustanciales de la cotización del dólar frente a la deteriorada moneda argentina, el candidato del Partido Frente Justicialista de Unidad Popular (FREJUPO), Carlos Saúl Menem, se erigió como el candidato triunfante al obtener 46.50% de los votos<sup>(54)</sup>. Eduardo Angeloz de la UCR, obtuvo 36% de los votos, cifra que rebasó las propias expectativas de dicho candidato, ubicándose en segundo lugar.

Los resultados fueron reconocidos por Angeloz y Alfonsín, lo cual dispuso la inquietud en cuanto a la necesidad de que el Colegio electoral designara al próximo

**Presidente.** Este resultado, confirmó que el radicalismo se había erigido como un fenómeno político más que una verdadera opción política viable para los argentinos.

No obstante, si bien gran parte de la culpa recae en la actuación de Alfonsín quien no supo manejar el apoyo que le otorgó la población al asumir el mando, es la misma sociedad argentina en general la que en muchas ocasiones inviabilizó cualquier iniciativa que se consideraba lesiva a sus intereses por buena que esta fuera.

De nueva cuenta, la sociedad argentina regresaba al peronismo al poder, tal vez convencido de que otras opciones políticas, incluida la militar, no son garantía para la recuperación económica del país sin la exigencia de grandes sacrificios. Evidentemente, el electorado argentino se inclinó por la esperanza de que el peronismo representado por Menem rescatara a la nación de la ingobernabilidad.

En efecto, para esos momentos la situación económica, política y social del país comenzaba a salir del control del gobierno. Actos violentos en protesta por el desabasto se escenificaron en ciudades del interior del país, lo que obligó al Ejecutivo imponer el Estado de Sitio a finales de mayo por espacio de treinta días. Asimismo, se acentuaron las presiones de diversos sectores del país <sup>(55)</sup>, exigiendo el acortamiento del mandato de Alfonsín, cuya expiración estaba programada para diciembre de 1989.

En principio, Alfonsín se negó a aceptar un acortamiento de su mandato. En una de sus últimas decisiones, Alfonsín estableció una "economía de guerra" para enfrentar la crítica situación económica del país, así como la renovación de todo su gabinete. Estas medidas, sin embargo, no evitaron que se redujera aún más la escasa maniobrabilidad política y credibilidad interna y externa del régimen de Alfonsín.

En este marco, finalmente Alfonsín anunció el 12 de junio su aceptación de renunciar en forma anticipada a su cargo a partir del 30 de junio de ese mes. Alfonsín señaló que el espacio político de su gobierno para afrontar los problemas económicos se había agotado, y que las circunstancias exigían soluciones enérgicas e impostergables y que cualquier demora se traducirían en mayores padecimientos en el país <sup>(56)</sup>. Por su parte, el presidente electo, en principio renuente a aceptar el cargo antes de diciembre <sup>(57)</sup>, dio su beneplácito para que la transmisión de poderes se llevara en forma anticipada.

Alfonsín presentó efectivamente su renuncia al Congreso el día 30 como lo había señalado junto con la del Vicepresidente Víctor Martínez, tal y como lo establece la Constitución. <sup>(58)</sup> Estas fueron presentadas la Presidente del Senado para su consideración en la Asamblea Legislativa que se verificó el 8 de julio siguiente que igualmente daría por terminada las funciones de dicha Asamblea <sup>(59)</sup>.

En este marco, el Congreso Nacional proclamó como Presidente electo a Carlos Saúl Menem. Las dos Cámaras reunidas en Asamblea Legislativa, ratificaron los resultados electorales que favorecieron a la fórmula peronista Menem-Dulalde. Finalmente, el 9 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem se convertía en el nuevo Presidente de la Argentina.

De esta forma, el radicalismo dejaba el poder para asumir de nueva cuenta su papel de partido opositor. Sin embargo, el desprestigio en que cayó como fuerza política, limitó el espacio político para el nuevo gobierno, en el sentido de intentar una concertación con las fuerzas políticas y sociales que, aún después de haber asumido la presidencia, continuó enfrentando el clima de violencia social y agitación laboral.

Las primeras acciones del nuevo gobierno de Menem en materia económica fueron enmarcados en su plataforma electoral a la que denominó la Revolución productiva y que tendían al neoliberalismo. Estas medidas, distaron significativamente de las promovidas tradicionalmente por el peronismo como el nacionalismo económico.

Este neoperonismo, estaba muy alejado del establecido por el fundador del justicialismo Juan Domingo Perón. La herencia de los tres regímenes peronistas anteriores, conformaron una estructura industrial compuesta principalmente por industrias públicas ineficientes y deficitarias con una abultada nómina que Alfonsín no logró desincorporar de la tutela del Estado. Después del triunfo electoral de Menem, la actitud populista contrastó con las medidas adoptadas por éste que tendían a eliminar esa carga para el Estado.

Las condiciones económicas, políticas y sociales tanto al interior del país como en el exterior en que Menem asumió la presidencia, hacían inviable la adopción de una actitud paternalista, como la promovida por la doctrina peronista. El nuevo gobierno heredaba una problemática de mayores dimensiones. Si a Alfonsín le bastaron 6 años para comprender que la democracia no era la solución mágica a los graves problemas de la nación, Menem evidentemente sabía lo inadecuado de aplicar de nueva cuenta el peronismo tradicional, aún antes de asumir el cargo.

Para el pueblo argentino, el regreso al poder del justicialismo después de 13 años sólo era considerado como el cambio de hombres a los que ahora se debían enfrentar para exigir sus derechos y reivindicaciones. Esta nueva etapa en la historia argentina, dio inicio a un nuevo intento, bajo el marco de la constitucionalidad, de recuperación de un país que apenas está aprendiendo a aceptar una realidad favorable a unos cuantos y negativa para la mayoría, que muchos argentinos se resistían a enfrentar.

### 3.2 Política económica del Alfonsinismo

A partir de la segunda posguerra, en Argentina se abrió un período de creciente inestabilidad política que afectó seriamente el desarrollo económico de la nación. Después de haber poseído una de las economías más sólidas dentro del Continente americano hasta antes de la segunda posguerra, los conflictos y enfrentamientos entre los diversos actores políticos nacionales afectaron el proceso económico y los intentos por superar en forma significativa el incipiente desarrollo industrial.

La economía argentina se convirtió en un campo de experimentos de los diferentes gobiernos democráticos en turno, o que así se autoproclamaban, para la aplicación de medidas de efectos recesivos que podían considerarse exitosas en su momento. Sin embargo, la coyunturalidad de estas medidas destinadas a atacar el problema inflacionario y la reducción del déficit en la balanza de pagos, generaba nuevas políticas reactivas para contrarrestar, al menos temporalmente, la nueva crisis económica.

El problema económico argentino continuó, y continúa en gran medida, siendo estructural. Las políticas económicas adoptadas para corregir la marcha de la economía, no han atacado el problema de fondo: superar la subindustrialización del país y la dependencia de las exportaciones de productos agrícolas y ganaderos en un mercado altamente competitivo y fluctuante, muchas veces desleal y subsidiado. A esto se suma la concentración de grandes extensiones de tierra cultivable en manos de terratenientes y de empresas nacionales y extranjeras.

Gradualmente, las políticas económicas impuestas por los distintos regímenes argentinos, civiles o de corte militar, perdieron credibilidad. La experiencia "democrática" del Alfonsinismo en esta materia, no sería la excepción. Dichas medidas, pronto enfrentaron el desafío de los diversos actores políticos y sociales, individuales y colectivos, que consolidaron una posición para hacer frente a las políticas económicas que afectaban en forma directa sus intereses. En la mayoría de las ocasiones, el tema económico y la forma de abordarlo ha definido, en la mayoría de los países de la región, el comportamiento político de los actores gubernamentales.

La herencia del régimen militar que gobernó a la Argentina durante 1976 a 1983 en materia económica constituyó una de los principales desafíos a afrontar el régimen civil encabezado por el Partido radical a partir de diciembre de 1983.

Durante el régimen militar, la crisis económica se profundizó en forma sustancial. El clima de agitación sociopolítica afectó seriamente el proceso económico, traducido en una drástica disminución de liquidez interna, de flujo de capitales y de inversión por la fuga de divisas, devaluaciones periódicas de la moneda, desempleo, aumento desproporcionado del índice inflacionario y cesación de pagos por concepto de deuda externa <sup>(60)</sup>. A este marco se sumaron las consecuencias negativas que representó la Guerra de las Malvinas y el subsecuente boicot impuesto por la CEE, al que se sumó Estados Unidos, a las exportaciones de carne argentina a Europa; que afectó el volumen y los precios internacionales de ésta.

A pesar de este marco negativo, los radicales encabezados por Alfonsín tenían la ventaja de contar con el respaldo de la sociedad argentina. La capacidad de maniobra, al inicio de su gobierno, era importante por lo que de la actuación de Alfonsín dependía la restauración de la confianza en una economía estancada y desmoralizada. A este contexto se sumaba la convicción, tanto del radicalismo como de la sociedad, de que el problema económico había sido generado por los militares y los grupos económicos más importantes del país. Sin embargo, la posición de los radicales en el sentido de que su presencia en el gobierno era una garantía para restaurar la confianza entre los inversionistas pronto fue desechada.

Los militares tomaron el poder convencidos de que su llegada al poder se justificaba en la necesidad de restablecer el orden, en todos los aspectos, dentro del país. En contraposición, el radicalismo debía maniobrar por medio de la concertación social entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de la nación <sup>(61)</sup>, a fin de evitar una disminución en su capacidad de maniobra para atacar la aguda problemática argentina.

En el contexto regional, 1983 fue un año particularmente difícil para la economía de América Latina en las últimas 5 décadas. En el caso de Argentina la crisis que para esos momentos era muy seria, aunque el país en sí mantenía considerables posibilidades de crecimiento por su potencial económico indiscutido. El derrumbe del régimen militar que posibilitó el regreso a la constitucionalidad en la figura de Alfonsín, significó al mismo tiempo el inicio de un difícil tránsito de recuperación económica del país, que para muchos nunca llegó.

Al asumir la presidencia del país, Alfonsín y su equipo económico debieron enfrentar el desafío de reordenar la economía, ejemplificada en la ascendente marcha de la inflación y el problema de la deuda externa. Las primeras medidas en esta materia se centraron, bajo el marco constitucional, en mejorar el ingreso real de los trabajadores, la reducción de la inflación, la reordenación de las finanzas públicas y privadas, promoción de la inversión entre otras. Para ello aplicó controles de precios a los productos básicos, los salarios se incrementaron ligeramente por encima de los índices de inflación, con objeto de estimular el consumo interno y, por ende, estimular la producción de manufacturas <sup>(62)</sup>.

Sin embargo estas primeras medidas, instrumentadas después de prolongadas evaluaciones de la situación económica del país, se vieron obstaculizadas por la queja de los empresarios respecto al alza en los costos de mano de obra que hacían imposibles nuevas inversiones, en virtud de la escasa rentabilidad. De esta forma surgió el mercado negro que afectó los precios de los productos básicos y una creciente dolarización de la economía. El ritmo inflacionario siguió ascendiendo y para 1984 representó alrededor de 1000% anual.

Gradualmente, las inversiones productivas tanto del sector público como privado cayeron drásticamente, ya que la especulación se convirtió en el negocio más productivo en el corto plazo. Los empresarios argentinos, no estaban dispuestos a invertir en una economía que no garantizaba, al menos, la recuperación del capital.

En efecto, a lo largo de la administración de Alfonsín los intentos por agrupar a las fuerzas políticas y sociales -peronismo y CGT principalmente- para concretar un compromiso que fuera aceptable para todas las partes en cuanto a la forma de abordar la aguda problemática heredada del régimen militar, no surtieron el efecto deseado. Al gobierno constitucional, a pesar del respaldo otorgado por la población, no contó con el tiempo suficiente para atacar de fondo dicha problemática con el apoyo de la oposición política y el sector laboral incluida la sociedad.

El nuevo gobierno se convirtió en el blanco de las exigencias de todos los sectores cuyo común denominador se refirió a la aplicación de soluciones rápidas y efectivas a problemas económicos estructurales arrastrados desde décadas anteriores. A este marco, se sumó la incapacidad de los radicales por convertirse en una fuerza política de primer orden en medio del desprestigio de los militares y la desorganización y enfrentamiento de los cuadros dirigentes del justicialismo.

La política económica del gobierno, poco a poco se vio maniatada por la quasi permanente protesta de los sectores económicos a cualquier medida en esa materia que redujera sus ganancias o el poder adquisitivo de los salarios. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, la crisis y las medidas para afrontarlas tuvieron sus mayores efectos en contra de las clases de menores recursos. En este sentido, la deuda externa heredada del régimen militar fue un factor determinante en la aplicación de medidas de choque para cumplir con las condiciones impuestas por la banca acreedora, pocas veces aplicadas en la Argentina. Por ello, para enfrentar el problema de la deuda externa, el gobierno de Alfonsín inició, desde la inauguración de su mandato, esfuerzos para su reestructuración.

Animado por una mejora sustancial del ingreso de divisas por concepto de exportaciones de granos, el gobierno radical adoptó una actitud firme de negociación. Esta se orientó a lograr una mayor comprensión de los problemas económicos argentinos por parte de los acreedores respecto a la refinanciación de la deuda externa del país, estimada en ese año en 40 mil millones de dólares. De esa cantidad, el pago de intereses por vencer -además de los vencidos- se verificaría en los primeros meses de 1984.

Alfonsín retardó el mayor tiempo posible la aplicación de las medidas exigidas por el FMI. Respaldo en la captación de divisas provenientes de las agroexportaciones, se negó a adoptar las medidas recesivas que acompañan cualquier préstamo de la banca internacional. Esto fue evidente, cuando en marzo de 1984, el Secretario del Tesoro norteamericano, apresurado por la administración Reagan, junto con otros países latinoamericanos, reunió un paquete de préstamos de 400 mdd. para Argentina, los cuales se destinaron al pago de intereses vencidos y por vencer <sup>(63)</sup>, a pesar de la negativa del gobierno radical a aceptar recetas de corte recesivo.

La decisión tanto de los bancos acreedores como de algunos gobiernos latinoamericanos estuvo orientada a evitar las consecuencias que traería consigo un incumplimiento en pago de intereses de algún deudor, en este caso Argentina. Países como

Venezuela, Brasil y México, padecían de graves problemas económicos que necesariamente requerían del flujo de capitales provenientes del exterior para superar sus situación, aunque ello significaba aceptar las exigencias de los acreedores. Estos no podían exponerse a las posibles represalias de los organismos financieros y la banca privada, como la negativa del otorgamiento de nuevos préstamos.

No obstante, el rescate argentino era una medida temporal claramente insuficiente. A pesar de ello, Alfonsín aludía el carácter naciente de la democracia en su país, razón por la cual los organismos financieros debían apoyar su consolidación mediante la flexibilización de su postura. Asimismo, señalaba su intención de no sacrificar el crecimiento económico ni el nivel de vida de los trabajadores y que era la propia Argentina la que impondría las condiciones de pago (64).

La banca internacional se rehusaba a concretar negociaciones que violaran su política tradicional en el otorgamiento de préstamos. Para finales de 1984, según el Ministro de Economía argentino, el atraso en el pago de intereses oscilaba en alrededor de 2.700 mdd. Las perspectivas de una mejora en los términos de intercambio en el mercado internacional con la recuperación de los precios internacionales de granos optimizó a la administración alfonsinista respecto a una recuperación basada en el orden político y administración económica.

Esta dependencia de que la reactivación internacional mejorara los términos de intercambio que favoreciera la recuperación de las economías de la región pronto se dispó. Alfonsín debía enfrentar al interior del país un abultado déficit fiscal y monetario, el mantenimiento de una estructura industrial ineficiente con una excesiva nómina que absorbía el 60% del presupuesto nacional, una sustancial evasión fiscal y la ausencia de inversiones productivas en el país, fuga de divisas y el pago de subsidios estatales. Para completar el cuadro, la ansiada reactivación internacional no se presentó. Estados Unidos enfrentaba un aumento sustancial de su déficit comercial, lo cual implicó la adopción de restricciones a las importaciones por medio de mayores medidas proteccionistas en detrimento de las exportaciones de la región.

A la dificultad de adoptar las medidas recesivas exigidas por la banca internacional, se sumaba el compromiso político de Alfonsín de mostrar la firmeza de su nuevo gobierno. Poco a poco la realidad y la urgencia de divisas provenientes del exterior ante la incapacidad del gobierno por restituir la confianza en la economía para atraer inversiones y capitales fugados modificaron este contexto. El fracaso de las primeras medidas económicas para enfrentar el acelerado proceso inflacionario, que para octubre oscilaba en el 1000%, dieron paso a la especulación y a la dolarización de la economía.

Las metas fijadas por el gobierno respecto al nivel de la inflación fueron superadas. La política de salarios se mantuvo con aumentos retroactivos para compensar la pérdida real de éstos. Sin embargo, el ascendente ritmo inflacionario motivado por la evasión de los controles de precios por parte de las industrias medianas y pequeñas, forzaron al gobierno a adoptar la estrategia recesiva ofrecida por la banca acreedora.



### 3.2.1 Aplicación de medidas económicas recesivas y sus consecuencias

La gravedad de la situación económica forzó a los radicales a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo concretado en septiembre de 1984, abarcó el refinanciamiento de intereses vencidos y por vencer a finales de 1984 de la deuda pública de 31 mil millones de dólares -para ese momento la deuda externa alcanzaba 44 mil mdd- y la obtención de fondos por 4,200 millones de dólares durante el periodo de 1982-1985. Esto incluyó un préstamo contingente por 1500 mdd, a cambio del cual el gobierno de Alfonsín instrumentó todas aquellas medidas que había prometido a los argentinos no aplicar: restricción de la política monetaria, elevación de los precios de los servicios públicos, eliminación de subsidios, control de precios de los productos básicos, congelación de salarios, privatización de empresas públicas, restricciones a las importaciones y promoción de las exportaciones <sup>(65)</sup>. Comenzaba de esta forma, el escepticismo en cuanto a lo que se decía y lo que se hacía por parte de la administración alfonsinista.

En el marco político interno, la división de la oposición peronista hizo inviable la concertación, con un interlocutor político como el peronismo, en torno a los principales problemas del país que solidificara la idea de democracia participativa intentada por el gobierno de Alfonsín. En contraste, se incluyó el carácter deliberativo de ambas agrupaciones políticas -radicales y peronistas- buscando su mutuo desprestigio.

Este enfrentamiento fue aprovechado por la Confederación General de Trabajadores (CGT), la cual se ubicó como el principal grupo opositor con fuerza para contrarrestar y modificar, en algunas ocasiones, la política económica del gobierno. Sus relaciones con éste, oscilaron en forma permanente entre la confrontación y la concertación. La falta de respuestas satisfactorias por parte del gobierno a sus reivindicaciones salariales en términos reales y rezagados por el ritmo inflacionario mayor, permitió a la CGT recuperar su representatividad legal de la clase obrera del país, restringida por el régimen militar <sup>(66)</sup>.

La política económica se orientó, entonces, a eliminar las consecuencias generadas por la política neoliberal impuesta por el régimen militar. La intención de los radicales era imponer un modelo de regulación estatal de la economía compatible con una inflación moderada y la instrumentación de políticas recesivas para cumplir con los compromisos contraídos con la banca internacional.

Sin embargo, la incompatibilidad de este modelo se evidenció ante el recrudecimiento de la inflación y la crisis fiscal, situación que precipitó la sustitución del Ministro de Economía <sup>(67)</sup>. Esta sustitución, puso de relieve las dificultades del gobierno para aplicar su política económica, rechazada por la mayoría de los sectores de la población. Asimismo, se buscaba atemperar las críticas a la política económica de la oposición, a la que se sumaron las provenientes de las filas del radicalismo.

Poco a poco, Alfonsín debió asumir una actitud más realista sobre su posición política y sus intentos de reconciliación, lo cual no garantizaba el retorno de la confianza en la economía y su reactivación por su mera presencia al frente del gobierno. La economía se convirtió en un factor que condicionó la relación de las autoridades con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Como las tendencias recesivas de la economía siguieron acentuándose, el nuevo equipo económico anunció en junio de 1985 la implantación de un severo programa de austeridad.

### 3.2.1.1 El Plan Austral

En lo que se denominó Plan Austral -el cual fue el primero de las diversas estrategias en política económica impuestas durante el gobierno de Alfonsín-, constituyó la primera medida adoptada por Alfonsín para atacar la severa crisis en esa materia. En efecto, los discursos del presidente durante 1985 en referencia a la situación económica del país, apuntaron a enfatizar la necesidad de la modernización del Estado y la eliminación de políticas económicas equivocadas cuyos resultados provocaron la paralización del aparato productivo del país. Mediante esto, se proponía afrontar el problema inflacionario que representaba el principal problema a resolver en el corto y largo plazo (68).

El Plan Austral, tenía como objetivo prioritario el combate a la inflación. En éste se incluyeron innovaciones como la creación de una nueva moneda (69), el austral, equivalente a 1000 pesos argentinos; la congelación indefinida de precios y salarios, establecimiento de un feriado bancario; suspensión de la emisión de moneda sin respaldo para financiar el gasto público; incremento de impuestos y tarifas y la aplicación de un programa de ahorro forzoso para personas de altos ingresos a efecto de reducir el consumo que favoreciera la lucha contra la inflación. El enorme déficit fiscal, sería financiado con la venta de empresas públicas y con créditos externos (70).

La aplicación de este programa, desde el punto de vista político fue el primer paso adoptado por los radicales para combatir el estado de desorganización en que se encontraba la economía. Asimismo, Alfonsín deseaba evitar un mayor desprestigio de su imagen personal, ante el fracaso de las primeras medidas económicas puestas en marcha para reactivar la economía

En principio los resultados del plan económico favorecieron la reducción de la inflación en los meses siguientes a su aplicación. Sin embargo, este avance se desarrolló a un gran costo social en términos de empleo y consumo. En efecto, junto con la aplicación del nuevo programa se acentuaron los despidos masivos de trabajadores y las suspensiones. La CGT rechazó el plan, denunciando que la imposición del Plan Austral se debía a las exigencias del FMI para cumplir con los compromisos contraídos por Argentina para el pago de intereses atrasados y como condicionamiento a la captación de nuevos créditos. Esta posición, la justificó en la disminución real de los salarios, en detrimento del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

A esta presión interna, se sumó la de los acreedores externos. El gobierno radical debía acelerar la concreción de un acuerdo estable con la banca internacional, que exigía el pago de intereses anuales por concepto de deuda externa en un porcentaje superior, con relación al PIB, al ofrecido por Argentina. Esta exigencia incluía un escepticismo sobre la capacidad del régimen radical de cumplir con los requisitos de los acreedores, relativos a la reducción sustancial del gasto público, el déficit fiscal y la implantación de medidas drásticas para contener el proceso inflacionario.

La intención de Alfonsín fue negociar con los acreedores un acuerdo que redujera la exportación de capitales para reactivar el proceso productivo. Sin embargo, al interior del país el carácter opositor de los sectores laborales y de la oposición a la aplicación de medidas que afectaran aún más su nivel de vida, condicionó la aplicación de medidas que atacaran el problema más estructural que coyuntural de Argentina.

Para el radicalismo, el éxito inicial del Plan Austral que redujo en forma sustancial el índice inflacionario, mejoró momentáneamente la imagen del gobierno, y por ende, de su partido. Como resultado, en un año electoral como 1985, el gobierno mantuvo un amplio apoyo de la población. Esta situación, le permitió concentrar un mayor espacio político en detrimento del peronismo, observado con el resultado de las elecciones legislativas celebradas en noviembre de ese año.

Sin embargo, esta coyuntura política favorable al radicalismo, pronto se modificó. La caída de los salarios reales como consecuencia de la imposibilidad, no publicitada, de mantener la política de congelación de bienes y servicios provocó un creciente malestar social y laboral, traducido en la escenificación de paros y huelgas promovidos por la CGT (71).

Durante 1985, la política económica se centró en la disminución del gasto público, la privatización de empresas de participación estatal y el congelamiento de precios y salarios y el fomento de las exportaciones. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios sufrieron modificaciones silenciosas al alza, lo que provocó la respuesta de la CGT por medio de la promoción de nuevos paros y huelgas (72). La implantación del Plan Austral, si bien redujo la inflación y estimuló las exportaciones -en detrimento de las importaciones-, propició una disminución considerable del consumo interno a causa de los bajos salarios y en general, del ingreso interno, así como un mayor desempleo y subempleo.

Las empresas públicas, por su parte, mantenían una iliquidez para hacer frente a sus obligaciones en especial las derivadas al cumplimiento del pago de intereses de la deuda externa. La planta productiva continuaba semiparalizada, por lo que la captación de créditos en el exterior, constituyó una prioridad para el gobierno en sustitución a la incapacidad del país para generar recursos. En el ámbito externo, la severa disminución de los precios internacionales de granos significó la pérdida en la captación de divisas por concepto de exportaciones.

### 3.2.1.2 Modificaciones al Plan Austral

La actitud desafiante de la CGT, que desde el ascenso de Alfonsín a la presidencia hasta principios de 1986 había promovido diversos paros y huelgas en demanda de reivindicaciones salariales, condicionaba una modificación de su política al aumento del salario real de los trabajadores y una moratoria al pago de intereses. En efecto, los llamados a huelga hechos por la CGT en enero y marzo de 1986, provocaron la reacción del gobierno. Este, debió aplicar un replanteamiento en los lineamientos del Plan Austral, tendientes a estimular el crecimiento del aparato productivo por medio de apoyos y estímulos a las exportaciones y la venta de empresas paraestatales no estratégicas. En materia de precios y salarios, cuestiones básicas del funcionamiento del plan, se aplicaron modificaciones a las tarifas de los productos básicos, bienes y servicios y salarios (73).

Esta decisión, fue motivada además, por la actitud de los gobiernos provinciales que, pese a las restricciones presupuestales existentes, mantuvieron un alto nivel en el gasto público. Este se destinó a satisfacer las demandas de construcción de viviendas y el mejoramiento de pensiones jubilatorias, la liquidación de empresas estatales intervenidas y por intervenir y de trabajadores que se acogieron al plan de retiro voluntario. Por otro lado, los controles de precios generalmente fueron evadidos por las empresas medianas y pequeñas.

El éxito inicial del Plan Austral para reducir la inflación, no fue suficiente para recobrar la confianza en la economía. La inversión productiva seguía en niveles mínimos (74). La inestabilidad económica, política y laboral (75) del país, y perspectivas negativas sobre los presiones internacionales en el mercado de granos, dificultó la marcha del programa económico contemplado en el Plan Austral. A un año de su aplicación, si bien se había reducido significativamente el nivel inflacionario, se mantenía la semiparalización del aparato productivo y el clima de recesión económica de la nación.

En efecto, además de la recesión productiva, el déficit fiscal surgieron como los principales obstáculos al plan de estabilización enmarcado en el Plan Austral. Para Argentina este panorama era particularmente grave. Las negociaciones mantenidas con los acreedores externos seguían su curso y los compromisos de reducción de la inflación y del déficit público en 2% del PIB para 1986 mostraban cifras mayores. El presupuesto nacional, en vez de disminuir, aumentó 3.7% con relación a 1985, en gran medida, por el excesivo gasto público improductivo absorbido por las empresas estatales (76).

Para ese momento, el gobierno mantenía una incapacidad para captar mayores recursos via recaudación fiscal lo cuales eran cubiertos con un mayor endeudamiento externo. En junio de 1986 (77), se aplicó la segunda fase del Plan Austral que flexibilizó en forma oficial la política de congelación de precios y salarios (78). Sin embargo, no logró evitar que las modificaciones a éstos repercutieran en el proceso inflacionario a niveles superiores a los esperados. La momentánea recuperación parcial de los salarios reales, permitió un aumento de la demanda interna de productos y de la inversión, pero surgieron

igualmente presiones sobre el mercado interno rebasado en su capacidad de oferta interna de bienes y servicios dando como resultado un aumento de las importaciones y de la inflación.

### 3.2.2 Acuerdo con el FMI

En materia de deuda externa, el 18 de junio el gobierno argentino anunció la concreción de un acuerdo con el FMI. Mediante este acuerdo, Argentina logró la liberalización de 600 mdd del paquete de 4200 millones aprobado en 1984. Asimismo, fue beneficiado por un "waiver" (perdón), a pesar de no haber cumplido con los compromisos contraídos con el FMI que en materia de gasto fiscal e inflación había asumido. Al mismo tiempo, recibió un nuevo financiamiento por 900 mdd. para pagar los atrasos de intereses (79).

Desde noviembre de 1986, el gobierno había anunciado la concreción de medidas para reducir el ritmo ascendente de la inflación. Estas medidas serían paralelas a las incorporadas en el Plan Austral. Por medio de un programa de reforma estructural, el gobierno trató de acelerar al desincorporación de organismos, empresas estatales, parastatales y la creación de un directorio de empresas verificador de la efectividad de su funcionamiento, reducción de la burocracia mediante la promoción del retiro voluntario y la fijación de un horario discontinuo para evitar el doble empleo de burócratas.

Esta política económica de reducción del aparato estatal, se enmarcó en las condiciones que había asumido Argentina frente al FMI. Estos esfuerzos se orientaron a evitar mayores obstáculos en subsiguientes negociaciones que continuaron para el refinanciamiento y captación de recursos. Pese a los esfuerzos gubernamentales en materia económica para crear un clima de confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, los acontecimientos políticos derivados de la inestabilidad militar del país desalentaron la inversión y la repatriación de divisas de argentinos ubicadas en el exterior.

Las negociaciones en materia de deuda externa se mantuvieron durante 1987. Finalmente, en julio fue acordado un memorándum de entendimiento con el FMI (80), por medio del cual Argentina se comprometía a profundizar los ajustes económicos y el avance en el proceso de privatización de empresas estatales y en general de una mayor participación del sector privado en la economía, incluidas las del área petroquímica y la eliminación de restricciones a más productos de importación. Asimismo, se otorgó un crédito por 670 mdd. para neutralizar parcialmente los efectos de la caída de las divisas provenientes de las exportaciones. Este acuerdo, además, permitió a Argentina posponer el vencimiento de capitales hasta 1992 del principal de 52 mil mdd, hasta el año 2000 (81).

La oposición política y la CGT mantuvieron el tono de sus críticas contra la política económica adoptada por Alfonsín, a la que calificaron de recesiva e impuesta por el FMI. Para intentar mediatizar la posición de la CGT, el Presidente Alfonsín había designado como Ministro del Trabajo a un político de extracción peronista. Sin embargo, la

renuencia del gobierno a aplicar aumentos de salarios que alteraran las metas fijadas de reducción de déficit público por el gobierno a exigencia del FMI imposibilitaron cualquier acuerdo favorable para las dos partes (82).

### 3.2.3 Permanencia de la crisis económica y medidas para contrarrestarla

Para el gobierno era prioritario afianzar las fuentes de financiamiento para contrarrestar los efectos inflacionarios derivados de la emisión de moneda sin respaldo. Durante el año, sin embargo, a pesar de los acuerdos logrados con la banca acreedora, no fueron suficientes los recursos para enfrentar la continuación de la baja en los precios internacionales de los productos primarios de exportación argentina. A esto se sumaron fenómenos naturales negativos como la sequía, que influyeron en el volumen de las exportaciones.

Asimismo, el déficit fiscal continuó en ascenso. La caída del volumen de las exportaciones y de los precios internacionales, privaron al gobierno de los impuestos que percibe por los derechos de exportación. El déficit continuó elevándose, en virtud de la política de gastos prevista con la promoción del retiro voluntario y la aplicación de impuestos directos no produjo los resultados esperados en la recaudación.

El gobierno se encontró de esta forma en una situación que requería de soluciones reales al problema del financiamiento. La decisión de modificar al alza los precios de los servicios públicos y de los impuestos, inevitablemente se reflejaría en una aceleración de la espiral inflacionaria. Además, una acción en ese sentido, rompería con la política de congelamiento de precios y salarios impuesta en la política económica establecida en el Plan Austral.

Finalmente se decidió por lo último. Los aumentos salariales acordados por el gobierno, desataron una aceleración de la inflación, por lo que la intención de restituir en parte el poder adquisitivo de los salarios, fue neutralizada con el aumento de los precios de los productos básicos, de los servicios públicos y la implantación de devaluaciones de la moneda de acuerdo al ritmo de la inflación. El Plan Austral quedó desarticulado, estableciéndose modificaciones que limitarían los efectos inflacionarios sobre los salarios (83).

Como se mencionó, la actitud desafiante de las organizaciones laborales en demanda de mayores aumentos y de los comerciantes renuentes a continuar una congelación de precios en forma indefinida, eliminaron la marcha de las estrategias económicas destinadas a reducir el déficit fiscal y el aumento de la recaudación para hacer frente a las obligaciones estatales más urgentes.

Para el gobierno radical, la política de concertación planteada en un pacto social significaba, en términos políticos, el ampliar su espacio de acción para la aplicación de nuevas políticas económicas. Además, en septiembre de ese año estaban programadas

elecciones para elegir gobernadores en la totalidad de las provincias del país, a excepción de la de Tierra del Fuego, así como la mitad de los diputados nacionales.

Los acuerdos logrados con la banca acreedora, vieron limitados sus resultados con la continuación de la baja de los precios internacionales de granos. Para enfrentar esta situación, el gobierno recurrió a las reservas internacionales para enfrentar los gastos estatales que permitieran continuar el proceso productivo. De esta forma, el déficit del sector público se incrementó ante la caída de la recaudación fiscal y el incremento de los gastos para enfrentar las políticas generales de seguridad social.

Los resultados electorales de septiembre de 1987, demostraron la pérdida del respaldo de la sociedad al gobierno radical. Esto generó la perspectiva de un cambio en el rumbo de la política económica pero no fue así. La disminución en la captación de divisas por exportaciones mayores a las previstas, generaron un clima de desconfianza sobre la posibilidad de nuevos congelamientos. Esto aceleró la reetiquetación preventiva de precios contra mayores controles sobre éstos.

En octubre de 1987, el gobierno decidió implantar nuevas medidas para intentar enfrentar el nuevo brote inflacionario. Se implantó la congelación de precios, salarios y servicios públicos -precedidos no obstante por alzas a éstos y del tipo de cambio-, a fin de evitar, al menos temporalmente, el proceso inflacionario (84).

Sin embargo, se seguían enfrentando los problemas estructurales como la indefinición del aparato fiscal, la política de nacionalizaciones era poco efectiva y se seguía dependiendo del endeudamiento externo y de las condiciones fluctuantes del mercado internacional de granos y carne -en la mayoría de las ocasiones negativas- para captar divisas. El gobierno debía enfrentar los gastos derivadas de los intereses de la deuda externa, donde el aparato de recaudación continuaba limitado e indefinido.

Las subsiguientes medidas para organizar el aparato fiscal, la redefinición de la participación de las provincias en los gastos públicos, la apertura de la inversión privada en empresas estatales incluyendo la desregulación del sector energético y de promoción de exportaciones, se aunaron a un mayor énfasis en la apertura de la economía al limitarse los impuestos por exportación y la flexibilización de los regímenes de importación.

Por otra parte, las negociaciones con el FMI no estuvieron exentas de obstáculos. La imposibilidad del gobierno por lograr cumplir con las metas fijadas contraídas con el Fondo, dificultaron el desembolso de los créditos pactados en acuerdos anteriores. A principios de 1988, la mejora en los precios internacionales de granos, asociada a la severa sequía observada en Estados Unidos, se tradujo en un aumento de las exportaciones argentinas en ese rubro ante la superación de fenómenos naturales adversos.

Esta coyuntura, permitió al gobierno aumentar sus reservas por la mayor captación de divisas. A esto se sumaron los atrasos en el pago de intereses de la deuda externa. Esto modificó la posición del FMI y los bancos privados acreedores, al limitar el desembolso de los créditos negociados con anterioridad con Argentina. Como ejemplo, hacia fines de 1987

sólo habían llegado al país las dos primeras cuotas del crédito contingente de 1200 mdd por concepto de compensación por caída de exportaciones. Por ello, la banca internacional se negó a continuar los desembolsos de las restantes cuotas, en virtud del incumplimiento de Argentina de los términos pactados (85).

Esta situación, privó al gobierno de los recursos contemplados en el presupuesto público. Estos recursos, eran necesarios para afrontar el aceleramiento de los gastos demandados por las provincias para la liquidación de empleados acogidos a la política de retiro voluntario, que obligó a una aceleración de la emisión de moneda por parte del Banco Central.

La política de congelamientos de precios y tarifas, gradualmente fue flexibilizada hasta su liberalización en los primeros meses de 1988. Esta liberalización estuvo acompañada de subsecuentes aumentos en los precios de los productos básicos y de las tarifas del sector público, así como de devaluaciones periódicas de la moneda.

Las perspectivas de una mejora en los precios internacionales de granos, optimizó al gobierno para captar recursos que limitaran los permanentes desequilibrios fiscales. Esta recuperación, sin embargo, no alcanzó a nivelar las anteriores disminuciones en la captación de divisas observadas en los dos años anteriores.

Esta situación que afectó el ya deteriorado nivel de vida de la población, aumentó el descontento social hacia la política económica gubernamental. La CGT promovió una serie de paros y huelgas, las cuales desembocaron en un paro general de 36 horas en enero de 1988, el cual fue acatado por gran parte de la población. A la pérdida de la capacidad de concertación del gobierno para controlar la crisis económica, se sumó la presión política de los militares, la cual se ejemplificó con un nuevo alzamiento militar el 16 de enero de ese año.

#### 3.2.4 El "Plan Primavera"

Este clima de inestabilidad política, siguió afectando a la economía argentina. El propio Presidente, apoyado por las organizaciones políticas y sociales en pro del mantenimiento del gobierno bajo las normas constitucionales, señaló el clima de escepticismo de la población sobre la política económica. La central obrera y las organizaciones urbanas y rurales, mantenían su posición contra la política económica gubernamental restrictiva. Además, el gobierno debía enfrentar el pago de intereses por concepto de deuda externa para lo cual se recurrió a la capitalización de deuda por empresas estatales, medida que era insuficiente para cubrir dichos pagos durante el año.

En este contexto, el gobierno aplicó un nuevo plan económico que aprovechara el cambio positivo observado en el mercado internacional. Por medio de lo que denominó Plan Primavera (86), el gobierno buscó aprovechar dichos cambios para enfrentar la emergencia económica planteada por el crecimiento de la inflación. El Plan incluyó la instauración del feriado bancario los primeros días de agosto de 1988. se aumentaron las



tarifas de combustibles y servicios públicos en un 30% -aumento que se mantendría fijo durante 60 días-, la devaluación del austral en 11% (ubicándose en 12 australes por un dólar) y el compromiso de los empresarios de no aumentar los precios en un porcentaje mayor a 3.5% para los meses siguientes.

El impuesto por concepto de IVA fue reducido en 3% como resultado de la desaceleración de la espiral inflacionaria y como parte del acuerdo con el sector industrial. En materia de salarios -que fueron congelados para los trabajadores del gobierno con la aplicación del Plan- se acordó la libre negociación entre trabajadores y patrones con base en la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, además del despido de más de 30 mil burócratas (<sup>87</sup>).

En materia de importaciones, sus principales aspectos se trasladaron al mercado libre, además de la eliminación de restricciones arancelarias y las exportaciones primarias se mantuvieron bajo regulación oficial y la fijación de tipo de cambio por el Banco Central. Asimismo, en materia fiscal el gobierno limitó aún más los gastos para obras públicas y gastos destinados a empresas estatales.

El Plan en cuestión, generó las protestas de la clase obrera del país. Asimismo, la oposición peronista rechazó la imposición de las medidas económicas aplicadas por medio del Plan Primavera, considerándolo como monetarista con fines electorales. La CGT, como forma de protesta, organizó paros laborales cuya realización generó el enfrentamiento de trabajadores y fuerzas policiales.

Los efectos del Plan Primavera si bien redujeron la inflación en los días posteriores a su aplicación, los problemas de liquidez por la falta de recursos seguía manifiesta. Los reclamos de la clase obrera demandaban porcentajes de aumentos muy superiores a los que el gobierno estaba dispuesto a otorgar. Asimismo, esta falta de liquidez se aceleró con el atraso en el pago de intereses de la deuda externa en momentos que se proyectaba un aumento del superávit en la balanza comercial. Estos atrasos, que para finales de año oscilaban en 2000 millones de dólares, obstaculizaron de nueva cuenta los desembolsos de créditos acordados con los bancos acreedores, reiniciados en septiembre.

Para finales de año, los atrasos continuaron acumulándose y las perspectivas favorables para el comercio de granos se volvieron negativas para 1989. La coyuntura política internacional como el cambio de administración en Estados Unidos y el gradual aumento en la efervescencia política argentina por las elecciones programadas para mayo de 1989, limitaron el margen de maniobra del gobierno en materia de política económica. Esta situación, dio margen al aceleramiento de la devaluación de la moneda al finalizar el año..

#### 3.2.4.1 Flexibilización de las medidas restrictivas del Plan

La presión social y castrense obligó al gobierno a flexibilizar su política salarial. A los trabajadores se les otorgaron aumentos del entre 6 y 8% (<sup>88</sup>). Por otro lado, el nuevo

alzamiento militar escenificado en el país, obligó al gobierno a conceder aumentos salariales a los militares del orden del 20% y la entrega de una bonificación especial de 1500 Australes (95 dólares) <sup>(89)</sup>.

Estos aumentos significaron el rompimiento de los topes salariales impuestos en el Plan Primavera. El clima de escepticismo generalizado por la coyuntura política interna que favoreció el aumento de la inflación, aceleró la demanda de divisas (dólares) que el Banco Central no podía sostener sin recurrir a las reservas internacionales. Al mismo tiempo, las trabas en las negociaciones con la banca acreedora dieron paso al establecimiento de una política monetaria más restrictiva en la demanda de divisas.

Los aumentos a los precios de los combustibles y otros servicios públicos, considerados de ajuste al Plan Primavera, se adoptaron para contener el alza del tipo de cambio. Asimismo se implantó un feriado bancario en la primera semana de febrero y se estableció la creación de tres mercados cambiarios -comercial, especial y libre -primer ajuste monetario de dicho Plan-, una devaluación de la moneda (2.5%) y el retiro del Estado del mercado de divisas que regulaba indirectamente a través de la venta de recursos por medio de licitaciones. La intención era evitar una mayor disminución de las reservas internacionales ya que el gobierno había destinado 500 mdd al mercado para sostener el valor de la moneda <sup>(90)</sup>.

Esta pérdida de recursos continuó en ascenso. La negativa de la banca acreedora a otorgar nuevos créditos a causa de los atrasos en el pago de intereses y por el incumplimiento de los compromisos contraídos por Argentina en materia fiscal, descartó la posibilidad de contar con nuevos flujos hasta la toma de posesión del nuevo gobierno.

En un clima de plena agitación preelectoral, el gobierno recibió las críticas a la política económica por parte del candidato radical -partido político de Alfonsín-. El candidato presidencial radical Eduardo Angeloz -en un obvio intento por desligarse del fracaso en política económica del gobierno alfonsinista que afectara la captación de votos en su favor- solicitó la renuncia del equipo económico de Alfonsín.

Los efectos de las críticas generalizadas, se tradujeron en la renuncia del Ministro de Economía Juan V. Sourrouille y su equipo de trabajo -promotor del Plan Austral-. Fue sustituido en el cargo por el Presidente de la Cámara de Diputados Juan Carlos Pugliese de 74 años, quien anteriormente ya se había desempeñado en ese cargo.

### 3.2.5 Desarticulación del Plan Primavera y adopción de nuevas políticas económicas

Al asumir la dirección del Ministerio de Economía en abril, el nuevo equipo económico, concientizado de la agudizada crisis económica, anunció nuevas medidas económicas que eliminaron la estrategia contemplada en el Plan primavera. Las nuevas

medidas (<sup>91</sup>) se centraron en contener el clima de desconcierto imperante en la sociedad y reflejada en la economía ante la proximidad de las elecciones generales.

Al contrario de otras ocasiones, estas medidas no contemplaron aumentos salariales compensatorios para los trabajadores. La inflación en marcado ascenso, continuó afectando el poder adquisitivo de los trabajadores. La continuación de los ajustes al tipo de cambio y de los aumentos de hasta 40% en combustibles y servicios públicos, desataron una espiral inflacionaria difícil de controlar (<sup>92</sup>). En un marco de enfrentamiento entre los candidatos de los diferentes partidos políticos, de escalada incontenible al alza no autorizada de precios y de incrementos oficiales a los combustibles y servicios públicos, las elecciones presidenciales dieron el triunfo a la oposición peronista.

La decisión de Alfonsín de alejarse del cargo en forma anticipada y la percepción de la que las nuevas autoridades elaboraban un plan económico con la ayuda de emporios industriales, en este caso de la empresa Bunge and Born (<sup>93</sup>), atemperaron el estado crítico de la economía que se dirigía al colapso (<sup>94</sup>).

Previamente Alfonsín, en un último intento para cumplir con su mandato de seis años al conocer los resultados de la jornada electoral, anunció el establecimiento de una "economía de guerra" para enfrentar la aguda crisis económica. En mayo, el gabinete de gobierno presentó en pleno su renuncia y el Ministerio de Economía quedó en manos del Diputado radical Jesús Rodríguez.

De acuerdo con esta decisión, se adoptó el establecimiento de un tipo de cambio único controlado, la cancelación de obras públicas en proyecto y suspensión y reorientación de las existentes, control de precios, retención del 20 y 30% del valor de las exportaciones agropecuarias e industriales, así como la privatización de la radio y televisión de propiedad estatal. A estas medidas se acompañaron otras de compensación, como la reactivación de subsidios a desempleados y jubilados, entre otras.

Sin embargo, estas medidas fueron ignoradas por la población. En varias provincias del interior, los enfrentamientos de la población con las fuerzas de seguridad pública a causa de los saqueos continuaron. Esto obligó a la implantación del estado de sitio a partir de junio para tratar de controlar un estallido social de mayores dimensiones (<sup>95</sup>).

El relevo presidencial, estuvo marcado por un contexto de caos económico sin precedente. Los precios registraban aumentos de hasta 300% debido a la desenfrenada reetiquetación -como medida preventiva de los comerciantes a eventuales congelaciones de éstos por las nuevas autoridades económicas-, racionamiento de la gasolina y de especulación generalizada. Las exigencias de aumentos salariales continuaban acentuándose, trabajadores de empresas estatales y privadas exigían aumentos mediante la paralización de sus labores.

Este marcó favoreció el repunte de la inflación de 114.5% a principios de junio -en mayo se situó en 78.5% y los últimos doce meses representó 1472%-, y unas reservas internacionales calculadas en menos de 200 mdd (<sup>96</sup>). En materia de deuda externa, el país enfrentaba atrasos desde abril de 1988 que suspendió unilateralmente su pago, calculados en 3000 mdd (<sup>97</sup>).

El 9 de julio de 1989 Alfonsín entregaba el cargo a Carlos Menem: el peronismo asumía de nueva cuenta el poder. El balance de Alfonsín al frente del gobierno en materia económica no era por mucho satisfactoria. Se relegaba de esta forma a un nuevo gobierno la tarea de solucionar los graves desequilibrios económicos del país en un marco generalizado de escepticismo y de enfrentamiento. Antes de asumir el poder, Menem advertía a la población que su política económica sería signada por el sacrificio y ajustes severos y costosos para superar la situación económica.

La designación de tradicionales opositores a la tarea de reconstrucción económica, generó el rechazo del peronismo tradicional. Aún antes de asumir el poder, Menem estaba consciente de la imposibilidad de adoptar el modelo económico sostenido en el ideario tradicional de la doctrina peronista basado en el nacionalismo económico. Sus primeras medidas y acciones apuntaron a todo lo contrario: un peronismo renovador sin ideología peronista tradicional.

### 3.3 Política exterior argentina

Tradicionalmente, la política exterior de la República Argentina gira en torno al respeto a los principios de soberanía, seguridad nacional, reconocimiento a la vigencia del derecho internacional y desarrollo económico en sus vínculos con el exterior. Sin embargo, estos principios han estado marcados por el carácter individualista y aislacionista mantenida por este país hacia su entorno geográfico, en virtud de su desarrollo económico y poblacional.

En términos generales, varios factores, internos y externos, han influido en la conformación de la política exterior de la Argentina. Desde antes de su emancipación de la corona española acaecida en 1810 y consolidada en 1816, los ingleses intentaron controlar la región del Río de la Plata en dos ocasiones -1806-1808-. Ambas intervenciones contaron con la resistencia armada de las milicias criollas, a lo que posteriormente se bautizó como la "Reconquista", constituyó un primer ejemplo de patriotismo y resistencia a una nueva dominación extranjera directa.<sup>(98)</sup>

La decadencia del imperio español, para la Argentina significó la insatisfacción de las necesidades comerciales de la colonia. Esta coyuntura fue un elemento que motivó la lucha por la emancipación del colonaje español -ya iniciada en otras colonias americanas- y, lograda ésta, la búsqueda de opciones al comercio.

Desde su nacimiento como nación independiente, la lucha interna entre diferentes facciones que sostenían posiciones divergentes en cuanto al modelo político que debía regir al país, dio paso a décadas de inestabilidad. Este enfrentamiento se reflejó igualmente en su comportamiento hacia el exterior. Con la preminencia de la tendencia hacia el modelo federalista representado por el caudillo Juan Manuel de Rosas, la política exterior se basó en la definición de las fronteras y la defensa nacionales contra influencias externas.

Por su parte, los defensores del modelo centralista, con la ayuda del exterior lograron eliminar del poder a los federalistas. Este hecho, marcó un cambio en la instrumentación de una política exterior cuyo objetivo primordial fue lograr la inclusión de la Argentina al comercio internacional. Ello, como condición necesaria para acceder al crecimiento económico con base en una economía liberal basada en la exportación.

El poderío naval británico marcó la sustitución de España por Inglaterra como principal factor externo para el desarrollo económico de la Argentina. La masiva inmigración, básicamente europea, fomentada por los sucesivos gobiernos y la eliminación sistemática de las tribus indígenas, gradualmente definieron el comportamiento proeuropeo del país. Este comportamiento abarcó desde la asimilación de la cultura anglosajona hasta la arquitectura del país, convirtiendo a Argentina al país más europeo de América Latina.

Inglaterra se convirtió en el mercado más importante para los productos primarios de exportación argentina, principalmente carne y granos. En contraparte, el capital europeo, en mayor medida británico, se destinó a crear la infraestructura necesaria para

aprovechar y explotar las vastas regiones cultivables y pastizales de la Argentina para destinarlos al abastecimiento de los mercados europeos.

Este desarrollo basado en la exportación, poco a poco ubicó a Argentina en la prosperidad económica. Este modelo económico, no obstante, dependía de la exportación de sus productos a Europa y a satisfacer las crecientes necesidades de materias primas por parte de Inglaterra. Esta situación, dio paso al surgimiento de una economía moldeada a las necesidades británicas, que al mismo tiempo mantenía importantes inversiones dentro de la Argentina para mantener la estructura de exportación -ferrocarriles y buques que transportaban los productos de la región de las Pampas hacia los Puertos, pertenecían a inversionistas británicos-.

El acelerado desarrollo económico de la nación sudamericana, moldeó igualmente su comportamiento con el exterior. Su política internacional se basaba en la búsqueda de la ampliación de los mercados de exportación de sus productos a precios que ofrecieran la mayor ventaja. Con el avance de la influencia norteamericana y sus intentos por organizar las primeras organizaciones panamericanas, chocaron con la renuencia argentina de evitar alinearse a los Estados Unidos.

La proclamación de la denominada Doctrina Monroe por parte del gobierno norteamericano y sus posteriores intentos por englobar al Continente dentro de su área de influencia, chocaron con la posición argentina de mantener una autonomía en su comportamiento internacional de acuerdo a sus intereses. Su posición estaba reforzada por el desarrollo y la independencia económica observada en el país para adoptar una política de amistad, independencia y respeto a las normas establecidas en el comercio internacional, a lo que se sumó la mínima influencia de Estados Unidos en su desarrollo histórico.

La independencia económica que gozaba Argentina a principios de siglo, le permitieron adoptar una política exterior autónoma, la cual solo variaba por la estancia en el gobierno de políticos que mostraban sus preferencias por algún país europeo. Al mismo tiempo, la política exterior Argentina hacia sus vecinos se dirigía a lograr el liderazgo en el Cono Sur, postura que le valió la rivalidad con Brasil que perseguía objetivos similares. La postura hacia Estados Unidos, se basó en el establecimiento de vínculos, pero sin caer en la subordinación o la alineación incondicional.

La autonomía argentina en la formulación de su política exterior, estaba demostrada por la preferencia en el establecimiento de vínculos con los países europeos y su antipanamericanismo. Para los argentinos lo mejor sólo podía considerarse como bueno. En este sentido, la tendencia a estrechar vínculos con algún país europeo dependía de los gobernantes en turno, preferencia que oscilaba entre Inglaterra y Alemania hasta las primeras décadas del siglo XX.

La existencia de disputas territoriales con los vecinos, fomentaron los esfuerzos por acrecentar las relaciones militares con Alemania, uno de los países más avanzados en materia militar a principios de siglo. A ésta se compraban armas y se enviaban oficiales alemanes e instructores a las nuevas escuelas militares para entrenar a los nuevos cuadros

castrenses argentinos. Esta asimilación de la tradición militar alemana, influyó en la formación de facciones germanófilas dentro de las filas militares argentinas.

En este sentido, no solo Argentina inició una política de rearme. Junto con Chile y Brasil, comenzaron a adoptar un actitud de rivalidad observada en una carrera armamentista a principios de siglo, como ejemplo de emulación de las naciones europeas. La profesionalización y modernización del aparato militar, eran considerados como factores de civilización.

La política exterior argentina, demostraba su europeísmo. Esta se basaba en el respeto a la letra y espíritu del derecho internacional, el moralismo, y la firme convicción de que el destino de la nación se encontraba vinculada a privilegiar sus relaciones con Europa que con América Latina. Sin embargo, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial modificó sustancialmente el supuesto estado de preferencia británica para con la Argentina (<sup>99</sup>). A pesar de esto, Argentina mantuvo su comercio con los aliados, lo cual se tradujo en una nueva prosperidad económica.

El llamado de Estados Unidos a defender la democracia mundial dirigido a todos los países del Continente, a causa de su inclusión en el conflicto, reafirmó la negativa argentina a alinearse a la política norteamericana, bajo dicha justificación. Al contrario y además de su negativa a sumarse a los aliados, Argentina adoptó una posición de impulsor de la creación de un mercado latinoamericano, la formación de una Liga de países americanos neutrales y la divergencia en cuanto al reconocimiento o no de algún gobierno de la región.

Las relaciones argentino-norteamericanas, giraron desde esa época en torno al enfrentamiento motivada por la diferente visión a la problemática de la región. Los intereses de ambos países, en muchas de las ocasiones eran contradictorios y sin coincidencias. Como resultado, el antipanamericanismo argentino enfrentó a ambos países, a pesar de sostener principios de conducta internacional similares en cuanto a sus conceptos de ética y moralidad.

Asimismo, el extraordinario desarrollo económico argentino, le permitió adoptar una postura de rechazo a los esfuerzos panamericanistas de los gobiernos norteamericanos, ya que no estaban dispuestos a comprometer su soberanía dentro de una organización hemisférica que contenía normas de cooperación impuestas por un gobierno al que consideraban dominante y antagónico.

En la década de los veinte Estados Unidos aplicó restricciones sanitarias a las exportaciones de carne argentina. Las consecuencias económicas, si bien no fueron considerables, evidenciaron la fragilidad del modelo económico de exportación argentino basado en la política de preservación de sus mercados externos.

La recesión mundial de 1929-1930, rompió el esquema de complementación económica mantenida con Gran Bretaña. Esta, como principal socio comercial, al suspender la importación de productos primarios argentinos y cesar el flujo de capitales

necesarios para el mantenimiento de la plataforma de exportación argentina, significó la pérdida de sus compradores tradicionales y la entrada gradual a un estancamiento económico.

En este marco, a partir de esa década, el surgimiento del ejército como opción política modificó la estructura política tradicional de la Argentina. Las facciones del ejército mostraban sus tendencias hacia Alemania y Gran Bretaña, respectivamente. La llegada del General Agustín P. Justo al poder en 1931 dirigió sus esfuerzos por mantener el mercado inglés a los productos argentinos.

En efecto, a raíz de esta crisis, el imperio británico impuso barreras arancelarias a las importaciones de carne argentina. En la Conferencia de Ottawa de 1932, Gran Bretaña anunció que realizaría sus compras en los países del área inglesa como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La reacción argentina a esta decisión fue el envío de una delegación encabezada por el Vicepresidente Julio A. Roca, la cual negoció la concreción del denominado Tratado Roca-Runcimann. <sup>(100)</sup>

La negociación de dicho Tratado, mostró la vulnerabilidad económica argentina frente a las circunstancias internacionales. <sup>(101)</sup> Esta situación, igualmente modificó su política exterior. Los gobiernos conservadores en la década de los treinta privilegiaron sus relaciones con la Gran Bretaña. Hasta esta década -conocida como la "década infame", -Argentina se mantuvo entre los diez primeros países del mundo por su desarrollo económico.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial significó un nuevo auge económico. Al adoptar la política de neutralidad, Argentina aprovechó las coyunturas para convertirse en uno de los principales proveedores de materias primas a las partes en conflicto. Como resultado, en esta etapa Gran Bretaña dependió de las exportaciones de carne argentina para satisfacer las necesidades internas.

Sin embargo, la presión norteamericana para que Argentina se uniera a los aliados surtió efecto. Cabe señalar que la política de neutralidad por parte de Argentina, se consideró la opción que evitaba enfrentamiento entre los sectores simpatizantes del Eje -cuyo pilar era Alemania- y de los que optaban por apoyar a la fuerza aliada.

A partir de la segunda mitad de la década de los 40, la política exterior argentina cambió radicalmente. La nueva burocracia militar, encabezada por Juan Domingo Perón, apoyada por el estado saludable de la economía, formuló una política exterior denominada la "Tercera Posición" en los asuntos internacionales. Este concepto fue desarrollado para afianzar una independencia frente a la ideología -capitalista y comunista- abanderada por los dos bloques de poder surgidos a partir de la década de 1950.

Asimismo, en esta época Argentina se unió a la Organización de Estados Americanos <sup>(102)</sup> y en 1945 suscribió la resolución denominada "Asistencia Recíproca y Solidaridad Americana" mejor conocida como Acta de Chapultepec <sup>(103)</sup>, por medio de la



cual los Estados signatarios se obligaron a consultar entre sí y a tomar las medidas colectivas de defensa, incluyendo el uso de la fuerza militar en casos de amenazas o actos de agresión contra cualquiera de ellos.

Esta Acta, incluyó en sus resoluciones la concreción del acuerdo conocido oficialmente como Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) -instrumento que formalizó las cuestiones de seguridad hemisférica mutua- impulsado por Estados Unidos en 1947. Esta política, estuvo orientada a mantener un balance de poder con su vecino geográfico más importante, Brasil.

La política exterior argentina, gradualmente viró a un acercamiento con Estados Unidos. El carácter de potencia hegemónica continental y la devastación de las economías europeas a causa de la guerra y la posterior formación de la Comunidad Económica Europea surgieron como factores importantes para un acercamiento. No obstante, Argentina seguía manteniendo sus vínculos comerciales con la Unión Soviética, la cual era un importante comprador de materias primas argentinas.

Entre 1950 y 1970, personal militar argentino fue entrenado en escuelas militares norteamericanas, en el marco de los Programas de Ayuda Militar establecidos por el gobierno de Estados Unidos. Este acercamiento, tenía como objetivo evitar una proliferación de los gobiernos comunistas en la región, estrategia profundizada a raíz del triunfo de la revolución cubana y su posterior definición como socialista. En Argentina, la continua intervención de los militares en el poder, benefició esta política de contención, aunque ésta no estuvo exenta de diferencias.<sup>(104)</sup>

Estas diferencias en el plano interno, se ejemplifican con la negativa del gobierno militar encabezado por el Presidente Frondizi para romper relaciones diplomáticas con Cuba, promovida por Estados Unidos en el marco de la OEA. Sin embargo, la presión norteamericana y la de sectores militares argentinos que pugnaban por la ruptura, lograron la determinación de romper las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano.<sup>(105)</sup>

Para Estados Unidos la necesidad de incorporar a Argentina dentro de sus aliados latinoamericanos, estribaba en su preocupación por el avance de la tecnología nuclear en la Argentina. Esta preocupación se ha mantenido vigente ante la negativa argentina de ratificar el tratado de Tlatelolco -que pugna por la conformación de América Latina como zona desnuclearizada-, así como de no renunciar a realizar explosiones nucleares con fines pacíficos.<sup>(106)</sup>

Sin embargo, esta autonomía en la formulación de la política exterior poco a poco se fue reduciendo. La inestabilidad política afectó la marcha de la economía, la cual se enfiló a la recesión cada vez más aguda. Durante los gobiernos peronistas, el marcado carácter antinorteamericano de la política exterior a partir de 1946, fue un factor de alejamiento entre ambos países y generador de fricciones.

A partir de 1976, con el golpe de Estado llevado a cabo por los militares que derrocó al peronismo, en principio la afinidad al concepto anticomunista observado en ambos países, mantuvo en un plano de fluidez las relaciones bilaterales. Sin embargo, las subsecuentes acciones militares y policiales para combatir a los movimientos guerrilleros que actuaban en el país, modificaron este marco. Esta situación, se debió a la política exterior adoptada por el Presidente norteamericano James Carter basada en el énfasis a las virtudes morales de la democracia en sus relaciones con otras naciones; postura que fue identificada como una férrea defensa de los derechos humanos (107).

En el caso de Argentina, esta política afectó seriamente las relaciones bilaterales. La denuncia de organizaciones internacionales y locales respecto a las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen militar argentino y la crítica a dichas organizaciones por parte del segundo, crearon un clima de tensión entre ambos países. Como resultado, Carter adoptó una política de sanciones hacia Argentina al prohibir la asistencia militar y la suspensión de la venta de armas (108).

La llegada a la presidencia norteamericana de Ronald Reagan, las relaciones bilaterales volvieron a la normalidad. Reagan como asiduo defensor de la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual tenía una considerable influencia en el cuerpo doctrinario de las fuerzas armadas argentinas, eliminó las restricciones militares impuestas por su predecesor a los regímenes militares anticomunistas de la región.

Esta normalización, posibilitó la cooperación de los militares argentinos con sus homólogos norteamericanos en el combate a las guerrillas izquierdistas en Centroamérica, basados en la experiencia lograda en la supresión de los movimientos guerrilleros en Argentina. Asimismo, la sobrestimación a esta nuevo acercamiento fue uno de los factores para que el régimen militar decidiera invadir las Islas Malvinas en 1982.

La respuesta militar británica y la postura de apoyo al gobierno de la Gran Bretaña por parte de Estados Unidos, fue un factor determinante- tanto en la caída del régimen militar y la vuelta al poder de los civiles, como del replanteamiento de la política exterior hacia Europa, Estados Unidos y una asimilación de su carácter de Estado latinoamericano alejado de los centros de poder multilateral, económicos y militares como la CE y la OTAN, respectivamente.

Al asumir la presidencia en Argentina, Raúl Alfonsín y su equipo delinearon una política exterior acorde al nuevo marco regional e internacional derivado de la Guerra de las Malvinas. Para Argentina el acercamiento con Estados Unidos se realizaría, en principio, en forma independiente, ante la necesidad de mantener a la Unión Soviética (hoy CEI), como uno de sus principales compradores de granos y carnes aún durante el régimen militar.

En efecto, en los primeros meses de Alfonsín en la presidencia, las relaciones con Estados Unidos, en general mostraban un distanciamiento derivado del apoyo norteamericano otorgado a la Gran Bretaña durante el capítulo de las Malvinas. Estas

relaciones giraron entonces, en la necesidad del apoyo económico por parte de Estados Unidos para el nuevo régimen civil cuya estabilidad en el corto plazo dependía de la resolución de los graves problemas económicos heredados del régimen militar predecesor (109).

La actitud latinoamericana de apoyo a las reclamaciones de soberanía por parte de Argentina sobre las Islas Malvinas, si bien dicho apoyo no pasó de pronunciamientos a favor en el marco de la OEA, modificó la política exterior del país sudamericano frente a sus vecinos. La adopción de esta actitud por parte de los países latinoamericanos, sólo fue el reflejo de la intención promovida por los gobiernos argentinos a ser considerados como europeos en los círculos diplomáticos latinoamericanos.

No obstante, cabe señalar que esta modificación en la conducta internacional argentina hacia la región obedece, podríamos decir, a la rectificación en su visión hacia los países europeos y Estados Unidos por los motivos ya señalados. En este sentido, esta reorientación de la política exterior argentina a raíz de las secuelas generadas a causa de la guerra de las Malvinas, obedece a una nueva actitud pragmática y como una salida imperativa al nuevo contexto internacional.

En este marco, Alfonsín redefinió la política exterior argentina hacia una latinoamericanización. Acorde con esta postura, inició acciones para dirimir controversias territoriales mantenidas con sus vecinos y la renovación de los vínculos económicos y políticos con los países del Continente (110), y en el ámbito internacional, por una mayor promoción de su presencia en el Movimiento No-alineado.

### 3.3.1 El Canal de Beagle

Durante 1984 la cuestión del Canal de Beagle ocupó un lugar prioritario a resolver por el Gobierno de Alfonsín. Esta disputa con Chile por la posesión de tres Islas en el Canal de Beagle, orilló a ambos países a entablar una inminente guerra en 1978 (111). Ambos países, dominados por regímenes militares en esos momentos, aceptaron la mediación del jerarca de la Iglesia Católica, y las posteriores negociaciones condujeron a un arreglo negociado al conflicto.

En noviembre de 1984, ambas partes signaron un tratado de paz y amistad, mediante el cual se otorgó la posesión de las Islas a Chile en tanto Argentina conservaba el acceso oriental al estrecho de Magallanes. Asimismo, Chile obtuvo el paso al Atlántico pero sin capacidad jurídica sobre dicho paso. El tratado fue sometido a referéndum popular en Argentina, el cual obtuvo un significativo porcentaje de apoyo que facilitara su ratificación en mayo de 1985.

### 3.3.2 Islas Malvinas

Desde sus inicios en el poder, el gobierno argentino inició una ofensiva diplomática tendiente a conseguir el apoyo de la comunidad internacional a los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y Sandwich del Sur, en poder de la Gran Bretaña.<sup>(112)</sup> En este sentido, Argentina definió su posición negociadora en torno a la cuestión de la soberanía, la cual fue rechazada desde un principio por el gobierno británico.

Gran Bretaña se negó a iniciar conversaciones con los argentinos sobre la base de la soberanía de las Islas en disputa. Esta centró su posición en el sentido de que cualquier inicio de negociaciones debía estar precedido por la declaración argentina de declarar el cese de hostilidades, lo cual no había sucedido, además de aceptar las condiciones del país europeo en cuanto a la ocupación indefinida de dichas islas.

En suma, la cuestión del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países estuvo condicionado a la negociación por separado del restablecimiento de vínculos diplomáticos y la cuestión de las Malvinas. En este tono se desarrollaron las negociaciones mantenidas entre ambos países durante el gobierno radical, que lejos de concretar un acuerdo este problema fue un permanente generador de incidentes<sup>(113)</sup>.

### 3.3.3 Ambito regional

La política exterior argentina en esta etapa, priorizó la promoción de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países de la región, así como con países extracontinentales. Se profundizaron los lazos económicos con Brasil, en áreas como la tecnología nuclear -área en que Argentina posee una de las más avanzadas en América Latina junto con Brasil-<sup>(114)</sup>, potencial hidroeléctrico, cooperación comercial entre otros. Este acercamiento se tradujo en un importante impulso a la integración subregional en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)<sup>(115)</sup>, que agrupa a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

#### 3.3.3.1 Centroamérica

Respecto a Centroamérica, Alfonsín redefinió el papel de la presencia argentina en esa región. En este sentido, el gobierno radical se sumó a los esfuerzos de pacificación emprendidos por el Grupo Contadora para evitar, en esos momentos, una generalización del conflicto centroamericano. De esta forma, en julio de 1985 Argentina se unió junto con Brasil, Uruguay y Perú a lo que se denominó Grupo de Apoyo a Contadora, para revitalizar al proceso de pacificación en Centroamérica.

Por medio de este grupo, Argentina mantuvo una activa participación en el abordamiento de la problemática regional. La creación posterior del grupo de los Ocho y la

siguiente ampliación de sus miembros (Grupo de Río), revitalizó los esfuerzos de cooperación regional, alentada por el regreso de regímenes civiles en la mayoría de los países de América Latina. Este nuevo contexto regional, alimentó el discurso político a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, los cuales indefectiblemente se centrarían en destacar que este nuevo contexto democrático, era un factor determinante para lograr la plena integración de los países latinoamericanos.

Sin embargo, este optimismo integracionista, estaba caracterizado más por la esperanza más que por la convicción. Cabe señalar, que la llegada del régimen civil a la Argentina fue un factor determinante para la acentuación de las presiones internas en otros países vecinos como Chile y Uruguay, en pro del retorno a la constitucionalidad.

### 3.3.4 Ambito extracontinental

En el plano extracontinental, Argentina impulsó su presencia en el Movimiento de los No-alineados, lo cual enfatizó el carácter independiente que el nuevo gobierno quería imprimir a su política exterior. Asimismo, Alfonsín durante su mandato realizó numerosas giras al exterior las cuales tenían como objetivo el restablecimiento de la presencia argentina en el mundo y el establecer lazos de cooperación económica que sirvieran para apoyar la recuperación económica de su país. Entre estas destacan las relaciones con España, a la que se considera como el puente latinoamericano hacia la Europa unificada.

En materia de política militar internacional, Argentina junto con México, Grecia, India, Suecia y un ex-presidente de Tanzania, conformaron en febrero de 1985, el denominado Grupo de los Seis. Este grupo, basa su actuación en el fortalecimiento de la lucha en contra del armamentismo mundial, y su llamado es pro de la eliminación de ensayos nucleares con fines bélicos para reorientarlos al uso de la energía nuclear en favor del desarrollo mundial.

Si bien en el plano económico interno el régimen de Raúl Alfonsín no fue del todo satisfactorio, en el plano de la política exterior se pueden avances en la reinserción argentina al escenario internacional. El cambio de matiz de la política exterior al volverse más latinoamericanista, le permitió incorporarse plenamente a los esfuerzos para abordar la diversa problemática de la región y, por ende, participar activamente en los foros regionales y subregionales ya establecidos y que se establecieron para ese objetivo.

<sup>1</sup> Raúl Alfonsín, nació en el pueblo de Chascomús en la Provincia de Buenos Aires el 13 de marzo de 1926. Descendiente de una familia paterna de origen gallego y de raigambre republicana, se educó en el Liceo Militar de San Martín, secundaria militarizada, y posteriormente estudió leyes en la Universidad Nacional de La Plata. Sus primeras vinculaciones con la política se dan al fundar en su pueblo el periódico El Imparcial. Su incorporación a la UCR fue motivada por el carácter populista del radicalismo y su oposición a la poderosa clase terrateniente de Argentina. La UCR en sus inicios era el portador de los descendientes de millones de inmigrantes que arribaron al país durante el siglo XIX y que mediante una reforma electoral obtuvieron el derecho de participar en la política. A los 24 años es designado concejal y presidente del comité de la UCR en Chascomús. En 1953 es encarcelado por el gobierno peronista debido a sus actividades políticas. En 1958 fue elegido diputado del Congreso Provincial de Buenos Aires y para el Congreso Nacional en 1963, ostentando el cargo de diputado de ese año hasta 1966 y nuevamente de 1973 a 1976. Fundador del ala radicalista Renovación y Cambio en 1972, se vio obligado a suspender abiertamente sus actividades políticas tras el golpe militar de 1976. Secretario del Partido Radical es designado candidato presidencial para las elecciones de octubre de 1983. Altaf Gauhar; Entrevista con Raúl Alfonsín. Third World Quarterly en Contextos (ya desaparecida), año 3 no. 53, junio de 1985. p. 13

<sup>2</sup> Graham-Yoll, Andrew; 100 años cien días. South de Inglaterra en Contextos (ya desaparecida) pag. 65, marzo de 1984.

<sup>3</sup> Cuando la economía argentina cayó en la ruina, causada en gran parte por el despilfarro, la corrupción y la compra de armamentos y se orilló a casi una guerra con Chile por diferendos limítrofes y se perdió una guerra contra Gran Bretaña, la clase media hasta ese momento descubrió sus tendencias democráticas. *idem* p. 66.

<sup>4</sup> En efecto, una de las primeras acciones del gobierno radical en materia laboral, fue la promoción de una ley de reordenamiento sindical, objetado por los líderes peronistas, que permitiera la supervisión de elecciones democráticas al interior de los sindicatos obreros con la participación de facciones minoritarias en las decisiones gremiales. El objetivo era atraerse el apoyo de la clase trabajadora peronista, ya que esa ley pretendía eliminar la fuerza de los líderes obreros peronistas. Por ello éstos, con la ayuda de otros partidos minoritarios lograron bloquear la iniciativa del nuevo gobierno. Probada la capacidad opositora de los peronistas, Alfonsín instó dentro de su discurso político a la unidad y concertación de todos los argentinos. Wynia, Gary W.; La democracia en Argentina. Current History. E.U. en Contextos (ya desaparecida), no. 53, 15 de junio de 1985. p-3

<sup>5</sup> Un ejemplo de esta actitud de conciliación, lo constituyó al asistencia como invitada especial de Isabel Martínez Vda. de Perón, hasta ese momento exiliada en España, a la ascensión de Alfonsín a la presidencia. Este la recibió en el aeropuerto quien, a su vez, conminó a los peronistas a colaborar con el nuevo gobierno civil. Contextos. Quartim, Joao; La Hora del Pueblo. Afrique Asie en Contextos (ya desaparecida). No. 24, marzo de 1984, p- 70

<sup>6</sup> En principio unos 50 generales la mayoría de Infantería fueron jubilados en forma prematura. Esta decisión tenía como objetivo eliminar la influencia de las fuerzas armadas que se habían constituido como un estado dentro del Estado, limitar su poder de intervención política para dedicarse a tareas de defensa nacional bajo el control del poder Ejecutivo. Para garantizar este control fueron previstas tres medidas: un civil, Raúl Borrás fue designado Ministro de la Defensa; tres secretarios igualmente civiles, uno para cada rama del ejército, directamente subordinados al Ministerio de Defensa, se consideraron como la garantía en el enlace entre los Estados mayores y el gobierno; Asimismo, el Servicio de Espionaje Estatal (SIDE) fue confiado a un civil. Estas acciones se aunaron al establecimiento de los juicios sumarios en contra de los militares implicados en la violación de derechos humanos y de líderes guerrilleros apresados. Contextos. 26 marzo de 1984. Joao Quartim; La hora del pueblo. *idem* p-69

<sup>7</sup> Para un estudio detallado del origen y evolución de los Montoneros y el ERP, véase Guillespic, Richard; Soldados de Perón: los Montoneros.

<sup>8</sup> El arresto del Expresidente Reynaldo Bignone, integrante de la última Junta Militar, demostró el impulso de Alfonsín por esclarecer las múltiples desapariciones y asesinatos de argentinos durante la dictadura militar. Según datos obtenidos en las primeras investigaciones al respecto, en enero de 1984 se hallaron los cuerpos de 500 personas que estaban desaparecidas en el cementerio municipal de La Plata, jurisdicción de Buenos Aires. De esta cifra 482 cadáveres no identificados, 229 habían muerto a causa de balazos en la cabeza, nueve por estrangulación, 19 por calcinación, 28 por conmoción, 28 de hemorragia, 106 por paro cardíaco y uno en alguna explosión.\_\_\_\_. El día de rendir cuentas Contextos (ya desaparecida) no. 24. Marzo de 1984, p-67.

<sup>9</sup> León Manríquez, José Luis; El Proceso de Reorganización Nacional y los derechos humanos en Argentina. Cuadernos del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED), no. 39, noviembre de 1988 p-7-12

<sup>10</sup> Montserrat, Marcelo; Democracia y Fuerzas Armadas en la Argentina. Ponencia presentada al Seminario Internacional "Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica" organizado por las Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), Quito, Ecuador. 4-6 de julio de 1988, pp- 30 a 46

<sup>11</sup> Esta facultad otorgada a los tribunales militares contó con la desaprobación de los sectores defensores de los derechos humanos. Estos juicios, formaron parte de una estrategia política por la cual Alfonsín intentó democratizar a las fuerzas armadas con objeto de evitar nuevos golpes militares. Los abusos cometidos durante la llamada "guerra sucia" fueron catalogados como ilegales, dando paso al procesamiento de oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, este Consejo solo enjuició al General Jorge Videla -primer presidente después del golpe de 1976-. Graham-Yooll, Andrew; 100 días 100 años... *op. cit.* p-66

<sup>12</sup> El Consejo Supremo de las fuerzas armadas, aludía que cualquier oficial sujeto a investigación podía comprobar que había actuado en acatamiento de ordenes superiores, sería exonerado de cualquier cargo, siempre y cuando no hubiera cometido actos extremadamente duros, términos que la ley argentina no contemplaba. Asimismo, el consejo Supremo si bien mantuvo bajo su responsabilidad las averiguaciones sobre violaciones, deliberadamente retrasaron los enjuiciamientos. contextos. Wynia, Gary G; La democracia en Argentina... *op. cit.* p-6

<sup>13</sup> En el caso de los oficiales Ramón Camps, General retirado y el Ex-jefe de la policía nacional de la Provincia de Buenos Aires Guillermo Suarez Masón -detenido en Estados Unidos para su extradición-, esta dilación se prolongó hasta mayo de 1986. Camps se encontraba detenido desde enero de 1984 y su juicio fue reiniciado por tribunales civiles en junio de 1986 ante la renuncia de los tribunales castrenses de hacerse cargo de los juicios. En diciembre de ese año, Camps fue condenado a 25 años de prisión bajo el cargo de delitos represivos y la destitución. La condena causó un profundo malestar en la sociedad y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que no se le condenó por el delito de privación ilegal de la libertad y desaparición de personas. Asimismo, dichos tribunales civiles decidieron encargarse de alrededor de 300 causas de altos jefes militares acusados de represión. En el caso de Camps, éste admitió que durante su gestión desaparecieron alrededor de 5 mil personas.

Mejores Relaciones con los militares. *Excelsior*, México, 16 de mayo de 1986 y La justicia argentina condena a Camps a 25 años de cárcel. *El Día*, 3 de diciembre de 1986.

<sup>14</sup> La legislación argentina incorpora en el código penal la concesión a la parte acusadora el derecho de apelación a través de los tribunales civiles si el veredicto militar no es satisfactorio. Graham-Yooll, Andrew; 100 días 100 años.... *op. cit.* p-66

<sup>15</sup> Esta cifra contrastó con las estimadas por diversos organismos defensores de derechos humanos que situaban la cifra en alrededor de 30 mil desaparecidos. Page, Joseph A.; Argentina: un dilema de conciencia. *The Nation* en Contextos (ya desaparecida) no. 54, junio de 1985, *op. cit.* p-9-12

<sup>16</sup> El desarrollo de los enjuiciamientos, significó para el gobierno radical iniciar acciones para mantener un equilibrio en las posiciones encontradas adoptadas por diversos sectores de la población incluyendo la de los militares. La izquierda demandaba el proceso contra todos los oficiales implicados y la derecha alertaba sobre el efecto multiplicador que podría significar el enjuiciamiento de los altos mandos. En efecto, el gobierno radical estaba imposibilitado para llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, en virtud de la severa crisis económica que enfrentaba el país y que surgió como otra amenaza a la continuidad del proceso institucional iniciado en diciembre de 1983. Finalmente, en diciembre de 1985 se procedió a la condena de reclusión perpetua del ex-presidente Jorge Rafael Videla y el Almirante Eduardo Massera. Posteriormente, fueron encontrados de culpa y sentenciados por negligencia Orlando Agosti 3 años y 9 meses; Roberto Viola, Expresidente, 16 años y 6 meses; Armando Lambruschini 8 años, penas en las cuales se



incluyó la destitución. Fueron absueltos de culpa y cargo, por errores en la conducción de la guerra de las Malvinas aún después de haber sido sentenciados, Leopoldo Galtieri - resultado de la apelación de la sentencia en su contra de 12 años de prisión a partir de diciembre de 1989-, Almirante Jorge Anaya y los brigadieres Basilio Lami Dozo y Omar Grafiño. Sentencian a los militares responsables por la Guerra de las Malvinas. Excelsior, 17 de mayo de 1986.

17 Los crecientes rumores sobre la eventual aplicación de la amnistía a favor del personal militar acusado de violaciones a los derechos humanos generó la renuncia de magistrados nacionales y la oposición de otros jueces a la política de derechos humanos promovida por Alfonsín. Tensión en el Poder Judicial argentino ante las decisiones de Raúl Alfonsín. El Día, 5 de mayo de 1986.

18 Emmerich, Ernesto; Argentina: Sin posibilidad de superar la crisis y hacer justicia. Alfonsín se debilita. Proceso, no. 428. 14 de enero de 1985. p-45.

19 El tribunal de apelaciones siguió intentando la anulación del veredicto del tribunal militar, proceso que se prolongó durante 1985 y 1986. Finalmente, en diciembre de 1986 esto intentos fallaron al dictarse la prescripción criminal en el caso de Astiz. lo que constituyó un virtual punto final en juicios a militares y oficiales policiales. La resolución solo modificó la sentencia dictada por el tribunal militar relativa a la falta de elementos probatorios del presunto delito a la de prescripción, dictamen que generó la crítica del gobierno de suecia-. Este hecho, coincidió con el envío del Ejecutivo al Congreso de la controvertida Ley de Punto Final ese mismo mes para acelerar el juicio contra militares implicados en la violación de derechos humanos. La justicia argentina condena a Camps: El Día, 3 de diciembre de 1986... op. cit. p-13

20 La jornada electoral de noviembre constituyó la primera después de casi veinte años de inestabilidad política. Alrededor de 19 millones de argentinos concurren a las urnas en comicios parciales legislativos. El oficialismo logró captar 43% de los votos contra 30% obtenido por los peronistas. El peronismo llegaría a estas elecciones enfrentando la crisis de unidad más grave de su historia, dividido en facciones prácticamente irreconciliables. La minoritaria izquierda peronista jugaría su primera experiencia de unificación mediante la creación del FREPU (Frente del Pueblo), el cual incluía en sus filas a peronistas combativos, comunistas, socialistas independientes y cristianos de base. Ducrot, Victor Ego; Una herencia catastrófica: preocupación en Argentina por el gobierno democrático. Prisma latinoamericano, año 12, no. 181, enero de 1986. p-3-4

21 Estas elecciones se desarrollaron bajo la implantación del estado de sitio decretado por el gobierno para contener a grupos extremistas que reiniciaron los atentados terroristas en el país. El estado de sitio se prolongaría hasta el 10 de diciembre de 1985, fecha que representaba el segundo año de la administración alfonsinista en el poder. idem p-3

22 El pase a retiro del Gral. Anibal Verdura surgió como resultado de un fallido atentado en contra de Alfonsín. Una bomba puesta en el camino que debía seguir el Presidente, debía estallar durante la visita que haría a los cuarteles del tercer cuerpo del ejército de Córdoba -unas horas antes se habían dado a conocer las sentencias en contra de Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo-. La policía descubrió el artefacto por lo que Verdura debió afrontar las responsabilidades militares por el fallo de seguridad. A este atentado se sumaría una amenaza de bomba en el avión presidencial el 30 de mayo siguiente. Pasó a retiro el Comandante Verdura del tercer Cuerpo del Ejército. El Día, 27 mayo de 1986. Se frustró un atentado contra Alfonsín. El Día, 20 de mayo de 1986. Alerta de bomba en el avión presidencial de Raúl Alfonsín. El Día, primero de julio de 1986.

23 Este plan incluía una mayor reducción del presupuesto militar, disminución del personal castrense y el relevo de algunas funciones no militares que las fuerzas armadas autoasuntieron como las obras públicas, así como la redistribución de tropas hacia las costas y fronteras. Se agravan las relaciones Alfonsín-Fuerzas Armadas. Excelsior, 18 de junio de 1986.

24 La familia del secuestrado señaló que fue obligada a pagar 275 mil dólares para que el Ministerio del Interior iniciara las investigaciones sobre el paradero de su familiar. Renuncia el Ministro de la Defensa Germán López. Excelsior 16 de mayo de 1986.

25 El envío del proyecto de Ley Punto Final, se enmarcó en el profundo malestar que la sociedad argentina había manifestado meses atrás ante el conocimiento de la elaboración de una ley que limitara los juicios a militares implicados en la guerra sucia. Este malestar se acentuó a raíz de la absolución de Alfredo Aztíz. Anuncia Raúl Alfonsín el envío al Congreso de la Ley de Punto Final. El Día, 6 de diciembre de 1986.

26 Esta ley fue aprobada por el parlamento por 25 votos contra 10 en la Cámara Alta y 126 contra 16 en la Cámara Baja. Al cumplirse el plazo de 60 días el 22 de febrero de 1987, solamente 139 militares y 12 civiles debieron responder a las acusaciones sobre violación a los derechos humanos durante el período de la "guerra sucia". Sin embargo, a estas citaciones se sumaron la de cientos de oficiales que debieron responder a preguntas en virtud del plazo perentorio estipulado en la Ley. Artículo Senado argentino aprobó el Proyecto de Ley de Punto Final. El Día, 23 de diciembre de 1986.

27 Durante la Convención nacional de la UCR el 2 de diciembre de 1986, en la que estuvo presente Alfonsín, su partido decidió apoyar el Proyecto de Ley de Punto Final aunque este apoyo no estuvo a salvo de intensos enfrentamientos y la ausencia de gran número de delegados radicales en el país. Decide la Convención de la UCR apoyar el Proyecto de Ley de Punto Final. El Día, 3 de diciembre de 1986 y El máximo jefe militar argentino considera legítima la guerra contra la subversión. El Día, 2 de diciembre de 1986.

<sup>28</sup> El 29 de diciembre fue publicada en el Boletín Oficial, lo cual significó su sanción legal. Publican en Boletín Oficial la Ley de Punto Final. El Día, 30 de diciembre de 1986.

<sup>29</sup> Las medidas instrumentadas por el gobierno para acelerar el deslinde de responsabilidades contra militares acusados violaciones a los derechos humanos enmarcados en la ley de Punto final y de Obediencia debida, surgieron como importantes factores negativos para el radicalismo. Este descontento a la política gubernamental, se reflejó en las urnas en las elecciones legislativas del 6 de septiembre de 1987. El radicalismo ganó un mayor espacio político al contrario del radicalismo que perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y 5 de 7 gobiernos provinciales. A estas acciones se sumó el rechazo de la población al severo programa económico de austeridad que generó significativas protestas por parte la CGT.

<sup>30</sup> Sobre el perfil y la ideología de Ernesto Barreiro, véase artículo de Gregorio Selser; "El barreirazo en Argentina: los asesinos asestan un cuartelazo para evitar que los procesen civiles. El Día, 19 de abril de 1987.

<sup>31</sup> La democracia no se negocia: Raúl Alfonsín. El Día, 17 de abril de 1987, p-13

<sup>32</sup> *idem*

<sup>33</sup> Cumpliremos la orden de tomar la Escuela de Infantería de Campo de Mayo como sea. El Día, 18 de abril de 1987, p-12.

<sup>34</sup> Discurso pronunciado por Raúl Alfonsín ante el Congreso Nacional convocado a sesión extraordinaria el 16 de abril con motivo del alzamiento del XIV regimiento de Infantería de la ciudad de Córdoba. Argentina: "Aquí no hay nada que negociar", dice Alfonsín. El Día, 18 de abril de 1987.

<sup>35</sup> Este contexto fue aprovechado por el radicalismo para poner en marcha una nueva tentativa de agrupamiento de las fuerzas políticas y sociales de la Argentina, por medio la citada Acta de Compromiso Democrático. Esta contemplaba cuatro puntos, en los cuales el gobierno recalca la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las instituciones democráticas, así como el apego a la Ley para que en el marco de la justicia, la reconciliación de los argentinos fuera posible a través del pleno reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado. Las fuerzas políticas y sociales de Argentina firmaron el Acta de Compromiso Democrático. El Día, 20 de abril de 1987.

<sup>36</sup> Los amotinados depusieron su actitud, anunció Alfonsín a la multitud congregada. El día, 20 de abril de 1987.

37 Quince de los 35 generales argentinos con mando de tropa de un total de 39, pasaron a retiro entre ellos el general Ríos Ereñú. La mitad de los generales argentinos pasaron a retiro en las últimas horas. El Día, 23 de abril de 1987.

38 Según declaraciones de Rico reproducidas por Gregorio Selser en su Artículo ¿Fue rebelión o motín? ¿Son galgos o podencos? publicado en El Día el 22 de abril de 1987, Rico señalaba: "Llegamos a un acuerdo con el Presidente de la República, en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Estamos satisfechos, nuestros objetivos han sido alcanzados, logramos lo que demandábamos. El Gral. Ríos Ereñú dejó el comando del ejército y se reestructura el actual generalato. De ahora en adelante podremos tener un nuevo ejército..."

39 La Corte Suprema de Justicia delineó tres niveles de alcance de dicho principio. Estos niveles de responsabilidad en la represión política escenificada durante el período 1976-1983, significaron el situar en primer término a aquellos que impartieron las ordenes y a quienes las llevaron a la práctica en cumplimiento de las ordenes recibidas en el marco de la disciplina militar y en tercero a quienes cometieron delitos atroces y aberrantes sin tener en cuenta su graduación. Fijarán nuevos niveles de responsabilidad para los militares en actos de represión. El Día, 22 de abril de 1987.

40 La justicia argentina no definirá globalmente el concepto de obediencia debida. El Día, 30 de abril de 1987.

41 A este panorama se sumó el enfrentamiento con la Iglesia católica, por el proyecto de la UCR, oficial, aprobado por el Congreso en mayo de 1987, que estableció la legalización del divorcio. Esta ley de matrimonio civil aprobada en principio por la Cámara Baja, permite a los divorciados contraer matrimonio después de tres años de separación. Durante la visita del Papa en abril de 1987 días antes de los sucesos de semana santa, uno de los principales puntos de su estancia en Argentina se refirió al tema del divorcio, instando a la sociedad argentina a su rechazo. Inflexible la posición de la Iglesia sobre el Divorcio en Argentina, Excelsior, 19 de junio de 1987.

42 El anuncio de reformas constitucionales, que incluía lo anterior, los cuales no tuvieron éxito, tenía por objeto crearle al radicalismo una imagen de movimiento histórico. Al efecto, el organismo creado por el Gobierno, Consejo para la Consolidación de la Democracia, comenzó a trabajar en las reformas constitucionales. Respecto al traslado de la Capital Federal, ésta se trasladaría a las ciudades Gemelas de Viedma-Carmen de Patagones, ubicadas a 900 kms. al sur de Buenos Aires. El objetivo del traslado, era impulsar el desarrollo de la Patagonia, región vasta y poco poblada que mantiene una posición geográfica importante. Esta fue la justificación del Ejecutivo, quien señaló que dicha posición había sido determinante en el capítulo de las Malvinas ya que con el desarrollo integral de esa región, quedaría atrás el abandono y el atraso que más adelante podrían representar un riesgo a la integridad territorial argentina. Sin embargo, el proyecto

sólo quedó en eso, debido fundamentalmente al costo que representaba dicho traslado - calculado en 3000 mdd- y, en el aspecto político, la conflictiva situación política y económica del país, que limitaron el espacio de negociación del gobierno de Alfonsín. Este traslado que nunca se concretó, se sumó a otros registrados anteriormente por distintos gobiernos argentinos, véase Castillo Quadri, Mario; La Argentina descentralizada. EUDEBA, 1986. p-111 y ss

<sup>43</sup> La intención de Alfonsín era la promoción de reformas constitucionales que permitieran la elección del Primer Ministro, respaldado en un gobierno de cohabitación con el peronismo. Sin embargo, la coyuntura política y económica ampliamente desfavorable para el radicalismo, evitó la concreción de un acuerdo de ese tipo, ya que en forma evidente, la totalidad de los grupos peronistas, incluida la CGT deseaban evitar el compartir el desprestigio y los problemas generados y acentuados durante la administración alfonsinista a lo que se sumó el panorama preelectoral para elecciones parciales en septiembre de ese año. Alfonsín planteó la reforma constitucional para permitir un gobierno de cohabitación. ELDía, 14 de abril de 1987.

<sup>44</sup> Emmerich, Ernesto; Sin posibilidad de superar la crisis Alfonsín se debilita. Proceso, op. cit. p- 45

<sup>45</sup> Después de los acontecimientos de Semana Santa de ese año, Aldo Rico permaneció bajo arresto en guarniciones militares de abril a diciembre de ese año. Durante ese lapso fue evidente la continua crítica de Rico hacia los procesos judiciales en contra de militares acusados de violación, a los derechos humanos en lo que denominó la "operación dignidad". Esta posición promovida por Rico tendía a promover la exculpación de los militares acusados y la búsqueda del reconocimiento de la sociedad argentina a las fuerzas armadas por su labor exitosa en su lucha contra la subversión en el periodo de 1976 a 1983.

<sup>46</sup> Siete días después de los acontecimientos de semana santa originados por la rebeldía de Barreiro, éste se entregó a la justicia para responder a los cargos de violaciones a los derechos humanos. Se entregó Barreiro. ELDía, 30 de abril de 1987.

<sup>47</sup> Nota sobre la evolución económica argentina, 1988... op. cit. p-6

<sup>48</sup> Nuevo levantamiento militar. Comercio Exterior, vol. 39 no.1 enero de 1989, p-44-45

<sup>49</sup> Según versiones del senador peronista Eduardo Menem, hermano del entonces candidato a la presidencia Carlos Menem, el desenlace del capítulo de La Tablada, dejaron serias dudas sobre si hubo o no concesiones del gobierno radical a los sublevados. Destaca que el cese de las hostilidades el día 4 de diciembre lo haya comunicado la institución armada por medio del Estado Mayor del Ejército y no por el Ministerio de defensa y se le haya calificado como amotinados, lo que representa penas menores a las contempladas por delitos de rebeldía. A pesar de que Alfonsín señaló que no se habían hecho concesiones, esta declaración no fue aceptada por los sectores políticos del país. Menem se refiere a los

sucesos de semana santa de abril de 1987. Apunta que en dicha revuelta militar encabezada por el Tte. Coronel Aldo Rico, el presidente Alfonsín había declarado que no se habían hecho concesiones de ninguna naturaleza para con los sublevados. Sin embargo, un mes después el gobierno a través del Ejecutivo envió al Congreso la denominada Ley de Obediencia Debida, sancionada por el Congreso, que limitó en forma sustancial el número de oficiales que debían ser juzgados por violaciones a los derechos humanos. Esta posición fue retomada por la prensa argentina, que señalaron la posibilidad, no confirmada, de la existencia de un documento suscrito por Scindeldín y el Jefe del Estado Mayor José Dante Caridi, el cual contendría el compromiso de ampliar una ley de obediencia debida y el inicio de la reivindicación de las fuerzas armadas por su actuación para suprimir los movimientos guerrilleros que actuaban en el país. Tanto Scindeldín, líder de la sublevación de semana santa, como Caridi pasarían a retiro y se propondría, por parte del primero, una lista de posibles sucesores, incluido el General Isidro Cáceres. Serias dudas dejó el levantamiento en La Tablada. Excelsior, 14 de dic. de 1988.

<sup>50</sup> El Movimiento todos por la Patria (MTP) surge en 1986 con un carácter pluralista, con organización y estructura política que expresaba sus ideas por medio de la Revista Entre Todos (1985), antecedente del MTP. Este basaba su propuesta política en la democracia participativa, expresada en la intervención directa del pueblo. El ataque a la Tablada fue una rebelión y el Estado tiene que defenderse. Proceso, 21 de junio de 1989, no. 668 p-42.

<sup>51</sup> Este mecanismo formal evita la aplicación de beneficios de una libertad condicional a los 25 años como establece la legislación argentina. Caso Tablada: proceso irregular arguye la defensa. Proceso, 21 de julio de 1989, no 668, op. cit. p-41.

<sup>52</sup> Espera Menem capitalizar el descontento popular contra Alfonsín por el manejo de la economía. Excelsior, 14 de diciembre de 1988.

<sup>53</sup> Como ejemplo, al asumir la presidencia Carlos Menem, todavía se seguía el proceso judicial contra 18 ex-altos mandos del ejército y la Marina, así como el seguido contra 150 oficiales que participaron en las rebeliones de 1987 y 1988. Sólo habían sido sentenciados por tribunales civiles y militares 4 ex-comandantes y dos ex-jefes de la policía. Respecto al coronel Aldo Rico, supuestamente en rigurosa prisión preventiva bajo los cargos de sedición, asistió a la boda de su hija celebrada en Buenos Aires en uniforme de gala y con sus condecoraciones. Asimismo, el ex-comandante Emilio Massera, condenado a reclusión perpetua en el penal militar de La Magdalena -a 110 kms al sur de Buenos Aires- fue visto en la capital y fotografiado por un periodista. Ambos hechos originaron una gran polémica en el país, lo que obligó a las autoridades a declarar que ambos hechos estaban autorizados. Con permiso Salieron Rico y Massera. Excelsior, 3 de julio de 1989, p. 18A.

<sup>54</sup> Estas elecciones generales, contemplaron además la elección de 254 Diputados de los cuales el peronismo obtuvo el 49% de los escaños contra 7% del radicalismo, y que representan la mitad del total de la Cámara Baja y para 6000 cargos menores en todo el país. La elección presidencial, significó el poner término a casi seis décadas de

inestabilidad en la transmisión del poder Ejecutivo en la Argentina, caracterizada por los derrocamientos por alzamientos militares.

55 La beligerancia del sector obrero agrupado en la CGT quedó de manifiesto con el éxito del paro general convocado para el 13 de junio. Como respuesta, el gobierno promovió una ley para reglamentar el derecho de huelga y enfrentar la caótica situación laboral, así como evitar nuevas paralizaciones. Por su parte, los comerciantes desataron la especulación, lo cual tuvo como respuesta la generación de brotes de violencia ciudadana por el desabasto. Mejores relaciones con los militares. Excelsior, 16 de junio de 1986.

56 Argentino. La débacle económica. Le Monde, 14 de junio de 1989 y Presenta Alfonsín al Congreso su renuncia oficial. Excelsior, primero de julio de 1989.

57 Paradójicamente los diputados radicales no presentaron su renuncia por lo cual mantendrían una mayoría hasta diciembre, fecha original del traspaso de poderes. Sin embargo, éstos sellaron un compromiso político que los obligó a no objetar las leyes que Menem presentara al Congreso durante el período de julio a diciembre. Este acuerdo político-parlamentario fue decisivo para que el Presidente electo aceptara sustituir a Alfonsín en el cargo en forma anticipada, ya que era evidente que Menem no aceptaría una mayoría radical en el Congreso que obstaculizara su programa enmarcado en su "revolución productiva". Los Diputados radicales no presentarán su renuncia. Excelsior, primero de julio de 1989.

58 Cabe señalar que la Constitución argentina no contempla el anticipo en la transmisión de poderes. Esta establece el período oficial de 6 años y en caso de renuncia es el Vicepresidente el que asume las funciones. Sin embargo, éste también presentó su renuncia por lo que la designación de un Presidente Provisional recae en el Congreso. La aceptación de Menem de asumir el mando a partir del 9 de julio, un día después de que el Congreso ratifica la victoria del presidente electo, evitó esta situación. Por ello, dicha transmisión no fue estrictamente legal de acuerdo con lo estipulado en la Constitución argentina. El anticipo del traspaso de poderes no es estrictamente legal. Excelsior, 29 de junio de 1989.

59 Ratificó el Congreso argentino la victoria de Carlos Menem. La Jornada, 8 de julio de 1989.

60 El programa de austeridad planteado por el régimen militar saliente fue abandonado a medio camino. Este programa estaba basado en un crédito contingente otorgado por el FMI, pero la espiral inflacionaria alcanzaba para esos momentos 400% anual. Las reservas de divisas eran sólo de mil millones de dólares y se habían acumulado intereses vencidos por más de 3 mil mdd. y un total de 21 mil mdd de la deuda pública tenían programados sus vencimientos durante 1984. La economía Argentina. World Financial Markets en Contextos (ya desaparecida) No. 53, 15 de junio de 1985, p-17-28.

61 Los empresarios y obreros argentinos en forma reiterada se opusieron a aceptar restricciones negociadas referentes a los aumentos de precios o demandas salariales. A lo largo de la administración de Alfonsín, los intentos de concertación fallaron en la mayoría de las ocasiones, lo cual ratificó la tradición de los políticos argentinos de fracasar en sus intentos de lograr concertaciones efectivas y mutuamente aceptables entre gobierno, empresarios y dirigencias sindicales. Cavarozzi, Marcelo; El difícil tránsito de Alfonsín a la democracia. The New York Times en Contextos (ya desaparecida) no. 24, 26 de marzo de 1984. p. 45

62 A principios de cada mes, el gobierno se fijó metas de inflación, tasas de interés sobre depósitos y préstamos y ajustes de salarios y devaluaciones de acuerdo éstos. Wynia, Gary G.; La economía argentina... op. cit. p-7

63 Estados Unidos, los bancos acreedores norteamericanos y europeos junto con México, Venezuela y Brasil se unieron a Colombia y le prestaron a Argentina 300 mdd para ayudarle a pagar los atrasos. ¿Por qué no desaparecerá la crisis financiera? International Businessweek en Contextos (ya desaparecida). no 30. 25 de junio de 1984, p-38-42.

64 *idem.*

65 Wynia, Gary W.; La democracia en Argentina. op. cit. p-7

66 A lo largo de la administración de Alfonsín, la CGT, de tendencia peronista, organizó una lucha constante a las políticas económicas impuestas por el gobierno radical. Estas expresiones de lucha se tradujeron en la concreción de paros y sabotaje laboral, hasta la concreción de huelgas generales de trabajadores. La primera huelga general se verificó el 4 de septiembre de 1984, las cuales sumarían alrededor de 12 -unas con mayor éxito que otras- durante la administración radicalista. La inercia desfavorable en el recrudescimiento gradual de la crisis económica, amplió el margen de acción y la representatividad de la CGT, a cuyas protestas y paros se extendieron a las clases medias y a las representaciones burocráticas. Pla, Alberto J. La crisis Argentina. Crítica no. 25, diciembre de 1985, p-79-84

67 Bernardo Grinspun, de larga trayectoria dentro del radicalismo, fue sustituido por el contador público Juan Vital Sourroille, aparentemente para evitar un mayor desprestigio de su imagen personal. Bonnaso, Miguel; \_\_\_\_\_. Proceso, no 435, 4 de marzo de 1985, p-46-47.

68 Cavarozzi, Marcelo y Landi, Oscar; Argentina, crisis y postración. Ensayo publicado en El Nacional el 18 de abril de 1991, p-11-17, que hace un análisis general de la situación al inicio del gobierno constitucional de Alfonsín, su desarrollo y retirada y las perspectivas del nuevo gobierno justicialista a partir de 1989.



69 La captación de créditos externos se encontraba supeditada a la adopción de mayores medidas de corte recesivo por parte de Argentina. Asimismo, la banca internacional presionaba para la concreción de un acuerdo que estableciera las bases para el otorgamiento de nuevos créditos, para lo cual Argentina debía adoptar políticas de restricciones en los gastos estatales, reducción del déficit público y un programa de privatizaciones de empresas deficitarias, exigencias que el gobierno radical se resistía a profundizar. Esta posición, reflejaba el estado de enfrentamiento del gobierno con los sectores laborales del país, que mantenían su actitud de exigencia de reivindicaciones salariales, al mismo tiempo que se debía cumplir con las condiciones impuestas por el FMI. Bonasso, Miguel; Sin posibilidad de superar la crisis Alfonsín se... *op. cit.* p-45

70 En efecto, el Plan Austral introdujo innovaciones técnicas, en especial el tratamiento específico de los componentes inerciales de la inflación: su principal novedad sin embargo, se dio en el plano discursivo que otorgaba el reconocimiento oficial del estado de destrucción y desorganización de la economía argentina. Dicho reconocimiento, sirvió como base para adoptar una serie de medidas, más bien de carácter simbólico, destinadas a revertir la situación. Por primera vez Alfonsín habló de una "economía de guerra", haciendo alusión a una década de progresivo descalabro económico cuya principal manifestación fue el derrumbe por etapas de los aparatos productivos y reguladores del Estado. Cavarozzi, Marcelo y Landi, Oscar; Argentina: Crisis y postración... *op. cit.* p-12

71 La CGT sostenía su posición de enfrentamiento con el gobierno, aludiendo que para enero de 1986, el salario de los trabajadores había sufrido una devaluación de 35% desde la implantación del Plan ya que los controles de precios eran violados constantemente en forma silenciosa. Para ese año, se consideraban que de 8000 mdd. provenientes de las exportaciones, 5400 mdd se destinaron al pago de intereses de la deuda externa. Ante este marco, y después del triunfo radical en las elecciones de noviembre de 1985, el gobierno sostuvo conversaciones con funcionarios norteamericanos para la eventual incorporación argentina denominado Plan Baker. Ducrot, Victor Ego. Una herencia catastrófica. *Prisma latinoamericano*, enero de 1986. p. 3.

72 El 24 de enero de 1986, la CGT promovió un paro general de considerable alcance. La protesta -que demostró el endurecimiento de la posición de dicha Central obrera- se justificó en la disminución del poder adquisitivo de los salarios, a la que se sumaron sectores de clase media, base de poder del radicalismo. Asimismo, la CGT exigía la moratoria en el pago de intereses de la deuda externa, como un paso previo a la real recuperación del país. Bonasso, Miguel; La deuda coloca a Alfonsín ante el surgimiento de un frente opositor. *Proceso*. no 483, 3 de febrero de 1986, p-41

73 El gobierno radical dispuso un tope salarial del 5% para 1987, lo cual provocó la reacción de la negativa de la CGT. Pese a que se iniciaron negociaciones entre dicha central obrera y el gobierno impulsadas por Alfonsín en diciembre de 1986, éstas se rompieron ante la inflexibilidad de la autoridades laborales de otorgar aumentos salariales

y el anuncio del tope salarial mencionado para el siguiente año. La CGT y el gobierno argentino. El Día, 16 de diciembre de 1986.

74 Críticos de esta estrategia económica, señalaban que el Plan Austral sólo se preocupó por la obtención de recursos por la vía impositiva al sector privado a fin de enfrentar el crónico déficit fiscal, y con el aumento en las tarifas de los bienes y servicios del sector público. Cavarozzi, Marcelo y Landi Oscar. Argentina, crisis y postración...*op. cit.* p-13

75 A las protestas ejemplificadas con paros nacionales en demanda de reivindicaciones salariales y restitución de derechos restringidos durante el régimen militar -contratos colectivos de trabajo, seguridad social- de las organizaciones obreras agrupadas en la CGT, se sumaron la de los empresarios y grandes hacendados y productores agrícolas exigiendo rectificaciones a la política económica gubernamental a la que consideraban de recesiva y antiindustrial. Para ese momento, el Plan Austral mostró su incapacidad en 12 meses de aplicación de revertir el proceso de estancamiento de la economía, mientras dejó en libertad la especulación financiera. El alto costo del crédito pagado por los industriales y productores, inevitablemente se reflejaba en los salarios de los trabajadores. Erradica Argentina la angustia de comprar compulsivamente. Excelsior, 19 de junio de 1986.

76 La gigantesca y parasitaria máquina estatal argentina, la cual absorbía el 60% del gasto, no fue tocada por el Plan Austral, ya que las reducciones en el gasto público se centraron en la disminución y eliminación de obras públicas, proyectos de beneficio social y la creación de nuevos impuestos y aumentos a los existentes. Déficit público, gran obstáculo para las metas del Plan Austral. Excelsior, 20 de junio de 1986.

77 La marcha del Plan Austral para esos momentos ya mostraba signos de inviabilidad. Desde abril de ese año hasta la aplicación de la segunda fase de esta estrategia económica, el gobierno estuvo obligado a implantar una serie de minidevaluaciones sumadas a la aplicadas anteriormente- que afectaron la paridad del austral respecto del dólar norteamericano. Para mayo de 1986, estas devaluaciones sumaron alrededor de 15 desde la implantación de dicho plan. Estas devaluaciones se mantendrían, justificadas por el gobierno para mantener un control sobre la moneda nacional. Estas devaluaciones se realizaron semanalmente con objeto de acompañar la paridad cambiaria con el ritmo inflacionario. En diciembre de 1986, estas devaluaciones sumaron hasta 6 un mismo mes. Alejamiento de Ministros de Agricultura ante la actual política agropecuaria. El Día, 24 de diciembre de 1986.

78 El 7 de mayo el gobierno aprobó por decreto los incrementos salariales fijados en 8.5% para los trabajadores del sector privado y de 5% para los del sector público. Esto, en virtud del poco éxito de las negociaciones sostenidas entre la CGT y el Gobierno. Asimismo, se determinó que los aumentos salariales podían trasladarse a los precios de los productos, mercaderías o servicios conforme con la política de precios. Estos aumentos, fueron rechazados por la CGT, a los que consideró insuficientes para restaurar el poder adquisitivo. La Central obrera argentina anticipa su rechazo a la política de salarios. El Día, 8 de mayo de 1987.

79 Este acuerdo despejó dudas sobre la posibilidad de que el FMI desembolsara la última cuota de 275 mdd. del crédito "stand by" vigente desde 1984 por 1500 mdd. Esta decisión permitió que los demás bancos acreedores recibieran otros 600 mdd por concepto de pago de intereses -en efecto prestan para pagarse a si mismos-, acuerdo que facilitó las negociaciones para la refinanciación de vencimientos durante 1986 y 1987. Cede el FMI perdón a Argentina. Excelsior, 18 de junio de 1986.

80 Este acuerdo estuvo antecedido por el logrado con la banca privada para el refinanciamiento de 30 mil mdd. Entre los principales logros obtenidos por los negociadores argentinos, fue el otorgamiento de la misma sobretasa aplicada a México del 0.8125% sobre la LIBOR británica que es la más baja del mercado. Asimismo, el comité de bancos acreedores acordó préstamos por 1900 millones de dólares a 20 años con 7 de gracia. El Día, 13 de abril de 1987.

81 La exigencia del FMI en el condicionamiento del otorgamiento del crédito de contingencia aprobados en febrero y concretados en esta fecha, sobre la necesidad de que Argentina lograra un acuerdo de refinanciación de su deuda externa con la banca privada fue superada. Cabe señalar que el desembolso de los créditos habían sido suspendidos al comprobarse que Argentina no estaba cumpliendo con los compromisos contraídos, lo que obligó a las autoridades económicas argentinas a acelerar las negociaciones. FMI: Argentina ha avanzado en su Programa de Reforma Estructural. El Día, 24 de julio de 1987.

82 La política de restricción salarial fue el determinante del enfrentamiento del gobierno con la CGT. El contexto político alterado por el alzamiento militar de abril de 1987, la cual encontró la respuesta de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales del país en contra del reinicio de una etapa militar, fue aprovechado por el gobierno para impulsar negociaciones con la central obrera que le restituyeran su plena vigencia respecto de las leyes laborales. Sin embargo, los posteriores acontecimientos derivados de la rebelión de abril de 1987 que desacreditaron al Poder Ejecutivo, limitaron la participación de la CGT en pro de la concertación. Se iniciaron las negociaciones para concertar un pacto social en Argentina. El Día, 28 de abril de 1987.

83 De acuerdo con datos de la CEPAL, a partir de julio se aceleró el ritmo de la inflación ubicándose en 10% y ascendiendo en los siguientes meses a porcentajes superiores. CEPAL; Nota sobre la evolución de la economía argentina, 1987... *op. cit.* p-77

84 Además de estas medidas, se creó un mercado financiero de cambios, con una cotización flotante y se eliminaron las tasas de interés reguladas y nuevas medidas impositivas. *idem*

85 En febrero de 1988 Argentina logró un acuerdo sobre metas fiscales para 1988 con el FMI, lo cual destrabó el desembolso de las cuotas de crédito. CEPAL; Nota sobre la evolución de la economía argentina, 1988... *op. cit.* p-37

86 *idem*

87 A esta medida se sumó la jubilación en los meses siguientes de 7 mil burócratas y la desaparición de seis subsecretarías de Estado, de acuerdo con la política de reducción del aparato estatal. Comercio Exterior. vol. 39 no. 1, pags. 44-45.

88 Del período de enero a septiembre de 1988, el salario real de los trabajadores sufrió una merma en promedio de 15%, según datos del Instituto de Estadística y Censos de Argentina. Esto se representó un deterioro acumulado de 42% desde la toma de posesión de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. La inflación, en 1988 se situó en 387.5%, cifra que triplicó la observada en 1987 de 131.7%. *idem*

89 *ibidem*.

90 Ante la depreciación constante de la moneda, el 19 de febrero el Banco Central dispuso que 20% del valor de las exportaciones se realizarían conforme a las reglas de regulación estatal, y el austral, comercial y especial, se devaluó en 7%. Comercio Exterior, mayo de 1989, vol. 39 no. 3 pág. 232.

91 Los nuevos funcionarios, anunciaron la unificación de los mercados cambiarios comercial y especial, cuya cotización se fijó diariamente, a partir de la devaluación del austral en 27% (20 australes por un dólar) - en el mercado negro la cotización era de hasta 49 australes por un dólar- y las operaciones de comercio exterior se liquidaron a partir de ese momento en 50% del valor del mercado oficial y 50% por el mercado libre. Prestó juramento Juan Carlos Pugliese como nuevo Ministro de Economía de Argentina. El Universal, 5 de abril de 1989.

92 El resultado de las elecciones motivó la exigencia de diversos sectores para una transmisión anticipada del gobierno. En primera instancia Alfonsín se negó a aceptar un acortamiento. Sin embargo, la aguda crisis económica reflejada por un aumento descontrolado del tipo de cambio que con las continuas devaluaciones llegó a cotizarse a 200 australes por un dólar a finales de mayo, y el surgimiento de manifestaciones de violencia en distintas ciudades del interior que obligaron al gobierno a imponer el estado de sitio por treinta días, persuadieron a Alfonsín a aceptar finalmente el acortamiento. En efecto, la descapitalización del país se aceleró con la utilización de las reservas internacionales para sostener el valor de la moneda. Esto comprimió artificialmente el ritmo de la inflación entre julio de 88 y enero de 1989, pero la incapacidad de continuar con esta política desataron el ascenso inflacionario ante la retirada del Banco Central del mercado libre de cambios. En enero el austral se cotizaba en 16 por un dólar y 6 meses

después se elevó a 500 australes por un dólar. Cayó el salario real 51% en Argentina. Excelsior, 6 de julio de 1989.

93 La empresa multinacional cerealera Bunge and Born, controla el 50% de la industria agroalimentaria de Argentina y posee directa o indirectamente industrias agrícolas, sociedades financieras y empresas importantes en el país. Menem llena un vacío de poder que generó caos en Argentina. Excelsior, 12 de julio de 1989.

94 El adelanto de la transmisión presidencial desaceleró el parcialmente el aumento de la cotización del austral frente al dólar. La Argentina encuentra un semblante de calma. Le Monde, 15 de junio de 1989.

95 La necesidad de nuevos aumentos a los servicios públicos exacerbó el estado de violencia al interior del país traducidos en saqueos a almacenes y tiendas desde el 23 de mayo hasta el 3 de junio con un saldo de 14 muertos, 80 heridos y decenas de detenidos. Alzas en servicios, base para el Pacto Social en Argentina. Excelsior, primero de julio de 1989.

96 Repunte histórico de la inflación argentina; registró 114.5% en junio. Excelsior, 7 de julio de 1989.

97 Racionaliza Argentina la gasolina: prevén un plan de choque. Excelsior, 6 de julio de 1989.

98 Atkins, G. Pope; América Latina en el sistema político internacional... *op. cit.* p-231

99 Durante el conflicto, los británicos consideraron a Argentina como otro país al suspender la exportación de capital, limitación de los movimientos de buques en aguas territoriales inglesas, así como de todas las importaciones. Esta actitud quebró la imagen de supuesta preferencia del país europeo que se había cernido la Argentina, pensando que con declarar su neutralidad en el conflicto obtendría beneficios. Sin embargo, todas las naciones latinoamericanas tomaron la misma posición de neutralidad. Tulchin, S. Joseph; The Impact of US Human Rights Policy: Argentina, en Latin America, the United States and the Inter American System, p-220.

100 Por medio de este tratado, Argentina otorgó amplísimas concesiones con objeto de seguir colocando su carne en el mercado inglés. El tratado incluía I) La protección para los productos británicos en la Argentina incluso frente a los productos nacionales; II) El uso preferencial en la utilización de las divisas extranjeras en poder del gobierno argentino para el envío de remesas a Gran Bretaña; La garantía del monopolio de exportación de carne a los frigoríficos extranjeros; y, IV) Tratamiento favorable a los inversionistas británicos en los servicios públicos argentinos. Este acuerdo, además de la creación del Banco Central y de la corporación de transportistas como exigencia británica, marcó un hito importante en la dependencia de este país frente a Gran Bretaña. Quadri Castillo, Mario. La Argentina descentralizada, *op. cit.* p-71

- 101 Esta subordinación fue corroborada por el propio Vicepresidente Roca, al señalar que la política exterior y la orientación económica del gobierno argentino y la continuación de relaciones estrechas con la Gran Bretaña solo mostraban que "a través de la mutua dependencia en materia económica, Argentina es parte integral del Imperio Británico". Stausberg, Hildegard. Saldrán los argentinos del círculo vicioso. Contextos... *op. cit.* p-49
- 102 Al concluir la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia en 1948, fue suscrita la Carta de la OEA. El nacimiento de la OEA, significó la consolidación y fortalecimiento del Sistema Interamericano. Levin, Aida Luisa; La OEA y la ONU:... *op. cit.* p-28
- 103 Este acuerdo debía mantenerse en vigor en tanto persistiera el estado de guerra. *ibidem*
- 104 Calvert, Peter; Desmilitarización en América Latina. Contextos (ya desaparecida) no. 50, 30 de abril de 1985... *op. cit.* p-16-17
- 105 Ramos, Jorge Abelardo; La era del peronismo...*op. cit.* p-206-208
- 106 Argentina suscribió el Tratado de Tlatelolco pero no lo ha ratificado. Brasil lo ratificó pero no ha otorgado las dispensas correspondientes
- 107 Clinton L., Richard; Human Rights an development: Lessons from Latin America, en Latin America, The United States and the Inter American System...*op. cit.* p-235
- 108 Por medio de la enmienda Humphrey-Kennedy, se estableció la prohibición de la venta de armas a regímenes violadores de los derechos humanos, en la que destacaba Argentina. Leon Manriquez, Jose Luis. El Proceso de Reorganización nacional y los derechos humanos en la Argentina. Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Relaciones Internacionales, UNAM, México.
- 109 El cambio de posición de la política exterior norteamericana hacia Argentina, fue reflejada por el apoyo a la continuación del régimen constitucional ante el levantamiento militar acaecido en abril de 1986. Frohman, Alicia; Relaciones Mediatizadas por el poder civil y las Fuerzas Armadas argentinas y Estados Unidos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, septiembre de 1987. 25 págs.
- 110 Graham-Yooll, Andrew, 100 días, 100 años, Contextos... *op. cit.* p-67
- 111 En 1977 una decisión de la CIJ, dominada por juristas británicos, concedió la soberanía de las Islas a Chile, de potencial petrolero y minero, decisión a la que se opuso el régimen militar argentino. Esta oposición se tradujo en la movilización de tropas hacia la

región en disputa. Wynia, Gary G.; La democracia en Argentina. Contextos, año 3 no. 53. 15 de junio de 1985.

112 Las Islas Falkland para los Británicos y Malvinas para los argentinos, registra una disputa por su posesión desde hace más de un siglo. Francia, España y Gran Bretaña en un tiempo u otro ocuparon y abandonaron las Islas entre 1764 y 1811. En 1820 Argentina (Entonces Provincias Unidas del Río de la Plata) las tomaron en posesión basados en derechos de sucesión a territorio español pero la Gran Bretaña reclamó la posesión. El conflicto suscitado entre Argentina y Estados Unidos que realizaba la captura de peces en forma ilegal, fue aprovechado por la Gran Bretaña para invadir las Islas con una fuerza militar de ocupación en 1833. Desde ese momento las Islas están bajo control británico a la par de las protestas argentinas por dicha presencia. Atkins G. Pope; América Latina en el sistema político internacional... *op. cit.* p-230

113 En octubre de 1986, Gran Bretaña anunció el establecimiento de 150 millas de mar patrimonial en torno a las Islas, para la explotación de los recursos naturales de acuerdo al derecho marítimo. Por medio de esta disposición, los barcos pesqueros debían contar con la autorización previa del gobierno británico para realizar operaciones de pesca. Esta decisión británica, fue la respuesta a la política argentina de suscribir acuerdos de cooperación pesquera con Bulgaria y la Ex-Unión Soviética que comprendían el área en disputa.

114 El lanzamiento del Programa de Integración y Cooperación Argentina-Brasil (PICAB), significó la culminación de un proceso de aproximación bilateral que ganó impulso a partir de 1979. La disposición del conflicto, esencialmente estratégico, en torno a la explotación de los recursos hidroeléctricos del Río Paraná, fue decisiva para atenuar antiguas rivalidades entre los dos países. Del lado brasileño la negociación del Acuerdo Itaipú-Corpus representó el abandono de una postura hegemónica que por 150 años había prevalecido en diferentes momentos frente al país vecino. Del lado argentino importó eliminar un foco de conflicto junto con el que representaba el mantenimiento con Chile por la cuestión del Canal de Beagle, y trasladarse a un relajamiento del aislacionismo en que se encontraba el régimen militar argentino.

Hirst, Mónica y Bocco, E. Héctor. Alcances y límites de la acción concertada latinoamericana en el tema de seguridad. Lima, Perú, 1991. Naciones Unidas. Centro Regional de las NU para la paz, el desarme y el desarrollo en América Latina y el Caribe. Opciones para el logro de una seguridad común en Sudamérica. p-84 y ss

115 El 30 de julio de 1986, Argentina y Brasil concretaron la Firma del Programa de Integración y Cooperación Económica conocida como Acta de Buenos Aires. Este programa, fue reforzado con la suscripción en noviembre de 1989 con el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, con lo cual ambos gobiernos fijan los plazos para la creación de un mercado común, que contempla la adición de otros países del Cono Sur. Por medio de estos acuerdos, Brasil y Argentina han fijado el establecimiento de un mercado común para finales de 1994. *ibidem* p-93

## CAPITULO IV: PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO DE CARLOS SAUL MENEM

### 4.1 Apreciación general

Bajo el lema "Argentina, levántate y anda" -pronunciado al principio y final de su discurso de toma de posesión-, el 8 de julio de 1989 Carlos Saúl Menem protestaba el cargo de Presidente de la República Argentina. En tres años al frente del gobierno, ha logrado llevar a cabo, con tropiezos y oposiciones, su plan de reforma económica, pero a un gran costo social en términos de empleo y productividad y, por ende, del nivel de vida de la mayoría de la población que aún no se ha beneficiado con la anunciada superación de la etapa recesiva sostenida por el actual discurso político oficial.

Tal y como había venido anunciando antes de asumir la presidencia, en su discurso de toma de posesión definió a la crítica situación económica como uno de los principales problemas que debía enfrentar su administración desde el inicio de su gestión.

Dentro de su política de "conciliación nacional", un tema de especial importancia para su eventual éxito, lo constituyó el seguimiento de los juicios contra militares acusados de violación a los derechos humanos registrada durante la dictadura de 1976 a 1983. Al asumir el gobierno, Menem heredó de la administración radical anterior tanto la continuación de la inquietud militar respecto a la condena de militares por su actuación durante la denominada guerra sucia, como de la responsabilidad de los altos mandos militares por su actuación en la Guerra de las Malvinas.

Consciente de la importancia de terminar en forma definitiva con el tema para concretar su proyecto de reordenación económica y de reinserción efectiva de las fuerzas armadas en el nuevo proceso constitucional, el Ejecutivo, por medio de decretos adoptados en octubre de 1989 y diciembre de 1990, resolvió el indulto generalizado de los militares acusados de los delitos mencionados, incluido el líder guerrillero (Montonero) Mario Firmenich.

El indulto, representó para el gobierno el limitar en lo posible la actitud obstruccionista de las fuerzas armadas al programa de reordenación económica, en virtud de la grave situación económica prevaleciente al momento de asumir el poder, ejemplificado por los desordenes sociales registrados en el país que amenazan desbordarse. De esta forma, la estrategia de Menem se centró en promover el inmovilismo político de los militares para dedicarse a cuestiones puramente profesionales apoyado en una política militar oficial tendiente a reformar los cuadros militares para reafirmar su reprofesionalización.

Cabe señalar que dicho indulto, provocó duras críticas y manifestaciones de descontento por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, partidos de oposición, organizaciones de trabajadores entre otros. Por su parte, la iglesia católica se pronunció a favor del perdón presidencial.



En principio, la permanencia de la gravedad de los problemas económicos que siguió afectando a los militares, se evidenció con un nuevo alzamiento militar escenificado en diciembre de 1990. Este alzamiento dirigido por suboficiales denominados "carapintadas" que tomaron por asalto el Estado Mayor del Ejército en la capital y otras instalaciones militares en el interior del país, -a diferencia de las anteriores asonadas observadas durante la pasada administración- el sometimiento de los oficiales sublevados incluyó el uso de la fuerza militar y el consiguiente enfrentamiento armado entre militares leales al gobierno y los alzados. Las exigencias de estos oficiales se centró en el bajo nivel de sus salarios pero sin definir el objetivo de su conducta. Al parecer, el hecho fue una respuesta a objetivos ideológicos abanderados por su líder el Coronel Mohammed Ali Seideldín quien de nueva cuenta dirigió un alzamiento.

La rendición de los sublevados se realizó horas después, los cuales -alrededor de 300 detenidos- fueron enjuiciados y condenados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a la pena de reclusión por tiempo indeterminado en el caso de Seideldín y de sentencias de entre dos y veinte años para los demás oficiales involucrados. Estos oficiales no se beneficiaron con el indulto presidencial.

Para Menem, esta represión exitosa de los alzados a lo que calificó como intento de golpe de Estado, mostró a unas fuerzas armadas dispuestas a defender el orden constitucional, como una respuesta a la política de indulto a los militares acusados de violación a los derechos humanos durante el régimen militar de 1976 a 1983 -incluidos líderes guerrilleros-. Asimismo, destacó la restitución de su capacidad de intervenir en casos de "conmoción nacional" decretado por el Ejecutivo y en general de la política militar destinada a modernizar el equipo de las Fuerzas Armadas con recursos provenientes tanto del exterior como de la privatización de empresas militares.

Carlos Saúl Menem, descendiente de padres sirios musulmanes sunnitas, nació en el pueblo de Aniliaco, Provincia de la Rioja siendo el único peronista que ha ocupado gubernatura de su Estado natal por tres ocasiones, en 1973, 1983 y 1987. Ahora como Presidente de la nación, al tiempo que pidió la paciencia de los argentinos por la aplicación de un severo programa de ajuste, los instó a superar revanchismos y actitudes obstruccionistas para acceder a una plena reconciliación nacional. Para ello, anunció que el tema de los militares sería resuelto en forma definitiva.

Su discurso se caracterizó por la evaluación realista de la situación económica del país. Para enfrentar la situación, con base en su "revolución productiva", puso en marcha un severo programa de austeridad que incluyó aumentos de hasta 500% en combustibles y de 300%, en promedio, en servicios públicos y productos básicos, eliminación de subsidios estatales, devaluación de más de 100% del austral y la instrumentación de un programa de privatizaciones que incluyó a la empresa telefónica ENTEL, Acrolíneas Argentinas, canales estatales de televisión, empresas militares, así como la asociación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales con empresas extranjeras ligadas a la extracción y la concesión de parte de los servicios prestados por ferrocarriles argentinos a los particulares entre las más importantes.

El principal problema constituía la contención de la hiperinflación y la disminución del abultado déficit fiscal y la recuperación de las reservas internacionales que para esos momentos se calculaban en menos de 200 millones de dólares. Asimismo, la corrupción fue calificada como traición a la patria, se castigaría a la evasión fiscal, la preferencia a la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.

Como medida para contener la inflación, el nuevo gobierno concertó con empresarios la congelación de precios y salarios por 90 días. Previamente ambos habían sido sujetos a aumentos. No obstante, dicho pacto no fue respetado principalmente por los pequeños empresarios, lo cual debilitó su efectividad y dio paso a las protestas gremiales.

Asimismo, el Congreso aprobó los proyectos de Ley propuestos por el Ejecutivo. De acuerdo con la denominada Ley de Emergencia Económica y la de Reforma del Estado, fue aprobada la suspensión de subsidios a empresas, eliminación de beneficios salariales a burócratas y el despido de empleados de jerarquía en la administración pública mediante indemnizaciones y la instrumentación de un amplio programa de privatizaciones de empresas estatales. En el aspecto económico, se fomentó la inversión extranjera con un trato igual al nacional, la eliminación de la obligación de empresas nacionales a adquirir insumos de firmas nacionales y reducción de impuestos para promover a la industria.

Estas severas medidas de ajuste, se llevaron a cabo inicialmente en medio del escepticismo generalizado de la población. La inercia hiperinflacionaria desatada antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, continuó su ritmo ascendente, aunque mediatizado en principio con la aplicación del programa económico del gobierno de Menem. La aplicación de dicho programa, contó con el rechazo de la población y no evitó la continuación de saqucos a centros comerciales en la capital y el interior del país.

La deuda externa y el pago de intereses atrasados, también recibió la prioridad del gobierno de Menem. Siendo el crédito internacional un importante elemento para la aplicación de su programa, las nuevas autoridades económicas se avocaron a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento mediante la reestructuración de su deuda externa y de los intereses atrasados a fin de restaurar la confianza en la banca acreedora para la concesión de nuevos créditos.

Para ello, la política exterior fue dirigida para dar prioridad a los temas económicos. Desde un principio, esta política orientó a la atracción de inversión extranjera directa, para lo cual se decretó la igualdad de condiciones al capital externo e interno dentro del marco de la política general de apertura de la economía y un mayor acercamiento con Estados Unidos como uno de los países de mayor influencia en los organismos financieros internacionales.

En apoyo a este esfuerzo, el gobierno argentino se ha alineado a la política exterior global norteamericana en cuestiones políticas conflictivas a nivel bilateral y multilateral (participación militar en la "fuerza multinacional" que apoyó el retiro militar de Irak de

Kuwait, democratización en Cuba, apoyo incondicional a las resoluciones coercitivas propuestas en la ONU por el gobierno norteamericano y su separación del Movimiento No-alineado; en Yugoslavia con el envío de efectivos como "casco azul" de las NU, lucha antidrogas, apertura total de la economía, etc.)

Asimismo, el nuevo gobierno impulsó el acercamiento con sus vecinos geográficos que se ha traducido en avances en la consolidación del denominado Mercado del Sur (MERCOSUR). Entre otros principales resultados de su política externa, el gobierno de Menem promovió un acercamiento con la Gran Bretaña. Esto se tradujo en el restablecimiento de relaciones diplomáticas en marzo de 1990 y el levantamiento de la "zona de exclusión" de 150 millas adoptada por el gobierno británico en torno a las Islas Malvinas, pero sin renunciar, Argentina, a sus reclamos de soberanía sobre dichas islas. Este restablecimiento, permitió un mejoramiento de sus relaciones con la CE ejemplificadas con la concreción de un acuerdo de cooperación económica y, en resumen, con los países más desarrollados a fin de facilitar su reinsertión en la comunidad internacional para superar la ruptura que significó el conflicto de las Malvinas.

Los primeros resultados del plan económico de emergencia, lograron reducir el índice hiperinflacionario durante los primeros meses posteriores a la toma del poder del nuevo gobierno. Sin embargo, continuaron prevaleciendo las deficiencias para atacar de fondo el problema de la limitada recaudación fiscal, que no fue suficiente con los aumentos de bienes y servicios públicos aplicados con el inicio del plan de choque y limitados aún más por los niveles de inflación, así como la lentitud de la llegada de la inversión extranjera y la virtual congelación de créditos por parte de la banca internacional. A este marco se sumaron elementos negativos que escapan al control mismo del gobierno, como fue la disminución de divisas por concepto de exportaciones de productos primarios a causa de fenómenos naturales negativos

El fracaso de las medidas contenidas en el plan de choque se evidenciaron cuando a finales de 1989 la inflación recuperó su ritmo ascendente. Al finalizar ese año la inflación se ubicó en 4000% anual. A pesar de las continuas modificaciones de éste, la limitada recuperación de los salarios propició un aumento en la demanda de dólares que el Banco Central no podía satisfacer, generando la formación del mercado negro que eliminó la paridad cambiaria oficial que fue congelada. Esto originó una mayor especulación de divisas y por ende mayores perspectivas para una devaluación y sus consecuencias en el ritmo inflacionario. A esto se sumó la incertidumbre de si la política tributaria basada en el aumento de precios de bienes y servicios públicos era suficiente para reducir a niveles aceptables el grave déficit fiscal, y los efectos de la política de despidos masivos de empleados estatales y de reducción general del gasto público.

Para el gobierno de Menem, el fracaso de su primer intento por reordenar la economía tuvo consecuencias negativas para su imagen en el aspecto netamente económico pero, ciertamente positivas en el plano político a mediano plazo. Al delegar el Ministerio de Economía a los directivos de una multinacional (Bunge and Born) con capacidad de influencia en el desarrollo de la política económica, este fracaso se tradujo en un desprestigio e ineficiencia de la derecha para solucionar la grave crisis económica. Este

acuerdo con la derecha, sin precedentes para un gobierno justicialista, al comprobar la ineficacia de la política económica, Menem logró recuperar un mayor margen de acción en materia económica.

La respuesta de gobierno de Menem a este nuevo marco de crisis, fue la designación de un Ministro de su total confianza para encargarse de la política económica. Para enfrentar la crisis, a principios de 1990 el gobierno instrumentó nuevas medidas restrictivas a pesar del descontento que continuaron produciendo en diversos sectores de la población.

El plan económico original fue sujeto a nuevas reformulaciones: se introdujo la liberación del mercado cambiario y de los precios de productos de consumo básico, desincorporación de empresas estatales y el despido masivo de trabajadores al servicio del Estado, y una mayor limitación del ya reducido gasto público. Sin embargo, la reducción de la oferta de divisas y de inversión pública significaron un aumento desproporcionado de la cotización del dólar en el mercado negro, la especulación y la contracción a niveles mínimos de la producción industrial.

Durante 1990, la política de privatizaciones anunciada por el gobierno recibió mayor atención. Al efecto, durante ese año se logró concretar la venta de la empresa estatal telefónica ENTEL y de la línea aérea estatal Aerolíneas Argentinas, entre las más importantes, cuya entrada de divisas apoyó la aplicación de nuevas modificaciones al plan económico. La venta de ambas empresas, significó para el Estado la reducción de su déficit fiscal y de una parte, aunque no muy significativa, de su deuda externa. Las ganancias producidas por la privatización de estas empresas, fueron limitadas debido a los atrasos en el pago de intereses, suspendidos en este período. Pero la recepción de estos recursos por parte de la banca acreedora en títulos de recompra de deuda externa, posibilitaron el inicio de negociaciones para la reestructuración de la deuda externa argentina.

La cancelación de adeudos posibilitó la reinsertión argentina a los mercados financieros internacionales, mediante la colocación de bonos de su deuda externa a plazos definidos. El reinicio de las negociaciones abarcó casi dos años, cuando en marzo de 1992 Argentina logró una reestructuración, en el marco del Plan Brady, en condiciones favorables, de su deuda externa y la concreción de un préstamo del FMI por más de 3.500 millones de dólares.

El éxito de estas negociaciones no fue, sin embargo, fácil de realizar. Durante 1990 y 1991, el gobierno debió seguir aplicando modificaciones periódicas a su política económica. El objetivo se centró en cumplir con las condiciones impuestas por la banca acreedora para el otorgamiento de nuevos créditos. Para ello se acentuó la política de adelgazamiento del Estado con el despido masivo de burócratas, la venta de empresas estatales y la inversión privada en otras, eliminación de subsidios y de inversión en obras públicas, contención de los salarios y liberalización de precios en bienes y servicios públicos y alimentos.

La oposición de los sectores laborales a la política económica y de la población en general, se mantuvieron vigentes. Como muestra, continuaron en ascenso durante 1990 los saqueos de almacenes en la capital y el interior del país ante el desabasto y la especulación. Los costos sociales originados por la política de austeridad total, fueron tomados como elementos de la CGT para criticar al gobierno del Presidente Menem, en el sentido de su alejamiento de los lineamientos tradicionales del peronismo.

Esta oposición de la CGT, traducida en paros y huelgas en demanda de reivindicaciones salariales, tuvo la respuesta del gobierno al decretarse la limitación al derecho de huelga en sectores considerados esenciales (telecomunicaciones, abastecimiento de energéticos, salud, educación, entre otros) y la facultad de declarar ilegales dichos movimientos amenazando con el despido definitivo a los trabajadores que se adhirieran a esta forma de protesta a la decisiones gubernamentales.

Para restringir la capacidad de los líderes sindicales, el gobierno de Menem incorporó en sus filas a dirigentes gremiales para que, contando con una mayor cuota de poder, pudieran formular recomendaciones en materia laboral a las autoridades oficiales. Esta posición, fue enmarcada dentro de la política de conciliación nacional que Carlos Menem incluyó en su discurso político.

El plan antiinflacionario y de estabilización, fue sujeto a modificaciones de acuerdo a la evolución de la economía que continuó siendo negativa. A principios de 1991, junto con la sustitución del titular del Ministerio de Economía, se reformuló la estrategia de la política económica del gobierno. Acorde con sus lineamientos de reducción de la intervención del Estado en la economía y a su carácter de regulador de los procesos económicos que vino desarrollando por mas de seis décadas, fue decretado el establecimiento de una paridad cambiaria fija de 10 mil australes por un dólar, sujeta a modificaciones de acuerdo a la evolución de la economía, la readopción del peso como moneda oficial (un peso igual a un dólar) y reconocimiento del dólar como segunda moneda de curso legal. Estas medidas fueron bautizadas como Plan Cavallo I y II -por el nombre de su autor el nuevo Ministro de Economía Domingo Cavallo- o "Plan de Convertibilidad".

El citado plan antiinflacionario, centra su estrategia en la eliminación -por ley- de la emisión monetaria del Banco Central para financiar déficits fiscales y la lucha contra la evasión fiscal. Esto se sumó al logro de un préstamo stand by por parte de la banca comercial en julio de 1991 por 1040 millones de dólares en el marco de las negociaciones de reestructuración de su deuda externa bajo los lineamientos del Plan Brady. La continuación de la contención casi total de los salarios y la política de adelgazamiento del Estado y de restricción del gasto público, logró reducir los niveles de inflación a un dígito en los meses siguientes.

Esta recuperación, débil en su estabilidad, se tradujo en apoyo político al oficialismo. Las elecciones parciales celebradas en septiembre de ese año, dieron el triunfo al justicialismo en detrimento de la UCR, principal partido de oposición. Sin embargo, los

logros relativos de la política económica, se han visto limitados por las continuas denuncias de supuestos actos de corrupción practicados no sólo por funcionarios gubernamentales a todos los niveles -para lo cual el Ejecutivo promovió la aplicación de un plan de control patrimonial de servidores públicos-, las cuales incluyen a familiares del propio Mandatario en cuestiones de narcotráfico internacional. A esto se suma la inestabilidad familiar del Presidente Menem quien escenificó altercados públicos con su ahora ex-esposa Zulema Yoma -que se ha convertido en uno de sus más severos críticos-.

A pesar de que durante su administración el gobierno de Menem se ha visto envuelto en escándalos políticos motivados por denuncias de corrupción, el haber logrado eliminar los altos índices de inflación y su misma personalidad excéntrica, han limitado los efectos negativos de tales escándalos en su imagen política. Los acuerdos con la banca acreedora para reestructurar su deuda externa y la concesión de nuevos créditos, aunado a su política de apertura de la economía que ha beneficiado a los sectores económicos más importantes tanto internos como externos y de privatizaciones y la promoción de una nueva política fiscal, se han conjugado para colocar a Argentina en un marco de recuperación, aunque relativa.

La población en general sigue manteniendo una actitud desafiante y de disconformidad con su situación económica. El gobierno justicialista está consciente de ello, pero por el momento se ha visto incapaz de aplicar una política redistributiva de grandes proporciones para limitar las protestas del pueblo argentino en contra de la política aperturista y recesiva. Sin embargo, el panorama económico desde el punto de vista de las actuales autoridades es promisorio en el mediano plazo. Esta débil recuperación, ha vuelto a resurgir el carácter egocéntrico argentino y su convicción de que su política es la correcta a pesar de la oposición de diversos sectores políticos y sociales.

En este sentido se inserta la intención de Menem por promover una enmienda constitucional que permita la reelección presidencial. Sin embargo, esta posición ha chocado con la posición del pueblo argentino y de la oposición, lo cual ha sido tomado por el gobierno como un desafío a su autoridad y como una expresión negativa a su actuación política en materia económica.

Si bien es cierto que el ritmo inflacionario se ha ubicado en niveles del 1% mensual durante los últimos meses, esta estabilidad se ha visto amenazada por una sobrevaluación del peso. Esto se ha traducido en un aumento de las importaciones y una baja en las exportaciones, que de seguir este ritmo podrían generar serios déficits fiscales y su incidencia en el proceso inflacionario. Asimismo, se han mantenido las protestas sociales como la del sector educativo en demanda de mayores presupuestos para la educación pública. Aquí cabría resaltar la actitud del Presidente Menem, quien señaló que de continuar este tipo de protestas, declaró que estas situaciones podrían motivar nuevos contingentes de madres reclamando por sus hijos.

Esta actitud, que propició la reacción de rechazó de los sectores políticos y sociales, podrían mostrar que la población sigue manteniendo un escepticismo respecto a la evolución económica del país que el mismo gobierno intenta ubicar dentro de la

recuperación definitiva del país y manifestada con el rechazo a la eventual aprobación de la enmienda constitucional, promovida por el Ejecutivo, que permita la reelección. Asimismo, este hecho demuestra que la actual estrategia política del gobierno por imprimir un marco de plena recuperación, misma que no ha alcanzado a ver sus efectos en grandes sectores de la población, se enfrenta la imposibilidad de Menem para hacer frente a los legítimos reclamos sociales, sin afectar la política económica impuesta por la banca internacional para cumplir con las obligaciones contraídas en materia de deuda externa y concesión de nuevos créditos.

## CONCLUSIONES

Para los países de América Latina la década de los ochenta representa un período de estancamiento económico en un marco de recesión generalizada y, en el aspecto político, la vuelta al poder de los civiles después de haber sido gobernados por regímenes militares de corte autoritario. En este período, el escenario político latinoamericano, así como el internacional varió sustancialmente.

Después de un prolongado período en el que predominaron los regímenes militares, al finalizar dicha década, la mayoría de los países de la región estaban gobernados por mandatos constitucionales. Asimismo, en el ámbito económico la situación fue menos favorable. A esta década ya se le considera como la década pérdida en cuanto a desarrollo económico se refiere.

En el ámbito internacional, diversos factores flexibilizaron el contexto de guerra fría que predominó en las anteriores cinco décadas. Entre estos destacan la desaparición del bloque ideológico representado por la Unión Soviética, la reunificación alemana y la consolidación de bloques económicos de influencia mundial, ej. CE, el desarrollo económico del Japón y la reunificación alemana. Asimismo, se observa un resurgimiento de los movimientos nacionalistas, algunos de los cuales se han traducido en violentos conflictos interétnicos de graves proporciones.

La conclusión aparente del esquema de "Guerra fría" y el establecimiento de un sistema multipolar en el aspecto económico y unipolar en el aspecto militar encabezado por Estados Unidos, está conformándose como el regreso de la influencia decisoria norteamericana en la conformación del nuevo contexto internacional. En el ámbito regional, la exitosa represión violenta de la mayoría de los movimientos guerrilleros en América Latina por parte de los militares, en especial en el Cono Sur, y la deslegitimación del mantenimiento del poder de éstos, así como el agravamiento de la crisis económica, conformaron el preámbulo para la reincorporación de los civiles al poder político.

Otros factores se suman al de la eliminación de la guerrilla para dicha reincorporación. La amenaza que podría representar Cuba socialista -y en un período Nicaragua- con la desaparición del principal sostén ideológico del comunismo a nivel mundial, al parecer se ha desvanecido y desvirtuado. Por ende, para los gobiernos establecidos, ha sido eliminado el argumento anticomunista como justificante del accionar político de los militares en contra de los movimientos insurgentes que se desarrollaban en la región.

En el ámbito económico, la situación de América Latina sigue manteniendo un balance desfavorable. La crisis económica internacional que se profundiza a partir de la década de los ochenta, es el resultado del agotamiento de la capacidad de liquidez de los países centrales como consecuencia del aumento sustancial de los precios internacionales del petróleo en 1973. Esta situación, afectó la capacidad económica de aquellos para continuar el flujo de capital hacia los países en desarrollo que mantienen una situación de excesivo endeudamiento, incluidos los de América Latina.



Esta crisis, se tradujo en una interrupción de la producción y el empleo que significó la restricción de la liquidez de los países centrales. Dicha restricción crediticia, se combinó con la necesidad de los países en desarrollo de mantener el ritmo de las importaciones necesarias para sostener su crecimiento. Al interrumpirse parcialmente el flujo de capital, estos países debieron concertar acuerdos que se tradujeron en un mayor endeudamiento.

En efecto, el auge de la liquidez en los países centrales en la década de los setenta ante la imposibilidad de los países industrializados para absorber tales recursos, fueron destinados a los países en desarrollo, especialmente de América Latina. La crisis petrolera de 1973, para la que muchos no estaban preparados, significó la restricción cuantitativa de la capacidad de los primeros para mantener el flujo de capitales hacia los segundos para sostener su ritmo de crecimiento.

Esta interrupción, dio paso al endurecimiento de los mercados de exportación de los países de América Latina. Asimismo, los países de la región debieron adoptar políticas recesivas que se han traducido en inestabilidad política y manifestaciones sociales de descontento que en muchas ocasiones incluyen el uso de la violencia.

A este marco se suma la anotada desaparición del bloque socialista y los problemas económicos que afectan su misma sobrevivencia como Estados, situación que ha desviado la atención de los países industrializados a los problemas de la región latinoamericana. Esta preocupación, derivada del surgimiento de repúblicas independientes agrupadas en la CEI, se centra en la posesión de las armas nucleares antes controladas por un poder centralizado. Por ello, la necesidad de apoyar la reactivación económica de estos países y la búsqueda de un nuevo equilibrio en materia de armamento nuclear, se ha traducido en una menor atención por parte de Estados Unidos a los problemas económicos de la región al distraer dichos recursos a otras áreas del mundo.

Por otro lado, el desarrollo dependiente y desigual al interior de los países de América Latina que tradicionalmente han mantenido respecto del exterior, refleja que el estado de subdesarrollo sigue vigente como resultado de la incapacidad de la región para desarrollarse en forma autónoma. El no haber superado esta condición, les ha hecho vulnerables a las variaciones económicas y coyunturas internacionales negativas por lo que esta condición de subdesarrollo dependiente se ha convertido en un elemento motor de crisis permanente.

Esta crisis de mayores proporciones, se da en un marco de crisis económica generalizada. Esto se ha traducido en la aplicación de políticas económicas de recesión para hacer frente a las obligaciones y exigencias dictadas por los organismos financieros internacionales respecto a la deuda externa. Al respecto en no pocas ocasiones los intentos de renegociación para acceder a términos más favorables al otorgamiento de préstamos, se llevan a cabo en un marco de incumplimiento en el pago de intereses. Lo anterior, aunque ello represente altísimos costos socioeconómicos en términos de producción, empleo y nivel de vida de las clases bajas que generalmente han sido las más afectadas.

Para América latina, esta crisis se ha traducido en inestabilidad política y desorden sociopolítico. Las principales manifestaciones en el aspecto político, se ejemplifican en el establecimiento de regímenes de corte militar, en muchas ocasiones de tendencia represiva y regresiva en cuanto a las desigualdades económicas y sociales.

En América Latina, el gradualismo que tendió a una militarización del Estado latinoamericano, está íntimamente ligado a las crisis económicas que han padecido los países de la región y la incapacidad de los regímenes tanto civiles como militares para concertar acciones conjuntas que conlleven a una efectiva solución de su problemática nacional. No sería acertado hacer una comparación en términos de igualdad de los diversos regímenes militares instalados durante las décadas de 1960 y 1970. Es decir, no podríamos comparar la dictadura uruguaya o boliviana (período de 1980) con la del Brasil y Perú, o la de éstas con la que gobernó Argentina durante 1987 y 1983.

Estos regímenes mantienen características y marcos de acción políticas diferenciados. En casos como Brasil y Perú prevaleció el carácter desarrollista que tuvo cierto éxito en el impulso de la economía nacional -pero sin excluir su carácter impositivo-. En contraparte, en caso como Argentina o Uruguay, prevaleció un "fin defensivo mayor" a la amenaza representada por los movimientos guerrilleros que actuaban en sus respectivos países, ante la incapacidad de los civiles por controlar la crítica situación sociopolítica y económica en el marco de la constitucionalidad. Estos ejemplos, muestran una característica común para los países de la región: la participación e influencia, variante según el caso, de los militares en la conducción de la vida política nacional.

En esta progresiva militarización del Estado latinoamericano intervienen factores internos y externos. La profesionalización de los ejércitos latinoamericanos y los intentos de los gobiernos norteamericanos para homogeneizar dichos ejércitos para cumplir funciones efectivas de defensa y contención de la "amenaza comunista" dentro del contexto de guerra fría surgido de la segunda posguerra, se relaciona con la percepción norteamericana enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta profesionalización, permitió a las fuerzas armadas latinoamericanas adoptar un papel más activo en la formulación de la política de defensa nacional y un reacomodo de sus relaciones con el gobierno civil.

En principio, esta profesionalización fue tomada como un elemento importante en la consolidación del Estado democrático en la región. Sin embargo, coyunturas externas como la inserción de América latina dentro del marco de guerra fría -consolidación de la revolución cubana y su definición como socialista, la crisis de los misiles de 1962 y los intentos de exportación de la ideología cubana hacia el Continente- poco a poco relegaron en la fuerza armada la citada tarea de contención del comunismo en su faceta de guerrilla urbana y rural. Asimismo, la crisis económica generalizada y su profundización durante la segunda mitad de la década de 1970 y primera de 1980, se combinó con la inserción plena de los militares en la conducción política y económica de sus respectivos países. A este marco, se sumó la permanencia de conflictos territoriales intralatinamericanos que no se han resuelto en forma definitiva.

Este nuevo militarismo, como se ha señalado en el trabajo, sustituyó la percepción de ejércitos dominados por el caudillaje. A partir de la segunda posguerra, los militares se dirigieron a una institucionalización del la fuerza armada. El poder ahora era detentado por el ejército como institución, con capacidad de insertarse en todos los ámbitos de la vida nacional.

En el caso de estudio, el militarismo argentino hasta principios de siglo estuvo dominado por pequeñas facciones, lideradas por caudillos, cuyo prestigio y rango emanaba de sus hazañas militares. La progresiva profesionalización de las fuerzas armadas argentinas modificó esta concepción. Ahora, el rango y el prestigio militar depende de la actuación en las escuelas militares, por lo que la carrera militar constituye la base de la institucionalización y autonomía desarrollada por el instituto castrense. La alternancia de poder entre civiles y militares que se ha mantenido en ésta últimas cinco décadas en Argentina, demuestra el carácter temporal que prevalece en los militares cuya intervención se da para reorientar o modificar las políticas nacionales que a su juicio han provocado el desorden interno.

El caso de Argentina puede tomarse como un claro ejemplo donde el caudillismo ha jugado un importante papel en su desarrollo político, y el cual registra una larga e histórica presencia. En este sentido, el ejemplo más reciente de caudillismo lo constituye la figura de Juan Domingo Perón, quien después de su muerte se convirtió en el símbolo más representativo del Justicialismo. La ausencia de líderes carismáticos con suficiente capacidad de convocatoria dentro de las filas justicialistas -y en general en todo el país- desde la desaparición de Perón, significó la paulatina disminución y fragmentación de éstos.

Este ha sido el caso de la República Argentina contemporánea donde la ausencia de líderes con capacidad de convocatoria se ha traducido en inestabilidad política. Durante las últimas décadas, la alternancia en el poder de regímenes militares y civiles ha sido la característica principal de este país. Del período de 1955 (año de la caída del peronismo) a 1973, Argentina escenificó la toma del poder de diez presidentes, entre militares y civiles. Las crisis económicas como común denominador, dieron paso a la formación de democracias frágiles e influenciadas de acuerdo a los intereses de los grupos de presión, destinadas a ser sucedidas por regímenes militares autoritarios.

Con relación a los radicales, durante su mandato Raúl Alfonsín, al final de su gobierno se vio rebasado por los problemas económicos ante el fracaso de las medidas que adoptó para contrarrestarlos. Así, gradualmente se evidenció su incapacidad de convertirse en un líder con carisma y atracción personal; lo cual le hubiera significado la consolidación de la hegemonía radicalista en una etapa de total desprestigio de las fuerzas armadas y de división del peronismo.

El regreso del peronismo al poder en la figura de Carlos Saúl Menem, marca una renovación del justicialismo que ha roto con los lineamientos tradicionales de la doctrina peronista. Su actitud populista con una gran explotación de su imagen, no como político

haciéndose propaganda sino como integrante de la sociedad argentina, puede explicarse en gran medida por la necesidad de llenar el vacío dejado por los anteriores caudillos. Ello, en un país con un régimen político poco consolidado, donde la personalidad de los dirigentes juega un papel de primer orden.

En el ámbito externo, el desarrollo económico de la Argentina le permitió adoptar en el pasado recientes posiciones que con frecuencia chocaron con la política de los gobiernos norteamericanos que tendían a la subordinación. En el aspecto militar, Argentina mantenía relaciones militares con Alemania -país con gran influencia en la formación de las fuerzas armadas de la primera a principios de siglo la cual se rompe en la década de los cuarenta- y adoptaba políticas que favorecieran su predominio en el Cono Sur. Esta posición solidificada en su desarrollo económico, se rompe con la progresiva entrada Argentina a la recesión y estancamiento económico producto de su inestabilidad política.

El legado peronista puede tomarse como punto de partida. Perón al allegarse el apoyo de las amplias mayorías agrupadas en los sectores obreros por medio de una política laboral ampliamente favorable, marcó el inicio de una etapa de capital importancia en el desarrollo político argentino que aún tiene efectos en la actualidad. Este legado puede enmarcarse en la formación de una burocracia militar y estatal cuya maquinaria productiva poco a poco fue conducida a su desarticulación como resultado del excesivo paternalismo estatal y el mantenimiento de una nómina exagerada que absorbía gran parte del Presupuesto Nacional.

Los posteriores gobiernos después de la caída de Perón, tanto los que dirigieron sus esfuerzos por eliminar totalmente la influencia de la ideología peronista, como aquellos que buscaron la reincorporación de éstos a la vida política nacional; tuvieron en común su incapacidad para incorporar a las masas peronistas dentro de un acuerdo nacional. El enfrentamiento entre las diversas facciones políticas y sociales con influencia obstruccionista, en forma gradual orillaron al país al desorden generalizado. Esto imposibilitó la formulación de políticas nacionales concertadas que legitimaran el discurso político que hacía referencia a la consolidación de la democracia en Argentina, bajo un gobierno constitucional elegido por voto popular directo. El mantenimiento de los diversos regímenes civiles y militares, sólo se diferenciaron por el grado de autoritarismo utilizado contra sus opositores. Este enfrentamiento estéril, ha sido una característica permanente no solo de Argentina, sino de la mayoría de los países de la región.

A pesar del marco de crisis generalizada, durante la década de los ochenta se observa una vuelta al poder de los civiles en los países de la región. Este auge de vuelta a la constitucionalidad, conocido como "proceso de redemocratización de América Latina", despertó expectativas favorables, sin precedentes, de apoyo a la democracia en Latinoamérica. A partir de ese momento, el discurso político latinoamericano se orientó a destacar las virtudes de la democracia recién instalada en los países de la región. Los nuevos mandatarios, explotaron en su retórica que la emergente democracia en la mayoría de los países de la región, era el elemento impulsor de los renovados intentos de integración de América Latina.

De esta forma, surgieron nuevas instancias de negociación regional (Grupo de Río, Grupo de los Tres, MERCOSUR) y se fortalecieron los ya existentes (Pacto Andino, ALADI, etc.). Invariablemente, los gobiernos latinoamericanos incluyeron en su discurso político la necesidad de avanzar hacia la integración latinoamericana, ante el cambio estructural de la economía internacional hacia la globalización bajo los principios de libre mercado. Esta necesidad, estriba en el imperativo de evitar la marginalización de América Latina en los cambios observados en la conformación del nuevo esquema internacional y, al mismo tiempo, de no aceptar el rol de subordinación que tradicionalmente se le ha impuesto.

Las citadas instancias regionales de negociación, son un signo positivo en los intentos integracionistas. Sin embargo, estos intentos han sido limitados por diversos factores políticos y económicos. En este sentido, los regímenes civiles se han enfrentado a agudos problemas que requieren de solución inmediata y que exigen los pueblos latinoamericanos que hasta el momento no han podido ser conciliadas. La deuda externa y sus condiciones de pago, se ha convertido en el principal freno a las políticas de desarrollo nacional instrumentadas por los países de la región y como consecuencia, el desaliento a las expectativas de reinicio del crecimiento económico.

Tanto Argentina como los demás países de la región han comprobado que el establecimiento de la democracia no es el elemento que por si solo resolverá los graves problemas de diversa índole que enfrentan. A pesar de este auge de regímenes constitucionales, la necesidad de aplicar políticas fondomonetaristas para hacer frente al abultado servicio de la deuda externa, ha despertado el resentimiento de las mayorías y las expresiones de nacionalismo han degenerado en movimientos de protesta que ponen en peligro la débil institucionalidad de los gobiernos latinoamericanos.

Asimismo, la fragilidad de los gobiernos civiles sigue patente en virtud de la permanencia de sustanciales desigualdades económicas al interior de los respectivos países y entre los mismos Estados latinoamericanos. Este marco, ha favorecido la permanencia de los militares como grupo de presión en tanto se afecten sus intereses y su institucionalidad con capacidad de desestabilización, a pesar del desprestigio en que cayeron y la formación de grupos nacionalistas que en ocasiones utilizan la violencia como forma de lucha contra una política dada.

Este proceso, en el caso de Argentina que Guillermo O'Donnell define como democratización por colapso, fue el resultado de la incapacidad de los militares por reorganizarse en gobierno para hacer frente a las consecuencias de la Guerra de las Malvinas. Pese a este desprestigio, el repliegue de los militares no fue un signo de debilidad, sino una forma de reorganizarse con base en su verticalidad para mantener su autonomía e institucionalidad.

El nuevo gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, puede tomarse como un ejemplo de la capacidad de los militares para obstaculizar los intentos de subordinación al poder civil en tanto se afecten sus intereses, su verticalidad y su cuerpo institucional. Al

mismo tiempo, esta derrota significó para los militares argentinos la necesidad de profesionalización de sus cuadros mediante una retirada de su actuación política cuya herencia política y económica era sustancialmente negativa al nuevo régimen.

La actual situación latinoamericana, por otro lado, está dando paso a la deslegitimación del discurso latinoamericano caracterizado por su convocatoria integracionista con base en la consolidación de la democracia. Los actuales acontecimientos ej. Perú, Venezuela y Brasil, muestran una realidad caracterizada por la inestabilidad política provocada por el revanchismo, el enfrentamiento estéril y el alto grado de corrupción practicados por los diversos regímenes. Durante el período posterior a la vuelta a la constitucionalidad, los gobiernos latinoamericanos incluían en su retórica el marco de "consolidación de la democracia en el Continente". Las reuniones al más alto nivel en la región, hablaban de su esperanza de que esta redemocratización, debía revivir la vigencia de la ideas integracionistas abanderadas por Simón Bolívar para la unificación de los pueblos latinoamericanos bajo las normas de la democracia representativa.

Sin embargo, esta retórica lamentablemente estaba signada más por la esperanza que por la convicción. El desarrollo desigual de los países de la región, la percepción diferenciada para abordar los problemas de seguridad intralatinamericana, intereses geoeconómicos distintos y políticas encontradas para mantener y acrecentar las áreas de influencia, así como la visión igualmente distinta para adoptar una posición en un conflicto determinado que incluya a un país latinoamericano, se han convertido en elementos que obstaculizan dichos intentos integracionistas.

No pueden soslayarse los intentos que en ese sentido han realizado los países de la región. El establecimiento del MERCOSUR, el Grupo de los Tres -que debe enfrentar ahora la crítica situación sociopolítica y militar que enfrenta el gobierno venezolano y que está amenazando su estabilidad institucional-, el pacto Andino -que igualmente enfrenta actualmente la inestabilidad política del Perú-, la ampliación del Grupo de Río en cuanto a sus miembros y como canal de negociación latinoamericana, son signos de este avance.

La Argentina como miembro de este grupo de naciones, enfrentó con gran intensidad un marco de inestabilidad aún durante el nuevo gobierno constitucional inaugurado en diciembre de 1983. Las consecuencias de la guerra de las Malvinas, modificaron sustancialmente el carácter aislacionista y de enfrentamiento esgrimido por los militares. Como se ha señalado en el trabajo, el gobierno constitucional en su actuación internacional mantiene una área rescatable en su formulación hacia América Latina. La política exterior se dirigió a derribar dicha imagen argentina de aislacionismo para con los países de la región y en especial con su vecinos geográficos.

No obstante, este gobierno se vio rebasado por el marco crisis generalizada y desconfianza interna que gradualmente lo orillaron al derrumbe total. La actitud desafiante de los sectores de la población neutralizó a las medidas propuestas por el gobierno radical para lograr una solución definitiva y satisfactoria para los problemas económicos heredados de la dictadura. Al mismo tiempo, la política contradictoria hacia el tema de la violación de los derechos humanos por la actuación de los militares en relación a la denominada "guerra

sucia", significaron el rompimiento de la autoridad de los resortes institucionales y la aplicación de medidas que en el mayoría de las ocasiones fueron obstaculizadas por los diversos grupos de presión.

El establecimiento de una democracia representativa en el caso de Argentina y en otros pueblos de la región, sigue siendo una expectativa. El presente trabajo no intenta hacer una definición acabada del concepto de democracia, hacerlo sería iniciar discusiones acerca de las múltiples definiciones que se le han imputado por los diferentes pensadores e ideólogos. El mismo concepto, al entrañar la discusión de elementos objetivos y subjetivos, significa un moldeo de la definición de acuerdo con intereses propios, costumbres y modos de vida. Como ejemplo, Estados Unidos mantiene un concepto y visión de lo que significa democracia -libre circulación de capitales, trasnacionalización de las economías en detrimento del Estado nacional, explotación para beneficio propio de los recursos naturales de un país determinado sin obstáculos, etc.- que no es por mucho compartida por los países de la región.

Se parte de la base de una democracia no solo en el aspecto conceptual. A lo largo de la historia, el concepto democracia como sistema político ha sido modificado y adaptado a circunstancias y estructuras particulares de acuerdo a la política del poder. En este sentido se asocian las distorsiones a las que han sido sujetos los diferentes tipos de gobierno en el desarrollo histórico de los Estados. En la actualidad, de los denominados sistemas puros (republicanismo, socialismo, monarquía, entre otros) se han deformado en monarquías constitucionales, autoritarismo, populismo, etc.

Como característica, ningún tipo de gobierno de los citados, incluso el comunista, rechaza el concepto de democracia. En todos los sistemas de gobierno citados y aún los faltantes, no niegan a la democracia. Al contrario, la defienden como un fin en sí de su sistema político. Aquí entran las percepciones y visiones particulares de cada grupo por aplicar desde su perspectiva lo que significa la democracia. Tratar de hacer una conciliación de estas percepciones, conllevaría a discusiones y estudios que derivarían en la escritura de numerosas paginas explicando posiciones y refutaciones.

El título del presente trabajo también se refiere a los obstáculos que ha enfrentado, no sólo en Argentina sino en toda la región, el desarrollo del proceso democrático. En este sentido, la democracia entendida como la participación real y efectiva de toda la sociedad dividida en grupos políticos, económicos, sociales y militares; sin restricciones y dirigida a conformar un proyecto nacional negociado y concertado que descarte el afejo revanchismo, división y enfrentamiento estéril que ha prevalecido no sólo en Argentina sino en la mayoría de los países de América Latina, no ha podido ser aplicada en la mayoría de las ocasiones.

En Argentina, la elección por segunda vez consecutiva de un nuevo Presidente por medio del sufragio directo y la transmisión más o menos ordenada del poder, es un hecho positivo para ésta, no obstante el marco conflictivo en que se llevó a cabo. Este relevo, demostró que pese a sus dificultades el pueblo argentino está aprendiendo a vivir bajo el marco de la constitucionalidad y lo que ello significa respecto a la actuación de sus

autoridades en la solución de la diversa problemática argentina -nación que se acostumbró al tipo de gobierno que regía por medio del decreto-. Este argumento, puede reforzarse en el hecho de que muchos de los problemas de la Argentina actual se derivan de su incapacidad para conformar un verdadero proyecto nacional de desarrollo concertado, que agrupe a todos los grupos de presión, políticos y sociales, con incidencia en la vida nacional.

Como puede observarse en el trabajo desarrollado, la mayoría de los intentos de los distintos gobiernos por llamar a un acuerdo de conciliación nacional -incluido el de Raúl Alfonsín-, siempre estuvo obstaculizado por los grupos de presión que no comulgaban con el régimen en turno. Estos grupos, desarrollaron una incuestionable capacidad obstruccionista, pero al mismo tiempo eran incapaces de poner en marcha sus propios modelos de desarrollo. Este es el círculo vicioso que el actual gobierno argentino intenta romper.

Asimismo, en la Argentina como en la mayoría de los países de la región que enfrentan una influencia en la conducción política por parte de los militares, debe realizarse una modificación del patrón de comportamiento en las relaciones cívico-militares. En muchas ocasiones, los golpes de Estado llevados a cabo por los militares para deponer al gobierno en ejercicio, contaron con la aprobación implícita de los civiles. En el caso de Argentina se cuentan el golpe militar de 1955, 1966 y el de 1976, por lo cual se consideran como golpes cívico-militares.

En este sentido, esta percepción necesariamente obliga a la búsqueda de soluciones satisfactorias para todos los grupos de presión no solo dentro del estamento militar, sino también al interior de la sociedad argentina como actor pasivo y complaciente en algunas ocasiones de la intervención política de los militares. Esta militarización gradual del Estado latinoamericano, sólo fue el reflejo de las profundas contradicciones internas que aún permanecen en el panorama político latinoamericano caracterizado por el enfrentamiento.

Para los gobiernos latinoamericanos, es imprescindible reforzar sus vínculos económicos y políticos. A pesar de que la tan ansiada integración enfrenta obstáculos políticos difíciles de superar, en el aspecto económico pueden darse avances importantes. Para acceder a una verdadera integración, será necesario para los gobiernos en turno lograr la estabilidad política y económica de su respectivo país. Dicha integración no será posible, en tanto subsista una dependencia económica respecto del exterior y entre los propios países latinoamericanos y, con base en esta dependencia, deban alinearse a una política global impulsada en este caso, por Estados Unidos.

Asimismo, los Estados de la región deberán impulsar aún más su cooperación con los países de la región menos desarrollados. Es decir, que los intentos de integración deben estar precedidos por la consolidación de grupos regionales de países que mantengan una estabilidad interna y la eliminación de disputas territoriales intralatinamericanas que permanecen vigentes. Consolidado lo anterior, este marco regional debe ser una precondition para iniciarse acciones y búsqueda de políticas comunes que tiendan a la



integración global de América Latina. Esta estabilidad, incluye la formación de patrones de conducta que tiendan a eliminar los enfrentamientos, al obstruccionismo y al revanchismo político.

Abundando en la cuestión de la relaciones cívico militares, las acciones de los gobiernos constitucionales en esta materia deben orientarse a lograr la efectiva subordinación del estamento militar a la autoridad civil. En definitiva esta subordinación real es un paso difícil en la actual coyuntura latinoamericana. Los intentos del gobierno de Alfonsín al respecto, en principio lograron importantes avances, pero en tanto no se cuestionaba la actuación militar en la represión institucionalizada hacia los grupos de oposición.

De esta forma, los gobiernos constitucionales enfrentan una problemática agudizada por la situación económica en momentos en que es necesario consolidar a las instituciones democráticas de la nación. Al mismo tiempo, la emergencia de problemas de alcance internacional como la producción y el tráfico ilegal de drogas, de armas, etc. en sí se han convertido en problemas de alcance internacional con incidencia negativa en los sistemas políticos nacionales. La combinación explosiva de problemas económicos, sociales y militares requiere, por tanto, el establecimiento de nuevas pautas de comportamiento de los principales grupos de presión al interior de cada país.

Las acciones para enfrentar al narcotráfico y sus derivaciones como el narcoterrorismo, requieren necesariamente de la actuación de los grupos militares y policiales. Este dilema es significativo, en momentos en que las fuerzas armadas en los países de América Latina son considerados como un elemento de carácter negativo y generadores de desconfianza en la población. Por ello, cada gobierno debe iniciar acciones que los vinculen al fortalecimiento del régimen constitucional, por ejemplo y en este caso en la lucha antidrogas, con objeto de evitar la reedición generalizada de nuevos gobiernos militares en el Continente.

En el caso de Argentina, el indulto generalizado de los militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos, incluidos líderes guerrilleros, es una medida que tiende a eliminar uno de los principales focos de tensión y desestabilización representada por las Fuerzas Armadas. Superado este problema -no sin estar a salvo de las agudas críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las implicaciones que esta decisión tuvo para los militares incluyendo la devolución por parte del Ejecutivo de su facultad de intervenir en caso de "conmoción nacional"-, la actuación gubernamental se ha dirigido a la cuestión económica y el reforzamiento de la presencia argentina en el mundo.

Esta política de "conciliación nacional", demuestra la necesidad que existe en Argentina de llevar a cabo políticas que no siempre contarán con el apoyo generalizado de la población. Sin embargo, en Argentina se está superando, aunque en forma limitada, el clima de enfrentamiento estéril entre los sectores de la población con el gobierno.

El indulto generalizado y la continuación de la política económica de recuperación basada en la privatización de empresas estatales y disminución del gasto público, han sido medidas que han debido adoptarse a pesar de las protestas de la población que ello ha generado. El avance de la democracia en Argentina ha tenido un penoso desarrollo. En este sentido, la aplicación de los programas económicos han debido sortear la oposición de los sectores más afectados, aunque ello no ha impedido su instrumentación.

Asimismo, los gobiernos de la región y no solo de Argentina, deben orientar esfuerzos que estimulen la participación de la población en el desarrollo políticos de sus respectivos países. Se trata de eliminar la apatía política en que han caído los pueblos de la región, lo cual esta generando gobiernos de escasa representatividad y susceptibles de mayor oposición de las mayorías en tanto no se observe una recuperación efectiva de sus precarios niveles de vida.

Actualmente, Argentina observa una recuperación económica importante. Los severos ajustes aplicados por el Gobierno de Menem, se han orientado a eliminar la pesada carga que significaba para el Estado el mantenimiento de una estructura productiva deficiente. Esta recuperación llevada a cabo a un gran costo social, sin embargo, deberá extenderse en forma efectiva a los sectores que más se han visto afectados por la aplicación de dichos programas, a fin de legitimar la imagen de recuperación que pretende imprimir el gobierno justicialista.

Por otra parte, los países latinoamericanos enfrentan en el ámbito de su seguridad el desprestigio del sistema interamericano de defensa englobados en el TIAR, así como de la OEA. La inviabilidad del TIAR quedó demostrada con la guerra de las Malvinas y reforzó la tesis de quienes sostienen la necesidad de un reestructurar a organismo regional, sobre la base del respeto mutuo a la soberanía de los Estados. Asimismo, la región enfrenta un resurgimiento de la política exterior intervencionista del gobierno norteamericano.

Animado por la reconfiguración unipolar en materia militar de Estados Unidos, éste ha reforzado los mecanismos de presión (Cuba) e intervención (Panamá) que refortalezcan su presencia hegemónica para con los países de América Latina. Esta política incluye a otras regiones del mundo en el mantenimiento de su presencia decisoria en la conformación del nuevo esquema internacional (promoción de la paz en Medio Oriente, reformulación de los vínculos con las ex-repúblicas soviéticas, Conflicto IraK-Kuwait, etc.

Este contexto, refuerza la necesidad para los países de la región el crear efectivas alternativas a las soluciones ofrecidas por Estados Unidos en materia económica, ej. Iniciativa de las Américas. En tanto subsistan las graves desigualdades económicas y sociales, el espectro de la inestabilidad y la presencia militar como grupo permanente de presión, los actuales gobiernos latinoamericanos se verán imposibilitados para consolidar las instituciones y el régimen democrático en sus países. En resumen, la solución a la problemática económica puede ser el elemento clave para limitar las presiones sociales y la latente presencia intervencionista de los militares en pro de la conformación de un sistema realmente democrático que agrupe a estas fuerzas políticas.

Por ello, es importante para la región consolidar sus vínculos intrarregionales, a efecto de generar soluciones propias a sus graves problemas. Se trata de romper el carácter quasi permanente de dependencia hacia el exterior, con las consecuencias que ello ha tenido para los Estados latinoamericanos. Esta necesidad, se refuerza con los acontecimientos suscitados en Perú, Venezuela y Haití que están poniendo en riesgo la viabilidad de los gobiernos civiles en la región y la misma retórica integracionista que prevaleció en estos últimos años.

No obstante, este civilismo debe ser una condición para el establecimiento y consolidación de un verdadero proyecto democrático, que defienda y genere un sistema político basado en la justicia y la equidad política, económica y social. Actualmente, los países latinoamericanos muestran una tendencia, limitada vale decir, a la recuperación económica. Sin embargo, esta recuperación se ha llevado a cabo a instancias de sustanciales costos sociales, por lo que esta recuperación debe dirigirse a paliar los extremos niveles de pobreza que se han generado en amplias capas de la población latinoamericana.

Las protestas violentas que aún se escenifican en los países de la región, así como nuevos alzamientos militares Ej. Venezuela y Haití-, hace imperativa la reformulación de políticas económicas dirigidas a restaurar, aunque no en su totalidad por las actuales circunstancias de crisis, el nivel de vida de las mayorías.

## BIBLIOGRAFIA

## I. LIBROS

1. Adams, Willi Paul. Los Estados Unidos de América. Ed. Siglo XXI, México, 1986.
2. Alemann, Roberto. Breve historia de la política económica argentina (1500-1989). Ed. Claridad, S.A. Buenos Aires, 1989.
3. A. Sosa, Rubén. La magia toma el poder en Argentina. Ed. Posada, S.A. México, 1975.
4. Arcila Farías, Eduardo. Reformas económicas del Siglo XVIII en Nueva España: ideas económicas, comercio y régimen de comercio libre. Ed. SepSetentas, no. 117, 1974.
5. Atkins, G. Pope. América Latina en el sistema político Internacional. Ed. Gernica.
6. Atkins, G. Pope; Sudamérica en la década de 1990. Grupo Editor Latinoamericano, colección de estudios internacionales, Argentina 1990.
7. Banco Interamericano de Desarrollo/Instituto para la Integración de América Latina. La integración latinoamericana en la década de los ochenta. Memoria del Seminario sobre integración económica celebrado en el BID en septiembre de 1982, Buenos Aires, Argentina, 1984.
8. Banco Interamericano de Desarrollo/Instituto para la Integración de América Latina. El proceso de integración de América Latina en 1982. Buenos Aires, Argentina, 1983.
9. Bartolomé, Mariano C. Conflictos en el Atlántico Sur en la década del 90. Panorama Internacional, no. 108, 17 de diciembre 1981, Colegio de Mexico.
10. Campobassi, José S. Sarmiento y Mitre: hombres de Mayo y Caseros. Ed. Losada, Buenos Aires, Argentina, 1962.
11. Carranca Trujillo, Raúl. Panorama crítico de Nuestra América. Ed. Imprenta Universitaria, México, 1950.
12. Carranza, Esteban. Fuerzas Armadas y Estado de excepción Ed. Siglo XXI, México, 1978.
13. Castillo Quadri, Mario. La Argentina Descentralizada. Ediciones Universitarias de Buenos Aires (EUDEBA), 1986.

14. Cavalla Rojas, Antonio. Geopolítica y Seguridad Nacional en América. UNAM, 1976.
15. Cavarozzi, Marcelo y Landi Oscar. Ensayo: Argentina, crisis y postración. El Nacional, 18 de abril de 1991, pags. 11-17.
16. Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES). Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica. Ponencias presentadas por varios autores en el Seminario Internacional realizado por CORDES en Quito, Ecuador del 4 al 6 de julio de 1988.
17. Cotler, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, México, 1982.
18. Charles, Gerard. El Control Político en el Cono Sur. Seminario de México, Ed. Siglo XXI, UNAM, 1980.
19. De Vere Larranc, A. Sarmiento: el gran civilizador. Ed. Atlántida, Buenos Aires, Argentina, 1944.
20. Di Tella, Torcuato S. Latin American Politics, a theoretical framework. University of Texas, Press, Austin 1990.
21. Fabela, Isidro Dr. Las Doctrinas Monroe y Drago. Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, México, 1957.
22. Ferrer, Aldo. La economía argentina: las etapas de su desarrollo y problemas actuales. Ed. Fondo de Cultura Económica, FCE, 1965.
23. Forsythe, David P. Derechos Humanos y Política Mundial. Ed. Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), 1988
24. Gibson, Charles. España en América. Ed. Grijalbo, 1977.
25. Gil, Federico Guillermo. Latinoamérica y Estados Unidos. Ed. Tecnos, Madrid, 1975.
26. Gillespie, Richard. Soldados de Perón: Los Montoneros. ED. Grijalbo, Buenos Aires, Argentina, 1987.
27. Halperin Donghi, Tulio. Revolución y Guerra: formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Ed. Siglo XXI, 1979.
28. Johnson J., John. Militares y sociedad en América Latina. ED. Solar. Buenos Aires, 1960.

- 29 Kelly, Philip y Child, Jack. Geopolítica del Cono Sur y la Antártida. Editorial Pleamar, Argentina 1990.
- 30 Lastarria, José Victorino. Unión y Confederación de los pueblos hispanoamericanos. Unión de Universidades de América Latina, México 1979.
- 31 León Manríquez, José L. El Proceso de Reorganización Nacional y los derechos humanos en Argentina, 1976-1983, Cuadernos IMRED, No. 38, noviembre de 1988.
- 32 Levin, Aida Luisa. La OEA y la ONU: relaciones en el campo de la paz y la seguridad. Cuestiones Internacionales Contemporáneas, UNITAR, 1974.
- 33 Lopez A., George. Liberalization and Redemocratization in Latin America. Greenwood Press, New York.
- 34 Luna, Félix. El 45. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1971.
- 35 Llanes, Oscar B. Direito Internacional Publico: instrumento das Relações Internacionais. Ed. Horizonte, Brasília, Distrito Federal, 1979. 1ª Ed.
- 36 Martz John D. and Schoultz, Larz. Latin America, the United States and the Interamerican System Westview Press/Boulder, Colorado, 1980.
- 37 Naciones Unidas. Opciones para el logro de una seguridad común en Sudamérica. Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, 27-30 de noviembre de 1989, Lima, Perú.
- 38 O'Donnell Guillermo y otros; Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomos 2 y 3. Ed. Paidós, 1ª Edición, 1988.
- 39 Peralta Ramos, Mónica. Acumulación de capital y crisis económica en la Argentina, 1930-1974. Ed. Siglo XXI, 1978.
- 40 Perkins, Dexter; Historia de la Doctrina Monroe. Ed. EUDEBA, 1964.
- 41 Perlmutter, Amos and Plave Bennett, Valerie (Comp); The Political Influence of the Military. New Haven and London, Yale University Pres 1980.
- 42 Poulantzas, Nicos. Fascismo y Dictadura. Ed. Siglo XXI, 14ª edición. México, 1981.
- 43 Rama, Carlos M. La imagen de Estados Unidos en América Latina. Ed. SepSetentas no. 226, 1975.

44. Ramos, Jorge Aberlardo. La era del Peronismo, 1953-1982. Ediciones del Mar Dulce, Buenos Aires, 1990.
45. Rouquié, Allain. Argentina hoy. México, Ed. Siglo XXI, 1979.
46. Rubinshtein, Juan Carlos. Desarrollo y Discontinuidad política en la Argentina. ED. Siglo XXI, 1968.
47. Salazar Mallen, Rubén. El pensamiento político en América. Ed. Jus, México, 1973.
48. Sandoval Rodríguez, Isac. Las crisis políticas latinoamericanas y el militarismo. Ed. Siglo XXI, México, 1976.
49. Sarkesian, Sam C.; Presidential Leadership and National Security: style institutions and politics. West View Special Studies in National Security and Defense Policy.
50. Seara Vazquez, Modesto. Tratado General de la Organización Internacional. Ed. Fondo de Cultura Económica, FCE, México,
51. Seara Vazquez, Modesto. La sociedad Democrática, primera parte. UNAM, 1978.
52. Schwarzenberger, George. Política del Poder. Ed. Fondo de Cultura Económica, FCE, México-Buenos Aires, 1960.
53. Sepúlveda, César. Derecho Internacional Público. Terminología usual de las relaciones internacionales, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1976.
54. Tapia Valdez, Jorge. El terrorismo de Estado y la política de seguridad nacional en el Cono Sur. Ed. Nueva Imagen, 1980.
55. Varios Autores. Los Derechos Humanos. Universidad de Sevilla, España, 1979.
56. Wiarda, Howard y otros. Latin American politics and development, West View Press/Boulder and London, 1985.

## II. REVISTAS

Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos. A. C., México. Fuerzas Armadas y Gobierno Constitucional después de Malvinas: hacia una nueva relación civico militar, mayo de 1986

CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, años 1983, 1987-1991.

CEPAL, Nota sobre la evolución de la economía argentina, años 1987-1989.

CIDE/Instituto de Estudios de Estados Unidos. Los experimentos autoritarios en el Cono Sur y la Política de Estados Unidos, no. 2, mayo de 1982.

Colegio de México. La idea de la Democracia, Vol. 1, No. 1. Agosto, 1989.

Contextos (ya desaparecida), publicación mensual de la Secretaría de Programación y Presupuesto, México, de 1983-1987.

Crítica, no. 25, diciembre de 1985

Diálogo Iberoamericano, año I, no. 1, 1981.

ELACSO, México. Relaciones mediatizadas por el poder civil y las Fuerzas Armadas Argentinas, no 350, septiembre de 1987.

Proceso, semanario de información y análisis, publicación semanal mexicana, de 1983-1987

SELA, Capítulos no. 28, Análisis regional sobre la Iniciativa para las Américas, enero-marzo de 1991.

### Revistas extranjeras

Newsweek, publicación semanal, Estados Unidos  
Prisma Latinoamericano, publicación mensual, Cuba.  
Times, publicación semanal, Estados Unidos

### PERIODICOS

#### Periódicos nacionales

El Día, publicación diaria, México  
El Nacional, publicación diaria, México  
El Universal, publicación diaria, México  
Excelsior, publicación diaria, México  
La jornada, publicación diaria, México



**Periódicos extranjeros**

**La Nacion, publicación diaria, Argentina**

**Le Monde Diplomatique, publicación diaria, Francia**

**The New York Times, publicación diaria, Estados Unidos**